



FILO:UBA
Facultad de Filosofía y Letras
Universidad de Buenos Aires

P

La influencia del justicialismo en Chile

1946-1952

Autor:

Machinandiarena de Devoto, Leonor A.

Tutor:

1994

Tesis presentada con el fin de cumplimentar con los requisitos finales para la obtención del título Doctor de la Universidad de Buenos Aires en Historia

Posgrado



FILO:UBA
Facultad de Filosofía y Letras

FILODIGITAL
Repositorio Institucional de la Facultad
de Filosofía y Letras, UBA

Tesis

11-4-6

Tesis
043
M624

BIBLIOTECA NACIONAL DE CHILE	
N. 22.220	
22 ABR. 1994	
ref. 875.826	ENTRADAS

LA INFLUENCIA DEL JUSTICIALISMO EN CHILE, 1946-1952

Leonor A. Machinandiarena de Devoto

Introducción

El hecho de que la Argentina creyera que debía liderar a las repúblicas de América latina era "sentir tan viejo como la misma prosperidad argentina"(1). Los norteamericanos lo habían detectado tempranamente en sus documentos del Departamento de Estado, que hacia 1925 acusaban a dicho país de "albergar sentimientos racistas hacia otros países latinoamericanos, y de aspirar al dominio económico del sur de Sudamérica"(2). Hacia 1944, los mencionados documentos revelaban que el "destino manifiesto" de este país abarcaba, para ciertos círculos, toda la cuenca del Plata, incluyendo a las zonas tributarias en Uruguay, Brasil, Paraguay y Bolivia. Los argentinos eran vistos decididos a que su estado fuera "la unidad política más importante del continente del sur, y el pleno igual de los Estados Unidos en el hemisferio occidental"(3). La penetración económica en Paraguay y Bolivia era específicamente mencionada(4).

Probablemente el concepto de "hispanidad" -tomado por los nacionalistas argentinos de Ramiro de Maetzu-, que postulaba no solo el renacimiento de España sino también el de América latina, y llamaba a la unión de los latinoamericanos para luchar contra los enemigos del continente: el comunismo ruso y el imperialismo económico norteamericano(5), haya influido en la adopción por el peronismo de una postura intencionadamente solidaria hacia los países latinoamericanos. De hecho, la actitud de la Argentina hacia España, adoptada por el gobierno del presidente Juan Domingo Perón, parece confirmar su sintonía con aquel concepto. La bandera del antiimperialismo, inicialmente levantada por los nacionalistas en contra de la dependencia argentina respecto de Gran Bretaña, estaría dirigida luego hacia los Estados Unidos en razón de sus presiones militares, políticas y económicas como consecuencia de su participación en la guerra(6). Este antiimperialismo, que iría aumentando sus simpatizantes(7), sería razón fundamental para el acercamiento hacia los países de América latina; de hecho los lazos amistosos hacia los países latinoamericanos fueron propuestos por las asociaciones nacionalistas(8) hacia comienzos de la década del cuarenta.

Las dos visiones -aquella que aseguraba que la Argentina tendía a buscar una cierta hegemonía en la región, sobre todo cuando su situación económica se lo permitía, y aquella otra que percibía a ese país tratando de liderar a los países latinoamericanos para el logro de su autonomía política y económica- han sido expuestas por varios autores.

La política exterior del gobierno del presidente Juan Domingo Perón hacia los países vecinos de la Argentina ha sido tratada por algunos autores solamente de manera general. Tempranamente Arthur P. Whitaker(9) mencionaba la poco fructífera política de acuerdos económicos y la aparente lección que esto dejara al presidente argentino -en el sentido que "los otros países latinoamericanos necesitaban ser mejor educados en el peronismo"- y que lo llevara a intensificar el envío de agregados obreros especialmente instruidos para difundir el peronismo en el exterior. También mencionaba este autor los golpes militares "presuntamente inspirados por Perón en varios países sudamericanos"(10). A juicio

de Whitaker, Perón realizó esfuerzos para conseguir la jefatura latinoamericana principalmente a través de dos métodos: uno, la fundación en 1952 de una federación obrera internacional que respondiera a sus órdenes, la Asociación de Trabajadores Latinoamericanos Sindicalistas (ATLAS) y el otro, la interferencia política en determinados países, sobre todo en Chile y Bolivia(11).

Una década más tarde Harold Peterson señalaba que habían sido los actos del presidente argentino contra los estados vecinos, y su creciente influencia en el continente, los que habían demandado la sostenida atención de la administración Truman(12). Sostenía además acertadamente que los países vecinos de la Argentina, confrontados por perturbaciones sociales y políticas, exponían flancos vulnerables a las presiones de la Argentina. En su opinión, la fuerte posición económica argentina al finalizar la guerra, unida a una tradicional inclinación a la hegemonía sobre América latina, ofrecía a Perón la oportunidad de difundir sus doctrinas mientras exportaba bienes de consumo y capitales(13). Peterson afirmaba que

para penetrar con eficacia en los países de América latina con su ideario de peronismo y *tercera posición*, Perón se valió de cuatro técnicas principales: negociar pactos económicos bilaterales, nombrar agregados obreros en las embajadas argentinas, incentivar la propaganda y estimular -o, al menos, proporcionar el modelo- la creación de gobiernos militares en las restantes naciones latinoamericanas(14).

Asimismo, otro historiador, Joseph A. Tulchin, considera que Perón llevó a cabo "una diplomacia activa" en el resto del hemisferio" y menciona sus estrechas vinculaciones con el general Odría en Perú, el general Ibañez en Chile y el gobierno militar de Venezuela(15).

Por otro lado, Juan A. Lanús hace una interpretación particular del objetivo de la política exterior argentina durante la primera y segunda presidencias de Perón, señalando la existencia de un "anhelo de constituir un espacio de solidaridad en América latina que rechazara la competición y el enfrentamiento ideológico"(16). Así afirma:

Hacia el horizonte de América latina, la política del presidente Perón se proyectó como una emanación del destino continental que le asignó a la Argentina. Su gobierno se caracterizó, a través de la acción de todos sus cancilleres, por concebir a América latina como un espacio de solidaridad política y complementación económica, como un escenario donde los lazos culturales y la historia de luchas y de afanes comunes permitiría sustituir definitivamente la política de poder por la política de cooperación y reemplazar la práctica de las competencias individuales por la organización de una verdadera comunidad de destino y, en fin, como una geografía donde la comunicación y la confianza debían superar ese aislamiento que durante tantas décadas habían promovido intereses ajenos a los pueblos de la región. Esa permanente vocación latinoamericana de la política exterior durante las dos primeras presidencias del general Perón le otorga un signo distintivo que la distingue de los gobiernos que le

precedieron(17).

Como quiera que haya sido el caso, la política peronista hacia la región conservó dos de los elementos estructurales de la política exterior argentina de preguerra señalados por Carlos Escudé: el intento de liderazgo en América latina y la oposición constante a la intervención norteamericana en los asuntos de las repúblicas latinoamericanas(18).

Para aclarar algo el problema debe estudiarse el efecto de la política exterior peronista particularmente en cada uno de los países con los que el gobierno argentino mantuvo relaciones más estrechas. Con el fin de hacer un aporte al tema, nuestro trabajo indagará la influencia del justicialismo en Chile entre los años 1946 y 1952, es decir, durante la primera presidencia de Juan Domingo Perón y la del chileno Gabriel González Videla. Consideramos que hay evidencia para probar que hubo durante esos años por parte del régimen peronista un intento de expansión de su influencia económica, política y doctrinaria en Chile, que incluso por momentos rozó la injerencia en los asuntos internos, como consecuencia de la existencia de objetivos económicos, estratégicos y políticos que apuntaban a integrar al país vecino en un bloque austral que consolidara el liderazgo argentino en la región, permitiera aplicar políticas autárquicas y contrarrestara la penetración económica de Estados Unidos. Para lograr dicho objetivo, el gobierno argentino aplicó preferentemente tres de las técnicas de penetración mencionadas por Peterson: la firma de un pacto económico, la propaganda, y el estímulo al golpe militar (la cuarta no fue significativa durante el período estudiado). La mencionada tentativa posibilitó que el gobierno chileno y algunos círculos políticos intentaran acusar a la Argentina como amenaza para su democracia y para la seguridad de su país.

Cabe señalar, además, que muchas de las situaciones que se plantearon entre Chile y la Argentina debido a la mencionada tendencia expansionista de este último país fueron asimismo incitadas por el gobierno del presidente González Videla que debió enfrentar una crónica crisis económica y para quien la introducción esporádica de cuestiones exteriores era funcional a fin de distraer la atención política de los problemas internos. Por lo tanto, ambas variables, el expansionismo justicialista y la mencionada conveniencia chilena, convergieron para dar origen a las cuestiones de injerencia argentina en los asuntos internos chilenos.

La intención de la Argentina de formar un bloque austral de países para frenar las aspiraciones de predominio norteamericano en la región eran de antigua data. El hecho de asignarle a la Argentina un "destino continental", como dice Lanús, llevó a Perón a hacer planes unilaterales para toda la región y a trabajar activamente para lograrlos. Además, si bien su idealizada aspiración pudo haber sido ejercer una misión liberadora respecto de los pueblos latinoamericanos, quedará demostrado, en el caso de Chile, que los instrumentos elegidos para supuestamente llevar a la práctica la solidaridad continental no fueron funcionales al objetivo buscado y contradijeron los grandes principios proclamados por su inspirador. En Chile, Perón parece haber aplicado en muchos aspectos una política de poder y el presidente chileno González Videla haber tenido razones a lo largo de su gestión ver en la Argentina una amenaza para su país.

Unidos. Se tuvieron en cuenta también fuentes argentinas, es decir, los documentos existentes en el archivo del ministerio de Relaciones Exteriores. Se trata de informes de la embajada argentina en Chile y memorándums internos e informes de la cancillería. Se consultaron también diarios y revistas argentinos y chilenos.

Notas

1. Carlos Escudé, *Gran Bretaña, Estados Unidos y la declinación argentina. 1942-1949*, Bs. As., Ed. de Belgrano, 1988, p. 40.
2. *Ibid.*, p. 41.
3. *Ibid.*, pp. 41-42.
4. *Ibid.*, pp. 48-49.
5. Marysa Navarro Gerassi, *Los nacionalistas*, Bs. As., Jorge Alvarez, 1968, p. 124.
6. *Ibid.*, pp. 139-140.
7. *Ibid.*, p. 145.
8. *Ibid.*, pp. 149-151.
9. Arthur P. Whitaker, *La Argentina y los Estados Unidos*, Bs. As., Proceso, 1956, pp. 254-255.
10. *Ibid.*, p. 255.
11. *Ibid.*, pp. 263-264.
12. Harold Peterson, *La Argentina y los Estados Unidos. 1810-1960*, Bs.As., Eudeba, 1970 (1 ed. 1964), p. 536.
13. *Ibid.*, pp. 537-538.
14. *Ibid.*, p. 538.
15. Joseph A. Tulchin, *La Argentina y los Estados Unidos*, Bs. As., Planeta, 1990, pp. 216-217.
16. Juan A. Lanús, *De Chapultepec al Beagle*, T. 1, Bs. As., Hyspamérica, 1986, p. 45.
17. *Ibid.*, p. 46.
18. Carlos Escudé, *op. cit.*, pp. 48-49.
19. Whitaker, *op. cit.*, p. 263.
20. Peterson, *op. cit.*, p. 537.
21. Tulchin, *op. cit.*, pp. 216-217.
22. Lanús, *op. cit.*, p. 47.

Capítulo 1

Antecedentes

La larga historia de tiranteces entre la Argentina y Chile, causadas por los problemas limítrofes de larga data y por el hecho de haber sido ambos recíprocamente refugio de exiliados en diversas etapas de su historia, se vería complementada por un nuevo capítulo con la aparición de Juan Domingo Perón en la escena política de la Argentina.

La repercusión en Chile de la acción política de Perón comenzó antes de que éste fuera elegido presidente de la Argentina en 1946. Entre 1936 y 1938 Perón ocupó el cargo de agregado militar a la embajada argentina en Chile. La misión del militar se vio abruptamente terminada cuando éste apareció involucrado en un asunto de presunto espionaje relacionado con su área que lo obligó a abandonar el país y dejó en comprometida situación a su sucesor(1). El episodio, de poca relevancia, fue, sin embargo, el primer indicio de la radical ambigüedad en la forma de hacer política que Perón habría de aplicar en sus relaciones exteriores con Chile.

Posteriormente, la noticia del golpe de estado de 1943, que dio por tierra con la restringida democracia que existía en la Argentina, las supuestas intenciones de la logia militar inspiradora del golpe -Grupo Obra de Unificación (GOU)- y el surgimiento de Perón como hombre fuerte del régimen, provocaron efectos en Chile. Describiremos a continuación algunas de las manifestaciones relacionadas con el surgimiento del peronismo que tuvieron lugar en Chile durante 1945.

1. Gestiones de la Argentina para obtener la designación de un embajador chileno en Buenos Aires

El reemplazo del general Pedro Ramírez por el general Edelmiro Farrell en el gobierno militar de la Argentina había provocado desagrado en los Estados Unidos y consecuentemente el no reconocimiento del nuevo gobierno. La intención de este país fue que tampoco el gobierno argentino obtuviera el reconocimiento de otros países, especialmente de los latinoamericanos, pero Bolivia, Paraguay y Chile se lo otorgaron(2). Sin embargo, es posible que el retiro del embajador chileno de la Argentina, el 29 de junio de 1944, como fuera el caso de otros embajadores, respondiera a presiones de los Estados Unidos.

El hecho generaría lógicamente preocupación en la Argentina y su interés por lograr la reposición del embajador. Como la designación de éste necesitaba el acuerdo del Senado chileno, fue precisamente allí donde se produjo el debate y aparecieron las expresiones de antiperonismo, la toma de posición contraria al gobierno militar de la Argentina y un cuestionamiento al gobierno por la política seguida hacia este país, representativas de algunos sectores políticos chilenos. A comienzos de junio de 1945, el Senado debía tratar el tema del acuerdo para el nombramiento de Alfonso Quintana Burgos, oportunidad en que se

esperaba la oposición de cinco senadores comunistas, que se retirarían del recinto, pero cuya actitud no incidiría en la obtención de aquél. Iniciado el debate, los senadores comunistas atacaron al gobierno chileno por la política seguida respecto de la Argentina y se refirieron en términos muy duros a las supuestas persecuciones políticas del gobierno argentino y a la prisión de ciudadanos chilenos acusados de espionaje. Cuando se esperaba que del sector de la derecha se iniciara una defensa de la política de la cancillería, el senador Jaime Larraín García Moreno apoyó los cargos de uno de los senadores comunistas y agregó que, a raíz de un viaje a Buenos Aires, podía confirmar ampliamente lo expresado por aquél(3).

A continuación, la declaración del senador conservador Eduardo Cruz Coke, recién llegado de la conferencia de San Francisco, en el sentido que en dicha reunión había existido una impresión de desilusión por la actitud del gobierno argentino, generó una serie de preguntas al canciller interino Luis Alamos Barros respecto de la política hacia la Argentina que éste manifestó no poder responder. El episodio provocó la postergación del asunto hasta el regreso del canciller Joaquín Fernández y el pase a comisión por unanimidad del tema del acuerdo para el nombramiento del embajador en la Argentina(4).

Las gestiones inmediatas realizadas por el encargado de negocios de la embajada argentina ante la cancillería chilena revelaron a éste una supuesta sorpresa del Ejecutivo por el inesperado resultado de la sesión del Senado y la determinación del canciller interino de solucionar el asunto antes del regreso del titular de la cartera. La posición asumida por la embajada argentina era que el poder Ejecutivo había solicitado acuerdo para el nombramiento del embajador y al Senado correspondía aprobar o no su designación para ese cargo, pero no debía analizar la política de Chile respecto de la Argentina ni tampoco la política interna de este país(5).

Luego de un breve viaje a Buenos Aires, el embajador argentino Carlos Güiraldes realizó una visita a Clemente Díaz León, director de El Mercurio, diario que había publicado un editorial censurando la actitud del Senado y propiciando el inmediato despacho del nombramiento del embajador. Güiraldes le hizo presente la necesidad de insistir en esa campaña, le comunicó su propósito de entrevistarse con el presidente y con el canciller y su deseo de influir -a través del periodista- sobre los miembros del Senado, pues no deseaba aparecer personalmente haciendo ningún pedido directo, ni quería entrevistarse con ningún senador. Díaz León le explicó que una solución para sacar el tema de comisión era que el poder Ejecutivo insistiera en su pedido de acuerdo mediante una declaración de "urgente despacho"(6).

Güiraldes mantuvo una posición firme en la entrevista que sostuvo con el presidente Juan Antonio Ríos al manifestarle que su gobierno esperaba una solución satisfactoria y advirtiéndole que, en el caso que la situación se prolongara, sería considerada como actitud "inamistosa" hacia el gobierno argentino. El embajador insistió en el hecho de que no correspondía al Senado discutir la política exterior establecida por el Ejecutivo y que éste podía reclamar el reconocimiento de sus atribuciones exclusivas, requiriendo un pronunciamiento inmediato sobre el acuerdo pedido. El presidente afirmó haber reprochado al senador Larraín su

actitud desencadenante del episodio -hecho que le constaba al embajador-, y señaló también la responsabilidad del presidente del Senado, Arturo Alessandri Palma, en la cuestión. El embajador sugirió entonces el procedimiento de pedir despacho urgente para el acuerdo. Al pasar a otros temas, el presidente señaló que sería de gran importancia que el gobierno argentino restableciera rápidamente la normalidad institucional. Güiraldes respondió que la normalidad no dependía exclusivamente de la voluntad del gobierno sino de la posibilidad de entregarla a los partidos políticos que, en ese momento, estaban desorientados y desorganizados. El embajador agregó que era peligroso querer juzgar desde afuera las posibilidades y las modalidades de la política interna de otro país y sugirió que la solución del asunto del Senado debía buscarse en la "absoluta separación de las cuestiones y en la completa prescindencia en cuanto fuera referente a nuestra política interior"(7).

El embajador Güiraldes hizo el mismo planteo de considerar la cuestión como actitud inamistosa del gobierno de Chile hacia la Argentina al ministro interino Luis Alamos Barros. Este le respondió que de no poder nombrarse embajador en la Argentina, Chile permanecería sin representante en todos los países americanos y europeos para los cuales ya se habían hecho las designaciones correspondientes; el embajador argentino contestó que esa postergación de nombramientos no interesaba al gobierno argentino pues el interés argentino "no estaba en que Chile tuviera o dejara de tener embajadores ante el Soviet o ante el Vaticano" sino en que se aclarase la situación planteada por la negativa parlamentaria a permitir el nombramiento de embajador en Buenos Aires. El ministro quiso suavizar la cuestión diciendo que todo iba a quedar arreglado cuando regresara el canciller Fernández pero Güiraldes le respondió "el gobierno argentino no esperará" y le exigió que la solución debía pronunciarse "dentro de la semana", excediéndose en las instrucciones recibidas, según él mismo reconoció. El embajador dejó planteada, además, una presión de tipo económico cuando aludió a la situación desventajosa en que podría encontrarse Chile, ante la falta de embajador, en tanto todos los demás países habían enviado sus representantes y éstos trabajaban activamente para asegurarse ventajas en las relaciones económicas que necesariamente se intensificarían con la terminación de la guerra. Güiraldes calificó de ilógica la actitud de Chile que, habiendo sido el primer país en reconocer al gobierno de Farrell, llegaría a cumplir un año, a fines de junio, sin haber enviado embajador. Finalmente se despidió diciendo que su gobierno "consideraba este asunto como muy serio, me había dado instrucciones muy serias y yo lo planteaba muy seriamente"(8).

Un ex diplomático chileno, vinculado por asuntos comerciales con la Argentina, Jorge Valdés Mendeville, explicó al embajador argentino que el hecho de mandar el asunto a comisión se había realizado con el objetivo de reprochar al canciller Fernández su actitud de retirar al embajador Conrado Ríos Gallardo, después de haber reconocido y mantenido relaciones con el gobierno argentino, presidido por el general Farrell. A través de Valdés, el embajador argentino hizo saber al presidente del Senado Arturo Alessandri Palma que el tema debía resolverse de inmediato porque de lo contrario "el asunto podía ser muy desagradable". Güiraldes llegó a la conclusión de que todos sus interlocutores coincidían en alejar la oportunidad de tratar el tema "echando unos sobre otros

la responsabilidad de la demora"(9).

Evidentemente por las presiones del embajador ante el poder Ejecutivo y sus reuniones con políticos relacionados con senadores el asunto avanzó. El poder Ejecutivo presentó el pedido de urgencia y el Senado decidió tratar el acuerdo, lo que demandó dos sesiones más por un problema de procedimiento. Finalmente fue aprobado por 18 votos contra 8. Güiraldes se mostró ufano por el éxito de sus gestiones, realizadas en cumplimiento de las instrucciones recibidas, y se manifestó satisfecho porque su actuación no había trascendido al público, de manera tal que la gestión del poder Ejecutivo ante el Senado apareció como espontánea al igual que la decisión final que aprobó el acuerdo. No podía hablarse de presión ejercida sobre el gobierno ni de intervención del embajador argentino en el asunto. Las visitas al presidente y al ministro de Relaciones Exteriores habían aparecido en los diarios motivadas por razones de cortesía y para tratar asuntos de interés general al regresar Güiraldes de Buenos Aires. El embajador admitió en su informe a la cancillería que no necesitó aludir a la posibilidad de que el gobierno argentino dispusiera su regreso a Buenos Aires ni a ninguna otra medida a adoptarse. Como lo había previsto el ministerio de Relaciones Exteriores argentino, bastó la simple mención de inamistad con que el gobierno argentino calificaría esa actitud(10).

El episodio revelaba, por el lado de Chile, que la vacancia de su embajada en Buenos Aires, durante casi un año, era una manera de mostrar su disconformidad con el gobierno de facto de Farrell, a pesar de haberlo reconocido en un principio, pero evidentemente también demostraba que Chile había acompañado a los Estados Unidos en su política de aislar a la Argentina. Asimismo, la actitud de los legisladores, tratando de obstaculizar el nombramiento del embajador, probablemente respondiera a la intención de dar un respaldo a los partidos políticos argentinos que demandaban la apertura democrática. La decisión de votar favorablemente el acuerdo para el embajador no debió ser tanto la resultante de las gestiones del embajador argentino sino de la intención pragmática de los senadores chilenos de no provocar problemas económicos al país y del hecho de que la posición internacional de la Argentina hubiera mejorado. Por parte de la Argentina, las leves presiones directas, políticas y económicas, ejercidas por el embajador, demostraron la importancia que la Argentina confería al tema, para quebrar su aislamiento diplomático, dado que la ausencia prolongada del embajador simbolizaba una protesta por la falta de democracia en el país, además de revelar ineficencia del gobierno en el manejo de la política exterior.

2. Ataque al gobierno argentino en el Senado chileno

A fines de agosto de 1945, el Senado de Chile volvió a convertirse en caja de resonancia de la oposición al gobierno argentino existente en aquel país. Esta vez, el Senado debía tratar la actuación de la delegación de su país a la conferencia de San Francisco, la cual había trabajado activamente en favor de la incorporación de la Argentina a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), circunstancia que proveyó el ámbito para que los sectores de izquierda atacaran al Ejecutivo chileno.

El embajador argentino, previendo las críticas, entrevistó al canciller Joaquín Fernández para indagar sobre la posición que adoptaría el Ejecutivo en el debate. El ministro se declaró incapaz de impedir que los senadores expresaran sus opiniones y formularan ataques contra el gobierno argentino; también informó al embajador que parlamentarios de la derecha le habían comunicado que no defenderían la posición del gobierno argentino. El diplomático argentino señalaba en su informe a la cancillería que algunos acontecimientos ocurridos en la Argentina como los hechos en el acto inaugural de la Sociedad Rural, los choques entre manifestantes y conscriptos, los ataques a diarios y locales comerciales, las sanciones contra profesores universitarios y secundarios, los heridos y muertos a consecuencia de estos sucesos y la perturbación reflejada por las informaciones periodísticas hacían imposible que se tomara en Chile una actitud que implicara solidaridad con el gobierno argentino y por lo tanto advertía que en el debate que se iniciaba todas las voces serían contrarias(11).

El canciller Fernández adelantó al embajador, según el informe de éste, que mencionaría el hecho de la incorporación de varias naciones en conjunto, como resoluciones adoptadas por la asamblea, sin particularizar los casos. En cuanto al resultado práctico del debate, el ministro dio la seguridad al embajador que la política exterior de Chile no variaría respecto de la Argentina, es decir que el Ejecutivo chileno mantendría su posición fijada en el decreto que había resuelto continuar relaciones con el gobierno presidido por el general Farrell. El ministro aprovechó la oportunidad para presionar en favor de una salida democrática a la situación argentina, diciendo que creía posible que se planteara la cuestión de una consulta entre las Naciones Unidas para estudiar la situación interna argentina, y la actitud ulterior a adoptarse, si no se encauzaban los acontecimientos hacia una rápida normalización institucional. Al mismo tiempo, el presidente Ríos declaraba a la prensa la necesidad de mantener el principio de no intervención en los asuntos políticos de otro estado(12).

El tratamiento del tema por el Senado comenzó el 22 de agosto con una extensa exposición del ministro Fernández sobre la actuación de la delegación chilena en la conferencia de San Francisco y la posición adoptada por Chile en todas las cuestiones consideradas para la redacción de la carta de la Naciones Unidas. Varios senadores lo interrumpieron para hacer severas críticas especialmente a las gestiones realizadas por Chile para la admisión de la Argentina a dicha reunión(13). Fernández mencionó a la Argentina, Ucrania, Rusia Blanca y Dinamarca como los cuatro países que habían sido incorporados con posterioridad a la organización(14), contradiciendo lo que supuestamente había prometido al embajador.

El debate comenzó en la sesión del 10 de septiembre cuando le fue concedida la palabra al senador comunista Carlos Contreras Labarca. Este retomó el tema del voto de Chile en favor de la incorporación de la Argentina y expresó que el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales podrían ser alcanzadas solo si el fascismo y las fuerzas que lo engendraban y sostenían eran aniquiladas totalmente. La gigantesca coalición anglo-soviético-norteamericana había surgido -a su entender- para cumplir con el propósito de reagrupar en un solo frente mundial de lucha

antifascista a todas las fuerzas "partidarias de la paz y del progreso"(15). No era posible, en su opinión, hablar seriamente de la destrucción del fascismo,

mientras existan focos tan peligrosos como las tiranías de tipo nazi que oprimen a los pueblos de España y la Argentina, países con los cuales el imperialismo alemán creó oportunamente las bases económicas, políticas y militares para su resurgimiento y para la preparación de la próxima guerra de revancha"(16).

Aparecía así el eco de una famosa hipótesis, originada en el gobierno norteamericano, que afirmaba que la Argentina podía ser causa de la iniciación de la Tercera Guerra Mundial(17). El senador estaba convencido de que

la admisión del gobierno fascista de la Argentina con la oposición de la Unión Soviética y otras delegaciones democráticas de Europa había sido un triunfo de los conciliadores y una derrota de la democracia mundial(18).

En consecuencia, denunciaba al ministro Fernández como el responsable de apoyar, en nombre de Chile, la proposición de "incorporar al GOU a la conferencia de las Naciones Unidas"(19).

Contreras Labarca recordaba al cuerpo que en numerosas oportunidades los parlamentarios comunistas habían denunciado el hecho de que la Argentina, bajo la dirección de los coroneles, era el "cuartel general del fascismo en América", de acuerdo con lo expresado por Cordell Hull el 7 de septiembre de 1944, y daba a conocer una nueva acusación que acababa de formular la prensa soviética en los siguientes términos:

Toda la actividad del gobierno dictatorial argentino Farrell-Perón sigue tendiendo, hoy también, a realizar en Argentina y en América del Sur, lo que Hitler no consiguió realizar en Europa.

La camarilla Farrell-Perón lleva a efecto su política peligrosa y aventurera por tres caminos.

Primero: ha convertido a la Argentina en refugio donde, además de los grandes fugitivos fascistas, se ocultan con plena seguridad los cuadros hitlerianos organizados, entre ellos, los cuadros del Estado Mayor alemán; donde se conservan los fondos, los medios y los planes secretos de los industriales para la organización de la Tercera Guerra Mundial.

Segundo: persigue ferozmente a todos los que luchan contra las medidas fascistas y a todos los que parecen peligrosos a los hitlerianos argentinos.

Tercero: además de la militarización y fascistización sistemáticas del aparato gubernamental de Argentina, sus gobernantes se inmiscuyen en la vida interna de los países vecinos (Uruguay, Chile, Bolivia, Paraguay y Brasil); fomentan en ellos la actividad de los agentes fascistas que preparan cambios y virajes y que amenazan directa e indirectamente la seguridad de los países vecinos(20).

La conclusión del senador era que se había introducido a la quinta columna en la familia de las Naciones Unidas y censuraba al canciller Fernández por haber adoptado una actitud activa en el

caso, siendo uno de los promotores de la campaña en favor del GOU, cuando podía haberse limitado a aceptar la admisión.

Contreras Labarca estaba convencido de que la intención del GOU era sostener un plan de agresión contra las democracias y conquistar la hegemonía en el continente mediante la formación de bloques antagónicos. Era público y notorio, según el senador, que el GOU intervenía en la vida interna de otros países como había ocurrido en Bolivia y estaba ocurriendo en Chile. La llamada "no intervención" de los países democráticos de América en la cuestión argentina estaba sirviendo -a su entender- para conservar un foco nazi que amenazaba seriamente la seguridad e independencia de los pueblos. Con todo, el senador vaticinaba que el movimiento democrático que se había gestado en la Argentina conduciría a la destrucción del foco nazi y el pueblo argentino arreglaría sus cuentas con la "banda fascista de los coroneles". Finalmente reclamaba a su gobierno la ruptura de relaciones con Franco y Perón y la renuncia del canciller Fernández(21).

Una posición semejante a la de Contreras asumió el senador radical Isauro Torres. Este destacó el hecho de que la sesión fuese pública porque, de esa manera, se subsanaba el error del pasado de no haber podido prestar un servicio al pueblo argentino, permitiéndole oír "la voz de aliento de esta verdadera democracia de Chile para que buscarse y encontrara el camino de la libertad". Así explicó que, al producirse el recambio de Pedro Ramírez por Edelmiro Farrell en el gobierno argentino, había surgido en Chile un movimiento en favor del no reconocimiento del nuevo gobierno, del cual habían participado él mismo y otros senadores, no habiendo sido escuchados por el gobierno. Los senadores habían sostenido que no debía reconocerse un gobierno que sería "nefasto para el continente y sobre todo para la causa democrática" y habían expresado su convicción de que una actitud firme y democrática del gobierno chileno "hubiera podido influir en los acontecimientos históricos de la Argentina y América"(22).

El senador Torres mencionaba una filial chilena del GOU, denominada GOS, y denunciaba que el programa de esta última coincidía textualmente con las circulares, declaraciones y discursos del ministro de Defensa Nacional chileno, general Arnaldo Carrasco(23). Para demostrar la peligrosidad de dicho movimiento, el senador citaba párrafos del programa del GOU que mencionaban como objetivo crear "una dictadura flexible" y llevar a cabo "el programa de armamentos indispensable para la conquista del continente". También criticaba al gobierno de su país por haber sido tolerante "con un gobierno como el argentino, que constituye una amenaza para todas las democracias americanas"; Chile -en su opinión- debió haber adoptado "una política definida, levantada y enérgica respecto a estas plagas, a estas pestes de gobiernos dictatoriales que aún tenemos en el continente latinoamericano"(24).

Las severas críticas de los senadores comunista y radical a su gobierno por no haber sido más intransigente con el gobierno de Buenos Aires no impidieron que ellos dieran sus votos para la ratificación de la Carta de San Francisco. Dada la publicidad que tendría la sesión, es probable que la embestida fuera prevista para acompañar los actos antiperonistas llevados a cabo en Buenos Aires, tales como las manifestaciones realizadas a causa de la rendición de Japón, en agosto, y la marcha de la Constitución y de

la Libertad, planeada para comienzos de septiembre. Era una forma de respaldar a la oposición en la Argentina que pretendía, según un autor(25), demostrar al Ejército que Perón era repudiado mayoritariamente y así alentar un golpe de estado que lo desplazara del poder y posibilitara un proceso electoral libre de presiones.

Durante el tiempo que duró el debate en el Senado, recrudecieron las manifestaciones callejeras organizadas por comunistas y estudiantes, cuyo móvil era la oposición al gobierno de la Argentina y la protesta por la política de Chile hacia ese país. El embajador argentino observó que si bien el motivo de la manifestación, según rezaban los carteles, era la oposición al gobierno argentino, los discursos pronunciados estaban dirigidos más contra el gobierno de Chile que contra las autoridades argentinas, por lo cual interpretó que dicha oposición aparecía más bien como un pretexto para la crítica interna(26).

Las opiniones vertidas en el Senado chileno eran representativas de la percepción que una parte importante de la opinión pública chilena se había formado del régimen de gobierno en Buenos Aires. Para ésta, el gobierno de facto era un gobierno fascista decidido a poner en práctica los métodos de las recientemente vencidas dictaduras europeas. La mencionada acusación debía tener suficiente entidad en Chile, pues ya había sido motivo de aclaración por el presidente Perón en una entrevista con periodistas chilenos en Buenos Aires, mantenida en diciembre del año anterior(27). Es importante señalar que el senador Gabriel González Videla, futuro presidente, compartía en general dicha lectura. La sospecha de que Perón guardaba ambiciones expansionistas quedó establecida en Chile y las políticas futuras de Perón hacia este país serían vistas por mucha gente a través de esa óptica.

3. Protestas obreras contra el gobierno argentino

La oposición de algunos sectores obreros chilenos al gobierno de facto de la Argentina, basada en su supuesta condición nazi-fascista, se había manifestado a fines de 1944 cuando los barcos argentinos comenzaron a tener dificultades de carga en los puertos chilenos. Un ejemplo lo constituyeron los estibadores del puerto de Lota, que decidieron no cargar carbón en barcos de bandera argentina. En marzo de 1945, los trabajadores comunicaron al Departamento de Trabajo de Chile que la actitud asumida se basaba en las disposiciones emanadas de un congreso de trabajadores de puerto donde se había dispuesto "no cargar artículo alguno en los vapores de la Argentina y España, en ningún puerto chileno"(28). El cónsul argentino local consideraba muy grave la determinación y aconsejaba la intervención oficial de la embajada si llegaba a tomarse la misma medida en todos los puertos chilenos(29).

El gobierno de Chile trató de manejar el problema con cautela porque en ese momento el suministro de productos alimenticios por la Argentina era vital. El ministro de Economía y Comercio Alejandro Tinsly sostuvo que

esta resistencia de parte de los obreros, aparte de que constituye un agravio inmerecido para la Argentina, puede tener graves repercusiones en cuanto al transporte de



UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
CULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS

Buenos Aires, 20 de Mayo de 1996.-

Sra. Directora Elinor FRANCHI

BIBLIOTECA CENTRAL
S _____ / _____ D

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de remitirle copia de la Tesis Doctoral "La influencia del Justicialismo en Chile 1946-1952"

presentado por la Dra. Leonor A. MACHINANDIARENA.

Sin otro particular saludo a usted muy atentamente.

NORA E. ROVEGNO
PROSECRETARIA DE DOCTORADO

los productos procedentes del vecino país amigo. Debe esperarse que los obreros procedan con cordura y no olviden que estamos comiendo carne y consumiendo aceite gracias a la ayuda prestada por la Argentina. Hace un mes Magallanes quedó sin existencia alguna de nafta y gracias a la ayuda de los establecimientos fiscales argentinos se pudo evitar que la ciudad permaneciera a oscuras y se paralizaran las actividades de esa zona(30).

Dicho gobierno dispuso en consecuencia que el trabajo de carga lo realizaran las tripulaciones de barcos de guerra, quienes lo hicieron en retribución por la ayuda prestada por un barco argentino en el hundimiento de una fragata de la marina chilena(31).

La actitud de los estibadores era resultado del manejo que los comunistas tenían de dichos gremios y de la determinación de dicho grupo político de luchar contra el surgimiento de un supuesto foco nazi-fascista en la región. El diario comunista El Siglo sostenía que había que "solidarizarse con el pueblo argentino en su lucha contra los agentes nazis que integraban la «pandilla de Perón»"(32). Decía también que

es sabido también que los nazis en este último tiempo han estado instalando fábricas y talleres en la Argentina con el propósito de alcanzar posiciones económicas en América que les permitan subsistir en la posguerra /.../(33).

El comunismo chileno consideraba que el gobierno argentino no ocultaba "sus propósitos de agresión y de ejercer un predominio sobre Chile" y que una de las maneras en que los chilenos contribuían a realizar esos planes era enviando al GOU materias primas para alimentar sus industrias, con el objeto de que pudiera consumir los principios establecidos en el memorándum de su constitución. Consecuentemente, se instruía a los obreros a "no embarcar un solo kilo de carbón" con destino a la Argentina(34).

La posición del comunismo chileno probablemente se basara en la campaña, iniciada por el Departamento de Estado norteamericano y desarrollada durante 1944 y 1945, alertando al mundo sobre el "espectro del Cuarto Reich". Esta tesis sostenía que la Argentina era el lugar donde eran evacuados líderes políticos, militares y técnicos del desintegrado Tercer Reich para continuar con la amenaza a la estabilidad y al progreso de la repúblicas americanas. La falsedad de dicha tesis fue descubierta por el propio Departamento en 1945 pero, si bien ésta no se mantuvo como política racional, tampoco fue abandonada por completo pues algunos de sus aspectos continuaron sirviendo a los intereses norteamericanos en la posguerra(35). Es importante destacar que muchas personas tanto en los Estados Unidos como en los países latinoamericanos siguieron creyendo en el tema y consideraron a Perón como el máximo responsable de dicha amenaza.

Por otro lado, los comunistas chilenos seguramente tenían en cuenta la revelación en 1945, por el ex diputado argentino Silvano Santander, de una circular secreta argentina, fechada el 3 de mayo de 1943 y supuestamente redactada por los miembros del GOU. Esta expresaba la idea de la grandeza y la misión rectora de la Argentina en Sudamérica, cuyo papel era "ser más fuertes que todos los otros países unidos". Sostenía también que la Argentina podía

lograr el control del subcontinente formando alianzas con Paraguay, Bolivia, Chile, Uruguay e incluso Brasil; el ejemplo de Alemania -según el documento- demostraba que el planteo no era una utopía(36). Actualmente se sabe que la mencionada circular no tuvo su origen en el GOU sino en otro grupo que conspiraba en el ejército argentino en la misma época que aquél(37), pero esto no fue ampliamente conocido en su momento. De esa manera, la circular tuvo gran divulgación en Chile y fue uno de los primeros elementos utilizados por los grupos antifascistas para advertir sobre la supuesta peligrosidad y el potencial expansionismo del gobierno de facto argentino, que luego se adjudicarían también al gobierno de Perón.

La situación en el puerto de Lota subsistió durante varios meses, dado que en octubre de 1945 los barcos argentinos seguían teniendo problemas para cargar carbón. El administrador general de la Flota Mercante Argentina, en informe al ministro de Marina, afirmaba que, si bien era indudable el apoyo decidido prestado a los buques argentinos por las autoridades chilenas, no era lógico seguir operando en puertos de Chile mientras persistieran esas circunstancias y en vista de que no estaban dadas las seguridades que los comerciantes chilenos pretendían brindar(38).

Otra reacción frente al gobierno argentino tuvo lugar cuando una "marcha del hambre", realizada en Antofagasta, al norte de Chile, a mediados de 1945, llevó como una de sus consignas la ruptura de relaciones diplomáticas con el gobierno argentino. La protesta contra el desabastecimiento y la carestía de la vida en esa zona terminó proponiendo como solución que "Chile rompa sus relaciones diplomáticas con Franco, Farrell y Villarreal"(39). El diario local refutó la propuesta expresando que la Argentina, con gobierno democrático o con gobierno de facto, seguiría criando ganado; el hecho de romper con Farrell privaría a Chile de disponer de ganado argentino, por lo que "nuestro problema de abastecimiento se reagraría en términos catastróficos en vez de aproximarse a su solución"(40). El pragmatismo habría prevalecido en definitiva cuando en el mes de noviembre un grupo de jornaleros marítimos de Antofagasta decidieron cargar todos los barcos que llegaran al puerto, incluso los de nacionalidad argentina y española(41).

4. Posición del presidente Ríos respecto de la Argentina

El presidente Ríos mantuvo una firme adhesión al principio de no injerencia en los asuntos internos de la Argentina, a pesar de las ya comentadas presiones para que asumiera otro tipo de actitud. En varias ocasiones, durante el año 1945, fue interrogado sobre la situación política argentina y siempre respondió que su condición de presidente de una nación democrática le hacía considerar que nada había más respetable que los asuntos internos de otras naciones. Señalaba que era política de su gobierno guardar estrechas relaciones con las demás naciones americanas, sin exclusiones ni diferencias, sin crear nuevas divisiones. Pero, al mismo tiempo, repitió infinidad de veces que su aspiración era que en todas partes se viviera el mismo clima de democracia que existía en Chile(42).

Entre los meses de octubre y noviembre de 1945, el presidente Ríos realizó un viaje a los Estados Unidos. El recientemente

designado embajador argentino en Canadá siguió de cerca las manifestaciones del presidente chileno. Así informó que, subrayando las expresiones de "solidaridad y defensa continental", "libertad y democracia", el presidente había hecho referencia en forma no siempre amable y reiteradamente a lo que la prensa americana llamaba el "régimen argentino". Dicho embajador consideraba que una de las declaraciones más inusitadas de Ríos había sido la pronunciada al producirse la renuncia del vicepresidente Perón a sus cargos, oportunidad en que expresó: "el régimen argentino está enfermo. Hay que dejarlo solo para que muera en paz". Sin embargo, el propio diplomático intentó justificar al presidente chileno afirmando que dichas palabras le habían sido exigidas por los periodistas norteamericanos y que, a la vez, aquél las había pronunciado guiado por el deseo de congraciarse con la prensa sensacionalista y con el gobierno de los Estados Unidos a fin de obtener recursos para su país(43).

En la recepción que el presidente Ríos ofreció en honor de las autoridades canadienses, el embajador argentino pudo sostener con él una conversación. Dado que ya habían ocurrido los sucesos del 17 de octubre, el citado diplomático hizo notar al presidente chileno la popularidad de que gozaban el coronel Perón y el gobierno del general Farrell ante la masa obrera argentina. Ríos dijo comprender bien el problema argentino pues le resultaba similar al que había tenido Chile un tiempo atrás y lo interpretaba como "la lucha de la clase conservadora y adinerada que se resiste a conceder los beneficios que reclama y que hay que acordar a la clase obrera para que pueda mejorar su standard de vida". El presidente le recordó que

en su país, ya habían votado muchas leyes que acordaban esas mejoras a los obreros chilenos y que estaba seguro que esas leyes habían inspirado muchos de los decretos del ex secretario de Trabajo y Previsión, con mejoras para los trabajadores argentinos(44).

Ríos sostuvo además que, en su opinión, el coronel Perón había ido muy de prisa y sin tener en cuenta que su gobierno era de facto, razón por la cual el presidente chileno insistía en que el mejor ámbito para realizar ese tipo de reformas era la democracia. El presidente preguntó al embajador si creía que se realizarían elecciones en la Argentina y cuándo tendrían lugar, a lo que éste respondió que probablemente, de acuerdo con la información que poseía, fueran adelantadas(45).

En Panamá, en su viaje de regreso, Ríos puso énfasis en la unidad continental; "no hay otro remedio para la paz del mundo que mantener el continente unido", dijo, aludiendo a las comentadas intenciones de Perón de formar un bloque austral de países. Refiriéndose al panorama político en América, Ríos dijo que lo ideal sería que todos los países tuvieran gobiernos de origen popular y afirmó prever que la Argentina llegaría pronto a tener un régimen democrático, dado que los gobiernos de fuerza eran transitorios(46). Las mismas ideas expresó el presidente chileno al representante argentino en la República Dominicana, ante quien, además, reafirmó su adhesión al principio de no intervención en los asuntos internos de los países americanos y sostuvo que dicho concepto debía mantenerse como principio jurídico en el continente(47).

En definitiva, la cautelosa adhesión del presidente Ríos al principio de no intervención no impidió su prédica firme en favor de la democratización de la vida política argentina. Por otro lado, si bien su gobierno había propiciado la incorporación de la Argentina a la ONU, esta posición significaba una identificación con la política de unidad continental perseguida por los Estados Unidos y no un apoyo a la política exterior argentina. El presidente chileno trató de manifestar su desacuerdo con el gobierno de facto argentino pero de manera de no agudizar los problemas económicos que la posguerra traería a su país. La diferencia con sus críticos era que éstos no necesitaban poner límite a sus declaraciones porque no tenían la responsabilidad del gobierno.

5. Preocupación de la embajada norteamericana

Los contactos de los miembros del gobierno chileno con el de Farrell-Perón eran motivo de preocupación en la embajada norteamericana en Chile. La intención de entrevistarse o tener algún trato con Perón por parte del gobierno chileno era inmediatamente detectada por la embajada, y sus funcionarios se movilizaban para advertir sobre las consecuencias que tal proceder podría traer a Chile. Así ocurrió cuando, a fines de enero de 1945, el embajador norteamericano Claude Bowers planteó al canciller chileno la inconveniencia de la visita del enviado Pablo Ramírez a la Argentina con el fin de conocer la situación política en este país. El ministro explicó que la misión se debía a que no se recibían noticias de la embajada chilena en Buenos Aires. Bowers afirmó que personalmente y por propia iniciativa había explicado a Ramírez "el gran peligro que una entrevista con Perón podría tener" debido a que podía ser descubierta por la prensa y esto daría lugar a comentarios adversos en los diarios norteamericanos. El antecedente de haber mantenido contactos con Perón podía afectar la posición de Chile ante la conferencia de México(48).

Por otro lado, los norteamericanos describieron notablemente la reacción de los círculos políticos chilenos ante los sucesos de octubre de 1945 en Buenos Aires. Un informe de su embajada en Chile señalaba que, al producirse la renuncia de Perón, la prensa liberal y la de izquierda habían competido en condenar su "dictadura" y en expresar satisfacción por su caída. Inclusive el presidente Ríos, quien repetidamente había declarado no creer en la intervención en los asuntos internos de otros países, supuestamente había expresado complacencia ante el desarrollo de los acontecimientos en la Argentina. El anuncio del regreso de Perón al poder con el apoyo de los trabajadores había hecho quedar a todos, incluido el gobierno, en difícil situación(49).

Los funcionarios norteamericanos detectaron rápidamente el cambio de estrategia frente a Perón en muchos sectores políticos chilenos como consecuencia de su inesperado regreso y la perspectiva de que tuviera futuro político avalado por el pueblo. El informe mencionado sostenía que, confirmada la firmeza de Perón en el régimen argentino, los editoriales de los diarios se habían limitado a racionalizar la situación -tal el caso de los comunistas- que explicaron que Perón no estaba realmente apoyado por las masas, pero no volvieron a condenarlo violentamente(50).

Según la citada versión, la situación embarazosa también había alcanzado al embajador chileno en la Argentina, Alfonso Quintana Burgos, quien había pronunciado el 18 de septiembre un discurso atacando a la dictadura, lo que podía provocar el llamado a su país. Los norteamericanos consideraban que se había producido un enfriamiento entre los dos países, que era aprovechado por los grupos "reaccionarios" para acusar al gobierno de estropear de manera inexcusable las relaciones chileno-argentinas(51). Esta afirmación era un indicio de la existencia de grupos properonistas en Chile.

A fines de 1945, el embajador Claude Bowers vaticinaba cómo iban a desarrollarse los hechos en la Argentina: en carta al secretario asistente para Asuntos Latinoamericanos Spruille Braden explicaba que existía la sensación de que Perón iba a ser elegido desde el momento que la oposición no estaba colocando a "nadie" frente a él y la fecha de elecciones estaba cerca(52).

6. Propaganda peronista en radios chilenas

A fines de noviembre de 1944, el hecho de que se estudiara en la embajada argentina la posibilidad de ejercer algún tipo de propaganda proargentina en Chile era señal de que la acción opositora al gobierno Farrell-Perón, desarrollada por diversos grupos políticos chilenos, molestaba al mismo y de que éste advertía la necesidad de contrarrestarla.

El agregado militar de la representación preparó en esa fecha un informe sosteniendo que el procedimiento simple que era menester para emitir comentarios por radio Pacífico de Chile permitía "la posibilidad de emprender una acción proargentina de suficiente amplitud desde algunas radiodifusoras chilenas"(53). El militar sacaba esa conclusión a raíz de un discurso de un periodista chileno recién llegado de la Argentina, irradiado por la mencionada emisora. Aunque consideraba sus palabras carentes de objetividad y que no encaraban "el aspecto fundamental de nuestra revolución", consideraba dicha acción como una de las primeras tentativas aisladas, realizadas espontáneamente, en defensa de la Argentina. El hecho demostraba "la factibilidad de organizar una contrapropaganda sutil y de valor positivo desde las mismas radiodifusoras y periódicos chilenos". Sugería que dicha acción podría estar a cargo de organismos nacionales argentinos, en coordinación con las radiodifusoras y periódicos santiaguinos y, a tal fin, proponía "encarar tareas preliminares" enviando un funcionario competente para analizar las posibilidades"(54).

El Estado Mayor General del Ejército argentino estuvo de acuerdo con la sugerencia del agregado militar en Chile "en el sentido de organizar una contrapropaganda de valor positivo, para contrarrestar las actividades de un "Comité de Ayuda al Pueblo Argentino que funcionaba en Chile"(55). El ministerio de Guerra también estuvo de acuerdo con el proyecto pero agregó que debía ser realizado a través de la cancillería "utilizando uno de los miembros de la embajada en Chile o delegando alguna persona particularmente capacitada de esta Dirección de Información al Exterior, para considerar la conveniencia o no de oficializar conferencias"; aconsejaba, asimismo, que "las charlas, comentarios o conferencias en general no tengan carácter oficial, para evitar la resistencia en el radioescucha por la posible localización como

dirigida por nuestro país"(56). La secretaria de Información al Exterior aconsejó consultar con la dirección de Asuntos Políticos. Esta contestó que

no disiente con las opiniones ya vertidas en estas actuaciones, pero, considera que convendría formular un plan previo para la organización y realización de esta clase de propaganda en todos los países; pudiendo comenzarse, si los recursos con que se cuenta no alcanzaran, por encarar, en primer lugar, una campaña en los países limítrofes intensificándose o dando preferencia a aquéllos que por las circunstancias del momento resulten más convenientes y ofrezcan perspectivas de más útiles resultados(57).

En septiembre de 1945 radio El Mercurio propuso al embajador Güiraldes intercalar informaciones relacionadas con la ayuda prestada por la Argentina a las Naciones Unidas en una transmisión especial. El embajador decidió finalmente no realizarla, criterio que el ministerio compartió, debido a que aparecería como una propaganda no espontánea. Güiraldes consideraba interesante tener una oportunidad para favorecer al diario El Mercurio, cuyos artículos habían sido amistosos hacia la Argentina, pero, enterado de que la radio homónima no era una dependencia del diario sino una empresa separada, finalmente el embajador perdió interés en el tema(58).

Conclusión

Durante el año 1945 quedaron planteados algunos ejes sobre los que se desarrollarían las relaciones argentino-chilenas en los años siguientes y que, a su vez, las conformarían y afectarían. Estos eran:

- a) La percepción del régimen de facto argentino como fascista y expansionista. Estos calificativos tuvieron origen en la campaña antiargentina del Departamento de Estado, instrumentada como respuesta a la posición frente a la guerra asumida por el gobierno revolucionario argentino, y en documentos erróneamente atribuidos al GOU. Principalmente los comunistas pero también los socialistas e inclusive los radicales, partido al que pertenecía el presidente Ríos, fueron responsables de la divulgación de tal connotación.
- b) La manifiesta adhesión del gobierno chileno al sistema democrático de gobierno. El presidente chileno insistió públicamente en que la Argentina debía buscar la salida institucional. Sin embargo no accedió a tomar medidas en contra del gobierno argentino, manteniendo su gobierno fiel al principio de no intervención en los asuntos internos de otros estados. Esta posición lo dejó bien preparado para encarar la relación con Perón cuando éste fuera electo presidente. De todos modos, el empeño de Chile en ser modelo de democracia para la región llevaría a profundas divergencias con el peronismo en el futuro.
- c) Las presiones de algunos sectores políticos chilenos antiperonistas ante su gobierno para intentar endurecer la posición de éste frente a la Argentina. Dichos grupos políticos

pretendían incidir en la política interior argentina, acompañando la lucha por la salida democrática de sus pares argentinos.

- d) La utilización del antiperonismo como excusa para la crítica al gobierno chileno.
- e) El deterioro esporádico de las normales relaciones chileno-argentinas por la provocación de pequeños incidentes diplomáticos.
- f) La fiscalización de las relaciones chileno-argentinas por los diplomáticos norteamericanos. El gobierno de Estados Unidos pretendía que Chile siguiera frente a la Argentina una política paralela a la de su país. Los contactos con el gobierno peronista afectaban las relaciones de Chile con los Estados Unidos.
- g) El empleo de presión por el gobierno argentino ante su par de Chile para que asumiera su defensa ante posturas antiperonistas de las fuerzas políticas de aquel país.
- h) El surgimiento de la idea de llevar a cabo propaganda e infiltración doctrinaria en Chile por parte del gobierno argentino con la intención de hacer conocer las virtudes del régimen político que se estaba ensayando en la Argentina y de contrarrestar la crítica antiperonista que llevaban a cabo algunos sectores políticos chilenos y representantes extranjeros destinados en aquel país.
- i) La advertencia por parte de la Argentina de la vulnerabilidad de Chile respecto de ciertos productos alimenticios argentinos. La diplomáticos argentinos apelarían a la misma cada vez que quisieran obtener la resolución favorable de algún problema.

Los factores mencionados fueron síntomas de que el fenómeno peronista que estaba surgiendo en la Argentina no resultaba indiferente en el país vecino. Las voces que advertían sobre su peligrosidad, si bien respondían a una intencionalidad política local determinada y posiblemente de respaldo a partidos políticos de la Argentina, conformaron una imagen del peronismo que muchos chilenos conservarían. Al asumir la presidencia, Perón contaba ya con antecedentes de animadversión en Chile, los cuales debían contrarrestarse si la intención era fortalecer su liderazgo en la región. Para lograr esto tenía dos vías: corregir en el plano de la política interna argentina aquellos puntos que producían una imagen contraproducente para su gobierno o instrumentar una política de ayuda económica y de expansión doctrinaria que neutralizaran dicha imagen.

Notas

1. Véase: Alejandro Magnet, *Nuestros vecinos justicialistas*, 7 ed., Santiago de Chile, ed. del Pacífico, 1954, p. 33; Ginna Maggi, *Patria y traición*, 3 ed., Bs. As., Gure, 1957, pp. 22-23; Arthur P. Whitaker, *op. cit.*, p. 140; *Ibid.*, *The United States and the Southern Cone*, Cambridge, Harvard Univ. Press, 1976, p. 177.
2. Véase la cuestión del no reconocimiento en Carlos Escudé, *Gran Bretaña...*, pp. 129-150. El Comité Consultivo de Emergencia para la Defensa Política, con asiento en Montevideo, en su memoria del año 1944, acusaba al gobierno del general Edelmiro Farrell de haber desvirtuado la decisión de ruptura de relaciones con el Eje, tomada por su antecesor el general Pedro Ramírez, al detener el plan antitotalitario mediante el cual se la debía llevar a la práctica. Y afirmaba: "Tal posición del gobierno argentino ha determinado que la gran mayoría de las otras Repúblicas se haya abstenido de entrar en relaciones diplomáticas con él, después de intercambiar informaciones y consultarse mutuamente". Citado por Silvano Santander, *Técnica de una traición*, Bs. As., Antygua, 1955, p. 91.
3. Rufino Laspiur al ministro Ameghino, 8 de junio de 1945, MREC, 1945, Chile, caja 6, exp. 13.
4. *Ibid.*
5. *Ibid.*
6. Güiraldes al ministro Ameghino, memorándum, 4 de julio de 1945, MREC, 1945, Chile, caja 6, exp. 13.
7. *Ibid.*
8. *Ibid.*
9. *Ibid.*
10. *Ibid.*
11. Güiraldes al ministro Ameghino, 28 de agosto de 1945, MREC, 1945, Chile, caja 6, exp. 1.
12. *Ibid.*
13. *Ibid.*
14. *El Mercurio*, 23 de agosto de 1945.
15. *El Mercurio*, 12 de septiembre de 1945.
16. *Ibid.*
17. Este tema ha sido tratado por Carlos Escudé en su libro *Gran Bretaña...*, pp. 62 y 106.
18. *El Mercurio*, 12 de septiembre de 1945.
19. *Ibid.*
20. *Ibid.*
21. *La Nación*, 12 de septiembre de 1945.
22. *Ibid.*
23. *Ibid.* El general Arnaldo Carrasco fue designado oficial de Estado Mayor del Ejército Argentino por el gobierno argentino en septiembre de 1945. El embajador Güiraldes comunicó que Carrasco era partidario de "continuar e intensificar una política de unión entre Chile y la Argentina, y lo caracterizó como recto y honrado, independiente de todo interés político y depositario de gran concepto como profesional. Güiraldes al ministro Cooke, 3 de octubre de 1945, MREC, 1945, Chile, caja 6, exp. 3.
24. *Ibid.*
25. Felix Luna, *Argentina, de Perón a Lanusse. 1943-1973*, 3 ed., Bs.As., Sudamericana/Planeta, 1985, p. 27.
26. Güiraldes al ministro Ameghino, 28 de agosto de 1948, MREC,

- 1945, Chile, caja 6, exp. 1.
27. Juan D. Perón, "¿Por qué el gobierno argentino no es fascista?" Respuesta dada por el coronel Perón a periodistas de Chile, Buenos Aires, 1944.
 28. Amuchástegui a Castro Gache, 21 de marzo de 1945, MREC, 1945, Chile, caja 6, exp. 7.
 29. *Ibid.*
 30. *La Prensa*, 27 de marzo de 1945.
 31. Güiraldes al ministro Ameghino, 3 de abril de 1945, MREC, 1945, Chile, caja 6, exp. 7.
 32. *El Siglo*, 22 de marzo de 1945.
 33. *Ibid.*
 34. *Ibid.*
 35. Ver Ronald C. Newton, "The United States, the German-Argentines and the Myth of the fourth Reich, 1943-1947", en: *HAHR*, 64(1), 1984, pp. 81-103.
 36. Alejandro Magnet, *op. cit.*, pp. 135-137.
 37. Rita A. Giacalone, *From Bad Neighbors to reluctant partners: Argentina and the United States, 1946-1950*, Indiana Univ., Ph.D., 1977, pp. 2-3.
 38. Poch al ministro de Marina, 9 de octubre de 1945, MREC, 1945, Chile, caja 6, exp. 7.
 39. *El Mercurio de Antofagasta*, 17 de mayo de 1945.
 40. *Ibid.*
 41. *El Mercurio de Antofagasta*, 8 de noviembre de 1945.
 42. *El Comercio*, 30 de septiembre de 1945.
 43. Leguizamón al ministro Cooke, 24 de octubre de 1945, MREC, 1945, Chile, caja 6, exp. 11.
 44. *Ibid.*
 45. *Ibid.*
 46. *La Nación*, 16 de noviembre de 1945.
 47. Embajada argentina en República Dominicana al ministro Cooke, 23 de noviembre de 1945, MREC, 1945, Chile, caja 6, exp. 11.
 48. 825.00/1-3145, memo de conversación, Fernández, Bowers, Garrison, 29 de enero de 1945, Memoranda Argentina, RG 59, Departamento de Estado, archivos nacionales de los Estados Unidos. Todos los documentos norteamericanos utilizados en el trabajo pertenecen a este grupo.
 49. 825.00/10-3145, Informe sobre las condiciones generales en Chile durante octubre de 1945.
 50. *Ibid.*
 51. *Ibid.*
 52. 825.00/12-2445, carta de Bowers a Braden.
 53. Teniente General Julio A. Lagos (agregado militar) al jefe del Estado Mayor General del Ejército, Santiago, 23 de noviembre de 1944, MREC, 1945, Chile, caja 6, exp. 3.
 54. *Ibid.*
 55. Memorándum de Juan C. Massa, dirección de Información al Exterior del ministerio de Relaciones Exteriores, 8 de marzo de 1945, MREC, 1945, Chile, caja 6, exp. 3.
 56. *Ibid.*
 57. Memorándum del consejero de embajada Carlos A. Pardo a cargo de la dirección de Asuntos Políticos del ministerio de Relaciones Exteriores, 21 de marzo de 1945, MREC, 1945, Chile, caja 6, exp. 3.
 58. Güiraldes al ministro Cooke, 4 de septiembre de 1945, MREC, 1945, Chile, caja 6, exp. 18; nota de la dirección de Asuntos Políticos del MREC al embajador Güiraldes, 19 de septiembre de 1945.

Capítulo 2

El tratado argentino-chileno de 1946

Un memorándum redactado por la cancillería argentina, al analizar la situación del comercio exterior chileno, señalaba que en general éste había tenido saldos favorables, habiendo alcanzado las cifras más altas en el año 1929, para descender bruscamente en los años siguientes hasta 1932, en que se habían registrado las cifras mínimas como consecuencia de la crisis mundial. Dicho comercio se había recuperado posteriormente, pero sin alcanzar los valores de la época anterior a 1929. El informe consignaba además que, finalizada la Guerra Mundial, Chile había logrado mantener los valores de su comercio exterior por arriba de los registrados en los últimos años anteriores al conflicto, debido a la naturaleza de los productos que exportaba. Se destacaba que, si bien los precios de sus exportaciones habían aumentado mucho en relación con el de sus importaciones, y este país tenía un "saldo estadístico favorable", el "saldo efectivo" no lo era tanto, "debido al régimen de explotación de los productos mineros chilenos, en especial el cobre". Esto se atribuía al hecho de que las empresas mineras estaban en alto grado en manos de firmas extranjeras, especialmente norteamericanas, y éstas no retornaban al país más divisas que las correspondientes a su costo de producción, a determinados impuestos y a lo que ingresaba al país en forma de materiales e implementos. Los minerales eran señalados como el rubro más importante en el valor de las exportaciones chilenas -aproximadamente 80% del total- y dentro de ellas el cobre y el salitre representaban entre 90 y 95%. El resto de las exportaciones estaban compuestas por productos agrícolas, ganaderos y manufacturados. La importación de productos industriales se había intensificado en los últimos años, pero no alcanzaban a representar una proporción de importancia en el valor total exportado. Los principales mercados extranjeros para los productos chilenos en 1946 habían sido los Estados Unidos, 58,2%; Egipto, 7,2%; Francia, 4,4% y Gran Bretaña, 4%(1).

El comercio entre Chile y los Estados Unidos era considerado sumamente importante, como consecuencia de la participación casi absoluta del capital norteamericano en la explotación de la minería chilena, principal fuente de la riqueza nacional. Se mencionaba que éstos absorbían 80% de las exportaciones chilenas (considerablemente más que en la preguerra) y eran el principal abastecedor de Chile, contribuyendo con cerca de 40% del valor total de sus importaciones. El intercambio consistía en artículos manufacturados norteamericanos, especialmente maquinarias y automotores, por cobre, salitre y hierro chilenos. Durante la guerra las compras de minerales a Chile habían aumentado por haber sido catalogados el cobre y el salitre como productos estratégicos. La desaparición de Alemania como mercado proveedor de Chile había favorecido enormemente el comercio de los Estados Unidos con el país sudamericano(2).

En cuanto al intercambio comercial argentino-chileno, se estimaba que arrojaba un saldo favorable a la Argentina -entre 30 y 50 millones de pesos m/n argentina por año-, tendencia que se había acentuado en los últimos años, especialmente en 1946. La Argentina constituía el principal mercado sudamericano para los

productos chilenos, seguida por Brasil. A partir de la guerra, Chile había quintuplicado sus compras a los países sudamericanos, ocupando el primer lugar Perú, seguido de la Argentina y Brasil(3). Se señalaban las siguientes cifras correspondientes al intercambio comercial argentino-chileno entre 1942 y 1946:

<u>Años</u>	<u>Exportaciones</u>	<u>Importaciones</u>	<u>Saldo positivo</u>
	(en pesos m/n argentina)		
1942	61.346.230	37.600.417	23.745.813
1943	68.797.297	34.729.817	34.667.480
1944	84.983.508	51.548.330	33.435.178
1945	98.047.000	52.821.000	45.226.000
1946	90.536.982	33.010.176	57.526.806

Fuente: memorándum "Relaciones económicas con Chile", MREC, 1946, Chile, caja 10, exp. 52(5).

La Argentina adquiría en Chile cobre en alambre, en planchas o electrolítico; salitre, azufre, carbón de piedra, flejes y alambre de hierro y acero, maderas, cáñamo, arvejas, nueces y vinos. A su vez, exportaba animales en pie, lanas, carnes preparadas, semillas de girasol, extracto de quebracho, tejidos de lana y otros productos naturales y manufacturados en menores cantidades. La exportación de ganado en pie con destino a Chile representaba 50% del valor de las compras que dicho país efectuaba a la Argentina en 1946. No obstante el propósito casi permanente de las autoridades chilenas de reducir al máximo la importación de ganado argentino con el fin de favorecer el desarrollo de la ganadería local, el volumen de ese tráfico había ido en aumento. La Argentina consideraba al mercado chileno como "sumamente interesante" para la colocación de sus carnes, y en esos últimos años también la exportación de semillas de girasol, que Chile importaba como materia prima para su industria aceitera, había experimentado un gran incremento(4).

Lo señalado en los párrafos anteriores demuestra claramente la importancia que guardaban los Estados Unidos y la Argentina respecto de la economía chilena, salvando las distancias obviamente. Ello se daba en momentos en que, finalizada la guerra, disminuiría sustancialmente la demanda de los productos estratégicos y en consecuencia Chile sufriría una seria crisis económica durante varios años. Así, este país habría de soportar la escasez de algunos productos alimenticios, que la Argentina podía suministrarle pero que implicaban una gran erogación para su economía, dado la balanza comercial desfavorable. La exportación de ganado en pie se convertiría consecuentemente en una importante arma de presión para la política argentina hacia aquel país.

El presidente argentino Juan Domingo Perón advirtió la situación de Chile y la posibilidad de ofrecerle una fuerte ayuda financiera con el objetivo de desarrollar en aquel país la producción de materias primas que apuntalaran las nuevas industrias argentinas, a la vez que aseguraba a Chile la obtención de medios de pago para los productos argentinos y la posibilidad de financiar su desequilibrio comercial por un tiempo. Analizaremos a continuación las contingencias e implicaciones del tratado comercial, fruto de las negociaciones entre ambos países.

1. El convenio

El 4 de noviembre de 1946 asumía la presidencia de Chile Gabriel González Videla, candidato del partido Radical. Era el tercer presidente de ese partido que ocupaba sucesivamente el cargo y había contado para su elección con el apoyo decisivo de los comunistas. Los actos de asunción contaron con la presencia de un enviado personal del presidente Harry Truman, el almirante William Leahy, escoltado por cinco buques de guerra norteamericanos. El autor que menciona el episodio señala que a los chilenos les gustó el almirante pero no les entusiasmaron los barcos de guerra y que probablemente el "despliegue marcial tuviera por finalidad intimidar al truculento vecino de Chile, Perón, en la Argentina"(5). A su vez, el presidente Perón envió para la ocasión una delegación encabezada por el vicepresidente Hortensio Quijano, técnicos en economía y delegados obreros. Estos, además de su misión protocolar debían tantear las condiciones existentes para la firma de un tratado comercial entre ambos países. El tema parece haber interesado al gobierno chileno pues antes de finalizar el mes una delegación había viajado a Buenos Aires para iniciar las conversaciones(6).

Simultáneamente comenzó el debate en la prensa chilena acerca de lo que era conveniente acordar con la Argentina. El presidente de la delegación, senador Jaime Larraín García Moreno, declaró antes de partir para la Argentina que Chile no solicitaría empréstitos sino aportes de capital para el fomento de las industrias cuyos productos fueran susceptibles de exportarse a la Argentina. Las preferencias eran las exportaciones de hierro y acero; después carbón, salitre y otros abonos; maderas y azufre, y, finalmente, cobre. En opinión de Larraín, Chile importaba crecientes cantidades de alimentos de la Argentina y las únicas posibilidades de equilibrio radicaban en aumentar la exportación de tales productos a su vecino(7).

A juzgar por algunas declaraciones, la iniciativa sobre un acuerdo comercial provino del gobierno argentino. El diario El Mercurio atribuyó la idea de llevar capitales argentinos a Chile, para instalar o ampliar las industrias que exportaran su producción a la Argentina, a "los círculos influyentes de la actual administración argentina"(8). Así también Eduardo Alessandri, miembro de la delegación que viajó a Buenos Aires, manifestó que el presidente electo de su país justipreciaba la invitación que le hiciera el doctor Quijano para llegar a una efectiva mancomunidad económica de la Argentina y Chile(9). Llama la atención que Perón hiciera tal ofrecimiento justamente al presidente González Videla que había sido uno de los principales antiperonistas chilenos(10). Una posible explicación radicaría en que la fuerte posición frente al "imperialismo norteamericano" asumida por González Videla durante su campaña electoral(11) hubiera inspirado a Perón (cuyo duelo con el ex embajador en la Argentina y en ese momento secretario asistente de Estado, Spruille Braden, todavía estaba en vigencia) a hacer la propuesta. El acuerdo sería en ese caso el instrumento de dos gobernantes que trataban de consolidar un proyecto de autarquía regional.

La prensa chilena recordó en esos días que el volumen de importaciones de trigo y oleaginosas recientemente pactado no sería suficiente y que era conveniente que la misión planeara

nuevas negociaciones para años venideros. Larraín respondió que dichas negociaciones estaban finiquitadas y los trámites pendientes a cargo de la embajada de Chile en Buenos Aires; la misión no tocaría ese tema(12).

Previamente a la partida de la delegación surgieron en Chile algunas voces de advertencia. Los importadores chilenos plantearon su inquietud -transmitida al director general de Aduanas de la Argentina por la Cámara argentino-chilena de Comercio- ante el decreto que había creado en la Argentina el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (IAPI), que se reservaba la exportación de varios productos del intercambio comercial recíproco. Los exportadores e importadores chilenos propusieron la conveniencia de que se fueran regularizando las exportaciones argentinas hacia Chile, especialmente de aquellos productos cuya escasez había producido trastornos en la industria y la economía chilenas. La cámara binacional quería asegurarse que la comisión que fuera a gestionar el tratado contara con los antecedentes y datos necesarios en razón de que había variado fundamentalmente la forma del comercio argentino-chileno(13). El planteo de este sector era relevante porque demostraba que la escasez de algunos productos argentinos provocaba trastornos en la industria y la economía chilenas, y que la creación del IAPI dejaba en manos del estado argentino un nada desdeñable instrumento de presión.

A juicio de los conservadores, la misión chilena debía esforzarse por comprar en las condiciones más ventajosas aceites, carnes o ganado vivo y trigo, y abrir camino a posibles ventas de maderas, carbón mineral, cobre, vinos y salitre. Hacían una crítica al precio del trigo, señalando que en ese momento no existían para Chile verdaderas facilidades pues pagaba por el trigo igual que cualquier cliente; los precios argentinos eran más altos que los canadienses y los norteamericanos, cuyos excedentes estaban destinados a Europa(14). El interrogante para este grupo era si podía esperarse que la Argentina cediera, en beneficio de Chile, algunas de las ventajas que le significaban los sobrepuestos de las intervenciones estatales, lo cual se dudaba dado la existencia del IAPI. "Si se va a aceptar los hechos consumados en cuanto a precios y modalidades comerciales en vigor, no se justificaría la importancia que se ha dado a dicho viaje", concluía El Diario Ilustrado(15).

La asimetría de las economías era otra de las preocupaciones en Chile, inclusive dentro del partido del presidente. La posición económica de la Argentina era considerada un potencial obstáculo a cualquier entendimiento de tipo comercial. La Hora, órgano oficial del partido Radical, ponía en duda la conveniencia del establecimiento del régimen de "cordillera libre" en razón del estado económico de Chile. La mayor potencialidad económica de la Argentina y su productividad manufacturera supuestamente iban a producir una constante succión de divisas en pago de las mercaderías que Chile debía importar, hecho que no podría compensarse con las que Chile obtuviera de la exportación de sus productos(16).

A pesar de las objeciones, el acuerdo entre las partes se produjo sorprendentemente en corto tiempo. El convenio fue firmado en forma preliminar el 13 de diciembre de 1946 en Buenos Aires por Jaime Larraín y Miguel Miranda, presidente del Banco Central de la República Argentina. Debía obtener la ratificación legislativa de

ambos congresos para que los presidentes pudieran firmarlo en forma definitiva a comienzos de enero en Mendoza.

Establecía en primer lugar un régimen de unión aduanera, declarando libres del pago de derechos de importación a los productos y mercaderías originarios de cada uno de los países (aunque podían confeccionarse listas de productos exceptuados); las partes se obligaban a atenderse preferentemente sus necesidades con los saldos exportables; y las concesiones y ventajas que recíprocamente se otorgaban quedaban excluidas de los efectos de las cláusulas de la nación más favorecida, que cada uno de los países hubiera pactado o pactara en el futuro, inclusive con los estados limítrofes.

Respecto de las disposiciones financieras, se acordaba que la Argentina, a través del IAPI, otorgara a Chile un crédito rotativo con un descubierto autorizado de cien millones de pesos m/n argentina, que sería utilizado exclusivamente para cubrir el saldo desfavorable para Chile que pudiera arrojar el intercambio comercial entre ambos países, a un interés del 2,75 anual y a pagar en moneda argentina.

En cuanto a la inversión de capitales argentinos en Chile, se estipulaba que el gobierno argentino invertiría, a través del IAPI, hasta 300 millones de pesos m/n argentina, con el objeto de colaborar en la creación de nuevas actividades económicas o de intensificar las existentes, y aumentar en ambos casos la exportación a la Argentina de productos originarios de Chile, especialmente cobre, acero, salitre, carbón, maderas y energía eléctrica. A los efectos indicados se constituiría en Chile una sociedad de financiación argentino-chilena, integrada por el IAPI y la Corporación de Fomento de Chile. La sociedad iba a financiar empresas nuevas o ya existentes y tendría preferencia para adquirir, de las financiadas, la totalidad o parte de su producción no destinada a cubrir las necesidades del consumo interno chileno. El gobierno de Chile se comprometía a permitir la exportación a la Argentina de los productos así adquiridos por la sociedad.

Se establecían también las condiciones de un empréstito externo, emitido en Buenos Aires por el gobierno de Chile, del 3 3/4% de interés y 2,45% de amortización acumulativa anuales, tomado por el IAPI por intermedio del Banco Central de la República Argentina, por un valor de 300 millones de pesos m/n argentina. El producto de la negociación del empréstito iba a ser utilizado exclusivamente para hacer un plan de obras públicas en territorio chileno. El gobierno de este país adquiriría al IAPI, en igualdad de precios, calidad y condiciones, las maquinarias, materiales e implementos, que no se produjeran en Chile, necesarios para la ejecución de dichas obras. El gobierno de la Argentina debía ejecutar en su territorio las obras públicas necesarias para complementar las que realizara Chile.

Sobre comunicaciones terrestres, fluviales, marítimas y aéreas se establecía que el gobierno de Chile otorgara a la Argentina libre tránsito para la exportación a terceros países de productos y mercaderías argentinos que se realizaran desde puertos chilenos. Igual franquicia tendría la Argentina para importar, a través de Chile, productos originarios de terceras naciones. La Argentina recíprocamente hacía las mismas concesiones. Ambas

partes se otorgaban durante 30 años las concesiones y facilidades necesarias para la organización de zonas especiales y depósitos francos en los puertos marítimos y terrestres del otro. Se comprometían a que el transporte de mercaderías entre ambos se efectuara preferentemente en buques de sus respectivas banderas nacionales en igualdad de tonelaje. También se promoverían las comunicaciones aéreas comerciales entre ambos países.

Por último, se fijaban disposiciones sobre el seguro de las mercaderías; se proponía incrementar el intercambio de películas cinematográficas y se determinaba que todas las compras de productos argentinos que efectuara Chile serían realizadas con la intervención del IAPI. El convenio regiría por un plazo de cinco años.

2. Vicisitudes del tratado en Chile

El apoyo político del presidente González Videla residía, como se dijo, en el partido Radical aliado a comunistas y liberales; éstos últimos habían sido incorporados al gabinete del presidente para compensar los tres ministerios otorgados a los comunistas. Así, representantes de los mencionados partidos aliados participaron de la gestión del tratado en Buenos Aires, pero esto no aseguró el respaldo permanente e incondicional de éstos al acuerdo.

El presidente afirmó considerar al tratado como "el paso de mayor trascendencia y de mayores proyecciones de la vida de la nación y aun del continente americano"(17). Inicialmente, el convenio contó con el apoyo del partido Radical, de los agrario-laboristas y de los comunistas. La prensa que apoyaba al gobierno señaló las virtudes del mismo: el pacto contemplaba el procedimiento para que las economías de Chile y la Argentina se complementaran desde el doble punto de vista de la satisfacción de las necesidades del abastecimiento para el consumo directo y para el consumo industrial de materias primas, sin lesionar las producciones de los países contratantes. La importación solo se efectuaría en la cantidad suficiente para completar el consumo y las necesidades industriales del país afectado(18). La Argentina y Chile someterían al régimen de unión aduanera solo aquellos productos en que la libre competencia no resultara ruinosa para las correspondientes industrias o actividades, e irían incorporando paulatinamente los demás(19). El convenio aparecía como una solución transitoria para subsanar el desequilibrio de la balanza comercial mediante el otorgamiento de un crédito a Chile pero, a su vez, se veía positivamente el hecho de que la Argentina proveyera capitales para crear o intensificar actividades económicas, de manera que aquel país pudiera obtener saldos exportables(20). La sociedad que iba a crearse en Chile no tenía como objetivo hacer inversiones directas sino financiar, mediante concesiones de préstamos, aportes de capital o cualquier otro medio, a empresas existentes o que se establecieran en Chile, por lo cual podía constituir un factor de progreso en el desenvolvimiento industrial de Chile y, a la vez, fortalecer el volumen y el valor del intercambio con la Argentina(21).

El diputado comunista Cipriano Pontigo, integrante de la misión que tramitó el acuerdo en Buenos Aires, manifestó que consideraba al tratado como el más favorable posible, tanto por el

interés como por el plazo. Su enumeración de las ventajas parecía interminable: comprendía la posibilidad de dar trabajo a "miles de obreros"; la construcción de obras públicas que serían "aporte al desarrollo económico de muchas regiones del país" porque resultarían provistas de caminos y ferrocarriles; las facilidades para los proyectos de industrialización como la fundición y refinería de cobre, la mecanización de las minas de carbón y la explotación racional de los yacimientos carboníferos de Magallanes; la posibilidad de aumentar el poder consumidor interno y de mejorar, en parte, el standard de vida de la población; el mantenimiento del abastecimiento de algunos productos alimenticios de consumo popular, desbaratándose la especulación con los mismos. Pontigo negaba rotundamente la acusación que se hacía a la misión comercial que lo había firmado de haber entregado a la Argentina la soberanía de Chile o haber establecido una vinculación tal con su vecino que en adelante impidiera a los chilenos contraer compromisos con otros países. Por el contrario consideraba que el convenio estaba hecho sobre la base de la reciprocidad y que "unía a las naciones hermanas del continente para desarrollar sus economías independientemente de la intromisión imperialista"(22).

El respaldo del comunismo al tratado estaba guiado por sus responsabilidades de partido cogobernante pero incluía una razón de fondo: la posibilidad de disponer, a través de los ministerios que ocupaba -Obras Públicas, Agricultura y Trabajo- y de los sindicatos adictos, de los cuantiosos recursos que llegarían a Chile por vía del convenio(23). Indicio de ello sería el hecho de que rotas sus relaciones con el gobierno, unos meses más tarde, pasara inmediatamente a la oposición al acuerdo. Por otro lado, fuentes norteamericanas señalaban que la razón fundamental del respaldo comunista era dañar las relaciones de Chile con los Estados Unidos pero advertían, en febrero de 1947, que la denuncia de Perón contra los comunistas argentinos por sus actividades antipatrióticas podía provocar un cambio en el apoyo de los comunistas chilenos al tratado(24). Como de hecho el cambio se produjo unos meses más tarde, podría afirmarse que existía cierta correspondencia en la actitud hacia el peronismo de comunistas chilenos y argentinos.

El apoyo comunista al tratado habría sido, por otra parte, según un informe de la embajada argentina, la razón principal de la campaña opositora al mismo, desatada y llevada a cabo por algunos partidos políticos chilenos. Así, un apartado de un informe sobre el comunismo en Chile, redactado por la embajada argentina en ese país expresaba:

- c) La imposibilidad de conseguir la aprobación del tratado chileno-argentino, el cual fue atacado en toda forma y dilatado hasta ahora su debate con «chicanas» de toda clase por las fuerzas de la derecha y aun de aquéllas que sinceramente desean la unión económica con nuestro país, por la razón primordial de que su aprobación vendría a prestigiar y a afianzar a un gobierno en el que participaba el partido Comunista, con lo que también se afianzaba y prestigiaba a éste.

En esencia, no ha sido otro el motivo por el cual ese tratado aún no ha podido salir.

Demás está decir que éste era apoyado por el partido Comunista y ello bastó para que el ataque al mismo fuera mayor y se exhibiera a la opinión pública como un peligro

si llegaba a ser aprobado por las cámaras(25).

Desde un principio, los conservadores, los socialistas y los radicales-democráticos se mostraron reacios a aceptar el acuerdo. El embajador argentino señalaba que como un medio de desacreditar el tratado se había lanzado la noticia, que había "circulado bastante", en cuanto a que el acuerdo firmado en Buenos Aires significaba "una subordinación o sometimiento de Chile a la Argentina". Con ello, según el embajador, se buscaba "impresionar el vigoroso y sensible patriotismo chileno" pero el intento solo podía "tener eco en los espíritus predispuestos a un sentimiento antiargentino". Esta versión se había propagado en el sector conservador, entre los radicales-democráticos, que atacarían el convenio porque atentaba "contra la soberanía nacional al admitir la formación de comisiones mixtas para la realización de obras públicas en territorio chileno" y entre los liberales quienes albergaban "algo así como un temor del predominio de la Argentina en la economía chilena"(26).

El partido Conservador, según observaba la embajada argentina, como opositor sistemático del gobierno de González Videla, tendía a presentar a éste siguiendo una política económica e internacional contraria a los intereses del país(27) y no quería otorgar a dicho gobierno la oportunidad de resolver la difícilísima situación financiera en que se debatía el país(28). Los norteamericanos, en cambio, justificaban la posición de los conservadores porque "después de todo éstos eran los dueños de los campos y las industrias que podían resultar afectados"(29).

Los conservadores juzgaron algunos de los compromisos contraídos demasiado exigentes para las posibilidades de Chile. Proponían, en cambio, un mecanismo inverso para llegar a la cordillera libre: la extinción gradual de los derechos aduaneros para cada uno de los productos. Consideraban que, con el mecanismo fijado en el tratado, las seguridades de los productores estaban en las excepciones, y éstas se harían no en virtud de determinadas normas sino a juicio de quien hiciera las listas, sistema que creían podía prestarse a grandes errores, abusos y soborno. En realidad, la base de toda la crítica era el temor de los conservadores a la competencia de los productos argentinos con los que producía el sector que representaban. Así su diario sostenía:

La seguridad de la industria manufacturera va a depender de un hilo: muy pocos tendrían interés en invertir capitales en una actividad que podría ser afectada al régimen aduanero, es decir, en abierta competencia con sus similares argentinos (que por sus menores costos, mejores rendimientos y mayor producción ofrecería a precios fuera de toda competencia)(30).

Proponían que Chile limitara las importaciones hasta completar sus necesidades evitando la "invasión". Pero también advertía este grupo que no había ninguna limitación para que la Argentina exigiera a Chile la entrega de todos sus saldos de cobre, una vez que montara las usinas correspondientes para elaborarlo. La crítica apuntaba entonces a señalar que el convenio constituía un peligro para la independencia comercial porque las divisas del cobre eran las únicas que quedaban libres a Chile y éste perdía toda esperanza de manufacturar su propio cobre(31). La disyuntiva

de Chile parecía consistir en exportar poco y mantener un déficit en el saldo comercial con la Argentina o asegurarse la colocación de sus saldos exportables de cobre, perdiendo determinada cuota de su "independencia comercial". Sin embargo, los intereses de los conservadores estaban más ligados a la producción agropecuaria, lo que hacía probable que la razón primordial de la oposición al tratado fuera la defensa de éstos.

Por su parte, el partido Liberal, que integraba el gabinete, había asumido dentro de éste una posición de contralor y de colaboración condicional. Desde un principio sus miembros se mostraron indecisos y resolvieron estudiar el tratado antes de dar su apoyo. El embajador argentino, luego de sostener conversaciones con algunos de ellos, informó que había encontrado "reticencias y reservas no razonadas" así como el mencionado temor al predominio(32). Dicho partido pidió al gobierno chileno que solicitara a la Argentina una ampliación de informaciones para decidir su voto, hecho que provocó la primera demora en el envío del tratado al congreso para su ratificación.

A fines de febrero de 1947, un proyecto de ley de sindicalización campesina vino a complicar la búsqueda de consenso legislativo para la ratificación del tratado comercial con la Argentina. Los liberales habían limitado su oposición a pedir algunas enmiendas pero a partir de la fecha mencionada decidieron mantener su voto para la ratificación en suspenso, hasta ver que ocurría con la aprobación del proyecto de sindicalización campesina; la retención del proyecto del tratado de comercio podía servirles entonces para negociar el otro proyecto de ley, en caso de que el presidente decidiera vetarlo(33). El proyecto original de sindicalización campesina enviado por el poder Ejecutivo al Congreso incluía la sindicalización en forma obligatoria; los liberales no fueron partidarios de sancionarlo en su redacción original por considerarla muy avanzada y, con el voto de los legisladores conservadores y otros grupos menores, propiciaron y obtuvieron la aprobación de otro proyecto más atenuado, que hacía optativa la sindicalización y restringía las atribuciones de los sindicatos. De esa forma impedían reforzar la posición del comunismo que controlaba la mayor parte de los últimos(34).

Los comunistas y los radicales, defraudados en sus aspiraciones de ver convertido en ley el proyecto que ellos apoyaran inicialmente, solicitaron al presidente que ejerciera su derecho de veto. El presidente se encontró frente a una disyuntiva: si vetaba la ley, provocaba la alienación de los liberales que habían amenazado con retirarse del gobierno y pasar a la oposición junto a los conservadores; si, por el contrario, promulgaba la ley, debía prever el alejamiento de los comunistas y los radicales de su propio partido(35). González Videla finalmente decidió introducirle modificaciones. Fue una solución transaccional que cumplió su promesa de amparar la sindicalización agraria pero no la impuso obligatoriamente y disminuyó las exigencias a los sindicatos para su afiliación(36). La solución se inclinó hacia los deseos de los liberales, lo que supuestamente debía allanar el camino para la aprobación del tratado; sin embargo, el tema del convenio entró en un impasse.

En marzo de 1947, la Argentina aceptaba por segunda vez modificaciones al tratado, solicitadas por el gobierno chileno con el fin de obtener el apoyo del partido Liberal, uno de cuyos

miembros -el diputado Eduardo Alessandri- participó en gestionarlas. El embajador argentino en Chile, generalmente al margen de las tratativas, aconsejaba a su gobierno no ceder a los sucesivos pedidos de reformas y advertía que los conservadores no se darían por satisfechos cualesquiera éstas fueran. Señalaba que la aceptación de los pedidos de modificaciones provocaba en Chile dos reacciones: unos sectores ponían de relieve la buena predisposición de la Argentina hacia Chile, mientras otros interpretaban que la aceptación de enmiendas por la Argentina confirmaba que el tratado contenía cláusulas para el exclusivo beneficio de este país y perjudiciales para su vecino(37).

Asimismo los socialistas mantuvieron una férrea oposición al tratado desde su firma. Criticaron agudamente la inconsecuencia de sus mayores adversarios políticos de ese momento -los comunistas- por haber cambiado su actitud hacia el peronismo luego de la elección del presidente Perón(38). La posición del partido Socialista fue claramente expresada en el Senado por Salvador Allende el 5 de marzo de 1947 al afirmar: "el partido Socialista es contrario al convenio argentino-chileno por considerar que éste tiene disposiciones contrarias al interés nacional, lo que queda demostrado por las continuas modificaciones que ha sido necesario introducirle"(39).

La mencionada oposición del socialismo llegó al extremo de recurrir a los gobiernos norteamericano y argentino para evitar la ratificación del acuerdo. La apelación ante el último fue denunciada por el diario comunista, que hizo públicas las conversaciones de Oscar Schnake con un alto funcionario del gobierno argentino sobre el futuro del tratado comercial con la Argentina. El diario lo calificaba de traidor a su país. Un comunicado de la Secretaría General del gobierno chileno, a su vez, corroboraba que Schnake había pedido la intervención argentina en los asuntos internos de Chile para lograr la desaparición de los comunistas del gobierno; su idea consistía en que una falta de interés en el tratado por parte de la Argentina podía causar la caída del gabinete chileno(40).

Las elecciones del 6 de abril revelaron el triunfo de los partidos anticomunistas pero el comunismo duplicó el número de regidores. El avance del comunismo en este nivel indujo a los liberales (que no habían hecho una buena elección) a plantear su retiro del gobierno, provocando así la crisis del gabinete de coalición que integraban. Esta maniobra permitió al presidente pedir la renuncia a los ministros comunistas y designar un ministerio integrado casi en su totalidad por radicales, con el apoyo tácito de los liberales en el Congreso. En esas circunstancias, al informar al país sobre la decisión adoptada, González Videla expresó que ésta contribuiría a facilitar el cumplimiento de su programa de gobierno y a "la ratificación del más trascendental hecho histórico: el convenio con la República Argentina". A pesar de la aparente conformidad de las fuerzas políticas, la discusión en Diputados fue nuevamente postergada. Dicha postergación, el lugar cada vez menor que el tema comenzó a ocupar en la prensa y el repentino cambio de opinión del canciller fueron hechos para los cuales el agregado económico a la embajada argentina no encontraba explicación. "No habiendo motivos fundamentales para oponerse al acuerdo, la cuestión se diluye en discusiones bizantinas" expresó el funcionario; éste atribuyó entonces influencia a factores externos, entre ellos la

gravitación de los intereses estadounidenses en Chile(41). La razón pudo haber residido en la intención del gobierno chileno de no comprometer por el momento definitivamente a Chile en el tratado, en vista de la conferencia económica de Ginebra.

Un discurso pronunciado por el embajador chileno Alfonso Quintana Burgos, en el Círculo Militar de Buenos Aires, echó un poco de luz sobre los posibles temores de su gobierno respecto del asunto. El diplomático reconoció que la firma definitiva del tratado había sido demorada en su país por causas políticas; su gobierno no había querido afrontarla sin liberarse previamente del compromiso que lo ataba al comunismo. Una vez reformado el gabinete, consideraba anuladas las razones políticas que podían interferir. Atribuyéndola al pueblo de Chile, señaló la preocupación de que los 600 millones de pesos argentinos, que se invertirían en incrementar las vías de comunicación entre ambos países y en las industrias chilenas vinculadas con la economía argentina, representaban un beneficio exclusivo para la Argentina porque ésta recibiría hierro, carbón y cobre para activar su industria, mientras que los beneficios para Chile serían escasos. Creía también que sería una ventaja para la Argentina la posibilidad de disponer de puertos en el Pacífico, siendo su contrapartida poco productiva para Chile. Por último, recriminó a la Argentina el alto precio a que vendía las oleaginosas y el trigo, así como también las gestiones que realizaba el general Savio para instalar plantas de salitre sintético, las cuales conspirarían contra las ventas de salitre natural, una de las principales fuentes de recursos de Chile(42). A pesar de sus objeciones, el embajador estimaba que el tratado comercial debía ser aprobado.

Entre el 25 de junio y el 12 de julio de 1947 el presidente González Videla realizó una gira por Brasil y la Argentina. A su regreso a Chile decidió reorganizar su gabinete debido a la grave situación económico-financiera del país; el objetivo era formar un gabinete de coalición que permitiera al gobierno obtener apoyo legislativo para las urgentes medidas económicas y la ratificación de los tratados firmados con la Argentina y Brasil. Los partidos políticos trataron de imponer condiciones, insistiendo las fuerzas de la derecha en la eliminación del comunismo de todos los puestos públicos(43). Las negociaciones parecieron llegar a un punto crítico debido a las exigencias del partido Liberal que pretendía la reunión de los ministerios de Finanzas, Economía y Comercio en un representante de su partido. Finalmente el 2 de agosto se constituyó un gabinete integrado por algunos militares(44). En esas circunstancias se decidió presentar nuevamente el tratado con Argentina en la cámara de Diputados. La embajada argentina juzgaba que el verdadero motivo de la presentación era auscultar el grado de respaldo que el poder Ejecutivo y su nuevo gabinete tenían en el Parlamento; en opinión de aquélla, la iniciativa no prosperaría y en cambio daría a la oposición la oportunidad de iniciar nuevos ataques al acuerdo y predispondría a la opinión pública a tener "recelos sobre los verdaderos alcances del mismo"(45).

A fines de agosto, el ministro del Interior, vicealmirante Inmanuel Holger, comunicó al encargado de negocios argentino que el presidente había convocado a dirigentes de distintas agrupaciones políticas para solicitarles el pronto despacho del tratado. El ministro pensaba que habiendo desaparecido el comunismo del gobierno, los partidos Liberal y Conservador no

tendrían argumentos sólidos para continuar con la oposición(46). Con todo, las negociaciones se prolongaron y a mediados de noviembre, el presidente chileno admitía que aquéllas habían tomado un giro negativo. El presidente lamentaba el hecho y reconocía que el tratado era necesario para poder gobernar con tranquilidad dado la crítica situación económica de Chile. Pero el persistente voto negativo de los conservadores, sumado al de los socialistas, radicales-democráticos y comunistas, quitaba al acuerdo toda posibilidad de ratificación. Al mismo tiempo que el tratado parecía caer en una vía muerta, la embajada argentina comenzó a tener conocimiento de los primeros indicios de la intención de Chile de proponer tratados parciales en lugar del convenio original(47).

En síntesis, diversas razones imposibilitaron la obtención del apoyo político necesario para lograr la ratificación del acuerdo en el Congreso chileno. En primer lugar, existió un temor al predominio económico de la Argentina y a facilitar su desarrollo, expresado por conservadores, radicales-democráticos, liberales y socialistas. Lo mismo dio a entender el embajador de Chile en la Argentina. Entre las cuestiones de política interna, la preocupación por el supuesto fortalecimiento del comunismo, a través del manejo de los recursos provenientes del acuerdo, demostró tener importancia en los partidos de la derecha y también en el socialismo. Sin embargo, desaparecido el comunismo de los puestos públicos, y habiendo accedido el gobierno argentino a todas las modificaciones solicitadas por el gobierno chileno, los mencionados partidos tampoco dieron su voto a la ratificación. Esto llevaría a pensar que en último término pesó más la defensa de los intereses sectoriales, es decir, la competencia de los productos agropecuarios argentinos en el caso de los conservadores y posiblemente la influencia de los círculos económicos norteamericanos, con el fin de preservar su espacio económico, sobre los liberales. Existieron también otras razones circunstanciales como el caso de la ley de sindicalización campesina, relacionada también con el fortalecimiento del comunismo; la no concesión de apoyo al gobierno para obligarlo a cambiar su política económica, la búsqueda de espacio político en el gabinete, etc. Por último, habría existido un factor externo en el rechazo del tratado, es decir, la incidencia de la posición asumida frente al mismo por el gobierno norteamericano, que será analizado más adelante.

3. Desacuerdo regional frente al tratado

Dos regiones geográficas y económicas chilenas asumieron distintas posiciones frente a la firma del tratado. El norte del país se declaró favorable al mismo porque permitiría la competencia económica de los productos argentinos con los provenientes de la zona agrícola chilena. Fue señalada como una gran ventaja para el norte chileno la posibilidad de surtirse en la Argentina de productos de granja, más baratos y de mejor calidad que los originarios del país(48). Como medida compensatoria la prensa local proponía trasladar la acción productora del país a los rubros en que las industrias chilenas tuvieran la opción de participar en el abastecimiento del interior argentino (por ejemplo los casos de fruta fresca o pescado); incluso podía crearse una industria pesquera acorde con la futura demanda argentina(49). Al norte chileno le preocupaba la

posibilidad otorgada por el tratado de dictar excepciones al régimen de unión aduanera porque éstas quedarían en manos de los gobiernos y, por consiguiente, estarían influenciadas por los grupos de interés más poderosos (curiosamente era ésta la misma preocupación de los grupos productores más fuertes). La zona norte del país se hallaba enfrentada con los intereses de las zonas central y sur que, según la prensa norteña, hasta ese momento, habían sacado provecho de la situación, abasteciendo al norte en la forma más favorable a sus conveniencias; eran esos grupos los que encontrarían en el tratado una amenaza y que harían todos los esfuerzos posibles para impedir que el norte recogiera los beneficios de "la cordillera libre". Consideraban evidente que muchos productos alimenticios, que el sur proporcionaba a precios gravosos, podían ser obtenidos de la Argentina en condiciones más favorables. Creían posible establecer un sistema de abastecimiento recíproco internacional e interregional (norte chileno-norte argentino) sobre la base de compensar los productos argentinos con productos de mar chilenos. El norte veía en el tratado la posibilidad de reemplazar su sistema "arcaico" de abastecimiento que respondía "al dilema poco cristiano de pagas lo que exigimos o te mueres de hambre"(50).

La posición exactamente inversa fue sostenida por la Sociedad Nacional de Agricultura, en representación de los intereses de la zona agrícola central y sur de Chile. La institución expresó públicamente que su política era postular que los acuerdos permitieran la subsistencia de ciertos rubros esenciales de la producción chilena. Consideraba que los gobiernos chilenos habían sido responsables de que no prosperaran los cultivos de trigo y maíz y la cría de ganado por permitir importaciones extemporáneas y superiores a las necesidades indispensables del consumo chileno. También sostenía que el libre tránsito de productos argentinos por los puertos chilenos entrañaba una fuerte competencia a la exportación agrícola nacional. La preocupación primordial de la Sociedad tenía que ver con las cláusulas respecto de la unión aduanera y del comercio argentino por territorio chileno. Las disposiciones de los artículos 1º y 2º no garantizaban -a juicio de aquélla- el normal desenvolvimiento de la agricultura, desde el momento que la determinación de las necesidades de importación quedaban al arbitrio de los organismos oficiales, que fijarían las cuotas al margen "de la normal protección que se debe a actividades fundamentales para el abastecimiento del país y su independencia económica"(51). En el fondo el problema de la institución era que no se la consultaba en la tramitación de ese tipo de acuerdos; su aspiración consistía en que la fijación de las cuotas fuera hecha por comisiones con participación de representantes directos de instituciones agrícolas.

La Sociedad afirmaba además que la entrega de los saldos exportables, en la forma establecida por el tratado, dañaba la libertad de comercio de exportación, por lo que pretendía obtener la salvedad de que no se modificaría el sistema de exportaciones y que tampoco sería reemplazado por un monopolio del estado, semejante al que regía en la Argentina. La sociedad intentaba evitar a toda costa la competencia de los productos agrícolas argentinos y postulaba la franquicia únicamente para artículos que no significaran competencia para los originarios de Chile(52).

Las agudas diferencias regionales tenían que ver pues con la relación productor-consumidor. Para los consumidores del norte la

competencia de los productos argentinos con los chilenos, que tradicionalmente abastecían la zona, sería positiva para la región al producir un abaratamiento en el costo de vida, mientras que para los productores del centro y sur del país, representados en la Sociedad Nacional de Agricultura, la competencia de los productos argentinos amenazaba el redituable monopolio que ejercían.

4. Las intenciones de Perón

Desentrañar las intenciones de Perón hacia Chile al ofrecer la firma del tratado comercial no parece tarea fácil. Algunos documentos argentinos consignaron ventajas recíprocas para los países firmantes. Así un memorándum del ministerio de Relaciones Exteriores señalaba los beneficios que el acuerdo aportaba a la Argentina:

El convenio últimamente suscripto nos asegura la provisión de materias primas, en especial cobre, hierro, acero, salitre, carbón, maderas y energía eléctrica, productos que son esenciales para el mejor desenvolvimiento industrial de nuestro país, y que Chile suministrará teniendo en cuenta nuestras necesidades y sus saldos exportables. Recíprocamente la Argentina atenderá el consumo y las necesidades chilenas en la medida que lo permitan sus saldos exportables(53).

Pero dicho texto también mencionaba el interés de Chile en la firma del tratado, el cual residía en la necesidad de reestructurar su economía, tanto en el terreno agrícola como en el industrial, y de proteger a las actividades que crearán renta dentro del país; en ese sentido la Argentina venía a proveer un mercado donde colocar su producción. El citado memorándum expresaba al respecto:

En tal sentido, el referido tratado es el instrumento adecuado. Coopera en esa política de reestructuración económica y asegura, en cierta medida, el mercado argentino a su producción siderúrgica, con lo que Chile contará con nuevos medios de pago que le permitirán adquirir en nuestro país aquellos alimentos que, paulatinamente, habría dejado de producir por antieconómicos(54).

Es decir que en los documentos confidenciales de la cancillería argentina no aparecía destacado el hecho de que la Argentina estuviera obteniendo, a través del convenio, ventajas económicas superlativas en Chile. Más aún, el acuerdo era visto como la vía apropiada por la cual Chile combatía la unilateralidad de su producción y reemplazaba sus perdidos mercados para el cobre y el salitre por otros sudamericanos(55).

Por otro lado, el embajador argentino Julio López Muñiz, que sucedió a Güiraldes en Chile, también aseveró que el tratado no aportaba demasiados beneficios a la Argentina. Así expresaba en uno de sus informes:

En el tratado Miranda-Larraín, existen, no puede negarse disposiciones convenientes para Chile. Para nosotros, y desde el punto de vista exclusivamente comercial, el intercambio

con Chile ocupa un lugar secundario y tiene poca importancia apreciado en números. El convenio se inspira pues en el propósito de ayudar a Chile para librarlo de otras tutelas, pero sus gobernantes no tienen libertad de acción en materia económica y, aun cuando mi impresión es que en el fondo desean llegar a concertar este pacto con un país cuyo apoyo necesitan, tratan por lo visto de hacerlo dictando ciertas condiciones que, en forma de enmiendas, les permitan presentarse ante la opinión pública chilena como los verdaderos gestores de la negociación y como celosos defensores de una soberanía económica que no se entrega fácilmente al vecino poderoso, cuyo rápido y extraordinario desarrollo observan todos en este país con poco disimulado recelo y desconcierto(56).

Las palabras del embajador revelaban una supuesta convicción de que lo que impulsaba a la Argentina era la intención de ejercer una suerte de rol liberador hacia su vecino -que obviamente tenía como destinatario a los Estados Unidos, dado sus fuertes e influyentes intereses económicos en Chile. Pero, por otra parte, el hecho de ver a los chilenos como "defensores de una soberanía económica que no se entrega fácilmente al vecino poderoso" delataba la consecuencia que el tratado provocaría: la expansión del espacio económico de la Argentina y, por ende, el acrecentamiento del poder de este país en la región.

Asimismo, llama la atención que en la nota que Perón enviara al Congreso argentino, solicitando la ratificación del tratado, el énfasis estuviera puesto en el carácter compensatorio del mismo y no en los beneficios que obtendría la Argentina. Decía uno de sus párrafos:

Señalo a la consideración de Vuestra Honorabilidad el carácter compensatorio del Convenio, realizado sobre una base de equidad y de mutuas concesiones, y con el cual se llevan a la práctica propósitos americanistas acariciados hace muchos años(57).

La nota señalaba también el hecho de que el tratado tendía a la promoción de niveles de vida más elevados, trabajo permanente para todos y condiciones de progreso y desarrollo económico y social. Describía la nueva relación de los dos países como paradigmática en el continente:

Con sentido práctico y decidida buena voluntad, Argentina y Chile han hallado el procedimiento más oportuno para que sus economías se complementen desde el doble punto de vista de la satisfacción de sus necesidades para el consumo directo e industrial de materias primas, y con el que se abre una nueva etapa en sus relaciones, que señala rumbos en América(58).

Los citados documentos demostrarían que Perón no albergaba ambiciones de expandir su poder económico y que el tratado encerraba un sentido americanista. Pero la extensión de la órbita de la influencia económica argentina a Chile era intrínseca al tratado y resultaba asociada, en la percepción de los chilenos, a la fama de país potencialmente agresivo, que la Argentina había adquirido en época de la guerra(59). Así hubo voces en Chile que sostuvieron que "la actuación chilena frente al gobierno argentino

ha consistido en prestarse a ojos cerrados al plan expansionista argentino sobre nuestro país". Los argumentos en favor de esta tesis sostenían que los beneficios del tratado eran exclusivamente para la Argentina: la renuncia al proteccionismo favorecía a este país porque sus costos eran más bajos que los chilenos; la importación por Chile de los productos sometidos a estanco por el gobierno argentino resultaba en una dilapidación de divisas; la unión aduanera conducía a la "absorción del pez chico por el pez gordo", adosando el mercado chileno al mercado vecino y todas sus vicisitudes; los préstamos pedidos por el gobierno chileno frente a la escasez de divisas eran "una doble servidumbre: servidumbre como crédito y servidumbre como elemento vivo de penetración argentina en lo más profundo de la economía chilena"; el gobierno chileno, al invitar a un gobierno extranjero a realizar como capitalista empresario y comprador una política propia de fomento en Chile incurría en una "abdicación de tal naturaleza que constituye a su propia autoridad en elemento de vasallaje nacional"(60).

También el chileno Alejandro Magnet sostuvo que muchos de sus compatriotas percibieron el tratado como de consecuencias económicas expansionistas para la Argentina, interpretando algunos que se estaba cambiando una dependencia por otra. El convenio tenía "un alcance muchísimo mayor que el meramente comercial que aparecía a primera vista". El hecho de que se estableciera una sociedad argentino-chilena para financiar la creación o el desarrollo de empresas productoras de las materias primas, cuya adquisición interesaba a la Argentina, permitía al estado argentino transformarse en socio comanditario de las industrias básicas chilenas por un lapso de 50 años(61). En definitiva, no fueron pocas las voces que creyeron que el acuerdo lesionaba la independencia económica del país.

Al mismo tiempo, la Argentina proyectaba la imagen dialéctica opuesta con la proclamación de la "independencia económica" realizada por el presidente Perón el 9 de julio de 1947 en la ciudad de Tucumán. Una cierta ironía del destino había permitido que la ceremonia fuera presenciada por el presidente González Videla, que en esos días cumplía una visita a la Argentina. La circunstancia fue bastante desafortunada dado que por un error de ceremonial se había omitido avisar al presidente chileno que, luego de la ceremonia, el gobernador de Tucumán había programado una gran concentración de masas; también se había omitido comunicarle que Perón pronunciaría un importante discurso y que el presidente de Chile no estaba entre los oradores del acto. Advertido Perón de la *gaffe* por el canciller Bramuglia, el presidente argentino mencionó la presencia de su colega chileno. Ovacionado, el presidente González Videla improvisó una arenga en favor de los valores de la democracia. A causa del hecho, el embajador Quintana Burgos presentó su renuncia(62). El episodio, si bien anecdótico, podría explicar quizá la futura enemistad entre ambos gobernantes; en todo caso demostraba la poca consideración que Perón guardaba hacia su colega.

González Videla dejó en sus memorias un comentario revelador acerca del pensamiento del presidente Perón respecto de las relaciones entre sus respectivos países. Dice allí que "no obstante su pensamiento ultranacionalista, heredado de su enseñanza militar" Perón era partidario de la solidaridad continental y de la complementación económica de los pueblos de

Latinoamérica, especialmente entre Chile y la Argentina. Así, refiere que, en determinado momento, Perón había llegado tan lejos en su entusiasmo que lamentaba lo que él consideraba craso error de San Martín y O'Higgins "por haber formado dos países durante la Independencia en vez de uno solo", cuando la naturaleza los había económicamente complementado. A raíz del mencionado comentario, el presidente González Videla advertía en su libro que chilenos y argentinos jamás habrían aceptado "ser provincias o estados dependientes del uno o del otro". Las nacionalidades enraizadas y la ubicación geográfica y geológica determinaban, en su opinión, estados independientes aunque de economías complementarias(63). La idea peronista de la unidad política entre la Argentina y Chile volvería a aparecer a comienzos de 1953 y provocaría reacciones en este país.

Los recelos de los chilenos parecieron tener comprobación en unas palabras pronunciadas por el presidente argentino en el teatro Colón de Buenos Aires, en ocasión de explicar la actuación de la delegación argentina a la Conferencia internacional de Ginebra. Dichas palabras, que podrían ser reveladoras de la verdadera motivación del presidente argentino respecto del acuerdo, provocaron un serio inconveniente para el trámite del mismo en el Congreso chileno. Perón dijo en esa oportunidad "los empréstitos atan y subyugan" y sus palabras fueron reproducidas por la prensa chilena con títulos tales como "Perón da una puñalada al tratado" de la revista Estanquero(64). Otros medios chilenos, sin embargo, rechazaron el hecho de que Perón hubiera querido referirse a Chile(65).

Las autoridades chilenas restaron importancia al asunto y el propio presidente respondió de la siguiente forma cuando la prensa demandó su opinión:

No tengo por qué juzgar opiniones atribuidas a jefes de estado o personalidades extranjeras. Nunca Chile se ha sentido subyugado o atado por ser deudor de países a los cuales la naturaleza dotó de mayor riqueza. Chile tiene una organización institucional política y administrativa que lo capacita ampliamente para colocarse frente a cualquier otro país en igualdad de condiciones, así como suficiente orgullo y conciencia de su dignidad para no sentirse desmedrado ante ninguna diferencia de potencial económico. No acepto, por lo tanto, ningún criterio que signifique reconocer inferioridad(66).

González Videla defendía, además, el tratado como una contribución al sistema interamericano y expresaba su deseo de que se hiciera extensivo a todos los países del continente. Negaba rotundamente que asistiera a Chile el propósito de formar bloques políticos o económicos y consideraba que el convenio respondía a las necesidades derivadas de la calidad de Chile de país miembro de uno de los grupos regionales reconocido por la carta de las Naciones Unidas, países, en los cuales, por su incipiente desarrollo, se justificaba la existencia de un régimen especial.

6. Rol de los Estados Unidos

Apenas conocida la posibilidad de la firma del tratado, la prensa norteamericana tuvo duras expresiones acerca del mismo.

Unas declaraciones del corresponsal del *New York Times* en Buenos Aires causaron conmoción. El periodista expresó que el tratado comercial chileno-argentino, que consideraba casi finiquitado, se podía "comparar al Anschluss de Austria con Alemania". Luego agregaba:

parece que Chile se ha doblegado bajo la presión económica y la amenaza argentina de retener los alimentos. Chile, al igual que Bolivia y Uruguay, depende en gran parte de la Argentina para sus alimentos, y el país transandino solo posee unos 60 millones de dólares en divisas para hacer frente a sus necesidades(67).

Al periodista le preocupaba la situación que podía plantearse a las compañías mineras norteamericanas en Chile si se confirmaba que ambos países se comprometían a satisfacer sus necesidades recíprocas con preferencia a las de otras naciones(68). Su posición representaba la línea dura de la opinión pública norteamericana frente al peronismo, en consonancia con la política del secretario asistente Braden, pretendiendo, con ella, prevenir a los chilenos para que no firmaran ese tipo de acuerdo. Fue una manifestación temprana del hecho de que el tratado no sería bien visto por los Estados Unidos.

El diplomático chileno Emilio Edwards Bello, embajador en Cuba y que luego lo sería en Brasil, también se refirió al asunto del Anschluss en un reportaje que concedió al diario La Nación de Santiago. Dijo al respecto:

Lo del Anschluss austronazi significó absorción por el más fuerte. ¡El paralelo, en nuestro caso, es absurdo y un poco ridículo!... Al suscribirse el Convenio -nuestro Convenio- los presidentes de Argentina y Chile, han dejado constancia de su anhelo de que él signifique la iniciación de una nueva etapa de colaboración para TODOS los países del continente... ¡Es suficiente!(69)

El embajador negaba igualmente por fantásticas e inverosímiles las suposiciones que habían querido ver en el acuerdo chileno-argentino la formación de un "bloque austral" con aviesos fines políticos(70). El diario norteamericano *Evening Star* había afirmado que la concertación de ese tratado probaba que la Argentina estaba recurriendo a tácticas imperialistas respecto de los países limítrofes y trataba de formar un "bloc (sic) de naciones del sur" adverso a los Estados Unidos; la embajada argentina en Washington envió una nota al diario rectificando tales conceptos(71).

Los diplomáticos argentinos en Chile percibieron a los intereses norteamericanos en ese país como contrarios a la concreción del tratado. Los informes de la embajada argentina reiteradamente mencionaron la influencia norteamericana como la fuerza alentadora e inspiradora de la oposición al acuerdo. Uno de los agregados a la embajada afirmaba que "la demora en la aprobación del convenio y su eventual rechazo indudablemente favorecen a los Estados Unidos que no quiere perder el dominio económico que tiene aquí"(72). Se interpretaba como una ofensiva de los Estados Unidos el hecho de que el Eximbank otorgara, en esos días, un crédito a la Corporación de Fomento de la Producción por 5.300.000 dólares, al 3% de interés y a 10 años de plazo,

cuando antes lo hacía al 4% y a 5 años(73). La reflexión del funcionario argentino llevaba implícita la consideración que el tratado constituía una cierta amenaza a la influencia económica norteamericana en Chile.

Se recogieron también testimonios de políticos chilenos que acusaban de interferir en la cuestión a personas con conexiones en el exterior. Tal era el caso de Jaime Larraín, firmante del tratado y uno de sus más firmes sostenedores chilenos quien, disgustado con la suspensión de la sesión del Senado en que debía discutirse el acuerdo, afirmó al embajador argentino que estaba decidido a revelar la conexión de algunas personas, con intereses ajenos a Chile, que inspiraban la actividad opositora al tratado. El senador consideraba que el último discurso de su par Fernando Aldunate estaba dirigido a satisfacer a ciertos grupos financieros norteamericanos. Larraín preparó una respuesta a dicho discurso a fin de destruir sus posibles efectos sobre la opinión pública. La misma fue dada en la sesión del 11 de marzo de 1947 y el Senado ordenó publicarla *in extenso*. El senador afirmaba tener, además, la convicción de que el presidente de su país estaba facilitando la demora del trámite parlamentario debido a la gestión de créditos en los Estados Unidos los cuales, en caso de aprobarse, no harían necesaria la ratificación del tratado. El embajador argentino Güiraldes consideró que la afirmación era "grave" y merecedora de credibilidad en virtud de quien provenía(74). Sin embargo era evidente que Chile aprovecharía la coyuntura de tener un ofrecimiento de ayuda financiera de la Argentina para tratar de obtener sus créditos pendientes en los Estados Unidos, máxime sabiendo que los funcionarios de este país preferían que el acuerdo no se concretara.

Los principios económicos contenidos en el tratado eran vistos, en marzo de 1947, en pugna con los propiciados por los Estados Unidos para la posguerra. El tratado estaba elaborado sobre la base del intervencionismo de estado: eran los gobiernos los que compraban, vendían, otorgaban préstamos o hacían inversiones, y contenía además medidas restrictivas hacia terceros países. El compromiso de Chile con esta política, según algunas opiniones, conspiraba contra su posición en la conferencia económica a celebrarse en Ginebra pues lo colocaría a contramano del camino elegido por los países centrales, que era la implantación del libre comercio a nivel mundial(75).

El agregado económico a la embajada argentina también señaló el hecho de que existían "marcadas influencias externas interesadas en hacer malograr los propósitos de acercamiento económico entre la Argentina y Chile"(76). Una de ellas era la norteamericana, pues consideraba que la relevancia de los capitales de ese origen establecidos en Chile les otorgaba gravitación política. Señalaba que la reticencia del Eximbank a otorgar los créditos que estaban pendientes de resolución constituía una forma de presión en contra del acuerdo con la Argentina. La otra influencia externa que mencionaba el diplomático argentino era la de los países limítrofes de Chile que no miraban con simpatía el rumbo de la política económica pues "temían verse desplazados del mercado chileno por las nuevas formas de participación financiera que se habían estipulado en el convenio"(77). Como se ve los analistas de la embajada argentina incurrieron en la contradictoria interpretación de hallar como actitudes antiargentinas del gobierno norteamericano tanto la

concesión de los créditos a Chile como su retención.

En el mes de mayo, el mismo agregado económico volvió a insistir en la importancia de los factores externos en el nuevo aplazamiento del tratamiento legislativo del convenio. Decía en el punto 6 de su informe:

No existiendo motivos fundamentales contra el acuerdo, a pesar de lo cual se mantienen dudosas perspectivas, se ha llegado a atribuir su estancamiento actual al juego de influencias externas.

Ya he informado a S.S. sobre este aspecto y destacado la gravitación de los intereses estadounidenses en Chile. Principalmente sus inversiones en salitre, cobre, hierro, teléfonos, electricidad, actividades que ellos monopolizan, les conceden un papel preponderante dentro de la economía local.

La actitud seguida por los Estados Unidos hacia Chile en los últimos tiempos ha sido sino ostensible por lo menos pasivamente contraria a la dirección política que mantenía su gobierno.

Se ha traducido principalmente en la demora en concederle los créditos todavía pendientes y en otras restricciones de orden económico. Aunque haya desmentido el ministro de Hacienda que ese fuera el motivo de la misión de don Guillermo del Pedregal, las recientes declaraciones de éste en Washington permiten entrever el fracaso de su gestión.

No es difícil determinar que el objeto directo de esta política, dada la posición internacional de los Estados Unidos, tiende a lograr un cambio en la dirección procomunista que llevaba el Presidente, propósito que está en vías de cumplirse.

En cuanto a la posibilidad de que esa misma influencia se ejerciera sobre los acuerdos argentino-chilenos, si bien pueden existir intereses a los que no conviéneles, solo podría justificarla un simple afán obstruccionista y ello no sería suficiente para hacerlos malograr(78).

Evidentemente, transcurrido un mes de su anterior informe, el diplomático argentino ya no creía que la retención de los créditos norteamericanos a Chile fuera una forma de presión en contra del entendimiento argentino-chileno sino que aquélla respondía a una presión en contra de la alianza del gobierno de González Videla con el comunismo.

El hecho de que el gobierno de los Estados Unidos no veía con buenos ojos el acuerdo de integración chileno-argentino se deduce de los esfuerzos del embajador norteamericano por justificar ante sus superiores la insistencia del presidente González Videla en conseguir la ratificación legislativa del tratado. Decía el embajador que González Videla "no podía arriesgar un fracaso que podría tener no solo consecuencias internas, dado que el gobierno debía desarrollar su plan de progreso, sino también repercusión internacional, porque la Argentina había accedido a las demandas de Chile en tres ocasiones"(79).

Como ya se dijo, el duelo político sostenido por socialistas y comunistas llevó a un representante de los ~~últimos~~ ^{primeros} a recurrir al Departamento de Estado para que éste trabajara en contra del acuerdo comercial. Fue el caso del dirigente sindical Bernardo

Ibáñez, presidente de la CTCh socialista, quien afirmó ante dicho departamento que, como resultado del pacto chileno-argentino, veía a su país convertido en satélite de la Argentina, y que la ayuda financiera que Chile podía obtener sería para asistir al partido Comunista y no a Chile. Apelaba a la intervención norteamericana para evitar que el gobierno chileno, del cual formaba parte el comunismo, consiguiera la ratificación del tratado. El secretario Braden contestó a Ibáñez que su gobierno apoyaba la justicia social y la democracia efectiva y en consecuencia miraría favorablemente a cualquier grupo en América que trabajara para esos fines; dijo, además, que combatiría el totalitarismo tanto de la derecha como de la izquierda(80). La maniobra era paralela a la ya mencionada de Oscar Schnake ante el gobierno argentino. El intento de Ibáñez no tuvo éxito porque los norteamericanos prefirieron combatir la alianza del gobierno chileno con los comunistas retaceando su ayuda económica y no conspirando oficialmente en contra del tratado con la Argentina. El episodio demostraba a la vez la siempre vigente y perversa costumbre de los países latinoamericanos de hacer intervenir al gobierno estadounidense en sus asuntos internos y en los problemas con sus vecinos.

La cuestión del convenio con la Argentina fue tratada por el enviado chileno Guillermo del Pedregal y el secretario Braden durante las conversaciones que sostuvieron en Washington. Del Pedregal aseguró a Braden que el presidente González Videla no había cambiado en absoluto su aversión a Perón y al gobierno argentino, tal como el presidente lo había expresado personalmente al subsecretario. Pero inmediatamente justificaba a su gobierno por el paso dado al aducir que el presidente chileno, en su condición de jefe de estado, debía aprovechar cualquier oportunidad que se presentara a su país y que, surgida la posibilidad de un acuerdo con la Argentina, González Videla había decidido el envío de una misión a Buenos Aires. Esta se había encontrado con "un borrador terminado" del tratado que incluía una valiosa asistencia para Chile de la que no podía derivar daño alguno. Como para tranquilizar a su interlocutor, el ministro expresó sus dudas de que el acuerdo fuera a materializarse porque era posible que se produjera un impasse entre los dos países. También agregó que no había duda de que la Argentina estaba tratando de formar el bloque austral pero que "Chile estaría alerta a ese peligro y no se permitiría caer en las garras de Perón"(81). En síntesis, el enviado chileno pedía disculpas al gobierno norteamericano por haber llegado su país a un acuerdo con Perón -justamente ante el funcionario que había capitaneado el enfrentamiento con aquél- pero dejaba abierta la posibilidad de que el mismo no se llevara a la práctica. La idea era presentar el asunto de tal manera que los Estados Unidos accedieran a reemplazar la asistencia financiera ofrecida por Perón. Pero Del Pedregal no obtuvo los resultados esperados. En el informe sobre el comunismo de la cancillería argentina, ya citado, un párrafo daba cuenta de lo ocurrido a su misión:

La frialdad cada día más patente que demostraban a su gobierno los Estados Unidos de Norte América, ante quien habían fracasado ruidosamente dos misiones, la de Del Pedregal, a la cual se le contestó que «no solamente no se le prestaba nada sino que debía pagar lo que debía», y la militar que presidió el general Barrios Tirado, a quien se le expuso crudamente el pensamiento norteamericano con respecto

a la situación política chilena y el apoyo oficial de su gobierno al partido comunista en un momento de tanto peligro internacional.

Hechos que se sucedieron demostraron al Presidente de la República que Estados Unidos adoptaría a corto plazo una posición más firme y enérgica en relación a su gobierno comunizante(82).

La misión de Del Pedregal fracasó porque las agencias financieras del gobierno norteamericano le negaron los nuevos créditos, debido supuestamente a la precaria situación financiera de Chile. Sin embargo, el hecho de la negativa fue claramente una forma de presionar al gobierno chileno para que se deshiciera de los comunistas que ocupaban puestos públicos -proceso que ya había comenzado a realizarse. Dicha negativa, en realidad, favorecía los intereses argentinos pues Chile, en ese caso, no tenía más opción que aceptar el acuerdo con su vecino. Estados Unidos demostró que obviamente su objetivo primordial era la lucha contra el comunismo y no la oposición al gobierno argentino. Para trabajar en contra del acuerdo era suficiente que los norteamericanos sembraran dudas acerca de la conveniencia para Chile de establecer ese tipo de relación económica con un régimen de las características del peronista.

A fines de agosto, el socialista Ibáñez volvió a insistir ante el gobierno argentino por el tema del tratado. Esta vez pidió al encargado de negocios de la embajada argentina que hiciera llegar a su gobierno el deseo de que el tratado fuera demorado en el Congreso argentino en caso de reunir mayoría en el Parlamento chileno. Sus razones eran la subsistencia del peligro comunista en Chile y la necesidad de hacerle ver al presidente González Videla que la Argentina no ratificaría el tratado hasta tanto él no se desligara totalmente de funcionarios de la secta internacional soviética. Fundaba su pedido en el hecho de que en las distintas reparticiones fiscales y semifiscales existían alrededor de dos o tres mil comunistas infiltrados y que, si bien se habían declarado vacantes alcaldías y municipalidades, los empleados y funcionarios de menor jerarquía aún conservaban sus cargos. Ibáñez manifestó al funcionario argentino que "en el fondo creía que el tratado con la Argentina era beneficioso para Chile" pero que otros socialistas no pensaban lo mismo. La gestión de Ibáñez respondía a que el presidente chileno había renovado su interés por lograr la ratificación del convenio con la Argentina debido al fracaso del canciller chileno ante Norman Armour (en ese momento en la Conferencia de Río) para conseguir un nuevo empréstito(83). En el marco de la lucha del partido socialista contra los comunistas, Ibáñez apelaba a los gobiernos de los Estados Unidos y de la Argentina para que trabajaran en contra de la ratificación del tratado. Daba una misma razón a ambos -que el dinero proveniente del tratado no cayera en manos de los comunistas- pero agregaba una más a los norteamericanos: evitar que Chile llegara a convertirse en satélite de la Argentina, en tanto afirmaba a los funcionarios argentinos que creía personalmente que el tratado era beneficioso para Chile. Todo un trabajo circular que indicaba la prioridad que tenía la lucha contra el comunismo para los socialistas en ese momento.

Un informe de la cancillería argentina demostraría la percepción del gobierno argentino de aquella época de que Chile mantenía una situación de absoluta dependencia económica de los

Estados Unidos, que no era conveniente a sus intereses. Los funcionarios argentinos parecían no comprender el motivo por el cual la ayuda financiera ofrecida por su país no era bien recibida por los chilenos. Transcribimos completo el apartado titulado "Influencia de Estados Unidos en Chile y la política de este país con respecto a la Argentina" del ya mencionado informe sobre la situación política en Chile, que es revelador al respecto:

Chile niega en cuanta oportunidad se le presenta la injerencia extraña dentro de sus fronteras, no obstante, es necesario vincular todo el estado de agitación en que se encuentra Chile a la acción de los Estados Unidos de América, país que condicionando la entrega de un empréstito de varios millones de dólares a diversas exigencias de orden interno, en lo político y en lo administrativo, llevarían al gobierno de Chile por sendas convenientes a los designios de Washington. El capital norteamericano ejerce una gran influencia en la política chilena, pues muchos hombres del gobierno se encuentran a las órdenes de Estados Unidos por vinculaciones anteriores a su ascensión al poder. La influencia del capital es tan grande que prácticamente la minería se halla en poder de Norteamérica, situación ésta económica estrechamente vinculada a la política.

A pesar de que gran parte de la oficialidad está en contra del «entreguismo» a Estados Unidos y de que miembros de sus fuerzas armadas sienten la necesidad de apoyarse en la Argentina para sacar a Chile de su situación actual, el mecanismo yanqui político y económico impedirá toda acción tendiente a un estrecho acercamiento hacia nuestro país. Su ejemplo más reciente es la no aprobación por parte del gobierno chileno del tratado comercial Miranda-Larraín(84).

Sin embargo, si bien era factible que los hombres de negocios radicados en Chile trataran de influir en los grupos políticos para que el tratado no fuera ratificado, no parece haber existido una acción oficial norteamericana en contra del mismo. Un informe de la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, de comienzos de 1948, afirmaba que el convenio tenía "rasgos inquietantes" pero que nunca podría ser llevado a la práctica más allá de la extensión a Chile de créditos para alimentos y ciertas ventajas aduaneras para la Argentina. Ya en esa época los norteamericanos vislumbraban que la Argentina no estaría en condiciones de extender grandes créditos a Chile para proyectos de desarrollo. Aquéllos advertían que

Los funcionarios argentinos no continúan jactándose del orgullo argentino de aparecer como una nación acreedora capaz de prestar grandes sumas a otros países; en cambio, ahora admiten que los «préstamos» argentinos se aplican a la venta de alimentos a crédito(85).

La conclusión de que el tratado no era viable para una de las partes tiene que haber sido razón suficiente para que los norteamericanos oficialmente se mantuvieran expectantes y sin intervenir en el asunto.

Por otro lado, el hecho de tener los funcionarios argentinos la certeza de que parte de la oficialidad chilena apoyaba un acercamiento a la Argentina como medio de liberación para su país creemos que puede haber sido el motivo para que comenzara a

desarrollarse una acción diplomática con el objetivo de incitarlos a algún tipo de decisión. Este proceder y sus consecuencias serán tratados en el capítulo siguiente.

Conclusión

El tratado Miranda-Larraín fue la primera maniobra de Perón hacia Chile tratando de atraer a ese país a una alianza regional de tipo económico que luego iría incorporando a otros países. La idea del presidente argentino era llevar a la práctica el viejo sueño nacionalista de conformar, a largo plazo, un bloque regional autárquico, es decir una especie de confederación que pudiera autoabastecerse de productos primarios y secundarios y cuyos países pudieran disminuir su dependencia de los Estados Unidos o soportar mejor sus presiones, dado que este país estaba ocupando en América latina los espacios económicos dejados por los países europeos. La necesidad de contener la expansión económica de los Estados Unidos era señalada desde hacía largo tiempo por el pensamiento nacionalista argentino.

El rechazo del convenio en cierto modo benefició a Chile porque éste construyó posteriormente algunas de las empresas con créditos de agencias financieras norteamericanas sin tener que compartir con los acreedores la dirección de las mismas. Lo que Chile no logró, con esa solución, fue asegurarse la provisión de alimentos y un mercado para sus productos, que era la ventaja del tratado con la Argentina. Por otro lado, debe señalarse que la Argentina demostró una grave deficiencia en los estudios de viabilidad necesarios para la inversión que ofrecía a Chile pues, apenas transcurridos dos años de firmado el tratado, habría tenido serias dificultades para hacer frente a sus compromisos de financiación como consecuencia del agotamiento de sus disponibilidades en dólares.

El acercamiento de Chile a la Argentina en busca de ayuda económico-financiera e inversiones se produjo por la resistencia de los Estados Unidos a otorgarla, a causa de la alianza del presidente González Videla con los comunistas. Dicho acercamiento obviamente no sería bien visto por los Estados Unidos dado que éstos no querían que la mencionada ayuda llegara por otra vía y porque la política antiperonista del Departamento de Estado todavía estaba vigente, en virtud de que los asuntos latinoamericanos eran manejados por el secretario asistente Braden. La situación llegó a ser dramática para el presidente chileno al no lograr la necesaria asistencia de ninguno de los dos países. El gobierno de los Estados Unidos y los partidos políticos chilenos que trabajaron en contra de la ratificación coincidieron en su móvil: el anticomunismo. Ahora bien, una vez eliminado el comunismo del gobierno y de todos los puestos públicos era muy probable que los Estados Unidos comenzaran a otorgar lentamente la ayuda y aquí jugaron entonces un papel adverso los "rasgos inquietantes" que algunos chilenos encontraban en el tratado con la Argentina. El presidente Perón podía haber tenido un espíritu americanista al ofrecer el tratado pero lo cierto era que muchas de sus cláusulas fueron consideradas perjudiciales para Chile y que permitían peligrosamente la expansión de la influencia económica de la Argentina en aquel país.

En resumen, se puede afirmar que los principales factores que conspiraron en contra del plan integrador de Perón fueron: a) el temor al fortalecimiento del comunismo a través del manejo de los recursos provenientes del tratado; b) el deseo de no colocar a Chile en la órbita de influencia económica de la Argentina y de no contribuir a la industrialización y expansión de ésta, aumentando así la asimetría económica entre los dos países; c) el desinterés de los grupos económicos en establecer la competencia de los productos argentinos; d) la intención de no introducir un elemento disfuncional en la relación con el gobierno norteamericano y sus poderosos intereses; y e) la percepción del régimen argentino como poco confiable, debido a sus características autoritarias y supuestamente expansivas.

Por otra parte, transcurrido un cierto tiempo, la economía mundial se fue recomponiendo y, si bien Chile seguía inmerso en su crónica crisis económica, la tendencia dentro del gobierno fue dejar de lado el convenio y tratar de lograr acuerdos con la Argentina sobre aspectos parciales, que por ser de menor envergadura generarían a la vez menor oposición. Sin embargo, la idea de la integración económica con Chile perduró en los funcionarios del gobierno argentino, tal vez en espera de que llegara al poder en el vecino país un gobierno más afín ideológicamente con las autoridades argentinas. El gobierno de Perón se abocó entonces a tratar de lograr consenso en Chile para su estilo de gobierno y su doctrina justicialista. En esos objetivos trabajó al filo de la navaja y siempre en los límites de lo que las relaciones internacionales correctas permitían.

Notas

1. Memorándum "Relaciones económicas con Chile", MREC, 1946, Chile, caja 10, exp. 52(5).
2. *Ibid.*
3. *Ibid.*
4. *Ibid.*
5. Hubert Herring, *Evolución histórica de América Latina*, T. II, Bs. As., Eudeba, 1972, p. 798. El partido Radical, de centro-izquierda, se mantenía en el poder desde 1938, fecha en que el radical Pedro Aguirre Cerdá había llegado a la presidencia como candidato del Frente Popular. A su muerte, el gobierno fue asumido en 1942 por otro radical, Juan Antonio Ríos, quien también murió en ejercicio de sus funciones. A este sucedía Gabriel González Videla. *Ibid.* pp. 793-803.
6. La delegación estaba presidida por el senador agrario laborista Jaime Larraín y la integraban además el diputado liberal Eduardo Alessandri, el diputado comunista Cipriano Pontigo, Luis Dávila, delegado del Banco Central; Daniel Risopatrón, representante de los ganaderos; Germán Oelckers, por la industria carbonera; Guillermo Bianchi, jefe del departamento comercial de la Cancillería y Alfredo Bowen, secretario. *La Prensa*, 27 de noviembre de 1946.
7. *La Prensa*, 26 de noviembre de 1946.
8. Citado por *La Prensa*, 27 de noviembre de 1946.
9. *La Prensa*, 28 de noviembre de 1946.
10. La oposición de González Videla a Perón aparece en documentos norteamericanos: 825.00/1-2346, carta de Bowers a Braden; 825.00/9-1146, Bowers al secretario de Estado, informe político 130; 825.00/4-1847, memorándum de Braden a Briggs. El segundo documento mencionado afirma que González Videla, durante su gestión como embajador en Brasil, había sostenido que una firme relación entre Brasil y Chile era la mejor forma de contrabalancear el poder de la Argentina.
11. 825.00/8-546, carta de Bowers a Braden, 5 de agosto de 1946.
12. *EL Mercurio*, 25 de noviembre de 1946.
13. Carta del presidente de la Cámara argentino-chilena de Comercio Edo Rodríguez al ministro Juliet en *El Diario Ilustrado*, 20 de noviembre de 1946.
14. *El Diario Ilustrado* argumentaba lo siguiente: "el gobierno argentino pagó este año a los productores 15 nacionales y luego un sobreprecio de 5 nacionales por el quintal de trigo y vende el mismo producto a Chile a razón de 35 nacionales el quintal, puesto a bordo en Buenos Aires. A China, en cambio, le hizo cotizaciones a razón de 30 nacionales. En cuanto al aceite que vende en su mercado interno a 0,85 nacionales y a 2,07 sin refinar a Europa, ¿a cuánto está comprándose por Chile en la actualidad y piensa obtenerlo esta misión económica?" *El Diario Ilustrado*, 24 de noviembre de 1946.
15. *Ibid.*
16. *La Hora*, 5 de diciembre de 1946.
17. Güiraldes al ministro Bramuglia, 23 de diciembre de 1946, MREC, 1946, caja 10, exp. 52(1).
18. *La Nación*, Santiago, 17 de diciembre de 1946.
19. *La Nación*, Santiago, 18 de diciembre de 1946.
20. *La Nación*, Santiago, 19 de diciembre de 1946.
21. *Ibid.*
22. *Extra*, 22 de enero de 1947.
23. 825.00-547, Millard al secretario de Estado, informe político

142.

24. *Ibid.*; 825.00/2-2647, Millard al secretario de Estado, informe político 144.
25. Memorándum "Informe reservado sobre el comunismo en Chile", MREC, 1948, Chile, caja 6, exp. 1, anexo I, p. 19.
26. Güiraldes al ministro Bramuglia, 23 de diciembre de 1946 y 13 de marzo de 1947, MREC, 1946, Chile, caja 10, exp. 52(3) y (4).
27. Güiraldes al ministro Bramuglia, 23 de diciembre de 1946, MREC, 1946, Chile, caja 10, exp. 52(3).
28. Informe del agregado aeronáutico, 22 de febrero de 1947, MREC, 1946, Chile, caja 10, exp. 52(3).
29. 825.00/12-2046, Bowers al secretario de Estado, informe político 138.
30. *El Diario Ilustrado*, 18 de diciembre de 1946.
31. *El Diario Ilustrado*, 21 de diciembre de 1946.
32. Güiraldes al ministro Bramuglia, 23 de diciembre de 1946, MREC, 1946, caja 10, exp.52(1).
33. 825.00/2-2647, informe político 144.
34. Dardalla a Cavagna Martínez, Santiago, 1 de abril de 1947, MREC, 1946, Chile, caja 10, exp.52(3).
35. *Ibid.*
36. Dardalla a Ezcurra Medrano, 6 de mayo de 1947, MREC, 1946, Chile, caja 10, exp. 52(3).
37. Güiraldes al ministro Bramuglia, 6 de marzo de 1947, MREC, 1946, caja 10, exp. 52(5).
38. *La Opinión*, 10 de diciembre de 1946.
39. Güiraldes al ministro Bramuglia, 6 de marzo de 1947, MREC, 1946, Chile, caja 10, exp. 52(5).
40. 825.00/4-1747, informe político 150.
41. Dardalla a Ezcurra, 6 de mayo de 1947, MREC, 1946, Chile, caja 10, exp.52(3); 825.00/4-1747, Bowers al secretario de Estado, informe político 150.
42. Bassi al ministro de Guerra, mayo de 1947, MREC, 1946, Chile, caja 10, exp. 52(3). El asunto del salitre planteaba un serio problema a la economía chilena. La obtención del nitrógeno sintético en los Estados Unidos, Inglaterra, Noruega, Francia y otros países, cuyas usinas poseían una capacidad de producción suficiente para atender el consumo interno y de otras naciones que importaban el producto de Chile, podía afectar seriamente las ventas del salitre chileno cuando no la pérdida total de los mercados europeos y del norteamericano, que en los años anteriores a la guerra absorbían 45% y 35% respectivamente de las exportaciones chilenas de ese producto. Bajo esas condiciones Chile buscó compensar la pérdida de sus tradicionales clientes de esos productos, procurando para los mismos mercados sudamericanos. Mediante convenios comerciales con Brasil y con la Argentina Chile se aseguró la colocación del salitre. Memorándum "Alcance y aplicabilidad del convenio suscrito con Chile el 13 de diciembre de 1946, las notas reversales de fecha 21 de enero y 11 de marzo de 1947 y el acuerdo especial sobre salitre del 12 de julio de 1947", MREC, 1946, Chile, caja 10, exp. 52(5). El acuerdo con la Argentina se firmó el 12 de julio de 1947 y se adicionó al tratado de 1946. Por ese convenio Chile se comprometió a suministrar todo el nitrato de sodio que la Argentina necesitara importar, comprometiéndose además a mantener en territorio argentino un stock mínimo de 15.000 toneladas. Por su parte, la Argentina importaría, en igualdad de condiciones, exclusivamente nitrato de sodio de Chile y se comprometía, por el plazo de duración

- del acuerdo, a no establecer fábricas de elaboración de fertilizantes nitrogenados sintéticos, inclusive amoníaco y ácido nítrico sintéticos, salvo que en cualquier país del continente sudamericano se iniciara la elaboración de esos productos. Memorándum "Relaciones económicas con Chile", MREC, 1946, Chile, caja 10, exp. 52(5).
43. 825.00/7-2447, Bowers al secretario de Estado, informe político 157.
 44. 825.00/8-247, telegrama de Bowers al secretario de Estado.
 45. Pastore al ministro Bramuglia, 7 de agosto de 1947, MREC, 1946, Chile, caja 10, exp. 52(3).
 46. Mathus Hoyos al ministro Anadón, 28 de agosto de 1947, MREC, 1946, Chile, caja 10, exp. 52(3); 825.00/9-247, aerograma de Bowers al secretario de Estado.
 47. Mathus Hoyos al ministro Bramuglia, 14 de noviembre de 1947, MREC, 1946, Chile, caja 10, exp. 52(3); memorándum del departamento Económico-Social, 29 de noviembre de 1947, MREC, 1946, caja 10, exp. 52(5).
 48. *El Mercurio de Antofagasta*, 14 de diciembre de 1946.
 49. *Ibid.*
 50. *El Mercurio de Antofagasta*, 17 de diciembre de 1946.
 51. *El Mercurio*, 8 de enero de 1947.
 52. *Ibid.*
 53. Memorándum "Alcance y aplicabilidad del convenio suscripto con Chile...", MREC, 1946, Chile, caja 10, exp. 52(5).
 54. *Ibid.*
 55. *Ibid.*
 56. López Muñiz al ministro Anadón, septiembre de 1948, MREC, 1946, Chile, caja 10, exp. 52(5).
 57. Nota de Perón al Congreso de la Nación, 11 de marzo de 1947, MREC, 1946, Chile, caja 10, exp. 52(3).
 58. *Ibid.*
 59. Para el tema de la percepción de la Argentina como país potencialmente agresivo véase Carlos Escudé, "Crónicas de la tercera posición", en: *Todo es Historia*, N°257, noviembre de 1988, pp. 14-18.
 60. Artículo de Ricardo Cox Balmaceda en *El Diario Ilustrado*, 13 de marzo de 1947.
 61. Alejandro Magnet, *op. cit.*, pp. 156-159.
 62. Gabriel González Videla, *Memorias*, Santiago de Chile, G. Mistral, 1975, pp. 564-567.
 63. *Ibid.*
 64. Valenti al ministro Bramuglia, 18 de diciembre de 1947, MREC, 1946, Chile, caja 10, exp. 52(3); 825.00/1-848, Bowers al secretario de Estado, también menciona el efecto contraproducente provocado por la publicación de las palabras de Perón frente a los denodados esfuerzos del presidente González Videla por obtener la ratificación legislativa del tratado.
 65. López Muñiz al ministro Bramuglia, 12 de julio de 1948, MREC, 1946, Chile, caja 10, exp. 52(3).
 66. *El Mercurio*, 17 de diciembre de 1947.
 67. *El Imparcial*, 9 de diciembre de 1946.
 68. *Ibid.*
 69. *La Nación*, Santiago, 10 de febrero de 1947.
 70. *Ibid.*
 71. Ivanissevich al ministro Bramuglia, 6 de enero de 1947, MREC, 1946, Chile, caja 10, exp. 52(4).
 72. Informe del agregado aeronáutico al secretario de Aeronáutica, 22 de febrero de 1947, MREC, 1946, Chile, caja 10, exp. 52(3).

73. *Ibid.*
74. Güiraldes al ministro Bramuglia, 27 de febrero de 1947, MREC, 1946, Chile, caja 10, exp. 52(3).
75. *El Diario Ilustrado*, 13 de marzo de 1947; *Democracia*, Río de Janeiro, 15 de diciembre de 1946.
76. Dardalla a Cavagna Martínez, 1 de abril de 1947, MREC, 1946, Chile, caja 10, exp. 52(3).
77. *Ibid.*
78. Dardalla a Ezcurra, 6 de mayo de 1947, MREC, 1946, Chile, caja 10, exp. 52(3).
79. 825.00/5-2347, Bowers al secretario de Estado.
80. 825.00/4-347, memorándum de conversación, Braden, Dreier, Horowitz, Hall, Ibáñez y Romualdi.
81. 825.00/4-1847, memorándum de Braden a Briggs.
82. Memorándum "Informe reservado sobre el comunismo en Chile", MREC, 1948, Chile, caja 6, exp. 1, p. 20.
83. Mathus Hoyos al ministro Anadón, 28 de agosto de 1947, MREC, 1946, Chile, caja 10, exp. 52(3).
84. Memorándum "Situación política de Chile", MREC, 1948, Chile, caja 6, exp. 1.
85. 711.35/1-548, Ray al secretario de Estado.

Capítulo 3

La injerencia argentina en el complot de octubre de 1948

1. Dificultades para el presidente González Videla

Las dificultades económicas que Chile habría de soportar en la posguerra habían sido previstas por el gobierno norteamericano a mediados de 1945. En un memorándum secreto, el entonces secretario asistente Nelson Rockefeller aconsejaba advertir al ministro de Relaciones Exteriores chileno que habría un recorte sustancial en las compras de cobre debido a la disminución de la demanda por la finalización de la guerra. El documento terminaba con el siguiente comentario:

El departamento y el gobierno de los Estados Unidos reconocen los serios problemas económicos con que se enfrenta Chile, y nosotros ansiamos continuar la estrecha cooperación que existió durante la guerra para asistirlo a ensanchar la base de su economía nacional, reconociendo su importancia para la estabilidad social y política de ese país(1).

La inflación y la miseria de algunos sectores de la población chilena comenzaron a hacerse crónicos en la posguerra y se fueron constituyendo(2) en fenómenos atentatorios contra la estabilidad del gobierno. Fue esta situación de vulnerabilidad en que habría de caer Chile la que indujo al presidente Perón a ofrecer la ayuda económica a través del tratado Miranda-Larraín, constituyó campo de cultivo para la acción del comunismo y permitió a los Estados Unidos presionar en favor de sus objetivos políticos. La difícil posición del presidente González Videla se complicaría en virtud de su base electoral insuficiente, lo que le impediría implementar sus proyectos de gobierno y obligaría a tener que realizar permanentes concesiones en pos de acuerdos con otras fuerzas políticas.

La alianza con el comunismo, como ya se dijo, había permitido al presidente González Videla alcanzar el gobierno. En retribución, éste otorgó a los comunistas tres ministerios en el gabinete y les permitió la expansión de su espacio político a través de numerosos cargos en todos los niveles de la estructura gubernamental. El fenómeno generó una gran preocupación en casi todas las fuerzas políticas chilenas y provocó una activa campaña para combatirlo. Los informes específicos redactados por la cancillería argentina sobre el comunismo en Chile eran alarmistas. Uno de ellos mencionaba la organización centralizada del partido Comunista y sus métodos de infiltración en otros partidos políticos; señalaba también sus formas de financiación, a través de bienes propios, cuotas a los militantes, extracción de fondos sindicales y periódicos subvencionados por el gobierno; advertía acerca del control que el comunismo ejercía sobre 80% de los sindicatos del país y la tarea de agitación y propaganda realizada a través de diarios en todo el país, una revista central, boletines y films de origen soviético. Según el mencionado informe, el partido tenía organizado un servicio de espionaje en los ministerios del Interior, Relaciones Exteriores y Guerra y

Marina, y en la policía de Investigaciones, desde el cual proveía información a las embajadas de la Unión Soviética, Yugoslavia y Checoslovaquia. Los comunistas habían logrado jubilar a todos los empleados anticomunistas de la policía de Investigaciones y la desaparición íntegra del archivo de la repartición. Se mencionaba también la organización en todo el país de fuerzas de choque, adiestradas en la práctica de tácticas de combate para zonas urbanas e industriales, el manejo de armas livianas y la fabricación de explosivos. Se preveía el intento de penetración en el Ejército y en la Marina, como consecuencia de la política antimilitarista del comunismo. Se citaba la cantidad de 40.000 hombres bajo instrucción militar. El informe atribuía la responsabilidad de tal impunidad al presidente González Videla por las posiciones políticas otorgadas en su gobierno(3).

Las presiones sobre González Videla para que se deshiciera de sus ministros comunistas comenzaron de inmediato. El presidente trató de postergar una decisión al respecto porque necesitaba todo el apoyo político posible para obtener la ratificación del tratado con la Argentina(4). Además, la asociación con el comunismo permitía al presidente la prevención de conflictos obreros en áreas críticas como las minas de carbón y evitar la paralización de las industrias y los ferrocarriles(5). Finalmente, el presidente pidió la renuncia a los ministros comunistas el 15 de abril de 1947, aprovechando la dimisión presentada por los ministros liberales a causa de no haber obtenido buenos resultados electorales(6). Los ministros comunistas defendieron sus puestos porque habían obtenido el doble de cargos municipales, aunque la tendencia general de la elección había sido en favor del anticomunismo(7). Es posible que influyeran en la decisión del presidente la posición del partido Liberal, que amenazó retirar su apoyo al gobierno(8), y la advertencia del jefe de la Armada en el sentido que existía gran preocupación entre los oficiales por la influencia del comunismo en el gobierno, lo cual provocaba dificultades para mantener la disciplina(9).

Por otra parte, en los comienzos de la Guerra Fría, la participación del comunismo en el gobierno de Chile conspiraba contra el buen nombre del país en el exterior, según consignaron fuentes norteamericanas y argentinas(10). Constituía también una amenaza para las inversiones norteamericanas. El embajador norteamericano en Chile Claude Bowers adelantaba en su carta al secretario asistente de Estado Spruille Braden que el enviado del gobierno chileno a Washington, Guillermo del Pedregal, sabía que "a nadie le interesa invertir dinero en Chile en esta época debido a la intervención de los comunistas en el gobierno" y que uno de sus objetivos sería convencer a sus interlocutores norteamericanos de que "el país no está yendo hacia el comunismo"(11). Bowers consideraba que dicha participación del comunismo en el gobierno hacía imposible asegurar en los círculos bancarios del exterior los créditos para fomentar la producción(12).

La misión Del Pedregal debía convencer al gobierno de los Estados Unidos de que el presidente González Videla no estaba trabajando en favor del comunismo y que no había cambiado en absoluto su aversión a Perón. Lograr esto era necesario para que Chile obtuviera un crédito del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF)(13). Pero el enviado chileno debió escuchar conceptos muy duros del secretario asistente Braden. Este señaló la importancia que el tema del comunismo

tenía para su gobierno y que en consecuencia era "obligatorio" que todas las repúblicas americanas asumieran una posición fuerte y firme respecto de los comunistas, recalcando que los Estados Unidos se oponían al comunismo "en todas partes". El secretario además censuró la posición adoptada por el gobierno chileno ante una huelga de inspiración comunista en la compañía Braden Copper Company, y justificó la del gobierno de los Estados Unidos, el cual en su opinión no podía haber otorgado un crédito en el momento en que, bajo presión comunista, el gobierno chileno planeaba tomar posesión de una compañía americana(14).

El BIRF respondió a Del Pedregal que Chile debía arreglar primero su deuda con los Estados Unidos. Del Pedregal consideró esto una presión injusta porque su país no conseguía beneficio alguno si obtenía un crédito de 40 millones de dólares y por otro lado debía aumentar el servicio de su deuda en 10 o 15 millones por año. Braden aseguró que la única forma de prosperar para Chile era recibiendo capital privado. Para ello debía restablecer su crédito, lo que lograría arreglando satisfactoriamente la situación de las compañías del cobre, es decir, sus impuestos y regulaciones cambiarias discriminatorios. Chile debía romper el círculo vicioso demostrando su habilidad para arreglar estos asuntos y recién entonces podía esperar obtener el capital privado y otra consideración que deseara(15).

En realidad, los síntomas de que el comunismo había comenzado a instalarse en el país sudamericano eclipsaban toda otra consideración. Braden propiciaba la misma táctica de estrangulamiento económico que había ensayado antes con la Argentina, pero por un problema distinto: en aquel caso había sido el supuesto nazifascismo de Perón, ahora era el procomunismo de González Videla. Como afirmara Braden, al año siguiente, la idea era que no pretendían imponer su modalidad de vida más allá de sus fronteras pero tenían el "derecho a elegir como amigos a gobiernos decentes y democráticos y negar la cordialidad y la cooperación a aquéllos desacreditados y corrompidos, y por igual a los gobiernos comunistas y fascistas"(16).

En definitiva, la vulnerabilidad del presidente González Videla se fue haciendo cada vez mayor pues la ruptura con el comunismo tampoco le aseguraba el apoyo de las fuerzas de la derecha(17). Por otra parte, el partido Radical, al que pertenecía el presidente, había ratificado su adhesión a la doctrina de un estado socialista y expresado su determinación de no desviarse de su política para gobernar con grupos o sectores que invocaran soluciones contrarias(18). La necesidad de rehacer sus apoyos políticos colocaba al presidente González Videla ante la difícil decisión de mantener sus principios, a costa de gran inestabilidad para su gobierno, o afianzar su poder cediendo a las exigencias de las fuerzas de la derecha.

A mediados de junio de 1947, la situación económica se había vuelto crítica, la inflación alcanzaba proporciones nunca antes vistas y las huelgas en los centros carboníferos provocaban problemas en la provisión de energía eléctrica y gas(19). El presidente, sin embargo, partió para una gira por Brasil y la Argentina. Al regresar, debió declarar la gravedad de la situación y anunciar el agotamiento de los recursos del gobierno y la cesación de pagos a los empleados públicos a corto plazo(20). Los liberales responsabilizaban a los radicales del caos que existía

en Chile y predecían su colapso total; el partido Liberal exigía como condición para entrar en el gabinete carta blanca en los asuntos económicos(21). La crisis se resolvió con la constitución de un gabinete de administración y la participación de las fuerzas armadas. Esta última medida revelaba la profundización de la postura dura respecto del comunismo. El presidente consintió la eliminación de intendentes y gobernadores comunistas, de acuerdo con las exigencias de la derecha, aunque aclaró que funcionarios comunistas menores o maestros estatales no serían afectados por la decisión ni sería perseguido el partido Comunista(22).

Durante la primera mitad de agosto circularon todo tipo de rumores acerca del futuro del país: podía desatarse el pánico por la grave situación económica y financiera y esto derivar en la renuncia del presidente; podía tener lugar tanto un golpe militar como una controlada revolución comunista. La situación del presidente era vista muy comprometida por la crisis económica(23). Un problema con el precio del pan dio motivo a los comunistas para ordenar una huelga general en las minas de carbón controladas por sus sindicatos. Esto, a su vez, permitió al presidente anunciar, el 20 de agosto, la destitución de los comunistas de todos los cargos políticos y pedir al Congreso facultades extraordinarias que le fueron otorgadas el día 22. El presidente declaró que el partido Comunista se había colocado en abierta rebelión contra el gobierno constitucional y que sus miembros eran enemigos del jefe del estado. El partido Radical también rompió públicamente con los comunistas(24).

Una nueva huelga en los centros carboníferos de Lota, Achwager, Lirquen, Curanilahue y Collico, como expresión de desacuerdo con los aumentos de salarios otorgados por el gobierno, provocó una dura represión. Dichas centros fueron declarados "zonas de emergencia" bajo jurisdicción militar. Reservistas reemplazaron a los mineros en huelga. El gobierno se declaró decidido a "poner fin al control político y sindical ejercido por el partido Comunista sobre las industrias vitales del país", por considerar que dicha acción obedecía a los planes de potencias extranjeras que buscaban la paralización de la producción de materiales considerados estratégicos(25). Manifestó también su convicción de que la Unión Soviética y sus satélites estaban usando como "instrumento de penetración y sabotaje al partido Comunista"(26). Asimismo el partido Radical consideró contraria a los intereses nacionales la gran agitación social causada contra un gobierno dispuesto a expandir las conquistas obreras; de la misma manera fue juzgada la aspiración comunista de controlar las principales fuentes de la industria extractiva cuyo fin último se atribuía a los intereses del comunismo internacional(27).

Si bien el partido Comunista no era responsable de la grave crisis económica en la que estaba sumergido el país, su insistencia en la declaración de huelgas en los centros carboníferos, que impedían la provisión de un elemento vital en momentos muy críticos para el país, fue vista por el gobierno y por la mayoría de las fuerzas políticas como respondiendo a otros fines, más allá del reclamo obrero. Por ello se declararon anticomunistas no sólo los partidos de la derecha, conservadores y liberales, sino también fuerzas políticas que compartían con los comunistas principios doctrinarios como los socialistas y radicales. El presidente González Videla declaró en una oportunidad(28) que habiendo permitido a los comunistas participar

del gobierno, con la certeza de que iban a actuar dentro del marco de un estado democrático capitalista, había hecho más para desacreditar al comunismo que lo que se había hecho en cualquier otra parte de Sudamérica. En su opinión, al no cooperar, los comunistas habían dejado en claro a la clase trabajadora que el comunismo estaba dirigido desde fuera del país con el objetivo de destruir la estructura económica del estado y crear el caos.

La interpretación de que la actividad agitadora intentaba poner al país bajo la tutela de Moscú, produjo la reacción del nacionalismo chileno latente en las distintas fuerzas políticas. La posición asumida frente al comunismo no significaba para algunos partidos que el país debiera pasar a la órbita norteamericana, de allí que comenzara a generarse un concepto de equidistancia. El partido Socialista, por ejemplo, fue girando de una posición pronorteamericana a una de neutralidad. Declaró su oposición tanto al imperialismo norteamericano -por considerar que pretendía colocar a los latinoamericanos al servicio de designios políticos y militaristas-, como a la expansión del imperialismo ruso, defendida en su opinión por el partido Comunista(29). Al producirse la escisión del partido, al año siguiente, la fracción más radicalizada mantuvo dicha posición equidistante entre "Moscú y Wall Street", y la oposición tanto al expansionismo soviético como al imperialismo norteamericano(30). El partido Radical también declaró su rechazo a ambos imperialismos, el repudio al restablecimiento del sistema capitalista y la aspiración a un nuevo orden mundial que propiciara la paz(31). El partido Agrario Laborista se había declarado anticomunista y pronorteamericano, pero sin aceptar ninguna reserva militar, económica o política(32). A su vez, la alianza FRAS, constituida en marzo de 1948 por el partido Agrario Laborista, la Falange Nacional, los radicales-democráticos y el socialismo radicalizado, postulaba la defensa de la soberanía nacional y la autonomía del servicio diplomático chileno frente a las grandes potencias(33).

A mediados de marzo de 1948 comenzó a hablarse de la exclusión del comunismo de la vida política chilena en defensa de los principios democráticos y las libertades individuales consagrados en la constitución(34). Al mes siguiente un informe del embajador argentino mencionaba "síntomas inquietantes" que podían derivar a corto plazo en disturbios serios, análogos a los ocurridos en Bogotá. El gobierno declaró en estado de emergencia todas las plantas eléctricas de las provincias de Aconcagua, Santiago y Valparaíso y las subordinó a autoridades militares. También creó siete zonas de emergencia en el país para combatir la especulación y la escasez. A pesar de las medidas tomadas se sucedían los atentados y existían rumores de una huelga general y graves sucesos para el 1º de mayo(35). El embajador argentino consideró que el gobierno chileno contaba con información fidedigna al respecto(36). Dichos rumores dieron ocasión al presidente para enviar al Congreso un proyecto de ley denominado de Defensa de la Democracia tendiente a declarar al comunismo como asociación ilícita y privar de sus mandatos a sus legisladores(37). La disyuntiva de apoyar o rechazar dicha drástica acción legislativa contra el comunismo provocaría disidencias dentro de algunos partidos políticos y en algunos casos su ruptura(38).

Sin embargo, el temido 1º de mayo pasó sin mayores inconvenientes. Esto llevó a que algunos observadores de la

realidad política chilena hicieran una lectura diferente sobre el peligro de disturbios en el país, dando a entender que el presidente recurría al peligro comunista como una manera de distraer la atención sobre el problema de fondo que era la gravedad de la crisis económica. Un informe elevado al embajador argentino expresaba :

ella [la eliminación de un párrafo de un discurso del socialista Bernardo Ibáñez al ser publicado] pone al descubierto la especulación del gobierno que trata de mantenerse en el poder explotando una situación de peligro que no existe (por el lado que se lo hace aparecer), y provocar la reacción patriótica del pueblo que de esta manera le brindaría el respaldo popular que no tiene y necesita para seguir gobernando, al mismo tiempo que suprimiría así el verdadero peligro que corre, ya que el descontento popular puede dar lugar a una revuelta, a la que tienen todo el derecho como pueblo que aguanta miserables condiciones de vida y que carece hasta de las más elementales condiciones de higiene.

El señor González Videla no teme al comunismo chileno; teme al pueblo de Chile(39).

En opinión del consejero argentino, el comunismo había constituido en Chile una fuerza poderosa y bien organizada pero en esos momentos no significaba ningún peligro para el gobierno. Separadas de sus cargos todas las personas de esa ideología, colocadas bajo el control de las fuerzas armadas las principales actividades del país y declarado el estado de sitio en varias provincias era muy poco probable que pudiera haber actos de sabotaje(40). Los norteamericanos también consignaron que el gobierno chileno trató de obtener apoyo para la ley anticomunista a través del descubrimiento de complots y de una activa campaña de prensa(41).

El giro hacia la derecha del presidente se hizo evidente en la renovación de gabinete que tuvo lugar en el mes de julio. Pasaron a formar parte del mismo miembros del sector tradicionalista del partido Conservador, además de representantes del partido Liberal, Democrático, Radical, y de las fuerzas armadas. De esta manera, el presidente conseguía el apoyo necesario para "el despacho de las leyes sociales y financieras que el país reclama"(42).

El proyecto de ley de Defensa de la Democracia fue discutido durante varios meses. Finalmente fue aprobado en Diputados con el voto favorable de los conservadores, liberales, radicales, democráticos, agrario-laboristas, radicales-democráticos y algunos socialistas; en contra se pronunciaron los comunistas, los falangistas, tres socialistas y un diputado radical independiente. En el Senado la ley fue atacada por el sector conservador socialcristiano de Eduardo Cruz Coke y por el senador agrario-laborista Jaime Larrain García Moreno. Luego de vetar algunos artículos antilaborales, el presidente la promulgó y fue publicada el 18 de octubre(43).

La ley declaraba ilegal y al margen de la constitución al comunismo; prohibía "la existencia, organización, acción y propaganda, de palabra, por escrito o por cualquier otro medio, del partido Comunista", borrando de los registros electorales entre 30 y 40 mil personas. Dicha proscripción provocaría una

serie de maniobras de los otros partidos para captar el caudal electoral que excediera a los borrados, lo que se calculaba en 25.000 votantes(44). La ley tenía disposiciones que "dejaban la puerta abierta para dañar seriamente la libertad de palabra de cualquier grupo opositor al gobierno" y podría utilizarse para restringir las críticas en caso de agravamiento de la tensión política, reprimir las demandas obreras y disolver sindicatos. Constituía una amenaza para el movimiento obrero(45) y un arma potencialmente poderosa colocada por el Congreso en manos del Ejecutivo(46).

Varias opiniones confluyeron en advertir que la represiva campaña anticomunista del gobierno chileno no solucionaría el problema. Una de ellas fue la del director norteamericano de las compañías de nitrato del norte de Chile quien pensaba que era imperativo lanzar una enérgica campaña de mejoramiento socioeconómico para erradicar los muchos justos motivos de queja en todo el país derivados de las inadecuadas condiciones de vida. En el mismo sentido se expresó el chileno Benjamín Cohen, secretario general asistente de la Organización de las Naciones Unidas. Este había señalado el grave error de proscribir a los comunistas porque éstos ingresarían a otros partidos políticos y continuarían con su tarea. La solución era también para él eliminar la miseria(47).

2. Problemas en las fuerzas armadas

La existencia de descontento dentro de las fuerzas armadas chilenas fue comunicado a Washington en mayo de 1948 por la embajada norteamericana. Dichas fuerzas estaban cumpliendo un rol importante porque el gobierno había colocado varias provincias bajo jurisdicción militar pero estaban operando bajo considerable tensión. Su comandante en jefe había confesado que sus responsabilidades eran tremendamente desgastantes y que era su deseo que la institución pudiera desligarse de esas tareas(48).

La embajada argentina también había comunicado en el mes de abril que, si bien era posible que no hubiera fisura importante en la disciplina de las fuerzas armadas, la información obtenida consignaba que durante la huelga en las minas de carbón, en octubre de 1947, las unidades del Ejército habían debido ser frecuentemente relevadas porque los soldados confraternizaban con los huelguistas. Además, el cuerpo de Carabineros no podía cubrir las vacantes por el poco aliciente de los bajos salarios. Con todo, el embajador argentino consideraba que las instituciones armadas, en especial el cuerpo de Carabineros, todavía constituían "el más sólido baluarte del orden en Chile"(49).

Dos meses más tarde, la situación dentro de las fuerzas armadas se había hecho crítica por la falta de energía eléctrica, combustible y otros artículos. El descontento entre sus miembros había comenzado a hacerse público y más articulado, al conocerse afirmaciones de distintas entidades y del presidente de la República acusándose mutuamente de ser responsables del alto costo de la vida y de la especulación. A pesar de la intranquilidad, el gobierno confiaba en el apoyo de las fuerzas armadas. El problema se presentó cuando volvieron a conocerse intentos de destruir la moral de dichas fuerzas y la posible búsqueda de consenso en su seno para un golpe en contra del gobierno(50).

Una carta, incitando a algún tipo de acción subversiva, había sido enviada, en forma privada, a gran cantidad de oficiales y suboficiales. En ella se acusaba al presidente de prostituir el objetivo básico de las fuerzas armadas, de admitir la más flagrante especulación y otros delitos menores y de permitir el desarrollo de un intolerable estado de miseria. La circular apelaba a captar el descontento dentro de las fuerzas por los bajos sueldos, específicamente el de los oficiales de menor rango que sufrían más la crisis económica, y a deteriorar la lealtad del cuerpo de oficiales. Se instaba a las fuerzas armadas a marchar junto a los jóvenes y otros ciudadanos para salvaguardar los principios democráticos de la constitución y, como antes en la historia, a permanecer junto al pueblo; se les pedía que supieran cumplir con su obligación también en esa instancia. La embajada norteamericana había tenido sin embargo contacto con varios oficiales, con motivo de la visita a Chile del general Brooks, y éstos parecían convencidos de la lealtad de sus subordinados y de la capacidad de las fuerzas para hacer frente a cualquier maniobra de rebelión(51).

En definitiva, la conjunción de malestar en las fuerzas armadas, los rumores de complot o sabotaje comunista, el siempre amenazante desabastecimiento y el posible estallido de problemas sociales configuraban un panorama crítico para el presidente Gonzalez Videla, que éste no podía o no sabía resolver.

3. El complot

En esos momentos difíciles para Chile, el embajador argentino Julio López Muñiz cuestionaba, al analizar las relaciones entre ambos países, cuál debía ser el papel que tenía que jugar la Argentina. Su planteo se debía a la repercusión de unas declaraciones formuladas por Perón y Miranda al periodista Aldunate Phillips, publicadas por la revista Nuevo Zig-Zag, referidas al tratado Miranda-Larraín, a las islas del canal de Beagle y a la Antártida. Las declaraciones habían caído, según el embajador, "como una bomba" en un momento en que el gobierno chileno se encontraba en dificultades serias, ocasionadas por la situación política y financiera del país. López Muñiz señalaba que, a diferencia de otros casos anteriores, el gobierno chileno había decidido guardar silencio y había impuesto la misma consigna a la prensa, pero consideraba dudoso que aquel gobierno pudiera seguir callado, si continuaban apareciendo declaraciones análogas. El embajador atribuía la actitud prudente de Chile a tres razones: a) que el presidente y el canciller chilenos sentían alguna responsabilidad en no haber obtenido la ratificación del tratado argentino-chileno; b) que el gobierno necesitaba, en forma cada día más apremiante, la cooperación económica y financiera de la Argentina y por ello había recurrido a lo que se llamaba "la aplicación del tratado por parcialidades" hasta que el Congreso se pronunciara; y c) que una parte de las declaraciones, que aludían a las islas del canal de Beagle y a la Antártida, podrían favorecer a Chile(52). El embajador llegaba a la conclusión de que "Chile está abocado a una grave crisis política; el camino por donde va no puede sino desembocar tarde o temprano en la revolución". En ese contexto, la Argentina tenía las siguientes opciones:

Apoyar indirectamente al presidente González Videla o dejar que los acontecimientos sigan su curso. Si se opta por lo primero hay que enviar víveres a Chile y no debilitar más la posición del presidente con nuevas declaraciones que vayan en desmedro de su prestigio; si se opta por lo segundo no contribuir a que se decida don Arturo Alessandri y continuar la política que se sigue en este momento(53).

El planteo de López Muñiz, apuntado a hacerle ver a su gobierno las dos posibilidades de acción que tenía, parecía sin embargo estar más a favor de tomar decisiones que ayudaran a la estabilidad del gobierno de Chile y no el camino inverso.

El tema de los golpes de estado en Chile preparados desde la Argentina ya fue mencionado por Donald Bray(54), quien señaló que la Argentina fue la base desde donde el general Carlos Ibáñez del Campo tramó el derrocamiento de virtualmente todos los gobernantes que lo sucedieron en el gobierno de Chile desde 1931. El general Ibáñez, una de las figuras políticas más importantes y controvertidas de Chile, había comenzado su actuación política encabezando al sector militar que devolvió a Arturo Alessandri Palma a la presidencia en enero de 1925. Fue ministro de guerra de Alessandri pero vio coartadas sus aspiraciones presidenciales al producirse la renuncia del presidente. Finalmente, tras la renuncia del sucesor de Alessandri, de quien también fuera ministro de guerra, Ibáñez fue ungido presidente en una elección en que fue candidato único. Su gobierno se transformó progresivamente en una dictadura apoyada en la prosperidad de los años 1925-1929 pero al desencadenarse la depresión su régimen se hizo más represivo y a mediados de 1931, tras varios días de agitación en Santiago, Ibáñez se dirigió al destierro(55). En la Argentina -país al que consideraba su segunda patria- pasó largos períodos de exilio, el más extenso de los cuales transcurrió entre julio de 1931 y mayo de 1937(56). Una amnistía política le permitió regresar en esa fecha a su país(57) con antelación suficiente para trabajar con vistas a la futura elección presidencial.

En esa época existía en Chile un Movimiento Nacional Socialista (MNS) -*nacista*, según la denominación empleada en ese país- fundado por Jorge González von Marées en 1932 y cuya acción política se desarrollaría hasta su caída en 1938. Se trataba de un *nacismo* criollo que siempre había insistido en no tener vínculos con el nazismo alemán. Ante la elección presidencial de 1938, que debía definirse entre el candidato del gobierno y el candidato del Frente Popular, el MNS propuso la formación de un Frente Nacional que respaldara la candidatura del general Carlos Ibáñez pero éste no hizo ningún signo de aceptar dicha nominación, a pesar de lo cual el MNS insistió en su propuesta. Ibáñez eludió cualquier identificación con los *nacis* y pidió al pueblo el apoyo para el Frente Popular; más aún, declaró su simpatía con las doctrinas de este último y aclaró que era antifascista. Los *nacis*, a pesar del rechazo de Ibáñez, lo declararon el candidato ideal y el depositario de su apoyo, a la vez que proclamaban su opción por una auténtica democracia, negaban haber tenido ni tener vinculación con los regímenes de Italia o Alemania y anunciaban la intención de propiciar la unificación de las fuerzas de izquierda. Mientras tanto, la convención del Frente Popular eligió como candidato al moderado Pedro Aguirre Cerda, no pudiendo siquiera

llegar a proponerse la candidatura de Ibáñez en ese ámbito. Ibáñez se postuló entonces como candidato independiente por una Alianza Popular Libertadora, que fue integrada luego por el MNS, la Unión Socialista y otros grupos ibañistas. Debido a causas todavía no aclaradas definitivamente pero previendo casi ninguna posibilidad para la candidatura de Ibáñez, González von Marées tramó una conspiración para derrocar al presidente Arturo Alessandri y evitar el triunfo bastante probable de su ministro de Hacienda Gustavo Ross. Ibáñez también participó de la maquinación pero a último momento el general no cumplió con su parte y el golpe, efectuado el 5 de septiembre de 1938, fracasó reprimido sangrientamente por el gobierno. Este fue el fin del MNS pero también de la candidatura oficialista debido a la indignación que causó la masacre de los jóvenes *nacistas*. Ibáñez redactó desde la cárcel la renuncia a su postulación, logró su liberación al poco tiempo y terminó dando su apoyo a Aguirre Cerda(58). Por su parte, González von Marées obtuvo un indulto del nuevo presidente Aguirre Cerda por haber ordenado a sus partidarios votar por el candidato del Frente Popular, que triunfó ajustadamente gracias a esos votos(59). En enero de 1939, el congreso del MNS cambió el nombre del movimiento por el de Vanguardia Popular Socialista (VPS), y ésta intentó un viraje hacia la izquierda. Al año siguiente, algunos de sus miembros disconformes con el liderazgo de González von Marées se separaron y formaron el Movimiento Nacionalista de Chile que apoyó a Ibáñez y demostró una marcada oposición al gobierno del Frente Popular por considerarlo demasiado favorable a los comunistas(60). En agosto de 1939, Ibáñez aparecía nuevamente mezclado -intentando darle un cariz político- en una revuelta de neto corte militar que fue aplastada con rapidez. El segundo exilio del general, esta vez en el Paraguay, duraría hasta 1941(61). Producida la muerte del presidente Aguirre Cerda, Ibáñez se presentó como candidato a la presidencia por la alianza conservadora-liberal, secundada también por la VPS y los nacionalistas -que la nueva contingencia había vuelto a reunir en una Unión Nacionalista-, pero resultó derrotado por el radical Juan Antonio Ríos(62). Documentos norteamericanos consignarían que los lazos estrechos de Ibáñez con el gobierno argentino databan de 1942, cuando aquél se había dirigido a Buenos Aires luego de su presunta participación en otro golpe frustrado(63). La figura política de Ibáñez sería nuevamente la eventual beneficiaria de un complot descubierto por el gobierno de Chile hacia fines de 1948.

3.1. Los hechos

El 31 de octubre de 1948, el gobierno del presidente González Videla hizo público el descubrimiento de un complot para derrocarlo en momentos en que buscaba la renovación de sus facultades extraordinarias. La posibilidad de un complot contra el gobierno chileno había sido mencionada, a comienzos de octubre, en un aerograma secreto enviado a Washington por la embajada norteamericana en Chile. La embajada comunicaba haber obtenido dos informes. El primero mencionaba como implicados en el intento al ex embajador en la Argentina Conrado Ríos Gallardo, al senador agrario-laborista Jaime Larraín, al general retirado Jorge Berguño Meneses, al ex-presidente Carlos Ibáñez del Campo y otros. El segundo informe, recibido de un funcionario del gobierno chileno que había viajado a Buenos Aires, indicaba que el presidente Perón podía estar financiando un movimiento para derrocar al gobierno

chileno e instalar una dictadura. Con todo, el mencionado funcionario y la embajada norteamericana coincidían en que no había posibilidad de que un movimiento revolucionario tuviera éxito en Chile dado que las fuerzas armadas y los principales partidos eran leales al presidente y la oposición estaba completamente dividida. Perón hallaría imposible influenciar la lealtad de las fuerzas armadas chilenas, porque, además, éstas eran tradicionalmente antiargentinas(64).

El ex presidente Carlos Ibáñez y el coronel retirado Ramón Vergara Montero, ex jefe de la Fuerza Aérea, ex intendente de Santiago y candidato a senador por el partido Agrario-Laborista, fueron arrestados el 31 de octubre por supuesta connivencia en un complot para derrocar al gobierno y ordenada su incomunicación. Ibáñez y Vergara fueron implicados en el complot por suboficiales del Ejército arrestados en la Escuela de Infantería de San Bernardo. Ambos negaron rotundamente tener alguna conexión con el supuesto golpe. Los arrestos fueron hechos a pedido de la justicia militar, con la hipotética independencia del gobierno civil. El fiscal militar José Nogués Larraín negó que esos arrestos tuvieran algo que ver con la detención, dos semanas atrás, del capitán retirado Octavio O'Kingston, miembro del grupo Acción Chilena Anticomunista (ACHA), quien habría fugado con armas de la agrupación, y Diego Espol, por violar la ley de Defensa de la Democracia(65). La zona de San Bernardo paradójicamente había permanecido como zona de emergencia en la última reorganización de estos distritos, en virtud de que se suponía que existía actividad subversiva comunista entre los suboficiales y soldados del Ejército y de la Fuerza Aérea(66).

La embajada argentina, apenas se produjeron los arrestos, envió a su gobierno la información obtenida sobre sus protagonistas y conexiones. Mencionaba como los jefes más caracterizados al general Ibáñez, al coronel Vergara Montero y también al general (R.) Berguño Meneses, quien se hallaba en Buenos Aires. El coronel (R.) Fernando Cabezón era, presumiblemente, el delegado del general Berguño y actuaba como oficial de enlace entre la directiva revolucionaria y la Marina. El embajador argentino hacía alusión a un informe anterior en que había enviado detalles de la actividad de Berguño en Buenos Aires, cuya misión era aparentemente negociar una partida de cobre con el gobierno argentino(67). El día 6 se transmitían los nombres de los detenidos según los daba el diario La Nación de Chile(68). El embajador creía que el movimiento era exclusivamente militar, pero tenía razones para presumir que el dirigente principal del partido Agrario-Laborista, senador Larraín García Moreno, estaba al tanto de lo que se tramaba y simpatizaba con la conspiración(69).

El 6 de noviembre, luego de una reunión del presidente González Videla con sus ministros de Defensa e Interior, los tres comandantes en jefe y los directores generales de Carabineros e Investigaciones, la secretaria general de gobierno entregó una declaración a la prensa fijando la posición del gobierno frente al complot. La responsabilidad por el mismo se hacía recaer en los civiles. La declaración expresaba:

El gobierno se ve en la necesidad de informar al país que el afán conspirativo que desde hace tiempo alientan algunos grupos civiles, logró envolver a ciertos jefes, oficiales y suboficiales de las fuerzas armadas. En resguardo de las

instituciones fundamentales de la República y por el propio prestigio de las fuerzas armadas, el gobierno declara que ha procedido y que procederá inflexiblemente a aplicar todas las sanciones que las leyes le autorizan, contra quienes pretendan subvertir el orden constitucional. Los tribunales militares, por su parte, en uso de las atribuciones privativas, aplicarán el rigor de la ley a aquellos miembros de las fuerzas armadas que hayan faltado a sus deberes. El gobierno se complace en declarar que el Ejército, la Aviación, la Marina y el cuerpo de Carabineros, con las solas excepciones de aquellos miembros sometidos a proceso, han permanecido y permanecen férreamente unidos en torno del gobierno constitucional(70).

Ese mismo día, El Mercurio sostenía que estaba en condiciones de informar que el gobierno sabía positivamente que determinados elementos políticos habían alentado el complot y habían conseguido comprometer a representantes de las fuerzas armadas valiéndose de un argumento rodeado de elevados propósitos: la conveniencia de llevar a las fuerzas armadas al poder para que dieran suficiente respaldo al presidente de la República a fin de que desplazara a los partidos políticos de toda injerencia en la administración del estado y diera solución a los problemas económicos. Así se explicaba que un número importante de miembros de las fuerzas armadas hubiera adherido a la confabulación. El diario declaraba además que había recogido informaciones acerca de que en la gestación y desarrollo de los hechos habría existido alguna injerencia de origen exterior y se habría contado con fondos de la misma fuente(71). A su vez, la embajada norteamericana percibió que las opiniones respecto de la intervención de la Argentina en el gobierno chileno se hallaban divididas(72), pero que en general se creía que los oficiales militares se habían plegado al golpe en virtud de que el acceso de los militares al gobierno permitiría al Ejecutivo mejorar la situación económica de Chile y de las fuerzas armadas(73).

A los pocos días, el presidente González Videla insistió en su hipótesis de minimizar la responsabilidad de los militares implicados y aludió a la influencia externa. En un discurso en la ciudad de Los Angeles expresó:

Yo no culpo ni puedo hacer recaer todo el peso de la responsabilidad por este criminal y descabellado atentado contra nuestra patria sobre el grupo reducido de jefes, oficiales y suboficiales que la justicia ha señalado como comprometidos en esta aventura. Se ve que esos miembros de las fuerzas armadas fueron arrastrados con engañosos procedimientos, puestos en ejecución por elementos nacionales movidos evidentemente por ambiciones totalmente divergentes en sus medios y sus finalidades y alentados por ciertos grupos nacionalistas extraños a nuestras fronteras(74).

El 8 de noviembre el complot aparecía completamente dominado y la investigación en curso. Los arrestos mencionados eran de 2 oficiales aeronáuticos y 3 del ejército, 14 suboficiales y 7 civiles. La Confederación de trabajadores y los partidos principales habían dado su apoyo al Ejecutivo y a las instituciones democráticas(75).

Un editorial del diario El Mercurio del día 8 sostuvo la posibilidad de que influencias foráneas hubieran estimulado y prestado ayuda al movimiento subversivo. Basaba tal hipótesis en la similitud de los métodos e incidentes de la supuesta acción subversiva en Chile con aquéllos de la abortada revuelta de junio en Perú, el levantamiento en Paraguay, la no aquietada situación en Bolivia y la finalmente exitosa revuelta en Perú. Señalaba la naturaleza antidemocrática de esos movimientos y la semejanza en su crítica a los Estados Unidos y sostenía que los intentos comunes de subvertir el orden constitucional no eran asuntos aislados. En su opinión, el movimiento, aunque bien planeado, había fracasado debido a la disciplina y el sentido del deber de las fuerzas armadas y la fuerte conciencia democrática de los chilenos(76).

La revista semanal Ercilla dio a conocer nuevos datos sobre el abortado complot. La figura principal del reciente movimiento, de acuerdo con la carátula del sumario que se estaba instruyendo, era Enrique Cox Chavez, a quien se señalaba como el nexo entre los oficiales y suboficiales y el único hombre que conocía todas las ramificaciones. Se lo describía como un oficial ex carabinero, un hombre clave en el caso y un conspirador desde 1930. Según el semanario, la confesión de Mario Carrasco Gertner, comandante de grupo de la escuela de Artillería Antiaérea, había abierto el caso. Carrasco aseguró que el golpe iba a tener lugar el 5 de noviembre cuando González Videla, acompañado por los presidentes de varios partidos, visitara la exposición rural de Osorno. A su llegada iba a ser informado de que el Ejército había tomado La Moneda y asumido el poder en Santiago; se le comunicaría el cierre del Congreso y el exilio de todos los líderes políticos. El presidente iba a ser invitado a encabezar el nuevo gobierno militar; si rehusaba sería expulsado del país, pero le serían acordados honores correspondientes a su rango. De acuerdo con Ercilla el alerta de Carrasco había llegado apenas con tiempo para detener la partida del presidente hacia Osorno(77).

La revista mencionaba también las "ramificaciones continentales" del movimiento, entre las que estaban "el antiguo agente de Hitler, el coronel peruano Alfredo Llosa, ministro en el gobierno de Odría y un gran favorito del grupo de Perón en la Argentina", considerado el principal instigador de la revuelta peruana "que debía ser coordinada con la revuelta en Chile y si fuera posible el mismo día". También hacía referencia al "bien conocido deseo de la Argentina de ser la hermana mayor de los gobiernos militares de Sudamérica" y la acusaba de estar implicada en los hechos en Paraguay, Bolivia y Brasil. Ercilla implicaba a la Unión (sic) Chileno-Argentina, dirigida por Conrado Díaz Gallardo y en cuya junta directiva figuraba el general retirado Jorge Berguño Meneses, pero absolvía a Acción Chilena Anticomunista(78).

El 15 de noviembre fue establecida por ley una nueva extensión de los poderes especiales del presidente por seis meses. Fue votada por amplio margen en ambas cámaras(79). La obtención de esta ley fue mencionada tanto por los observadores políticos norteamericanos como argentinos como uno de los probables motivos del presidente para descubrir el complot en la fecha en que lo hizo.

El general Carlos Ibáñez obtuvo la libertad bajo fianza el 2 de diciembre. Era el único que podía solicitarla porque el fiscal había pedido para él la pena de extrañamiento. En una entrevista que concedió a *United Press*, el general manifestó que lamentaba profundamente que el sumario hubiese dado lugar a que "círculos irresponsables" hubieran lanzado

con verdadera inconciencia, acusaciones torpes y arbitrarias contra el gobierno de un país hermano, al que nos unen vínculos espirituales y materiales, cuya preservación cuidadosa debería constituir, en esta grave hora del mundo, una previsor y fundamental tarea de los poderes públicos(80).

Además, Ibáñez intentaba otorgar un sentido a los acontecimientos, poniendo de relieve el saldo positivo dejado por éstos:

Por otra parte me congratulo de que la agitación artificial promovida con motivo de este proceso, haya tenido la virtud de provocar la sanción de precipitadas leyes destinadas a remediar siquiera en parte la afrentosa situación económica de las fuerzas armadas y los empleados públicos, y que por el mismo motivo se haya facilitado, después de años de inútil espera, un rápido despacho de leyes que darán satisfacción a las justas y sentidas aspiraciones de mejoramiento social y económico de las clases obreras. Que la indolencia y el egoísmo de los círculos dirigentes hayan sido por fin conmovidos, será sin duda el saldo provechoso del supuesto complot y de mi injustificada detención(81).

El proceso por el abortado complot quedó en jurisdicción de la justicia militar. El juez Santiago Danús Peña dio a conocer su sentencia el 21 de diciembre. Fueron absueltos el general Carlos Ibáñez y el mayor del ejército Gerardo Ilabaca. El ex comandante de aviación Vergara Montero fue condenado a 4 años de destierro y multa, igual que el teniente coronel Mario Carrasco Gertner y Octavio O'Kingston(82). A tres años y un día de inhabilitación y confinamiento en regiones lejanas dentro del territorio chileno, y multas fueron sentenciados el mayor Estanislao León, el teniente coronel Fernando Dubreuil y el jefe de grupo Fernando Pardo. Las penas oscilaron entre 541 días de confinamiento en Chile y destierro por 4 años(83).

Las sentencias arriba mencionadas fueron apeladas ante la Corte Marcial, que dio a conocer su fallo el 22 de enero de 1949. Ratificó, en forma general, el pronunciamiento de primera instancia absolviendo al general Ibáñez, al mayor Ilabaca y al civil Vera Flandes. Asimismo ratificó las penas impuestas a Vergara Montero, Carrasco Gertner y O'Kingston así como las condenas de todos los suboficiales implicados, con excepción de dos de ellos a los que absolvió. También fueron absueltos Pardo y León(84).

3.2. Injerencia argentina

La embajada argentina en su extenso informe a la cancillería del 3 de noviembre había analizado las causas del movimiento. "La raíz básica -decía el embajador- hay que buscarla en la deplorable

situación económica en que se debate la masa popular chilena, a la cual el gobierno ya sea por incapacidad o por imposibilidad no logra darle soluciones de fondo". Relacionado con esa situación estaba el standard de vida "rayano en el estoicismo" en que tenían que desenvolverse los cuadros de suboficiales y oficiales de las fuerzas armadas, incluso Carabineros. Lo mismo ocurría con los empleados fiscales de toda categoría. Los sueldos tanto de los militares como de los civiles de la administración pública acusaban "un insoportable desequilibrio con el costo de la vida"(85).

A la situación descrita, que era considerada un amplio campo de cultivo para la subversión, debían agregarse las denuncias diarias de cohechos, malversaciones y fraudes, cometidos por altos funcionarios de la política y de la administración, abusos a los que el presidente no ponía fin. También se mencionaba la división de los partidos políticos tradicionales, cuyo fomento se adjudicaba al propio presidente; la paradoja de la falta de apoyo del partido Conservador para las medidas anticomunistas del presidente, los cabildeos electoralistas, las arbitrariedades cometidas en virtud de la aplicación de la ley de Defensa de la Democracia y los relegamientos como consecuencia de la ley de Facultades Extraordinarias. Todo ello, en opinión del embajador argentino López Muñiz, habría resuelto a las fuerzas armadas a tomar el poder para "sacar a Chile de esta encrucijada"(86).

El embajador argentino daba al movimiento revolucionario, "momentáneamente abortado", el carácter de nacionalista chileno, contrario a "la infiltración cada vez mayor y cada vez más prepotente del capitalismo yanqui"; en consecuencia lo consideraba netamente proargentino. Uno de los propósitos de los revolucionarios habría sido, en su opinión, llegar a la concertación inmediata del tratado con la Argentina para lograr la unión económica mediante la apertura sin trabas de la cordillera, a fin de dar al bajo pueblo chileno alimentación abundante y, de esa forma, supuestamente granjearse apoyo popular. En el plano interno, el embajador afirmaba que se habría buscado aplicar la doctrina peronista en todo su contenido económico y social(87).

Por último, el embajador argentino aclaraba ante la cancillería la posición que había asumido la embajada a su cargo ante los acontecimientos:

Sería inoficioso que hiciese resaltar ante V.E. que la embajada que me honro en presidir, si bien se ha mantenido alerta a lo que podía ocurrir, como lo demuestran los sucesivos informes que sobre el estado de la situación política chilena he venido elevando desde que me hice cargo de mi puesto hasta la fecha, ha mantenido una conducta totalmente prescindente en todo lo que atañe al desenvolvimiento de los hechos de esta política interna(88).

Este informe del embajador argentino, escrito apenas descubierto el complot y antes de que se hiciera pública la posible intervención argentina, demostraría que la embajada adjudicaba al movimiento un parentesco ideológico afin al justicialismo argentino pero no reconocía un apoyo concreto de parte del gobierno argentino. Por lo menos, no a través de la embajada.

El 8 de noviembre el embajador argentino informaba alarmado

que había comenzado a correr en Santiago el rumor de que "todo era obra de Perón y del fascismo argentino". El embajador afirmaba tener constancia, de fuente confiable -un alto jefe en actividad en el ministerio de Defensa Nacional-, que el citado rumor había sido propalado ex profeso desde las más altas esferas del gobierno de la Moneda, por el propio secretario general de Gobierno, Darío Poblete, el hombre de más confianza del presidente González Videla. El embajador, luego de recordar que el presidente chileno había sido uno de los principales opositores de Perón en Chile entre 1943 y 1946, daba la siguiente explicación del fenómeno:

Se trata a mi entender en todo este asunto de una maniobra del propio presidente, quien, como es práctica corriente en casos similares, ha buscado de distraer la opinión pública con un presunto peligro externo para afianzar su tambaleante gobierno, conmovido por una vasta conspiración y los sucesivos escándalos que diariamente salen a la luz pública, en los que se ven comprometidos las más conspicuas personalidades, en malversaciones y defraudaciones(89).

La indignación del embajador argentino provenía de la publicación de un manifiesto, en el diario socialista La Opinión, emitido por el comité central del partido, con el título de "complot inspirado por la Argentina". Allí se afirmaba que el complot era un golpe "fascista", coordinado y orientado por "elementos próximos al régimen de gobierno que impera en la República Argentina", cuya mano también se había visto en las revueltas de Perú y Bolivia(90).

El embajador argentino presentó una nota de protesta ante el gobierno chileno por las expresiones del manifiesto socialista, el mismo día 8, "en salvaguardia del prestigio de nuestro gobierno" y "sin recabar previamente otras instrucciones"(91). Llamaba la atención en ella sobre la gravedad de las acusaciones que imputaban al gobierno argentino -sin aportar ninguna clase de pruebas y encubriendo su verdadera intención, al referirse a elementos próximos al régimen de gobierno que imperaba en la República Argentina- ser el promotor de los sucesos acaecidos en las repúblicas de Perú, Bolivia y Chile. Protestaba también por la calificación de fascista conferida al "régimen más democrático y popular de toda América". Afirmaba asimismo que el gobierno argentino consideraba la declaración socialista poco importante por provenir de "un minúsculo partido minoritario", pero la presentación de la protesta procedía por haber sido publicada en un órgano de prensa financiado por el gobierno de Chile(92) y por haber participado de la reunión del comité socialista, en que fue redactada, un ministro del gobierno chileno. Respecto de esto último, decía el embajador en su nota:

La presencia de un ministro de estado en un acto donde se formulan, discuten y aprueban tan insólitas declaraciones de extrema gravedad, que tienden a desprestigiar -sin lograrlo- al gobierno argentino ante la opinión pública de Chile y de América, constituye evidentemente, señor ministro, un gesto por demás inamistoso(93).

Más aún el embajador señalaba que quedaba la duda de "si su presencia no habría sido deliberada para dar la sensación de que el gobierno de Chile está de acuerdo con las gratuitas y ofensivas imputaciones" lanzadas contra el gobierno argentino por el partido

Socialista. La nota pedía, finalmente, una "satisfactoria explicación a tan desagradable episodio, que borre la ingrata impresión que ha producido la citada publicación, que, espero, no ha de perturbar las cordiales relaciones que por fortuna para la unidad americana prevalecen entre nuestros dos países"(94).

La embajada argentina decidió también refutar los cargos públicamente y envió un comunicado a la prensa en el que transcribía el artículo segundo del manifiesto y luego expresaba:

La embajada de la República Argentina formula su más enérgica protesta ante la opinión pública por la insidia que encierran tan calumniosas como gratuitas imputaciones formuladas en forma apenas embozada al gobierno argentino, y por el agravio que importan para los países hermanos, Perú, Bolivia y el propio Chile, al dejar entrever que los actuantes en los sucesos políticos que los han conmovido o los conmueven hayan sido meros instrumentos de una potencia extranjera(95).

El comité central del partido Socialista lamentó públicamente la tergiversación en que había incurrido el comunicado de la embajada argentina, expresando que el partido no había formulado una acusación contra el gobierno argentino, sino que se había limitado a señalar las actividades de "elementos próximos al régimen". Aclaraba que se trataba de individuos que, a la vez que propugnaban abiertamente las excelencias de la intervención de las fuerzas armadas en los gobiernos, trabajaban para lograr el abatimiento de los regímenes civiles y su reemplazo por dictaduras militares ultranacionalistas. El partido prometía una detallada exposición de los hechos a que se refería el manifiesto y de las amenazas que se cernían sobre la democracia en esa parte sur del continente(96). La actitud del partido Socialista de insistir en sus términos podría explicarse por el hecho de que éste hubiera tenido acceso a la información que poseía el gobierno de la implicación de diplomáticos argentinos, mientras que la defensa que hizo el embajador de su gobierno no hubiera sido tan vehemente de haber sabido que algunos de sus subordinados podían ser objeto de alguna acusación.

La contestación del gobierno chileno a la nota de protesta del embajador argentino fue en términos conciliatorios, pero de respaldo a su ministro, a quien consideraba en libertad para asistir como militante socialista a una reunión del comité central de su partido. La respuesta no satisfizo al embajador quien infirió que la cancillería chilena sustentaba el principio de "la doble personalidad" de sus ministros. El embajador creía ver una actitud tendenciosa en los diarios por no haber dicho que el gobierno chileno había dado las explicaciones solicitadas; así también consideraba que habían tergiversado la fecha de presentación de su nota, dándola por entregada el día 9, cuando en realidad había sido el 8 al mediodía. La prensa sensacionalista había manifestado, según el embajador, que el gobierno de Chile había rechazado la protesta argentina. El embajador consideraba que todo el incidente había creado una confusión que resultaba en provecho del "maltrecho prestigio del gobierno chileno"(97).

El canciller chileno Riesco se lamentó, ante el embajador norteamericano, de la publicidad dada por los socialistas al asunto de la ayuda proveniente de un país "muy cercano a Chile"; el embajador aclaró en su informe que, en realidad, el diario

socialista había expresado "elementos cercanos al gobierno ahora en el poder en la Argentina". Según el embajador Bowers, el gobierno chileno no quería precipitar una crisis con Perón, por lo cual el ministro le dio a entender que tendría que desmentir la noticia, a pesar de que confidencialmente no tenía duda de que era cierta(98).

El embajador argentino se sintió afectado por el incidente a tal punto que en su informe a la cancillería dijo querer aclarar el alcance de su pensamiento en relación exclusivamente con ese incidente y no con la política global que debía seguirse hacia Chile, la que había expuesto en carta confidencial al ministro Bramuglia en el mes de agosto y que reafirmaba. Consideraba que el gobierno de Chile requería "un trato firme" de parte de la Argentina por haberse permitido "el lujo de jugar con el gobierno del general Perón". En consecuencia aconsejaba tomar las siguientes represalias:

Tres son los centros neurálgicos sobre los que puede actuar de inmediato nuestro gobierno: el primero, negándoles la prórroga del pago citado, que vence en marzo de 1949 y que es el objetivo primordial que persigue en estos momentos el embajador Vergara Donoso ante don Miguel Miranda; el segundo, la rápida construcción y puesta en funcionamiento de la fábrica de salitre sintético; el tercero, imponiendo restricciones a las exportaciones de ganado argentino en pie. Esta restricción podría convenir políticamente, aplicarla solamente al que pase por el trasandino, en camiones o arreo por el valle central hasta la costa, procedente de la zona de Mendoza. No así en cambio al que de Salta va al norte chileno (Antofagasta, Iquique, Arica)(99).

Hay evidencia de que a fines del mes de noviembre había comenzado a instrumentarse la tercera de las represalias propuestas. El 23 de noviembre, el diario Las Noticias Gráficas de Chile publicaba una noticia titulada "Argentina impondría condiciones para el ganado que se exporta para Chile", aclarando que en las esferas oficiales se guardaba absoluta reserva pero que "la situación sería delicadísima". El texto explicaba que la firma Durán y Cía. había informado al ministro de Economía y Comercio que los proveedores de ganado argentino le habían notificado oficialmente que no se permitiría el paso a Chile de reses por vía de Salta (contrariamente a lo sugerido por el embajador). La notificación había sido hecha a los importadores de ganado argentino que tenían a su cargo el aprovisionamiento de carne para la zona norte sin comentarios adicionales, agregándoseles, únicamente, que se trataba del cumplimiento de órdenes superiores emanadas del ministerio de Agricultura argentino. El diario evaluaba las consecuencias que tendría la medida para Chile: se pondría en difícil situación el normal abastecimiento de carne para la zona norte del país pero también repercutiría en el resto del territorio que vería reducirse su cuota de ganado. Para tratar el tema se habían reunido los ministros de Economía y Comercio, Finanzas, Agricultura y otros funcionarios. La noticia era luego ampliada, señalando que la prohibición de que saliera ganado para Chile no estaba circunscripta al que transportaba el ferrocarril Salta-Antofagasta y que no se trataba de una prohibición, sino que serían condiciones altamente onerosas que en el fondo harían imposible la importación de ganado argentino(100).

Mientras tanto, el senador por Salta y productor de ganado Alberto Durán Salletes, enviado a Chile por el presidente Perón para tratar el tema, intentaba dar alguna justificación a la restricción. Afirmó, en declaraciones al diario El Mercurio, que a causa de una sequía que había durado casi diez meses se había producido una disminución sensible en el número de las reses de exportación y los animales habían perdido peso, situación ésta que había obligado a suspender las exportaciones argentinas de ganado en pie. A la merma de las existencias, además, se sumaba el aumento del consumo interno argentino. No obstante, el senador expresaba que el gobierno argentino no escatimaría esfuerzo para recomenzar las exportaciones a Chile y que en ningún caso el hecho importaba un propósito inamistoso, pues igual temperamento se había adoptado con los demás países consumidores de carne argentina. El caso era, como lo adelantara el diario Las Noticias Gráficas, que Chile sufría consecuencias importantes y demostraba además lo fácil que era para la Argentina provocarlas. Ante la situación, González Videla dio instrucciones para que la faena se restringiera a determinados días, especialmente en la zona norte donde el problema era más grave. También instruyó para que se facilitara el trabajo de la industria del mar a fin de proveer pescado abundante(101).

El embajador argentino transmitió a la cancillería, en la misma nota en que proponía las represalias, su preocupación por la reacción de la prensa amarilla en Chile, supuestamente manejada por el secretario general de Gobierno Poblete desde la Moneda. En su opinión, el descubrimiento del complot había servido "para desatar una ola de imputaciones monstruosas contra el general Perón, pintándolo como fascista, imperialista y promotor de todas las revoluciones de América". La nota presentada al gobierno de Chile había tenido como objeto "contenerla" pero no había logrado impedirla. El embajador consideraba que: a) dicha prensa era manejada a voluntad desde las más altas esferas del gobierno, más aún estando el país bajo la ley de Facultades Extraordinarias; b) había una animosidad latente en el gobierno hacia la Argentina(102); y c) todo formaba parte de un plan continental, al que estaba plegado el jefe del gobierno chileno, dirigido contra el general Perón. Las circunstancias que habían rodeado la participación del ministro de Educación en el incidente originado por el partido Socialista eran consideradas también un episodio de ese plan. El plan antiargentino y antiperonista tenía sus raíces en la masonería internacional. Por todas esas razones el embajador estimaba que la Argentina debía organizar una contrapropaganda en Chile. Dado que no se contaba allí "con un diario que nos responda", ni con hora radial, ni cines que pasaran noticieros argentinos, ni con una Casa argentina, el embajador solicitaba una suma mensual para "fomento del intercambio cultural"(103).

Las acusaciones al gobierno argentino realizadas por los socialistas, detrás de las cuales el embajador debió suponer que estaba el gobierno chileno, provocaron su reacción, sugiriendo un desmesurado plan de acción de represalias y de organización de contrapropaganda. Sin embargo, la animosidad contra la Argentina peronista existía en Chile en distintos sectores de la sociedad, como había demostrado el debate público surgido como consecuencia de las alternativas legislativas del tratado Miranda-Larraín y que, pese a los esfuerzos del presidente González Videla, el Congreso no había ratificado. Existían sentimientos antiperonistas

en el comunismo, en el socialismo, en el radicalismo (el partido del presidente), en el liberalismo y en algunos conservadores, influenciados tal vez por la propaganda norteamericana comenzada durante la guerra y que ponía el acento en el fascismo de Perón. Había algunas excepciones como el partido Agrario-Laborista de Larraín, algunos grupos nacionalistas de ultraderecha, como los implicados en el golpe, y algunas personalidades individuales. Las fuerzas armadas, como se dijo, eran también tradicionalmente antiargentinas. Por otra parte, el embajador se revelaba extremadamente susceptible a lo que publicara la prensa chilena y que pudiera afectar el prestigio de Perón o de su gobierno, cuando en realidad en Chile se publicaba un solo diario que respondía al pensamiento del gobierno, en tanto todos los demás reflejaban las ideas de los partidos políticos o eran independientes. El embajador demostraba no tolerar en Chile algo que también estaba ocurriendo en su país y de manera mucho más grave: el hecho de que el gobierno coaccionara a la prensa para la publicación de comentarios convenientes a su política.

La contrapropaganda se organizó rápidamente donde era mucho más fácil y menos costoso porque se contaba con diarios adictos al gobierno: en Buenos Aires. Los diarios chilenos comenzaron a transcribir artículos completos de diarios argentinos en los que se criticaba implacablemente la acción de gobierno de González Videla. El Líder enumeraba una serie de episodios que demostraban que el presidente chileno decidía en contra de las demandas populares. También mencionaba las deplorables condiciones económicas del pueblo chileno y la precariedad de recursos financieros del estado chileno, atribuida a la gravitación de los intereses del capitalismo extranjero. Señalaba la acción de distorsión realizada por la oligarquía chilena que sumada a la del imperialismo no permitían que el gobierno solucionara los problemas de Chile. La voluntad del pueblo no era respetada, sus principales fuerzas políticas habían sido destruidas o divididas y se había permitido el avance de los conservadores(104). A su vez, un editorial de Clarín atribuía la presunta campaña antiargentina que había estallado en Chile a resentimientos que generaba la preeminencia internacional de la Argentina(105). La Epoca responsabilizaba al "imperialismo negrero" de las publicaciones sensacionalistas de "la prensa subvencionada" en Uruguay, Brasil, Chile y Colombia, en la que se pretendía presentar a Perón "como perturbador de la tranquilidad continental y ambicioso de predominio"(106). Asimismo ejemplos semejantes aparecieron en Democracia (18-11-1948; 2-12-1948), El Mundo (2-12-1948; 9-12-1948), Crítica (30-11-1948), La Razón (1-12-1948), El Laborista (18-11-1948; 27-11-1948), Clarín (20-11-1948) y otras publicaciones. El diario La Nación de Buenos Aires asumió una posición más moderada, al decir que era necesario aguardar el fallo de los tribunales chilenos antes de hacer apreciaciones de las supuestas complicaciones y que confiaba en que la tradición internacional argentina de no injerencia en los asuntos internos de otros países no hubiera sido contrariada(107).

3.3. El dictamen del fiscal militar

El 30 de noviembre la prensa chilena publicó el dictamen del fiscal militar José Nogués Larraín que involucraba en el asunto del complot contra el gobierno a diplomáticos argentinos. Por ese medio el embajador argentino tomaba conocimiento de la grave

acusación contra personal a su cargo. El telegrama secreto que envió inmediatamente a sus superiores expresaba:

En el mismo aparecen mencionados por sus nombres nuestro ex cónsul en Concepción y actual primer secretario de esta embajada Luis Zervino así como también el cónsul general argentino Roberto Tixi Massa. Dejo constancia que ambos han protestado verbalmente y por escrito ante mí por su inclusión en dictamen que reputan como una calumnia y que nunca se les pidió en el mes que ha durado la substanciación del sumario ni oficial ni particularmente que ofrezcan descargo. También se hace mérito de una circular que se dice que circuló entre oficiales del Ejército Argentino según la cual la Argentina debe llegar a ejercer tutoría en América mediante genio político y heroísmo del Ejército Argentino. También dejo constancia que la Cancillería de Chile no me hizo la menor prevención sobre publicidad que iba a dar a este asunto./.../ Considero seria situación que crea esta acusación a menos que el gobierno de Chile pueda probarla fehacientemente. He ordenado absoluta reserva a todo el personal de esta Embajada y Consulado./.../(108).

El mismo día 30 a la mañana, el canciller chileno Germán Riesco solicitó y obtuvo una entrevista con el embajador argentino a quien comunicó que el primer secretario de su embajada había perdido la confianza del gobierno de Chile y que solicitaba su retiro. El canciller fundamentaba el pedido en el dictamen del fiscal referente al complot y, si bien no abría juicio sobre la culpabilidad o inculpabilidad de Zervino, le merecían fe las manifestaciones del general de Carabineros que lo acusaba. El embajador contestó que transmitiría el pedido de inmediato, pero hizo notar que "la medida se basaba en una declaración unilateral de un señor general de Carabineros". También llamó la atención del canciller sobre el hecho de que las presuntas actividades del secretario Zervino no hubiesen sido puestas en su conocimiento, tan pronto como surgiera la acusación en el sumario y que hubiera tenido que enterarse de ella por los diarios. El canciller chileno contestó al embajador que recién la noche anterior había tenido "noticia vaga de la acusación que formulaba el fiscal contra funcionarios consulares argentinos y que sólo en las primeras horas de ese día se había enterado del texto del dictamen por los diarios". El embajador deducía que Riesco "comprendía bien, al decir algo que no puede ser cierto, que su deber hubiera sido informarme previamente antes de dar a la publicidad el dictamen". El embajador aconsejaba a sus superiores dilatar el traslado del diplomático un tiempo prudencial para que la prensa no pudiera decir que el gobierno de Chile lo había expulsado del país(109). La cancillería argentina decidió que correspondía su retiro porque el pedido se ajustaba a la práctica internacional(110) y el diplomático partió hacia Buenos Aires el 15 de diciembre(111).

El fiscal militar explicitaba su línea de razonamiento. Dado que el presunto jefe de la conspiración, Vergara Montero, se había negado a revelar el origen, el alcance y el cabal significado de la conspiración, el tribunal se había visto obligado

sobre la base del mérito que arroja el proceso y de las informaciones que ha recibido a través de la prensa, a deducir del panorama general de la República y de la situación internacional del continente, los probables

orígenes del movimiento subversivo(112).

En primer lugar, la fiscalía se había planteado la posibilidad de que un descontento político más o menos generalizado pudiera haber justificado una tentativa, por parte de un grupo de militares y civiles, de derrocar por la fuerza al gobierno legalmente constituido. Esta hipótesis fue rechazada porque se consideró que el gobierno tenía una firme base de sustentación política y que la opinión pública no anhelaba reemplazar a los gobernantes. Tampoco aceptó el fiscal que el movimiento tuviera un carácter meramente militar dado que el gobierno había permitido a las fuerzas armadas desarrollar funciones económicas y políticas. Por último, el fiscal había investigado la probable inspiración comunista del movimiento, pero había concluido que, si bien habían preparado el terreno propicio, al minar la disciplina de las fuerzas armadas, no eran los comunistas los directos responsables del plan subversivo. Descartadas las mencionadas posibilidades, el fiscal expresaba que "solo resta pensar que este movimiento estuviese sincronizado con los que en la misma época han estallado o han abortado en otros países latinoamericanos"(113).

El fiscal militar llegaba a la conclusión de que el movimiento subversivo destinado a derrocar al gobierno chileno y reemplazarlo por otro presidido por el general Ibáñez, estaba inspirado desde la Argentina, y en íntima sincronización con otros similares en diversos países latinoamericanos. Para ello se basaba en los siguientes hechos:

1) En las reuniones de suboficiales se había dicho que el futuro gobierno abriría el comercio con la Argentina, que su jefe sería el general Ibáñez porque era amigo de Perón y que el general Berguño estaba en Buenos Aires, estudiando el régimen de Perón y buscando su apoyo. En las circulares repartidas entre el personal de Carabineros, se hacía hincapié en un acercamiento al régimen argentino y en un pronto estudio de un tratado con dicha nación(114). Debe recordarse aquí que éstos también habían sido señalados por el embajador argentino en su informe a la cancillería como los propósitos del movimiento.

2) Las declaraciones atribuidas al primer secretario de la embajada argentina Luis Zervino y al cónsul general de la Argentina Roberto Tixi Massa en el sentido de que era necesario cambiar el actual gobierno de Chile por otro de carácter militar. El secretario Zervino había sido acusado ante el fiscal militar por el general de Carabineros Manuel Alvear Figueroa, quien supuestamente le había escuchado decir que la situación interna de Chile

era grave y que esto solo se arreglaría con un gobierno de carácter militar, como el implantado en la Argentina, y que se habría impuesto que había en Chile un movimiento revolucionario militar para derrocar al actual presidente, al que él estima inepto para tan alto cargo, que esta situación no podía durar mucho y que yo, como un jefe culto y patriota, debería interesarme en tomar parte en el movimiento que sería la salvación de Chile(115).

Del mismo modo, la declaración del general del ejército Teófilo Gómez Vera expresaba que el cónsul argentino Tixi Massa, durante un almuerzo, luego de elogiar al gobierno de su país, se había

extendido con énfasis sobre las ventajas y beneficios que significaba tener un soldado a la cabeza del gobierno y en lo provechoso y conveniente para los países de América latina de tener gobiernos militares(116).

3) Dos informes, el de la Dirección General de Investigaciones, que llegaba a la conclusión de que el movimiento habría estado inspirado por nacionalistas extranjeros, y el del comandante en jefe del Ejército, que también concluía que habría habido influencias de elementos ajenos a la nacionalidad chilena, convicción que se basaba "en el conocimiento de los propósitos de hegemonía política y económica sobre Sudamérica de ciertos grupos ideológicos cuya pública e insistente exteriorización tiene /.../ todo el carácter de una amenaza". Se tenía en cuenta también una circular que había sido repartida entre jefes y oficiales del Ejército Argentino en mayo de 1943 y que decía que la Argentina debía llegar a ejercer la tutoría de América mediante el genio político y el heroísmo de su ejército(117).

4) El hecho de que el jefe de la delegación chilena ante las Naciones Unidas, Joaquín Fernández y Fernández, hubiera sido interrogado, por uno de los delegados argentinos en París, acerca de "si sabía de algún movimiento político contra la estabilidad del gobierno chileno", doce horas antes de que se supiera algo sobre el complot investigado(118).

5) La formación en Buenos Aires de la asociación Acción Argentino-Chilena presidida por el ex canciller Ríos Gallardo e integrada por elementos de filiación nacionalsocialista, cuya finalidad no se explicaba el fiscal en vista de la existencia del Instituto Chileno-Argentino de Cultura(119).

6) La declaración del brigadier Luis Ernesto Cerda, el cual manifestó que unos individuos, con acento extranjero y que viajaban en un automóvil con patente de Mendoza, le propusieron participar en un movimiento destinado a derrocar al gobierno y reemplazarlo por otro presidido por el general Ibáñez(120).

Como respuesta a las acusaciones del fiscal militar de Chile, la cancillería argentina emitió una declaración, el 2 de diciembre, en Buenos Aires, firmada por el subsecretario político Pascual La Rosa. Se decía en ella que el gobierno argentino seguía "la trayectoria tradicional argentina de no injerencia en los asuntos internos de los estados" y que esa línea de conducta le permitía "rechazar las imputaciones formuladas en cuanto ellas puedan aparecer como inspiradas en las esferas oficiales argentinas o siquiera sea toleradas por las mismas". Se aclaraba que las deducciones del dictamen mencionado, derivadas de impresiones subjetivas, no habrían necesitado esa declaración, de no haber sido por el pedido de retiro del secretario de la embajada Zervino. Se afirmaba que por las informaciones que hasta ese momento obraban en poder de la cancillería, las expresiones atribuidas al señor Zervino "no son verdaderas". Por último se aclaraba que "la obra de acercamiento espiritual y cooperación real en que están empeñadas las autoridades argentinas, se basan en el más sagrado respeto a la soberanía de las naciones hermanas y en el principio de la igualdad jurídica de los estados", por lo cual, lo sucedido en Chile "no puede ser ni aun veladamente adjudicado a influencias interpuestas por personas allegadas a círculos oficiales de nuestro país"(121). El gobierno chileno

pidió al embajador argentino que informara cuál era el alcance de la declaración formulada en Buenos Aires por el subsecretario La Rosa(122).

Un memorándum secreto redactado el día 3 por el subsecretario La Rosa, para información de la embajada argentina en los Estados Unidos, mostraba al gobierno argentino seguro de que las imputaciones contra sus diplomáticos no podrían ser comprobadas. Se aconsejaba analizar los cargos porque

se fundamentan en factores subjetivos, carentes de todo elemento concreto. Las declaraciones que aparecen, y que afectan a funcionarios argentinos, son unilaterales: no se han verificado, ni oficiosa ni oficialmente(123).

Se señalaba también que la deducción final del dictamen, en el sentido de que el complot había sido inspirado por la Argentina, estaba "basado en meras hipótesis"(124). En cuanto a la forma en que el gobierno argentino "tomaba el asunto", expresaba:

nuestra situación es cómoda, y podemos en consecuencia utilizar un lenguaje sobrio y no obstante conciliatorio. Obramos en un terreno ventajoso que nos permite no caer en la polémica -lo que constituiría un grave error- y a pesar de ello dejar entrever claramente el apresuramiento con que obró el gobierno chileno, o en todo caso la falta de franqueza con que actuó con respecto a un gobierno amigo, que tuvo que enterarse por los diarios de los cargos que se formulaban a funcionarios de su servicio exterior(125).

Se instruía a la embajada decir que los temas de la intromisión extranjera eran delicados y que no era difícil desatar una campaña de ese tipo, lo que se hacía muchas veces para consolidar a las figuras públicas o para hacer olvidar los problemas de orden interno. Luego agregaba:

En el fondo, el ataque a la Argentina no tiene otra causa. En Chile -como puede deducirse del estudio del anexo 7-, se necesita agitar cualquier problema internacional, o crearlo si no existe. Ayer era la cuestión de las bases en la Antártida y las dificultades que tuvieron con los ingleses; hoy es la cuestión con la Argentina(126).

Se recomendaba que lo dicho anteriormente debía ser deducido por los círculos interesados, sin que la representación argentina colaborara para ello en forma visible. Finalmente, afirmaba:

La pretendida intromisión argentina en Chile, no existe, y debe ser rotundamente desmentida. Lo mismo se aplica en cuanto a la pretendida intromisión argentina en otros países del continente. Que allí se hable de las doctrinas que aquí se aplican, no significa que haya intervencionismo, sino en todo caso que los pueblos admiran el ejemplo que la Argentina les brinda. Eso no es intervencionismo, aunque los gobiernos que pudieran sentirse afectados, lo llamen así(127).

3.4. El informe del director general de Investigaciones

Cuando todavía no se habían aquietado los ánimos por la cuestión

suscitada por las revelaciones del informe del fiscal militar, éste entregó a la prensa el informe que le había elevado el director de Investigaciones Luis Brun D'Avoglio. Este documento intentaba probar que los recientes sucesos ocurridos en Chile no podían considerarse un episodio aislado en el continente, y que los grupos nacionalistas estaban intercomunicados y trabajando simultáneamente en los distintos países para establecer gobiernos totalitarios. Deducía que

intereses argentinos, inspirados en motivos de orden histórico, político, económico y militar sueñan con lo que muchos de ellos han denominado la restauración del antiguo virreinato del Río de la Plata cuya cabeza fue Buenos Aires(128).

En opinión de Brun, los nacionalistas argentinos retomaban la línea históricamente antinorteamericana; era "al servicio de esta idea de levantar una Argentina poderosa en contra de los Estados Unidos de Norteamérica" que aquéllos proclamaban "la necesidad de eliminar la pesada y compleja marcha de las democracias que, con sus parlamentos engorrosos y partidos políticos díscolos o indóciles", trababan "todo plan de acción para alcanzar este sueño de dominación del cono austral de nuestra América"(129).

El informe llamaba luego la atención sobre "la sustancial debilidad económica de la Argentina", empecinada "en convertirse en nación industrial pese a la carencia de las materias primas básicas de toda industria" como hierro, cobre, carbón y petróleo, que en cambio poseían sus vecinos. Esa era considerada la razón del empeño de la Argentina en celebrar tratados de comercio con ellos. Se señalaba además que

la crisis suscitada por la falta de mercados para sus productos de exportación podía haber enardecido los propósitos o deseos de los grupos nacionalistas citados, en el sentido de urgir la obtención de esas materias primas por el derrumbe de los regímenes democráticos que no lo habían permitido, reemplazándolos por dictaduras militares capaces de llegar a rápidos arreglos(130).

Se hacía referencia también a una supuesta preocupación argentina por su situación geográfica frente a un eventual conflicto con Brasil, hecho que la estaría llevando a asegurarse gobiernos amigos, no solo en Chile, sino también en Bolivia, Paraguay y Perú. Estos antecedentes explicarían, en opinión de Brun, el inusitado interés del régimen argentino por encontrar ecos favorables en el exterior. Y agregaba:

Ningún gobierno latinoamericano, hasta ahora, había dispensado tantas energías en concitarse amigos y servidores fuera del propio ámbito nacional. Por primera vez nuestro continente encuentra una propaganda costosamente organizada, ostentosamente suntuaria, que adquiere radios o compra audiciones en las mismas, que reparte gratuitamente publicaciones de lujo, que paga publicaciones periodísticas, que invita a huéspedes de honor con viaje y estada pagados, que sorteas como premios de certámenes el traslado a Buenos Aires y que derrocha pródigamente el dinero para ganarse el afecto de los ciudadanos de los pueblos vecinos(131).

El informe Brun analizaba luego las actividades de la organización Acción Chileno-Argentina a la que acusaba de haber intentado usar la subversión para derribar al régimen constitucional y procurar la instauración de un gobierno de facto, a merced de influencias foráneas. Se mencionaban sus principales miembros, entre los cuales figuraban varios de los acusados como implicados en el golpe y las alternativas que había tenido desde su primera constitución oficial el 15 de abril de 1948(132). Entre las actividades de la institución se incluía el viaje a Buenos Aires, en el mes de septiembre, de una delegación que, en representación de Acción Chileno-Argentina, se había entrevistado con Perón y con el canciller Anadón y había asistido a la sesión inaugural de Acción Argentino-Chilena, celebrada el 18 de septiembre(133). Asimismo, el 10 de octubre, la Acción Chileno-Argentina, a pesar de haberse declarado disuelta o en receso, había realizado una velada cultural y procedido al reparto de algunos premios donados por Perón, consistentes en pasajes de ida y vuelta a Buenos Aires con estadía paga en esta ciudad. La reunión había sido presidida por el embajador argentino. También se señalaban como significativas las actividades desarrolladas por Emilio Gutiérrez Herrero, secretario general de la Unión Cívica Nacionalista Argentina, quien había sido invitado por el Frente Nacional Chileno y que había llevado además la representación oficial de Víctor Paz Estenssoro, líder del Movimiento Nacionalista Revolucionario de Bolivia y la del Partido Nacionalista del Uruguay. El objetivo de Gutiérrez Herrero habría sido consolidar el Movimiento Nacionalista de Iberoamérica, para lo cual había celebrado numerosas reuniones. En la más importante, realizada el 6 de septiembre, se había firmado el "Acta de emancipación política y económica de Iberoamérica". Paralelamente Gutiérrez Herrero había mantenido contactos con los miembros de la Acción Chileno-Argentina, uno de los cuales había sido un almuerzo en su honor(134).

Cabe recordar aquí que Emilio Gutiérrez Herrero había encabezado a fines de 1941 la fundación de la Unión Cívica Nacionalista argentina, una escisión de la Alianza de la Juventud Nacionalista. En septiembre del año siguiente, quebrando una tradición del movimiento nacionalista, la UCN se había convertido en partido político. Su primer manifiesto, en lugar del slogan habitual "Dios, Patria y Hogar" había aparecido precedido por la frase "Soberanía, Recuperación Económica y Justicia Social" que pocos años después se transformaría en el lema de Perón: "Soberanía Política, Independencia Económica y Justicia Social". La UCN postulaba un estado nacional-sindicalista, económicamente independiente y libre del control del capitalismo internacional. En asuntos internacionales, dicho estado cultivaría relaciones con América latina y establecería su hegemonía sobre el continente contra todos los imperialismos extrahemisféricos. Las posibilidades con que este grupo contaba, especialmente entre los sindicatos, se vieron interrumpidas por el golpe de junio de 1943(135). A su vez, la Alianza, de la cual se había separado la UCN, sostenía como postulados la intención de destruir la ineficaz estructura democrática de la Argentina y organizar un estado corporativo basado en la representación funcional. En dicho estado, nacionalista y ético, cuya religión oficial sería el catolicismo, se disolverían los partidos políticos, y se limitarían las libertades individuales y la propiedad privada en función de los intereses superiores de la nación. La economía sería colocada bajo control del estado, se nacionalizarían los

servicios públicos y se frenaría al capitalismo internacional, para que la Argentina alcanzara su independencia económica. Se postulaba también una reforma agraria para que quienes trabajaran la tierra pudieran poseerla, y asegurar así la "justicia social", elemento esencial del estado nacionalista. En el plano de las relaciones internacionales la nueva Argentina fortalecería en especial sus vínculos con las naciones latinoamericanas(136).

El informe Brun llamaba la atención sobre las actividades de los agregados obreros a la embajada argentina, Juan Pallas y Nicolás Varas, quienes solo concurrían a "determinadas charlas y conferencias" y "no a otras", que por la índole de las materias tratadas debían tener interés en oír. El 8 de octubre habían asistido a una conferencia de un tal Sadonic Agüero que era amigo de Ibáñez y de Cox Chavez, con lo cual se los intentaba relacionar con personas presuntamente implicadas en el golpe(137). Por último, se insistía en demostrar la conexión de Gutiérrez Herrero con Paz Estenssoro y las actividades de éste con el objetivo de crear intranquilidad en Bolivia. A su vez, se mencionaba la relación de Paz Estenssoro con el coronel peruano Alfonso Llosa, que había conspirado en su país y era miembro del gobierno revolucionario. De todo lo anterior Brun concluía que "una fuerte ligazón con amplios recursos mancomuna a los grupos que, en diferentes partes de América, aspiran al reemplazo de la democracia por regímenes dictatoriales bajo el imperio del partido único"(138).

El embajador argentino López Muñiz envió el 10 de diciembre una carta al director del diario El Imparcial como respuesta al informe del director de Investigaciones, publicado por ese medio. "Protesto, decía, ante el tribunal de la opinión pública chilena por los siguientes cargos, de que se hace mérito, sin fundamentos valederos, en el citado informe". Mencionaba entre ellos el afán de involucrar, solo en base a presunciones, al gobierno argentino en las presuntas actividades de los grupos nacionalistas, para probar que era el responsable de conmociones políticas en distintos países; la mención de un eventual conflicto entre la Argentina y el Brasil para crear un clima de hostilidad hacia la Argentina; la imputación de que el gobierno argentino habría subvencionado a la organización Acción Chileno-Argentina; la tergiversación de la cuestión del tratado entre ambos países que había sido solicitado por Chile y no por la Argentina; la presencia del embajador en un acto, que no había presidido éste, sino el ministro de Educación de Chile y que había tenido su contrapartida en Buenos Aires, con la presencia del embajador chileno. Por último, dejaba librado "el resto del informe a la apreciación del culto y hospitalario pueblo chileno", cuya amistad con el argentino consideraba indestructible(139).

El embajador López Muñiz entendía que cabía presentar una protesta ante el gobierno de Chile "por tratarse de un informe confidencial de la dirección de Investigaciones al fiscal que ya ha dictaminado y no se justifica el afán publicitario sino con miras al escándalo continental y descrédito de nuestro gobierno"(140). En la nota posterior a sus superiores que acompañaba el envío del informe Brun, el embajador afirmaba que asentaba "conclusiones de extraordinaria arbitrariedad, que es oportuno y conveniente leer con atención para profundizar en el móvil real que las ha dictado"(141).

Una nueva acusación contra otro diplomático argentino, el cónsul Roberto Bruni, adjunto al consulado general en Santiago, complicó todavía más la situación. Esta vez el informe dado a publicidad por el fiscal militar era el entregado por el coronel de Carabineros Guillermo Galindo, el cual señalaba que durante una comida, el 29 de octubre, el cónsul había manifestado: "lamento que ustedes no puedan contar también con un Perón, ya que la mal encaminada política de González Videla no admite en este país el desarrollo de una verdadera democracia como en la Argentina"(142). La cuestión había sido tratada por el canciller Riesco y el embajador argentino unos días antes y éstos habían acordado mantenerla confidencialmente; la publicación de la noticia por la prensa hizo pensar al embajador en la posibilidad de que las sucesivas provocaciones tuvieran como finalidad la ruptura de relaciones entre los dos países. En consecuencia, el embajador volvió a proponer si no debía presentarse, por vía de la cancillería argentina, una enérgica nota de protesta "en base al dictamen del fiscal militar, la forma como se procedió a pedir el retiro del señor Zervino, la publicación del informe del director general de Investigaciones y este quebrantamiento del carácter confidencial que tenía el asunto que motiva esta nota". Todo eso era sin perjuicio del cambio de destino que debía darse al cónsul adjunto Bruni, que estaba en uso de licencia(143).

El día 12 el canciller Riesco envió a la prensa una comunicación en la que solicitaba a los medios "que no hagan publicaciones sensacionales, a las cuales se pueda atribuir carácter internacional, acerca del proceso que se instruye por la abortada conspiración militar". Señalaba que no era conveniente que se publicaran documentos (aunque ya no fueran secretos y cuya publicación no pudiera impedir el gobierno) si, al hacerlo, se dañaban las relaciones con los países amigos. Se aclaraba, sin embargo, que la prensa era libre y que la policía u otros servicios dependientes del Ejecutivo podían decir lo que les pareciera justo, sin comprometer por eso ni al presidente, ni a su canciller(144). Al embajador argentino le pareció "un tibio pedido, cuando el gobierno dispone de la ley de Facultades Extraordinarias para impedir los desmanes de la prensa si hubiera querido hacerlo" y lo juzgó, además, tardío porque se formulaba cuando "ya no queda escándalo por hacer"(145).

Después de una entrevista con el ministro Riesco, el 13 de diciembre, el embajador López Muñiz creyó notar "la iniciación de un cambio favorable en la situación general hacia nosotros", tanto desde el punto de vista oficial como en lo referente a las publicaciones de la prensa. El ministro lamentó la publicidad dada por la prensa al caso del cónsul Bruni y dio a entender que era deseo de su gobierno llegar a soluciones amistosas en todo el asunto relacionado con el complot descubierto. En consecuencia, el embajador aconsejaba a sus superiores un compás de espera en cuanto a su proposición anterior de presentar la nota de protesta(146).

3.5. Reacciones por el informe Brun

Las acusaciones del informe Brun dieron lugar a varias desmentidas. El senador Jaime Larraín negó haber participado de un almuerzo con el jefe del nacionalismo argentino Gutiérrez Herrero, a quien dijo no conocer. Por su lado, la embajada de Perú entregó

un comunicado oficial protestando contra el informe Brun, respecto de la mención del comandante Llosa, miembro de la junta de gobierno de Perú, como vinculado a las actividades revolucionarias de Chile. También fue negada por un hermano de Llosa la supuesta entrevista que éste habría tenido en Buenos Aires con Paz Estenssoro(147).

El ex presidente de la república y en ese momento presidente del Senado, Arturo Alessandri, censuró al director de Investigaciones Brun en una carta dirigida al canciller Riesco, que luego dio a publicidad. Decía en uno de sus párrafos:

El informe del jefe de Investigaciones, con fina y malévola tendencia, es un documento encaminado precisamente a aquel fin, es decir a procurar que se acepte y crea que desde la República Argentina se ha estado cooperando oficialmente al estallido de un complot dirigido para derrocar al gobierno constitucional de Chile. Revisando cuidadosamente el informe no se encuentra ningún hecho de los que se citan, absolutamente ninguno, que siquiera remotamente contribuya a justificar la tesis malévola y falsa que se pretende probar(148).

Asimismo, en la cámara de Diputados de Chile, el conservador Enrique Cañas Flores criticó al director de Investigaciones por haber dado a publicidad un informe que debió haber sido confidencial y por la índole del mismo, que "no solamente no señala hechos concretos, sino que se refiere a algunos manifiestamente falsos, o a insinuaciones, o a sentar juicios que no le corresponden". En su opinión, Brun ponía obstáculos a la amistad chileno-argentina y comprometía toda la hermandad del continente, por lo que pedía para él una sanción de la cámara(149). El embajador argentino consideró que este discurso merecía amplia difusión en la Argentina porque, junto con la carta del presidente del Senado Arturo Alessandri, constituía la defensa más vigorosa de la Argentina procedente "de fuente chilena insospechable", pues el diputado Cañas Flores pertenecía al partido Conservador que apoyaba al gobierno. A pesar de las críticas al funcionario Brun y la moción de censura votada en la cámara, el presidente González Videla le ratificó su confianza(150).

A su vez, la revista nacionalista Estanquero acusó al presidente González Videla de la actitud escandalosa asumida por la prensa chilena, responsabilizando también por la situación al ministro Riesco. Pedía además una desautorización de las manifestaciones de los funcionarios chilenos que habían comprometido a su país y la admisión del error al que había sido arrastrado el gobierno chileno por la posición en que había quedado Chile respecto de la Argentina. El embajador argentino no creía que el gobierno fuera a hacer desautorizaciones ni declaraciones de esa naturaleza. Las palabras de la revista le daban pie para asumir un tono triunfalista: "se ha jugado una partida y se ha perdido. Nosotros hemos salido gananciosos pero debemos estar alerta por cuanto podría presentarse el deseo de una revancha"(151). No queda claro qué era lo que daba por ganado el embajador. Si bien algunos personajes importantes de la política chilena habían cuestionado la actitud del presidente, en realidad habían sido pocas voces. El embajador daba la cuestión por ganada porque había indicios de que el asunto comenzaba a diluirse.

Con todo, el presidente González Videla, en un discurso pronunciado en Concepción, el 17 de diciembre de 1948, siguió insistiendo en su tesis de la "conspiración continental antidemocrática de neofascistas y comunistas en la América latina". Reiteró que la conspiración militar fracasada para arrojarlo del poder "estuvo alentada desde afuera por elementos contagiados con los últimos estertores del fascismo internacional". "Fascistas reconocidos, con el concurso de políticos de figuración subalterna y elementos comunistas, formaron una pandilla que pretendía asaltar el poder" y a su lado influían "fuerzas doctrinarias extrañas a nuestra república", explicó el presidente. Confirmó el hecho de que personas extrañas a la comunidad chilena aparecieran mezcladas en la cuestión, proclamando principios contrarios al sistema democrático chileno y alentando a oficiales de las fuerzas armadas y de Carabineros de Chile a participar en movimientos sediciosos. También hizo referencia a "la serenidad y entereza con que la prensa de Chile, en su totalidad, ha soportado el desfogue pasional de los diarios de una nación amiga" y criticó a aquéllos que rasgaban sus vestiduras hablando de amistad internacional quebrantada, cuando pocos meses atrás habían constituido barreras infranqueables respecto del tratado con la Argentina. Por último expresó que a pesar de las desavenencias pasajeras seguiría tratando de conservar ese inapreciable valor que era la paz entre los americanos(152). El embajador argentino explicó que el presidente insistía en esa interpretación "en circunstancias que toda la opinión seria de Chile le atribuye la responsabilidad directa del incidente diplomático"(153).

3.6. La sentencia del juez militar

El 21 de diciembre se dio a conocer la sentencia dictada por el juez militar general Santiago Danús Peña en el proceso del complot. El texto completo de la misma apareció publicado al día siguiente. El ex presidente Carlos Ibáñez fue absuelto. Ramón Vergara Montero fue condenado a 4 años de destierro y 10.000 pesos de multa, y otras 20 personas a penas que oscilaban entre 541 días de confinamiento en Chile y destierro por 4 años. Todos los convictos fueron privados de sus derechos políticos por toda la vida(154). En telegrama secreto a su cancillería el embajador argentino afirmaba que en los considerandos de la sentencia aparecían citados el ex secretario Zervino, el cónsul Tixi Massa y el cónsul Bruni; también aparecía transcrita íntegramente la proclama que supuestamente había circulado en mayo de 1943 entre la oficialidad argentina. De esos elementos se deducía que había existido inspiración foránea en el frustrado golpe chileno, pero no se daba por probado que algún gobierno en particular pudiera ser señalado responsable. El embajador argentino consideraba que "había méritos suficientes para exigir al gobierno chileno una declaración explícita de que no se solidarizaba con las acusaciones que formulaba el juez militar"(155). La cancillería argentina se tomó su tiempo para enviarle las instrucciones del caso al embajador, pues la respuesta que debía darse a éste fue tratada recién en un memorándum para información del subsecretario La Rosa, con fecha 22 de enero de 1949, y consistió en que el embajador no debía formular "ningún comunicado o aclaración al respecto, sin recibir previamente instrucciones de la cancillería"(156).

En realidad, el juez militar, después de mencionar como antecedentes las intervenciones de los diplomáticos y de los nacionalistas argentinos, llegaba a la conclusión que "la evidencia era insuficiente para presumir que las influencias foráneas del complot emanaban de gobiernos extranjeros o de determinados grupos; tampoco podía concluirse que tales gobiernos o grupos hubieran inducido a la acción a los acusados en este juicio"(157). El pedido de una declaración al gobierno chileno, que pretendía hacer el embajador argentino, estaba de más, como probablemente juzgó la cancillería, porque el juez militar había puesto las cosas en su lugar: las declaraciones de los diplomáticos, en el sentido de que era deseable un cambio en el gobierno chileno, habían existido, pero habían sido meras opiniones de carácter individual y no eran suficientes para inculpar al gobierno argentino de intentar derrocar al presidente de Chile.

El cónsul Tixi Massa, como consecuencia de la publicación del fallo del tribunal militar, quiso dar a publicidad, en Chile, dos cartas que le habían sido enviadas por el general Víctor Labbé Vidal y por Enrique Quiroga M. La primera de dichas cartas desmentía las declaraciones del general Teófilo Gómez Vera en el sumario instruido por la justicia militar chilena respecto de las manifestaciones del cónsul Tixi Massa. El embajador transmitió a la cancillería la solicitud de autorización, en razón de que existía orden de abstenerse de hacer cualquier clase de declaración o de publicación(158). La respuesta, en este caso, también fue enviada un mes más tarde, el 25 de enero, expresando que "esta cancillería no considera conveniente que sea llevado a la práctica el propósito enunciado por el doctor Tixi Massa"(159).

El gobierno chileno no quedó conforme con el fallo del juez militar Danús Peña. El abogado Osvaldo Fuentes Ramos, representante del ministerio del Interior de Chile ante la corte marcial, declaró a la agencia United Press que consideraba que las absoluciones decretadas en favor del ex general Carlos Ibáñez y del ex mayor Gerardo Illabaca eran indebidas, porque estimaba que estaban seriamente comprometidos en el fracasado complot. El auditor letrado del juzgado militar Bravò Ríos apelaría dichas sentencias(160), decisión que también tomaron casi todos los condenados.

3.7. El fallo definitivo de la suprema corte militar

El 24 de enero de 1949 el embajador argentino comunicaba el fallo definitivo de la corte marcial en el proceso del complot. El fallo desechaba la presunción de que ese movimiento hubiera podido obedecer a una inspiración extranjera. El embajador argentino juzgaba, satisfecho, que "por primera vez un organismo oficial ha emitido un pronunciamiento objetivo y categórico respecto a las aventuradas presunciones que expusieron el informe del jefe de Investigaciones Brun D'Avoglio y el fiscal Nogués/.../". La corte marcial no daba siquiera por establecido, en opinión de López Muñiz, que funcionarios extranjeros hubieran tenido expresiones o actitudes impropias, señalando que únicamente podía presumirse semejante calificación de los antecedentes fiscales y afirmaba textualmente que

tales antecedentes no son bastantes para formar la convicción

de que las indicadas expresiones o actitudes hayan obedecido a consignas, instrucciones o simplemente inspiraciones de gobiernos o de grupos extranjeros determinados, ni que hayan constituido el móvil de acción de los procesados(161).

Por otra parte, el embajador llamaba la atención sobre la actitud de la prensa de Chile, que en su momento había acogido "con hospitalidad sospechosa en sus páginas, encabezándolos con llamativos titulares y dándoles el énfasis de un aserto, a los infundados documentos del fiscal Nogués" y que en este caso publicaba "en lugar poco destacado el fallo, omitiéndolo algunos diarios, entre ellos La Nación, que pertenece al estado como se sabe". Este matutino publicaba, en cambio, un editorial procurando establecer la independencia que mantenían los poderes judiciales de Chile(162).

Una semana después, el embajador López Muñiz percibió una reacción en la prensa chilena. Informó de críticas al manejo de la información llevado a cabo por la dirección de Informaciones y Cultura de la presidencia de la República, a las afirmaciones del informe Brun e inclusive a la actitud del presidente González Videla en la emergencia. De la reseña de los comentarios de los diarios, el embajador creía poder concluir que se había procedido con "precipitación e inescrupulosidad" y que el objetivo había sido "desprestigiar a nuestro país y a la oposición de Chile, y de lograr el apoyo financiero de los Estados Unidos"(163).

El embajador daba el asunto por terminado, pero lamentaba que esto hubiera ocurrido "sin que en los mismos gobernantes chilenos, existiese el menor propósito de dar una satisfacción por lo acontecido". No parecía ecuánime su apreciación porque tampoco hubo la menor intención de presentar una disculpa por parte del gobierno argentino ante las expresiones de ineptos funcionarios que proclamaban los defectos del gobierno ante el cual estaban acreditados y las ventajas que podrían derivarse de su reemplazo por otro de carácter militar. López Muñiz juzgaba que el gobierno del presidente González Videla

ha procedido y sigue procediendo en forma irresponsable en materia de política exterior, subordinando las buenas relaciones que deben existir entre los pueblos hermanos del continente a los mezquinos intereses de la política local /.../(164).

Pero, si bien era cierto que al presidente chileno convenía la introducción de una cuestión internacional en la política interna, para distraer la atención de los problemas económicos, lograr mayor cohesión y apoyo popular y probablemente tener un motivo para pedir ayuda para su democracia amenazada, también el embajador argentino era responsable de la falta de control del personal a su cargo, cuya conducta, en definitiva, había sido la causa directa de toda la cuestión con la Argentina. La manera en que reaccionó el gobierno chileno y todo el uso político que hizo del asunto hubiera sido semejante, en caso de haber sido Perón el destinatario de los comentarios de diplomáticos extranjeros. El embajador extraía, además, una última e inaudita conclusión: la conducta del presidente chileno se había basado en

la creencia de que las momentáneas dificultades económicas por que atravesamos, serían mucho más decisivas y que

traerían el caos y la revuelta en el país, con la consecuencia de la caída del propio general Perón. Esa idea tan falsa llevó al presidente González Videla a contribuir con todo su esfuerzo a esa presunta caída; esto revela la falla moral del "estadista" que hoy gobierna este país y es una amarga lección que no debe olvidarse con facilidad para que los altos y generosos propósitos que animan a nuestro presidente no sean aprovechados con tan bajas miras de política interna y externa(165).

El curioso razonamiento del embajador argentino lo llevaba a querer minimizar la importancia de las expresiones de los diplomáticos argentinos y, en cambio, a juzgar absurdamente la actitud del presidente chileno, al punto de querer hacerlo aparecer como buscando la caída de Perón. Si, a pesar de lo expresado por los diplomáticos argentinos, no podía derivarse de ello que el gobierno argentino hubiera apoyado un golpe contra el presidente chileno, menos pruebas existían todavía de que éste hubiera tenido en sus planes el derrocamiento de Perón. El embajador pretendía dar a la cuestión una dimensión mucho mayor de la que en realidad había revestido, con el agravante de que ello podría generar confusión en la cancillería argentina respecto de los asuntos chilenos.

3.8. Los Estados Unidos ante la situación chilena

Como se ha visto, la embajada norteamericana en Santiago comunicó al departamento de Estado los rumores del complot y los posibles implicados, casi un mes antes de conocerse los hechos oficialmente. Inmediatamente después de descubierto el movimiento, los representantes militares norteamericanos en Chile enviaron una comunicación a los departamentos de Estado, Ejército, Marina y Fuerza Aérea de su país, analizando las probables causas. Los agregados militares atribuían lo ocurrido a la insatisfacción de las fuerzas armadas por los bajos sueldos y la falta de equipamiento. Con todo, observaban que el gobierno también tenía motivos para los arrestos, tales como la preocupación derivada de las revoluciones en Perú y Paraguay y el deseo de justificar la extensión de los poderes especiales del presidente, tema que iba a ser tratado el 3 de noviembre por el Congreso. Afirmaban también que el presidente y el ministro de Defensa habían hecho precisos esfuerzos de carácter confidencial para convencer a la embajada norteamericana de que la Argentina estaba implicada. Por otra parte, señalaban la alta estima de que gozaba Ibáñez entre muchos militares, especialmente entre los de caballería y carabineros y también el hecho de que el presidente del partido Agrario-Laborista Jaime Larraín hubiera expresado públicamente su confianza en que Ibáñez y Vergara fueran hallados inocentes y, a la vez, acusado al gobierno en el Senado de "fabricar conspiraciones". Por último, se comunicaba que en el ámbito estrictamente militar, el descubrimiento había provocado la cancelación de las maniobras de la Fuerza Aérea y la renuncia del comandante en jefe de la Marina(166). Los observadores norteamericanos coincidían en cuanto a las posibles causas del movimiento con los de la embajada argentina, sin embargo, no mencionaron la corrupción existente entre los hombres de gobierno y en niveles altos de las fuerzas armadas chilenas, que los segundos valoraron como causa del complot.

El tema del complot en Chile y sus posibles conexiones con la Argentina fue tratado en un memorándum del departamento de Estado(167). Se consignaban aquí los contactos de Carlos Ibáñez con el gobierno argentino desde 1942 cuando se había dirigido a Buenos Aires tras ser implicado en un abortado golpe. También se mencionaba la ayuda financiera que en diciembre de 1943, según el Libro Azul, Perón habría acordado proveer a un golpe proargentino en Chile. Los norteamericanos suponían que el gobierno chileno de ese entonces había descubierto algo sobre el plan porque, a fines de diciembre, el entonces ministro del Interior Hiriart había denunciado "un complot de inspiración foránea" para derrocar al gobierno y simultáneamente varios funcionarios argentinos, que visitaban Chile en esos momentos, fueron invitados a retornar a su país. Entre las personas sospechosas de estar conectadas con el plan figuraban Vergara Montero e Ibáñez, quienes supuestamente asumirían cargos en un "ministerio de salvación nacional". Con todo, Ibáñez era considerado un político demasiado astuto para enredarse con elementos tan antidemocráticos, aunque se señalaba el hecho de que en 1944 aquél viviera en la casa de su yerno, Osvaldo Koch Krefft, un notorio abogado pronazi, según los norteamericanos. También se consignaba que en agosto de 1944 el vicealmirante chileno J. A. Rodríguez había dicho al agregado naval norteamericano que Ibáñez tenía estrechas relaciones con el gobierno Farrell-Perón, manteniendo un constante intercambio de correspondencia a través de correos privados. El general Berguño, el almirante Gerken (ambos expulsados de las fuerzas armadas en 1943) y el general Manuel Tovarías, jefe de la Fuerza Aérea, eran considerados partidarios de Ibáñez y proclives a participar en un intento revolucionario en su favor. Rodríguez también había afirmado que Conrado Ríos Gallardo, ex embajador en la Argentina, era un hombre de Ibáñez y "trabajaba más por los intereses de la Argentina que los de Chile".

El mencionado memorándum señalaba la posible conexión del partido Agrario-Laborista con el complot por varios motivos: Vergara Montero era candidato a senador por el partido y algunos de sus miembros estaban muy relacionados con Carlos Ibáñez y con elementos pronazis en Chile. El presidente del partido, Jaime Larraín, había sido presidente de la Legión Cívica Chilena, que en 1940 se había opuesto activamente a romper relaciones con el Eje. En 1944 se había mencionado a este grupo como alineado con el partido de Ibáñez, la Alianza Popular Libertadora. En 1947 Ibáñez había sido candidato a senador por el partido Agrario Laborista porque su partido no había resultado viable. También se recordaba que los agrario-laboristas estaban entre los principales partidarios en Chile del "Movimiento pro unión latinoamericana" o de "unión continental iberoamericana", que la cancillería chilena y también oficiales navales consideraban de inspiración argentina y antinorteamericana. La rama chilena del movimiento tenía un directorio intercambiable con Acción Chileno-Argentina, encabezado por Ríos Gallardo y que incluía al general Berguño y a Ernesto Barros Jarpa, el ministro de Relaciones Exteriores chileno que se había unido a la Argentina en la oposición a una ruptura con los países del Eje(168). Por otro lado, el embajador Bowers había obtenido del presidente González Videla en la entrevista mantenida el 23 de noviembre la promesa de entregarle detalles del golpe militar cuando la investigación estuviera terminada, incluida la implicación de los cónsules y diplomáticos argentinos, lo que no sería dado a publicidad(169).

Otros informes de la embajada norteamericana al departamento de Estado consignaron la actitud asumida ante el abortado complot por el presidente del Senado, Arturo Alessandri, en virtud de su prestigio político y del respeto que merecía su figura al embajador. Alessandri expresó en el Senado que Chile no era lugar para dictadores, condenó el golpe subversivo frustrado y censuró cualquier tipo de golpe. No obstante reconoció que el alto costo de la vida para la clase media y baja contribuyeron a la promoción del mismo, así como la falta de respuesta a los aumentos de sueldo para los funcionarios públicos y los miembros de las fuerzas armadas. Dijo no poder creer las imputaciones de la complicidad de la Argentina en el complot porque tenía bien fundados antecedentes para pensar que Perón era no solo un buen amigo de Chile, sino también un hombre respetuoso de los deseos de otros pueblos. Caracterizó a Perón como "un gran espíritu americanista", que deseaba unir a los pueblos y los gobiernos de América en una acción común para preservar la paz(170).

El senador Alessandri tenía un gran peso político en Chile y su opinión de la inocencia de Perón podía tener enorme proyección en el país, pero su pronunciamiento coincidió con el otorgamiento por el gobierno argentino de la "Orden del Libertador" a su persona, que algunos interpretaron como simple coincidencia y otros como el motivo de su encendida defensa. Perón y Alessandri intercambiaron telegramas. Perón le expresó gratitud por la defensa y le aseguró que no tenía interés en los asuntos internos de otros países; le devolvía los elogios llamándolo "el más ilustre americanista y el más grande hombre de Chile de nuestro tiempo"(171). En su respuesta Alessandri agradeció a Perón su amistad con Chile y su "firme resolución de nunca contribuir en manera alguna a perturbar la estabilidad de las instituciones de Chile y de su gobierno". El asunto dio lugar a que la prensa satírica mostrara a Alessandri cambiando su discurso sobre la marcha en virtud de la noticia de su condecoración. Hubo otras opiniones como la que señaló que el discurso de Alessandri y el anuncio de la mencionada condecoración habían sido incidentales(172), o aquella que indicó que Alessandri había pronunciado su discurso para quedar bien con los militares en el caso de que un nuevo golpe militar tuviera éxito(173).

Asimismo, el embajador norteamericano transmitió los conceptos expresados por un conservador tradicionalista, Enrique Lira, que luego fueron discutidos en el propio departamento de Estado. Lira estaba asombrado de que su país hubiera alcanzado un estado de tanta intranquilidad en tan poco tiempo y creía que, si Chile quedaba rodeado de dictaduras militares, como podía ocurrir si se producía la caída de Bolivia, su país necesitaría alguna demostración pública de solidaridad por parte de los Estados Unidos. Lira afirmaba haber recibido información del presidente González Videla en cuanto a la falta de evidencia de que los conspiradores militares hubieran recibido ayuda financiera de la Argentina, aunque el presidente creía que los funcionarios argentinos habrían dado su apoyo moral al movimiento, presumiblemente con la promesa de una actitud benevolente en cuanto a asistencia económica posterior al establecimiento del gobierno militar; la investigación por el golpe implicaba definitivamente a funcionarios de Perón en Chile. Lira afirmaba que tanto él como el presidente percibían que la facilidad con que los gobiernos constitucionales habían sido derrocados en Perú y Venezuela creaba una situación peligrosa para Chile, pues esas

tendencias se expandían entre los militares(174).

El político chileno sostenía que el presidente González Videla había sido capaz de controlar la situación, pero ésta no estaba aún exenta de peligros; el intento de golpe podía repetirse en las siguientes semanas. Si para febrero no se había producido, era probable que el tramo final de la campaña electoral para las elecciones de marzo lo desalentara. La embajada concordaba con Lira en que la situación del presidente no era tan sólida como dos meses atrás. Lira afirmaba que la insatisfacción era básicamente económica por los sacrificios demandados al pueblo chileno, la falta de créditos para los agricultores e industriales y los bajos sueldos de empleados públicos y miembros de las fuerzas armadas. Pero en su opinión la ola de fáciles revueltas militares en otros países, que no había pasado desapercibida ante los jóvenes oficiales militares, colaboraba en fomentar la intranquilidad. Concordando con tal diagnóstico de situación, el embajador transmitía un pedido del presidente chileno de que sería altamente deseable algún gesto de apoyo a su gobierno por parte de los Estados Unidos. La razón para que los Estados Unidos realizaran un acto tal eran, para el diplomático norteamericano, los esfuerzos que Chile hacía en esa parte del mundo para mantener un gobierno democrático. La respuesta no debía ser diferida(175).

El departamento de Estado afirmaba no saber, a comienzos de diciembre, si los cargos contra el gobierno argentino eran ciertos o no. "En cuanto a los varios cargos contra la Argentina, yo contesté que no estábamos en posición ni de confirmarlos, ni de refutarlos" dijo uno de sus funcionarios a un representante de la prensa francesa. Este había planteado la posibilidad de que el gobierno chileno estuviera usando el tema de la influencia foránea -el año anterior había sido la actividad subversiva comunista en las minas de carbón y ahora se trataba de una injerencia argentina- para obtener apoyo interno y afrontar su inestabilidad(176). La introducción de una cuestión internacional de manera intencional por el gobierno chileno también fue sostenida por el encargado de negocios de Perú en Chile, quien afirmaba que la Argentina tampoco había tenido nada que ver con el reciente golpe en Perú(177), y por los diplomáticos argentinos(178).

La situación de Chile fue considerada en otro memorándum del departamento de Estado del 17 de diciembre, redactado como apoyo para una reunión propuesta por el embajador de Chile Félix Nieto del Río, quien quería tratar, al regreso de su subordinado Mario Rodríguez de una misión secreta a Brasil y Uruguay, la cuestión de la solidaridad de los países democráticos americanos. Aparece en este documento reflejada la información enviada por el embajador Bowers, resultado de su conversación con Lira. Los cinco subtítulos del mismo estaban redactados en forma de pregunta. El primero inquiría si la democracia en Chile estaba amenazada y la respuesta era que sí. Se señalaba como principal amenaza a la situación económica y política interna, tal como lo había comunicado el embajador. La exigencia de sacrificios a todos los sectores sociales había llegado a tal punto que "hay muchos en Chile que considerarían bienvenido un cambio -algunos de ellos cualquier tipo de cambio". También, como lo señalara Lira, se mencionaban como amenazas el factor militar y el psicológico, representados por los éxitos militares en la toma del poder en Perú, Venezuela y El Salvador. Se tenía presente la estimación

del político chileno en el sentido de que un tercio de los oficiales del ejército, inferiores a coronel, apoyarían un golpe. Por otro lado, se consideraba un dato importante el hecho de que la opinión pública chilena hubiera recibido las revelaciones de la conexión argentina con el golpe con apatía, lo que indudablemente iba a ser tenido en cuenta por los militares(179).

La segunda cuestión que se planteaba el departamento de Estado era qué acciones de parte de los Estados Unidos podría sugerir Chile. Se preveían varias: dilatar el reconocimiento de los nuevos regímenes militares, contar con el apoyo de los Estados Unidos en su lucha contra el peligro de golpe militar, aumentar las actividades de entrenamiento de la misión de aviación norteamericana -poniendo aviones a disposición de Chile sin que fueran comprados por el país-; la visita de algún alto funcionario para dar imagen de respaldo, y las sugerencias del embajador Bowers de mandar un escuadrón aéreo o un crucero(180).

En tercer lugar, se otorgaba respuesta afirmativa a la pregunta respecto de si los Estados Unidos debían hacer algún acto para respaldar la democracia chilena. En cuarto término, se analizaba la factibilidad de las acciones propuestas por el presidente González Videla y por el embajador Bowers. La posición que el departamento asumiría frente a las seis proposiciones era: a) se le debía dar a Chile y a las demás repúblicas que no hubieran reanudado relaciones con Venezuela por lo menos cuatro días de aviso cuando los Estados Unidos decidieran hacerlo; b) transmitir al gobierno chileno que los Estados Unidos deseaban llevar a cabo cualquier acto que tuviera un efecto de respaldo a Chile, coherente con la política de amistad hacia todas las repúblicas americanas y que no contradijera los compromisos de no intervención; c) los Estados Unidos estaban preparados para expandir su misión de aviación en Chile pero la respuesta debía ser negativa si Chile proponía tener aviones a su disposición sin comprarlos; d) la propuesta de enviar un alto funcionario al efecto de apoyar al país se consideraba posible, si se hallaba la persona indicada(181), pero se cuestionaba la efectividad de tal medida para hacer cambiar de opinión a jóvenes oficiales supuestamente listos a tomar el poder en Chile; e) y f) se consideraba que la visita a Chile tanto de una escuadrilla de aviones como de un crucero serían totalmente inefectivas en cuanto a disuadir a los jóvenes militares de intentar el golpe(182).

Por último, se analizaban otras posibilidades de ayuda, considerándose que una invitación al presidente chileno para visitar los Estados Unidos fortalecería su posición y la democracia en Chile, siempre que pudiera ser acordada en el futuro cercano. Se sugería hacer pública la advertencia de que existían distintos grados en la amistad de los Estados Unidos con otros gobiernos, con el fin de marcar la diferencia entre aquellos países con gobiernos democráticos y dictatoriales(183).

En síntesis el departamento de Estado consideraba que la democracia estaba amenazada en Chile y que era conveniente llevar a cabo algún acto para respaldarla, pero prácticamente se rechazaban todas las acciones propuestas por el presidente chileno o por la embajada norteamericana en Chile que no fueran las puramente retóricas. No se dejarían de reconocer los nuevos gobiernos surgidos de los golpes militares, no se cederían aviones militares en los términos deseados por Chile, no se enviaría ni la

escuadrilla militar ni el crucero a los puertos chilenos; Chile tendría todo el apoyo siempre que fuera sin violar la política de amistad para "todas las repúblicas americanas" y los compromisos de no intervención. En definitiva, Chile recibiría las seguridades de que la amistad hacia ese país permanecía inalterable y probablemente se invitara a su presidente a visitar los Estados Unidos. Parecía poca cosa para un país que estaba luchando por mantener la democracia en esa parte del mundo. Si bien era cierto que actos de esa naturaleza no iban a cambiar la posición de los jóvenes oficiales chilenos dispuestos a derrocar al gobierno, parecía no tenerse en cuenta la causa profunda de todos los problemas de Chile, que era, como reconocía el memorándum, su situación económica; tampoco se proponía ninguna manera de llevar a la práctica la solidaridad de los países democráticos americanos.

Conclusión

El intento de golpe de estado que el gobierno de Chile abortó a fines de octubre de 1948 tuvo como causa principal la interacción de diversos factores en el ámbito de la política interna de ese país:

- 1) La falta de respuesta del gobierno del presidente González Videla a la crítica situación económica que afectaba a todos los sectores sociales, especialmente a los empleados públicos y miembros de las fuerzas armadas.
- 2) El desprestigio de la actividad política. La población percibía la ineficiencia de los políticos y sus partidos para resolver los problemas de fondo.
- 3) Las graves denuncias de corrupción que afectaban a hombres de la política y también de las fuerzas armadas dieron motivo para la aparición de grupos mesiánicos que se consideraban destinados a mejorar la moral pública y sacar al país del caos.
- 4) Los virajes políticos del presidente González Videla que habiendo llegado al poder con el apoyo de los comunistas, luego decidió combatirlos, para lo cual obtuvo la sanción de leyes represivas. Estas fueron causa de arbitrariedades que sirvieron para aumentar el descontento y la división de los partidos.
- 5) Las huelgas que debía soportar constantemente la población que alteraban su vida normal y provocaban paros en los servicios públicos y escasez de productos elementales.

El presidente González Videla llegó al poder en Chile cuando se había producido un cambio importante en el mundo, los Estados Unidos habían cambiado su enemigo principal -hasta ese momento el fascismo- por el comunismo. El hecho de que González Videla llegara a la presidencia apoyado por los comunistas, y éstos obtuvieran tres ministerios en el gabinete, produjo alarma y preocupación en el gobierno norteamericano. En abril de 1947, una misión chilena que fue a recabar ayuda económica para el país en los Estados Unidos fracasó por completo. Por distintas vías -el embajador norteamericano, los ejecutivos de las empresas norteamericanas-, el departamento de Estado hizo saber a Chile que

debía tomar medidas contra el comunismo en el país.

El presidente comprendió las dificultades que tendría que afrontar de persistir en su alianza con el comunismo y decidió abandonarla. Tomó medidas muy drásticas -expulsión de los ministros del gabinete, cesantía de todos los empleados públicos, facultades extraordinarias para sí mismo, ley de Defensa de la Democracia, exclusión de votantes comunistas del padrón electoral, prohibición de presentarse a elecciones para el partido Comunista, etc.-, las cuales a su vez provocaron la polarización de la opinión pública chilena y la de la mayoría de los partidos políticos, con lo cual se agudizó la inestabilidad del gobierno. La percepción de que los Estados Unidos se desentendían de los problemas de Chile provocó el giro de varios partidos políticos hacia una posición neutralista en política exterior.

Las influencias provenientes de los países vecinos trabajaron en favor del complot. Los golpes de estado que llevaron al poder gobiernos militares en Perú, Venezuela, Paraguay y en la Argentina (que tenía un gobierno elegido democráticamente pero cuyo origen había sido también un golpe militar) demostraban que el retroceso de la democracia parecía ser la tendencia en la región.

Frente a este panorama fue inevitable que algunos grupos observaran la evolución de la Argentina, que parecía en ese momento gozar de una prosperidad envidiable. Como afirmara Bray, los grupos nacionalistas chilenos fueron, paradójicamente, los más receptivos a las políticas que se estaban aplicando en el país vecino; éstos bien pudieron pensar que lo mejor para Chile era seguir un camino semejante al recorrido por la Argentina desde 1943.

Si el papel de la Argentina hubiera sido simplemente paradigmático, como pretendía demostrar la cancillería argentina a través de sus representaciones, no podría ser objetado. Pero el hecho de que agentes consulares de este país instaran a altos jefes de las fuerzas armadas de Chile a participar en un complot militar contra el gobierno legalmente constituido no fue una falta menor y constituyó una forma de injerencia en los asuntos internos de Chile. El indicio de que esas declaraciones se habían producido se halla en que el embajador argentino pusiera el acento en el procedimiento utilizado por el gobierno chileno de no comunicar el problema a la embajada antes de su publicación y en la falta de pruebas pero no en que aquéllas no fueran ciertas. El affaire era una consecuencia de la fuerza expansiva que pretendía darse al justicialismo y de la labor de propaganda que instrumentaba el régimen de Perón. La actitud del embajador de no atribuir la debida gravedad a la conducta de sus subordinados y considerar la actitud del gobierno chileno como parte de un plan continental en contra de Perón demostraba una gran falta de realismo.

Resulta evidente que el gobierno chileno trató de extraer rédito político de la cuestión del complot para derrocarlo, dado que inclusive la fecha en que fue hecho público estaba relacionada con el tratamiento por el Congreso de la extensión de las facultades extraordinarias del presidente. A la vez, la transformación del problema en una cuestión internacional era funcional al gobierno de González Videla para detener las críticas y nuclear a la oposición en respaldo del gobierno constitucional.

El asunto le era doblemente útil porque servía además de argumento para solicitar asistencia a los Estados Unidos para una democracia amenazada por el comunismo en lo interno y por los gobiernos totalitarios que se estaban instalando a su alrededor. La supuesta amenaza proveniente del régimen argentino no hacía más que continuar la línea impulsada por el departamento de Estado en la época de la guerra, lo cual facilitaba su usufructo por el gobierno chileno. Esta maniobra resultó efectiva porque Chile comenzó a recibir algunos créditos.

La desmesura se dio de ambos lados. El gobierno chileno cayó en ella al dar excesiva importancia a la influencia foránea en el golpe sin poder comprobarla, aunque las características del régimen peronista y la toma del poder por gobiernos militares en la región permitían deducirlo. La embajada argentina excedió la medida al considerar que el gobierno chileno había orquestado todo el asunto para provocar una campaña antiargentina y que ello merecía duras represalias. La cuestión en definitiva sembró el resentimiento en ambas partes y permitió que el gobierno y ciertos grupos políticos chilenos pudieran insistir en el argumento de la peligrosidad de la Argentina para la estabilidad institucional del país.

Notas

1. 825.50/7-1345, memorándum de Rockefeller al secretario de Estado.
2. 825.00/1-3147, Millard al secretario de Estado, informe político 141.
3. Informe reservado sobre el comunismo en Chile (hasta octubre de 1947), MREC, 1948, Chile, caja 6, exp. 1, anexo I.
4. 825.00/1-747, Bowers al secretario de Estado, informe político 140.
5. 825.00/4-2147, carta de Bowers a Braden.
6. 825.00/4-1747, Bowers al secretario de Estado, informe político 150.
7. Mujica Garmendia al ministro Bramuglia, 10 de abril de 1947, MREC, 1947, Chile, caja 4, exp. 1.
8. *Ibid.*
9. 825.00/3-647, carta de Bowers a Braden.
10. 825.00/4-1747, Bowers al secretario de Estado, informe político 150; 825.00/5-747, Bowers al secretario de Estado, informe político 152; 825.00/5-1347, Bowers al secretario de Estado. Un informe de la embajada argentina en Chile decía: "en lo internacional su asocio (sic) con el comunismo presentaba al gobierno chileno como una isla comunista en medio del continente, en el cual sus hombres más representativos, Perón, Truman, Dutra, habían levantado su voz para condenarlo; era el presidente de Chile, políticamente, virtual prisionero del comunismo y mal considerado por las fuerzas opositoras". Tascheret a Mathus Hoyos, 2 de septiembre de 1947, MREC, 1947, Chile, caja 4, exp. 1.
11. 825.00/3-3147, carta de Bowers a Braden.
12. 825.00/5-747, Bowers al secretario de Estado, informe político 152.
13. El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) surgido de los acuerdos de Bretton Woods, luego llamado Banco Mundial. Ver Robert A. Pollard, *La seguridad económica y los orígenes de la Guerra Fría (1945-1950)*, Bs. As., GEL, 1990, p. 23.
14. 825.00/4-1847, memorándum de conversación redactado por Braden.
15. *Ibid.* Un informe del agregado militar a la embajada norteamericana en Santiago hacía saber que el presidente deseaba el crédito no solo por la necesidad que el país tenía de él, sino también para obtener fuerza adicional en la futura lucha partidaria. El presidente señalaba con lógica -según el informante- que, si el préstamo fuera a ser otorgado de todas maneras, el momento crucial era ése; el funcionario norteamericano concluía que sin duda un préstamo inmediato tendría un efecto benéfico, especialmente si viniera como una recompensa por el despido de los comunistas, porque seguramente estabilizaría su gobierno y fortalecería su liderazgo dentro de su partido. 825.00/5-2047, informe adjunto del agregado militar.
16. *El Mercurio*, 2 de diciembre de 1948.
17. 825.00/4-2447, Bowers al secretario de Estado, informe político 151.
18. 825.00/6-1147, Bowers al secretario de Estado.
19. Mathus Hoyos al ministro Bramuglia, 12 de junio de 1947, MREC, 1947, Chile, caja 4, exp. 1.

20. 825.00/7-2447, telegrama de Bowers al secretario de Estado.
21. 825.00/7-2847, Bowers al secretario de Estado, memorándum de conversación entre Dunn y Ross.
22. 825.00/7-2447, Bowers al secretario de Estado, informe político 157.
23. 825.00/8-1247, Bowers al secretario de Estado, informe político 158.
24. 825.00/9-247, aerograma de Bowers al secretario de Estado.
25. Mathus Hoyos a Valenti, 9 de febrero de 1948, MREC, 1947, Chile, caja 4, exp.2, anexo I.
26. Memorándum "El conflicto minero", MREC, 1947, Chile, caja 4, exp. 1.
27. 825.00/10-3147, Bowers al secretario de Estado, documento adjunto N^o1.
28. 825.51/9-947, carta de Bowers a Armour.
29. 825.00/8-2147, Bowers al secretario de Estado.
30. 825.00/7-1648, Bowers al secretario de Estado.
31. 825.00/10-3147, Bowers al secretario de Estado, documento adjunto N^o1.
32. 825.00/9-247, aerograma de Bowers al secretario de Estado.
33. 825.00/3-448, Bowers al secretario de Estado.
34. 825.00/3-1848, Bowers al secretario de Estado.
35. López Muñiz al ministro Anadón, 11 de abril de 1948, MREC, 1948, Chile, caja 5, exp. 1.
36. López Muñiz al ministro Anadón, 15 de abril de 1948, MREC, 1948, Chile, caja 5, exp. 1.
37. 825.00/9-2948, memorándum de Davis para el archivo.
38. Para el partido Conservador: 825.00/3-2548, Bowers al secretario de Estado; 825.00/4-3048, *ibid.*; 825.00/5-2848, *ibid.*; 825.00/6-2348, *ibid.*; 825.00/7-1348, *ibid.*; 825.00/8-548, *ibid.* Para el partido Socialista: 825.00/1-2648, Trublood al secretario de Estado; 825.00/2-1348, *ibid.*; 825.00/3-848, Bowers al secretario de Estado; 825.00/5-1148, *ibid.*; 825.00/5-1148, documento adjunto N^o2; 825.00/6-1748, Bowers al secretario de Estado; 825.00/7-1648, *ibid.*
39. Informe de Llano a López Muñiz, 4 de mayo de 1948, MREC, 1948, Chile, caja 5, exp. 1.
40. Informe de Llano a López Muñiz, 20 de abril de 1948, MREC, 1948, Chile, caja 5, exp. 1.
41. 825.00/9-2948, memorándum de Davis para el archivo.
42. Memoria anual de la embajada argentina en Chile, MREC, 1948, Chile, caja 7, exp. 5.
43. *Ibid.*
44. *Ibid.*
45. 825.00/9-1548, embajada norteamericana en Santiago para la atención de OII.
46. 825.00/9-2948, memorándum de Davis para el archivo.
47. *Ibid.*
48. 825.00/5-1148, Bowers al secretario de Estado.
49. López Muñiz al ministro Anadón, 11 de abril de 1948, MREC, 1948, Chile, caja 5, exp. 1.
50. 825.00/7-2748, Bowers al secretario de Estado.
51. 825.00/7-2748, Bowers al secretario de Estado, documento adjunto N^o1, despacho 499. El embajador argentino López Muñiz menciona el pase a retiro del jefe del Estado Mayor del Ejército, general Carmona, a raíz de la insubordinación que significaba el haber elevado directamente al presidente un proyecto de ley de aumento general de sueldos por falta de apoyo en sus superiores y haberlo distribuido entre oficiales y suboficiales. López Muñiz al ministro Bramuglia, 21 de

- junio de 1948, MREC, 1948, Chile, caja 64, expediente "Representaciones argentinas en América".
52. López Muñiz al ministro Bramuglia, 21 de junio de 1948, MREC, 1948, Chile, caja 64, expediente "Representaciones argentinas en América".
 53. *Ibid.* Al presidente del Senado Arturo Alessandri se le había ofrecido la misión de ir a Buenos Aires con facultades discrecionales para tratar todas las cuestiones pendientes con la Argentina. El embajador atribuía gran importancia a estas gestiones pues podían "salvar quizás de la caída al presidente González Videla". El senador no había decidido todavía su aceptación.
 54. Donald Bray, "Peronism in Chile", en: *HAHR*, febrero de 1967, pp. 38-49.
 55. Tulio Halperín Donghi, *Historia contemporánea de América latina*, Madrid, Alianza, 1969, pp. 334-336.
 56. Donald Bray, *op. cit.*, p. 39.
 57. Ernest Wurth Rojas, *Ibáñez caudillo enigmático*, Santiago, Ed. del Pacífico, 1958, p. 203.
 58. *Ibid.*, pp. 203-209; Michael Potashnik, *Nacismo: National Socialism in Chile, 1932-1938*. Univ. de California, Ph.D., 1974, pp. 288-320.
 59. Michael Potashnik, *ibid.*
 60. *Ibid.*, pp. 330-335.
 61. Hubert Herring, *op. cit.*, p. 794; Ernest Wurth Rojas, *op. cit.*, pp. 211-214.
 62. Hubert Herring, *op. cit.*, p. 796; Ernest Wurth Rojas, *op. cit.*, pp. 216-218; Michael Potashnik, *op. cit.*, pp. 340-341.
 63. FW 825.00/9-1248, memorándum "Conexiones argentinas de personas implicadas en reciente complot revolucionario en Chile", 16 de noviembre de 1948.
 64. 825.00/10-148, aerograma de la embajada norteamericana en Chile al secretario de Estado.
 65. 825.00/11-248, Bowers al secretario de Estado.
 66. 825.00/10-2848, aerograma de Bowers al secretario de Estado.
 67. López Muñiz al ministro Sosa Molina, 3 de noviembre de 1948, MREC, 1948, Chile, caja 6, exp.1, anexo II: 1a. parte.
 68. Eran mencionados el general de la Fuerza Aérea Teodoro Ruiz Diez, pasado a retiro y detenido; el comandante de grupo y director de la escuela de Aviación Félix Olmedo; el director de la escuela de Artillería Antiaérea Mario Carrasco; el jefe de grupo Transporte No.1 Fernando Pardo. En el Ejército habían sido detenidos el teniente coronel Fernando Dubreuil, de la Academia de Guerra; el mayor Gerardo Ilabaca Figueroa, de la escuela de Aplicación de Infantería y el mayor Estanislao León, de la escuela de Unidades Motorizadas. También habían sido detenidos el teniente de sanidad doctor Oscar Jiménez, de la escuela de Infantería y el ciudadano Onofre Jarpa. Telegrama de López Muñiz al ministro, 6 de noviembre de 1948, MREC, 1948, Chile, caja 6, exp.1, anexo II: 1a. parte.
 69. López Muñiz al ministro Sosa Molina, 3 de noviembre de 1948, MREC, 1948, Chile, caja 6, exp.1, anexo II: 1a. parte.
 70. *La Prensa*, 6 de noviembre de 1948.
 71. *El Mercurio*, 6 de noviembre de 1948.
 72. 825.00/11-548, telegrama de Bowers al secretario de Estado.
 73. 825.00/11-648, telegrama de Bowers al secretario de Estado.
 74. *La Prensa*, 20 de noviembre de 1948.
 75. 825.00/11-848, Bowers al secretario de Estado.

76. *El Mercurio*, 8 de noviembre de 1948.
77. *Ercilla*, 9 de noviembre de 1948
78. *Ibid.*
79. 825.00/11-1548, Bowers al secretario de Estado.
80. *La Prensa*, 3 de diciembre de 1948.
81. *Ibid.*
82. *La Prensa*, 22 de diciembre de 1948.
83. *La Nación*, 22 de diciembre de 1948.
84. *La Prensa*, 23 de enero de 1949.
85. López Muñiz al ministro Sosa Molina, 3 de noviembre de 1948, MREC, 1948, Chile, caja 6, exp.1, anexo II: 1a. parte.
86. *Ibid.*
87. *Ibid.*
88. *Ibid.*
89. López Muñiz al ministro Sosa Molina, 8 de noviembre de 1948, MREC, 1948, Chile, caja 6, exp.1, anexo II: 1a. parte.
El embajador mencionaba el último de esos "affaires", un desfaldo de 20 millones de pesos chilenos o más, en los fondos reservados de la Marina de Guerra, que había traído como consecuencia el pedido de retiro del comandante en jefe de la Armada, almirante Emilio Daroch Soto, del vicealmirante Guillermo del Campo y del contralmirante Roberto Gillmore; también señalaba que el Banco Español acababa de protestar un cheque de la armada por 500 mil pesos chilenos, por falta de fondos.
90. 825.00/11-848, Bowers al secretario de Estado; *El Mercurio*, 7 de noviembre de 1948.
91. Los párrafos 20 y 70 del manifiesto que provocaron la protesta decían:

20. Que es evidente que en el continente se desarrolla una campaña antidemocrática, destinada a establecer dictaduras militares, de indiscutible tinte fascista, y que el asalto al poder constituido, consumado en el Perú, y las tentativas de este mismo orden, encaminadas a derrocar el gobierno constitucional de Bolivia, así como el movimiento sedicioso abortado en Chile, son ejemplos y la expresión de una política fascista, que perfectamente coordinada y orientada, al parecer por elementos próximos al régimen de gobierno que impera en la República Argentina, tiende a destruir la democracia en América.

70. Que junto con condenar el intento de subversión institucional, exhorta a los poderes públicos a resolver, sin demora, los problemas que afectan al pueblo, señalando también a las naciones de América la necesidad de unirse con la nuestra en un esfuerzo común para asegurar la subsistencia de los regímenes democráticos, de libertad y justicia social, evitando así los peligros del neofascismo. López Muñiz al ministro Sosa Molina, 8 de noviembre de 1948, MREC, 1948, Chile, caja 6, exp. 1, anexo II, 1a. parte. Subrayado en el original.

92. El manifiesto socialista había sido publicado en *La Opinión*, órgano del partido Socialista, y en *La Nación*, diario que reflejaba el pensamiento del gobierno.
93. López Muñiz al ministro Sosa Molina, 8 de noviembre de 1948, MREC, 1948, Chile, caja 6, exp. 1, anexo II, 1a. parte.
94. Nota de López Muñiz al ministro Riesco, Sgo., 8 de noviembre de 1948, MREC, 1948, Chile, caja 6, exp.1, anexo II:

- 1a. parte.
95. Comunicado de la embajada argentina firmado por López Muñiz, MREC, 1948, Chile, caja 6, exp.1, anexo II: 1a. parte.
 96. *La Prensa*, 10 de noviembre de 1948.
 97. López Muñiz al ministro Sosa Molina, 15 de noviembre de 1948, MREC, 1948, Chile, caja 6, exp.1, anexo II: 1a. parte.
El Mercurio también afirmó que la nota había sido entregada el día 9 y la respuesta del gobierno el 10, señalando que ambos documentos habían sido redactados en términos cordiales. *El Mercurio*, 10 y 11 de noviembre de 1948.
 98. 825.00/11-848, Bowers al secretario de Estado.
 99. López Muñiz al ministro Sosa Molina, 15 de noviembre de 1948, MREC, 1948, Chile, caja 6, exp. 1, anexo II: 1a. parte.
 100. *Las Noticias Gráficas*, 23 de noviembre de 1948.
 101. *El Mercurio*, 26 de noviembre de 1948.
 102. Esta afirmación se basaba en "indicios" tales como el silencio de la prensa respecto de la celebración del 17 de octubre en Chile, que había consistido en un banquete presidido por el embajador y al que habían sido invitados "cuanto dirigente obrero y mutualista existe en la capital de Chile". López Muñiz al ministro Sosa Molina, 15 de noviembre de 1948, MREC, 1948, Chile, caja 6, exp. 1, anexo II: 1a. parte.
 103. López Muñiz al ministro Sosa Molina, 15 de noviembre de 1948, MREC, 1948, Chile, caja 6, exp.1, anexo II: 1a. parte. Ultimas comillas en el original.
 104. Citado por *Las Noticias Gráficas*, 23 de noviembre de 1948.
 105. Citado por *Las Noticias de Ultima Hora*, 22 de noviembre de 1948.
 106. *La Epoca*, 2 de diciembre de 1948.
 107. *La Nación*, 6 de diciembre de 1948.
 108. Telegrama de López Muñiz al ministro, 30 de noviembre de 1948, MREC, 1948, Chile, caja 6, exp. 1, anexo II: 1a. parte.
 109. López Muñiz al ministro Sosa Molina, 30 de noviembre de 1948, MREC, 1948, Chile, caja 6, exp.1, anexo II: 1a. parte.
 110. Memorándum de La Rosa al ministro Sosa Molina, 3 de diciembre de 1948, MREC, 1948, Chile, caja 6, exp. 1, anexo II: 1a. parte.
 111. *La Nación*, 16 de diciembre de 1948.
 112. Informe del fiscal militar Nogués Larraín, 29 de noviembre de 1948, MREC, 1948, Chile, caja 6, exp. 1, anexo II: 2a. parte.
 113. *Ibid.*
 114. *Ibid.*
 115. *Ibid.*
 116. *Ibid.*
 117. *Ibid.* Rita A. Giacalone sostiene que el Departamento de Estado sabía en 1946 que dicha circular no había tenido su origen en el GOU sino en otro grupo dentro del ejército argentino que complotaba al mismo tiempo que aquél. Rita A. Giacalone, *op. cit.*, p. 3. Los opositores a Perón le dieron amplia amplia difusión y la presentaron como la expresión de las verdaderas intenciones del gobierno de facto de 1943 y del de su sucesor.
 118. Informe del fiscal militar Nogués Larraín, *op. cit.*
 119. *Ibid.*
 120. *Ibid.*
 121. Telegrama del subsecretario político a la embajada en Santiago, 3 de diciembre de 1948, MREC, 1948, Chile, caja 6, exp. 1, anexo II: 1a. parte.
 122. *La Nación*, 4 de diciembre de 1948.

123. Memorándum del subsecretario político La Rosa, 3 de diciembre de 1948, MREC, 1948, Chile, caja 6, exp. 1, anexo II: 2a. parte.
124. *Ibid.*, subrayado en el original.
125. *Ibid.*
126. *Ibid.*, subrayado en el original.
127. *Ibid.*, subrayado en el original.
128. Informe del director general de Investigaciones publicado en *El Imparcial*, Santiago, 9 de diciembre de 1948.
129. *Ibid.*
130. *Ibid.*
131. *Ibid.*
132. La primera organización se denominó Acción Cultural Chileno-Argentina. Formaron parte de su directorio: Carlos Sánchez Hurtado, secretario general; Sergio Onofre Jarpa Reyes, tesorero; Jorge Berguño Meneses, Jaime Larrain García Moreno, Carlos Keller Rueff y Guillermo Izquierdo Araya, todos directores. Fue disuelta en julio del mismo año por aparecer como sospechosa de organizar un complot; el informe suponía que esta institución había estado subvencionada por el gobierno argentino. *Ibid.*
133. El presidente de Acción Argentino-Chilena era el senador argentino Carlos Mathus Hoyos y entre sus directores estaba Marcelo Mujica Garmendia, ex funcionario de la embajada argentina en Chile. *Ibid.*
134. *Ibid.* Emilio Gutiérrez Herrero hizo una aclaración en el diario Clarín, el 23 de diciembre de 1948, afirmando que su viaje a Chile había sido a principios de septiembre de 1948, por invitación de amigos chilenos, con motivo de conmemorarse allí el décimo aniversario de la matanza de nacionalistas chilenos en Seguro Obrero. No se habló allí de plan revolucionario alguno. Inclusive, Gutiérrez Herrero recordaba que era secretario general de la Unión Cívica Nacionalista, movimiento nacional sindicalista que distaba de ser oficialista, lo que podía comprobarse por el juicio por desacato al presidente Perón que tenía en ese momento en la Cámara federal.
135. Marysa Navarro Gerassi, *op. cit.*, pp. 150-151.
136. *Ibid.*, p. 149.
137. La conducta de los agregados obreros a la embajada argentina en Chile trajo problemas a ésta. Un telegrama del 22 de diciembre de 1948 del embajador daba cuenta de la actitud de ambos funcionarios, que habían aceptado un homenaje de entidades obreras y mutualistas contrarias al gobierno de González Videla. El embajador explicaba que, por más que se quisiera presentar el gesto como espontáneo, las autoridades chilenas apreciarían que se trataba de una manifestación de desagravio por el ataque de que habían sido objeto en el informe del director general de Investigaciones. El agregado obrero Varas era el "verdadero organizador de este homenaje a sí mismo", hecho que el embajador consideraba altamente impolítico y que podía dar lugar a una nueva fricción con el gobierno de Chile, por lo cual le había prohibido su asistencia. El embajador afirmaba que por el temperamento impulsivo e indisciplinado del funcionario era aconsejable "su alejamiento urgente" de Chile antes que el gobierno chileno encontrara motivo para declararlo indeseable. El día 23 se respondió al embajador que debía disponer el inmediato regreso del agregado Varas. Telegrama de López Muñiz al ministro, 22 de diciembre de 1948, MREC, 1948, Chile, caja 7,

- exp. 6.
138. Informe del director general de Investigaciones, publicado en *El Imparcial*, Santiago, 9 de diciembre de 1948.
 139. *La Nación*, 11 de diciembre de 1948.
 140. Telegrama de López Muñiz al ministro, 10 de diciembre de 1948, MREC, 1948, Chile, caja 6, exp.1, anexo II: 1a. parte.
 141. López Muñiz al ministro Sosa Molina, 10 de diciembre de 1948, MREC, 1948, Chile, caja 6, exp.1, anexo II: 1a. parte.
 142. *La Nación*, 11 de diciembre de 1948; nota de Riesco a López Muñiz, 7 de diciembre de 1948, MREC, 1948, Chile, caja 6, exp. 1, anexo II: 1a. parte.
 143. López Muñiz al ministro Sosa Molina, 11 de diciembre de 1948, MREC, 1948, Chile, caja 6, exp. 1, anexo II: 1a. parte.
 144. *El Mercurio*, 12 de diciembre de 1948.
 145. López Muñiz al ministro Sosa Molina, 13 de diciembre de 1948, MREC, 1948, Chile, caja 6, exp. 1, anexo II: 1a. parte.
 146. López Muñiz al ministro Sosa Molina, 14 de diciembre de 1948; nota de Riesco a López Muñiz, 13 de diciembre de 1948, MREC, 1948, Chile, caja 6, exp. 1, anexo II: 1a. parte.
 147. *La Prensa*, 14 de diciembre de 1948.
 148. *La Nación*, 15 de diciembre de 1948.
 149. *La Prensa*, 16 de diciembre de 1948.
 150. López Muñiz al ministro Sosa Molina, 17 de diciembre de 1948, MREC, 1948, Chile, caja 6, exp. 1, anexo II: 1a. parte.
 151. López Muñiz al ministro Sosa Molina, 20 de diciembre de 1948, MREC, 1948, Chile, caja 6, exp. 1, anexo II: 1a. parte.
 152. *La Nación*, 17 de diciembre de 1948.
 153. López Muñiz al ministro Sosa Molina, 17 de diciembre de 1948, MREC, 1948, Chile, caja 6, exp. 1, anexo II: 1a. parte.
 154. *La Nación*, 22 de diciembre de 1948.
 155. Telegrama de López Muñiz al ministro, 23 de diciembre de 1948, MREC, 1948, Chile, caja 6, exp. 1, anexo II: 1a. parte.
 156. Memorándum para información del subsecretario La Rosa, 22 de enero 1949, MREC, 1948, Chile, caja 6, exp.1, anexo II: 1a. parte.
 157. 825.00/1-1049, Trueblood al secretario de Estado.
 158. López Muñiz al ministro Bramuglia, 24 de diciembre de 1948, MREC, 1948, Chile, caja 6, exp. 1, anexo II: 1a. parte.
 159. La Rosa a López Muñiz, 25 de enero de 1949, MREC, 1948, Chile, caja 6, exp. 1, anexo II: 1a. parte.
 160. *La Prensa*, 8 de enero de 1949.
 161. López Muñiz al ministro Bramuglia, 24 de enero de 1949, MREC, 1948, Chile, caja 6, exp. 1, anexo II: 1a. parte.
 162. *Ibid.*
 163. López Muñiz al ministro Bramuglia, 7 de febrero de 1949, MREC, 1948, Chile, caja 6, exp. 1, anexo II: 1a. parte.
 164. *Ibid.*
 165. *Ibid.*
 166. 825.00/11-548, aerograma de la embajada norteamericana en Chile al secretario de Estado. El discurso de Jaime Larraín en el Senado fue publicado por *El Mercurio*, 4 de noviembre de 1948.
 167. FW 825.00/9-1248, memorándum "Conexiones argentinas de personas implicadas en reciente complot revolucionario en Chile", 16 de noviembre de 1948.
 168. *Ibid.*
 169. 825.00/11-2348, telegrama de Bowers al secretario de Estado.
 170. 825.00/11-2648, Bowers al secretario de Estado.
 171. *Ibid.* Perón aclaró que había habido solamente un caso de un

político chileno que se le había acercado buscando asistencia para trabajar contra el gobierno de González Videla y que el ministerio de Relaciones Exteriores de Chile había sido debidamente informado. Perón indicó que esa persona era un líder del ala derecha del partido Socialista. *Ibid.*

172. *Ibid.*
173. 825.00/11-3048, Bowers al secretario de Estado.
174. *Ibid.*
175. *Ibid.*
176. 825.00/12-248, memorándum de conversación entre Davidson y Davis.
177. 825.00/12-748, aerograma de Bowers al secretario de Estado. Según el embajador Bowers, el encargado de negocios Carpio habría cambiado de opinión, pues un mes antes había sostenido lo contrario.
178. Memoria anual de la Embajada argentina en Chile, Santiago, 17 de marzo de 1949, MREC, 1948, Chile, caja 7, exp. 5.
179. 825.00/12-1748, memorándum de Mills a Woodward.
180. *Ibid.*
181. Se analizaban varios candidatos y se concluía que el más apropiado era el vicepresidente electo quien, en caso de aceptar, debía partir inmediatamente después de Navidad y hacer por lo menos un enérgico discurso en pro de la democracia en Chile.
182. *Ibid.*
183. *Ibid.*

Capítulo 4

La Argentina, ¿una amenaza para la democracia chilena?

Al comenzar el año 1949, como ya vimos, se conoció el fallo de la Suprema Corte Militar chilena que absolvió al general Carlos Ibáñez del Campo y consideró que no había pruebas suficientes para las supuestas implicaciones del gobierno argentino en el asunto. Esta resolución, recibida con beneplácito en Buenos Aires, pudo ser el comienzo de un mejoramiento de las relaciones chileno-argentinas. Sin embargo, tres hechos: el inesperado triunfo de Ibáñez como senador por Santiago, el intento de Chile de acusar a la Argentina ante la Organización de las Naciones Unidas como peligrosa para las democracias de la región, y una nueva campaña de los diarios peronistas, criticando al gobierno chileno por la represión de conflictos, reactualizaron la animosidad y las sospechas entre ambos gobiernos. En realidad, a partir del intento de implicación de la Argentina en el complot de octubre de 1948 y hasta el final de la presidencia de González Videla, la relación entre ambos países produciría actos inamistosos recíprocos.

Ya dijimos que la Argentina había sido acusada frecuentemente en los documentos del Departamento de Estado de albergar sentimientos racistas hacia otros países latinoamericanos y de aspirar al dominio económico del sur de Sudamérica(1). Más tarde, entrados los Estados Unidos en la guerra, a fines de 1941, el no alineamiento argentino provocó que encumbrados personajes del gobierno norteamericano hablaran de la "amenaza fascista" proveniente de la Argentina, de una Tercera Guerra Mundial que tendría su inicio en este país(2) y del expansionismo argentino(3). Cordell Hull, el secretario de Estado norteamericano de la época de la guerra, sostuvo haber recibido información sobre los planes detallados del círculo ultranacionalista del ejército en la Argentina, que incluían golpes de estado de derecha en países vecinos y la formación de un bloque antinorteamericano en Sudamérica(4). Asimismo, el régimen del presidente Edelmiro Farrell fue acusado por el gobierno norteamericano de implementar represalias económicas en contra de otras repúblicas americanas. Simultáneamente con dicha acusación, el presidente Roosevelt ordenaba a los jefes combinados de Estado Mayor que efectuaran las preparaciones necesarias para defender al Paraguay, al Uruguay y todos los estados vulnerables a un ataque argentino(5). Todo ello está siendo cuidadosamente reconsiderado para constatar si existían motivos válidos para sustentar dichas afirmaciones o éstas encerraban gruesas exageraciones producidas por las pasiones del tiempo de guerra. No obstante, debe tenerse en cuenta que dichas aseveraciones, ampliamente divulgadas, contribuyeron a conformar la opinión que muchos sectores políticos en distintos países latinoamericanos adoptaron -por convicción o por conveniencia- sobre la Argentina.

La idea de la agresividad potencial de la Argentina fue recogida por los países latinoamericanos, a quienes el argumento resultaba útil cuando necesitaban ayuda norteamericana o cuando aparecía la posibilidad de asistencia de los Estados Unidos a la Argentina(6). Pero también pudo tener sus sinceros denunciadores en un contexto, como bien ilustraban los informes presentados con

motivo del complot de 1948, de proliferación de golpes militares de derecha en la región, los cuales resultaban ideológicamente afines y mantenían contactos estrechos con el gobierno de la Argentina. Este panorama se agudizaba al no ocultar este gobierno el deseo de expandir su influencia por todos los medios a su alcance.

Por otra parte, los norteamericanos habían temido durante muchos años la organización de bloques regionales en América, en especial un bloque austral dominado por la Argentina, idea basada en la aspiración de reconstituir el antiguo virreinato del Río de la Plata. Sin embargo, a comienzos de 1948, aquéllos reconocían que no existían indicios de que la Argentina estuviera buscando el aumento de su territorio mediante la conquista. También detectaban la desconfianza regional hacia los Estados Unidos, aunque en ese momento les parecía que las naciones americanas preferían confiar en ellos antes que en la Argentina. Confiaban, además, en que la Argentina no tendría éxito en la creación del bloque austral si ellos conseguían fortalecer el sistema interamericano, su objetivo principal en esa época(7).

Asimismo, los norteamericanos analizaban la hipótesis de la amenaza militar de la Argentina. Sostenían que Uruguay y Brasil temían el poder argentino -sobre todo el primero-, pero, dado lo acordado en las conferencias de Chapultepec y Río, los demás países americanos no permanecerían indiferentes ante un acto de agresión de la Argentina, a más de que ésta no había producido acto alguno que indicara su deseo de atacar a un país vecino. A ello debía agregarse que, aún consiguiendo las armas y la ayuda en materia de industrialización militar que la Argentina pedía, ésta estaría muy lejos de constituir una amenaza militar para los Estados Unidos y por ende para algún país del hemisferio(8).

Todo lo anterior era producto de un análisis redactado por la embajada norteamericana en Buenos Aires, la cual intentaba de esa manera revertir anteriores posturas alarmistas de su gobierno(9), pero dejaba en claro la existencia de un temor de los países de la región al poder argentino. Como fuera que éste se hubiera generado, era en cierto modo una realidad y el caso era aplicable también a Chile, que tenía una extensa frontera común con la Argentina, con conflictos limítrofes todavía sin solucionar. El secretario asistente de Estado para Asuntos Latinoamericanos, Edward G. Miller, luego de una visita a la Argentina en febrero de 1950, advertía en un memorándum al subsecretario Webb que González Videla en su próxima visita a Washington "asaltaría al presidente norteamericano con la "típica letanía" de la amenaza de la Argentina para su seguridad. Miller decía no creer en tal cosa pero aconsejaba contestar que en ese caso lo mejor era que los Estados Unidos tuvieran buenas relaciones con la Argentina(10). A pesar de esto, un memorándum de Webb del 21 de abril de 1950 sostenía la existencia de telegramas recientes originados en Santiago y La Paz que planteaban "dudas inquietantes sobre las intenciones de Perón hacia otros países sudamericanos", lo que mereció una respuesta de Miller tratando de aventar el tema del peligro argentino(11). Una prueba de las aprensiones que existían respecto de la Argentina en las demás naciones latinoamericanas fue la cuidadosa anticipación a las mismas que debió realizar Washington cuando en esa época decidió otorgar un crédito a la Argentina(12). En este contexto, no fue pues extraño que algunas voces en Chile alertaran sobre la amenaza

que la Argentina representaba para el país.

1. La elección de Ibáñez como senador por Santiago

El general Carlos Ibáñez se presentó a la elección parlamentaria del 6 de marzo de 1949 como candidato del FRAS (en representación del partido Agrario Laborista) a senador por Santiago. La amplia victoria del general frente a destacadas figuras de la política chilena(13) debió ser un hecho difícil de aceptar para el presidente González Videla, en virtud de haber sido Ibáñez uno de los implicados en el abortado complot del año anterior y de sus conexiones con el gobierno argentino. Su triunfo se intentó explicar de varias maneras, pero hubo cierta coincidencia en señalar que significaba un repudio a la política oficial y una reivindicación por la acusación de que había sido objeto. Los norteamericanos creyeron ver en la elección el triunfo de un "totalitario, del tipo dictatorial", sin sentimiento alguno por la democracia, y que había recibido el apoyo de nazis y comunistas(14). Más aún, sostuvieron que su elección era la manifestación de que nazis y comunistas estaban trabajando juntos en contra de las instituciones democráticas de Chile(15), lo que les permitía prever la formación de una coalición entre ambos para las elecciones presidenciales de 1952(16). A la vez, el embajador norteamericano informó haber escuchado del presidente chileno y del conservador Eduardo Cruz Coke la imputación de que Perón, con quien Ibáñez había mantenido varias entrevistas en Buenos Aires, había enviado dinero para su candidatura(17).

Los observadores argentinos -a diferencia de los norteamericanos- adelantaron la posibilidad de que Ibáñez resultara electo. Como explicación de su triunfo, el embajador argentino señalaba la influencia que debió tener en los ciudadanos el fallo de la justicia militar que lo había liberado de culpa frente a las acusaciones de la propaganda oficial y el repudio de la opinión pública a la política interna y externa de González Videla. En su opinión, no había pasado inadvertida "la relación que el gobierno de Chile quiso establecer a toda costa /.../ entre el complot pretendidamente encabezado por el general Ibáñez y «las personas allegadas al gobierno de la República Argentina»"(18). El embajador concluía que la posición argentina respecto de Chile había mejorado con las elecciones(19).

En realidad, la elección de Ibáñez respondía a un avance de ideas nacionalistas populistas en Chile. En 1947, la convención del partido Agrario Laborista había establecido que el partido respaldaba una democracia funcional económica, fundada en la justicia social; una economía controlada formando parte integral del estado, y el establecimiento de economías complementarias entre los estados iberoamericanos(20). Al año siguiente, otra convención sostuvo que las fuerzas vitales del país debían intervenir en los asuntos de estado, especialmente en la guía de la economía nacional, y postulaba, además, la vuelta a los principios portalianos: gobierno impersonal; jerarquía, disciplina y autoridad; cumplimiento del deber y aplicación de la nacionalidad a través de la educación, la que debía diseñarse para imponer el concepto del estado; y honestidad(21). El PAL demostró su adhesión al hispanismo, al solicitar al gobierno, en octubre de 1948, la reanudación de las relaciones con el gobierno de Madrid y

la reconsideración por parte de Chile de su posición en la ONU (contraria a la incorporación de España)(22). Jaime Larraín, presidente del PAL, señalaba como objetivos del partido la recuperación de la independencia económica y la soberanía política de Chile y sostenía que una victoria de los agrario-laboristas en 1949 traería una solución a los problemas socioeconómicos del país(23). El triunfo de Carlos Ibáñez en marzo de 1949, representando estas ideas, evidenció una considerable aceptación de las mismas en sectores del electorado chileno y, dado que algunas de ellas habían sido puestas en práctica por el gobierno argentino, también la suposición de la existencia de alguna relación entre esta fuerza política y el gobierno de Buenos Aires. El resultado electoral en Santiago constituía un duro revés para el presidente González Videla, que se había esforzado por presentar a este grupo político como una amenaza para la democracia chilena. Para el gobierno argentino, el hecho revelaba condiciones propicias para promover la propaganda de la doctrina justicialista en el país vecino.

2. La denuncia de complot se repite

El 29 de marzo nuevamente circularon en Santiago rumores de conspiración contra el gobierno. El secretario general del Gobierno anunció oficialmente que se había descubierto un movimiento subversivo patrocinado por elementos militares en retiro y civiles de conocida tendencia antidemocrática. La información había sido dada confidencialmente pero el diario El Imparcial la había publicado, atribuyendo la responsabilidad "al partido que aumentó considerablemente sus fuerzas parlamentarias", en alusión al partido Agrario Laborista(24). A su vez, la embajada norteamericana informaba suspicazmente que el secretario de la embajada argentina, Miguel Guezález, había estado entre los primeros en mencionar la posibilidad del golpe. Dicha embajada había sabido por el subsecretario de Relaciones Exteriores Manuel Trucco que se trataría de una combinación nacionalista nazi en el partido Agrario Laborista, respaldada por chilenos y otros en la Argentina, además de comunistas, todos los cuales estaban tratando de derrocar al gobierno a pesar, o en razón, de la victoria del gobierno en las elecciones de ese mes(25). La combinación formada por nazis, agrario-laboristas, proargentinos y comunistas sería pues recurrentemente mencionada, tanto por sectores gubernamentales como norteamericanos, como amenaza a la estabilidad del gobierno de Chile.

La embajada argentina transmitió, a su vez, no haber podido ratificar la informaciones de la prensa respecto del complot. El encargado de negocios advertía que convenía "estar atentos a las circunstancias, puesto que el asunto podría reeditar los desagradables momentos que para nosotros tuvo el complot abortado el 10 (sic) de octubre de 1948", dado que se responsabilizaría del supuesto nuevo intento a la tendencia que encabezaba el general Ibáñez y a elementos que fueron acusados en aquella oportunidad. Inclusive consideraba legítimo presuponer que, quizás, en el fondo se trataba de una maniobra tendiente a procurar anular la oposición al gobierno, buscando la forma de hallar motivos para la aplicación de la ley de Defensa de la Democracia(26).

El 31 de marzo el presidente González Videla se refirió al papel que debía jugar la oposición. El presidente dijo que

"desgraciadamente parecía que ciertos grupos opositores, especialmente en Santiago, estaban intentando crear una atmósfera sediciosa pensada para incitar a la subversión". Y agregó:

solo necesito apelar a la conciencia pública para saber si hay o no un plan en movimiento, en la capital de la república, para demoler las instituciones democráticas y crear dudas basadas en escándalos, etc., táctica largamente practicada por elementos que no buscan la cooperación democrática, sino la subversión y el golpe de estado(27).

González Videla declaraba tener plena confianza en que las fuerzas armadas y la opinión pública no iban a permitir que el prestigio del sistema democrático en el exterior fuera manchado(28).

Según el embajador norteamericano, los rumores de un golpe fascista parecían haberse originado más en las desmedidas declaraciones (de tenor antidemocrático) de Carlos Ibáñez y Jaime Larraín en su última gira a Temuco, que en algún complot serio para derrocar al gobierno. En su opinión, éstos se habrían dado cuenta de que habían pasado los límites de lo debido desde el momento que habían insertado un anuncio en la prensa local, el 31 de marzo, afirmando que eran "esencialmente democráticos" y condenando todo "intento revolucionario para subvertir el orden público", además de exigir al gobierno que "llevara a los tribunales" cualquier dato que tuviera relación con la actividad subversiva(29).

Como consecuencia de un problema con su propio partido Radical, el presidente González Videla volvió a apelar, el 2 de junio, al argumento del peligro del nazi-fascismo que, triunfante en varios países de América, estaría al acecho para dar el golpe en Chile. La alusión era, según el embajador argentino, para el general Ibáñez y el senador Jaime Larraín. El presidente reiteraba también la cuestión de la fusión de nazis y comunistas. El embajador argentino señaló que la suerte de ese tema estaba ligada a la solución de la crisis interna, pero "tan pronto como el presidente vea malparada su posición, no va a titubear en querer unir, como a fines del año pasado, una andanada contra el gobierno argentino"(30).

El gobierno chileno insistía en su tesis de percibir a la Argentina como el punto desde donde se tramaban conspiraciones destinadas a los países limítrofes. Dicho gobierno decía ver un peligro para su país en las revueltas mineras que se estaban produciendo en Bolivia porque podían propagarse a Chile, donde la baja del cobre podía traer a corto plazo el paro de empresas y desocupación. Este tema tenía relación con la Argentina porque el gobierno de Bolivia había declarado oficialmente que las revueltas habían sido dirigidas por Víctor Paz Estenssoro desde Buenos Aires. Como en Buenos Aires también estaban los desterrados chilenos por el complot del año anterior, el presidente González Videla había expresado al embajador argentino su preocupación por las presuntas actividades conspirativas de Vergara Montero. En consecuencia, el embajador argentino aconsejaba a su gobierno cautela respecto de los asuntos concernientes a exiliados chilenos y bolivianos en la Argentina(31).

Si bien los temores al golpe de estado del presidente González Videla tenían su fundamento en el avance de gobiernos

militares en la región, la apelación recurrente a la conspiración en su contra no le rindió demasiado beneficio. La supuesta amenaza a la democracia chilena no generó ninguna reacción relevante en su defensa, probablemente porque los chilenos estaban cansándose de un gobierno que no encontraba soluciones a los problemas económicos. Por otra parte, la política de los Estados Unidos de reconocimiento de los gobiernos de facto tampoco ayudaba a que el sostenimiento de la democracia chilena fuera percibido como una buena causa. El presidente González Videla había expresado su desagrado por dicha política así como también por lo que consideraba un excesivo abastecimiento de armas a la Argentina. Para apoyarlo, el partido Radical chileno estaba estudiando la posibilidad de incluir en su programa una línea más fuerte respecto de la cooperación entre gobiernos democráticos de América latina(32).

3. Disturbios de agosto

3.1. Causas

En agosto de 1949 se produjeron en Chile disturbios originados en la situación económica del país, que había sufrido un constante deterioro en los meses anteriores en contradicción con las perspectivas optimistas que algunos observadores habían señalado a comienzos de ese año(33). Estos preveían que, superados los años cruciales para la economía chilena de 1946 a 1948, a partir de 1949 podría alcanzarse la estabilidad. En el mes de abril los diarios chilenos comentaban elogiosamente el superávit presupuestario logrado y la reducción de la deuda externa e interna como uno de los mejores logros de los últimos veinte años. No obstante, preocupaba el hecho de que a pesar de la caída mundial de precios, en Chile el costo de vida continuara en aumento(34).

Las autoridades chilenas comenzaron a inquietarse en el mes de junio por los efectos que tendría en la economía chilena la caída del precio del cobre que empezaba a preverse. El ministro de Economía fue comisionado por González Videla para viajar a los Estados Unidos e informar personalmente al presidente sobre la situación. El ministro chileno planteó, en primer lugar, el hecho de que la caída súbita del precio del cobre significaba una reducción sustancial en el ingreso de dólares (aproximadamente un tercio), lo cual afectaría la balanza de pagos de Chile. Dado que este país había establecido, para mantener el equilibrio de dicha balanza, un estricto control de cambios y había eliminado todas las importaciones de artículos suntuarios, la reducción en las entradas de dólares iba a producir una limitación de las importaciones indispensables como materias primas, combustibles y productos alimenticios. Estas restricciones no solo traerían dislocaciones en la economía sino que ocasionarían desempleo y ofrecerían una peligrosa oportunidad para ser explotada por los elementos hostiles al gobierno democrático. Chile estaba llevando a cabo un plan de desarrollo con la ayuda financiera de los Estados Unidos para liberarse de la dependencia respecto de dos únicos productos, cobre y salitre, e intentaba demostrar que, de no encontrarse en ese momento una solución que le permitiera reemplazar las faltantes entradas de dólares, era posible que su programa de desarrollo económico se viera interrumpido, produciendo una recesión en la cual se perdiera el esfuerzo

realizado. La intención de Chile era obtener un préstamo para llevar a cabo otros proyectos de desarrollo y atender el déficit de su balanza de pagos que se produciría en los meses siguientes(35). Lo interesante de las argumentaciones del ministro era que aquello que podía ser una prevención exagerada -la posibilidad de que opositores al gobierno explotaran la situación económica- o tal vez una excusa para conseguir la asistencia de los Estados Unidos tuvo lugar tan solo dos meses más tarde.

El segundo tema planteado por el ministro chileno se refería a los proyectos presentados al Congreso de los Estados Unidos para restablecer el impuesto a la importación de cobre. En los últimos meses, el mercado exterior del dólar para el cobre chileno se había reducido y en consecuencia el mercado norteamericano era más necesario que nunca. Así, el ministro afirmaba que el restablecimiento del impuesto era visto en Chile con alarma porque significaba una pérdida permanente para la economía del país; tal impuesto no se adecuaba además con la política de cooperación internacional, repetida y vigorosamente defendida por el presidente de los Estados Unidos y también sostenida por Chile. Sugirió entonces que en caso de que el gobierno de Estados Unidos tomara alguna medida lo hiciera a tiempo para evitar dislocaciones y transmitía la confianza del presidente chileno en que el gobierno norteamericano no interrumpiría sus compras de cobre(36).

Un pequeño aumento en el precio del cobre en julio produjo alivio en la crítica situación económica chilena luego de "tres meses de una psicología cercana al pánico cristalizada en junio", decía un informe de la embajada norteamericana. Simultáneamente con la caída del precio del cobre se había producido una devaluación del peso de alrededor de un 25%. El gobierno chileno había tomado medidas para hacer frente a la situación impidiendo la expiración de ciertos impuestos, racionalizando las operaciones gubernamentales y solicitando préstamos adicionales a los Estados Unidos o a agencias internacionales. Se impulsarían proyectos sociales para absorber a los mineros desocupados y se presentó al Congreso un proyecto para otorgar un subsidio a los pequeños productores de cobre(37).

El restablecimiento del impuesto al cobre en los Estados Unidos causó consternación en todos los círculos: funcionarios del gobierno, productores y otros inversores norteamericanos en Chile concordaban en que tal medida perjudicaría las relaciones chileno-norteamericanas en general. Como reacción a la crisis del cobre, legisladores y economistas políticos comenzaron a abogar por la formación de una Corporación de Ventas del Cobre para controlar las ventas y promover el comercio con áreas que no fueran del dólar, propósito con el que no concordaba el gobierno(38).

Pero el problema que más incidía en la tranquilidad social de Chile era el aumento del costo de vida que se había incrementado un 8% de enero a mayo de 1949, cifra semejante a los aumentos de los dos años inflacionarios anteriores. El costo de vida en mayo había sido 21% más alto que el de mayo del año anterior(39). Tampoco eran alentadoras las perspectivas para la producción de trigo pues las condiciones climáticas en el sur de Chile estaban incidiendo para que se viera sustancialmente disminuida. Un informe oficial conocido a comienzos de julio preveía una disminución del 10% en la producción general. El gobierno estaba ofreciendo créditos especiales para incrementar la siembra de

primavera y compensar la reducción mencionada y había establecido la prohibición de exportar trigo(40). En consecuencia, los ajustes realizados por el gobierno y las empresas para enfrentar la caída del precio del cobre y la consiguiente reducción de divisas, la presión social emergente de la situación inflacionaria y la sobrestimación que se había hecho de la capacidad del país para elevar su nivel de vida contribuyeron a crear un clima de dislocación de la economía del país e insatisfacción popular que preparó el terreno para que algunos activistas se decidieran a actuar. Un observador de la embajada norteamericana(41) expresó que el dilema del gobierno consistía en que cualquier medida económica efectiva perjudicaría a la clase pudiente, de cuyos representantes, especialmente en el Senado, dependía su futuro político.

3.2. Los hechos

Los serios desórdenes que se iniciaron en Santiago a partir del 17 de agosto y que tuvieron como protagonistas a grupos estudiantiles que protestaban por el alza de precios en los medios de transporte urbanos no habrían tenido otro interés que el de la mera crónica si no fuera porque su repercusión en la Argentina provocó problemas entre este país y Chile. Los disturbios fueron reprimidos enérgicamente por la policía causando varios muertos y numerosos heridos. Ese mismo día el Congreso decidió acordar facultades extraordinarias al presidente González Videla y al día siguiente la ciudad amaneció ocupada por el ejército y la policía(42). La Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile ordenó una huelga por 48 horas para el día 18(43).

Al paro estudiantil decretado por las federaciones de estudiantes se sumaron los bancarios y varios sindicatos obreros. La protesta contra el alza de los pasajes en los transportes y del costo de la vida en general fue la consigna común. El Consejo Directivo Nacional de Trabajadores de Chile resolvió también realizar un mitin de protesta contra las facultades extraordinarias acordadas al presidente. La adhesión al movimiento estudiantil comenzó a expandirse, incluyendo ciudades del interior(44).

El gobierno publicó una declaración oficial, el día 17, exponiendo las causas de los disturbios; en ese documento y en los considerandos del mensaje remitido por el poder Ejecutivo al Congreso, se mencionaba como responsable de los hechos al comunismo. El embajador argentino observó que: a) no dejaba de ser exacto lo manifestado por el gobierno acerca de la intervención de agitadores, fueran ellos del comunismo o de otro sector de la oposición (el funcionario creía que los comunistas no eran ajenos a esos hechos); b) debía tenerse en cuenta el aumento desproporcionadamente creciente del costo de la vida, para el cual el gobierno no tenía solución; y c) existía un descontento general con relación a la política interna. Los graves problemas que enfrentaba el país en lo financiero y económico (crisis en las industrias del cobre y del salitre, falta de divisas, falta de mercados para el carbón, etc.), los malestares sociales por esas causas (despido de obreros en las industrias del cobre y del salitre) y las componendas y arreglos que realizaban los partidos políticos, en lugar de buscar soluciones para el país, habían tenido seguramente su influencia en la crisis(45).

El gobierno dispuso la detención de todos los dirigentes políticos y sindicales pertenecientes al partido Comunista, después de anunciar que se había comprobado que esos elementos habían sido los promotores de los incidentes. Como medida precautoria dispuso el traslado a Santiago de varios regimientos y declaró a esa ciudad en estado de emergencia(46). El director de investigaciones Luis Brun comunicó la detención de unos 200 comunistas y agregó que las incidencias planeadas por aquéllos perseguían la paralización total de las actividades nacionales y estaban dirigidas a derrocar al gobierno. El día 19 cesaban las huelgas y Santiago comenzaba a recobrar su normalidad. El presidente agradeció a los partidos políticos el apoyo brindado en la rápida aprobación de las facultades extraordinarias(47).

Inesperadamente, el 20 se conoció en Chile la noticia de que el presidente había declarado zona de emergencia todo el territorio del país y dispuesto la ocupación de las zonas mineras por las fuerzas armadas. La causa eran nuevos paros obreros declarados en las zonas norte y sur del país, hacia donde fue enviada la marina de guerra. El gobierno declaró que tenía antecedentes de que el partido Comunista había continuado desarrollando el plan revolucionario, para el cual contaba con el posible apoyo de la huelga general que declararían los empleados públicos, particulares, bancarios y semifiscales. El presidente ordenó la detención de los obreros que ocuparon las minas y de sus líderes sindicales, y afirmó que estaba resuelto a extremar las medidas contra los dirigentes de los organismos que tramaban un conato revolucionario con la declarada intención de provocar su derrocamiento(48).

González Videla se refirió también al alza de los precios de primera necesidad, expresando lo siguiente:

Mi gobierno no es culpable de que la carne argentina que importa Chile se haya encarecido un 40%. Esa es una medida del gobierno argentino, y nosotros hicimos cuanto pudimos para contrarrestarla, como traer carne de cordero de Magallanes, pero debimos devolver del 30 al 40 % de los embarques porque el público prefiere comer carne de vaca(49).

Al día siguiente, la Conferencia Provincial de la Confederación de Trabajadores en cierta forma dio una respuesta a la denuncia del presidente al pedir una investigación sobre los derechos de internación de ganado argentino en el país, que habían permitido a los introductores y gestores el acumulamiento de fabulosas riquezas a costa del hambre de la población(50). Asimismo, el presidente aludió a la Argentina cuando observó que se habían transmitido al exterior noticias exageradas sobre la situación imperante, lo que tendía a dañar el prestigio y el buen nombre de chileno. Sostuvo que si bien el estado de cosas era anormal, no alcanzó la gravedad que se le quiso dar en las publicaciones que se hicieron en los diarios de otros países(51).

El 21 el gobierno anunciaba que los huelguistas de las minas del carbón deponían su actitud pero todavía temía la realización de la huelga revolucionaria que, en su opinión, la estarían impulsando tres dirigentes de la Junta Nacional de Empleados de Chile, Clotario Blest, Edgardo Maass y un tercero de apellido

Waiss. Maass presidía la Confederación de Empleados Particulares que contaba con 100.000 miembros. La secretaría general de gobierno anunciaba también que los detenidos en el curso de los acontecimientos habían sido embarcados hacia Pisagua, donde cumplirían la condena de relegación que les había sido impuesta de acuerdo con la nueva ley de facultades extraordinarias(52).

Un informe sobre los hechos ocurridos elevado al encargado de negocios de la embajada argentina expresaba que el balance final señalaba 3 muertos, 300 heridos y 200 detenidos. El gobierno había derogado el alza de las tarifas de los transportes y anunciaba nuevas bajas en el costo de la vida, así como la realización de proyectos sociales como la ley de Reforma a la Caja del Seguro Obrero y a la Caja de Accidentes de Trabajo. El citado informe consignaba que el presidente chileno acusaba en sus comunicados a los comunistas como los principales responsables de los sucesos pero los jóvenes radicales señalaban al gobierno argentino como instigador. El observador argentino sostenía que sin embargo los opositores al estado de cosas y a González Videla no eran proargentinos(53).

3.3. Repercusión de los sucesos en la prensa argentina

El embajador chileno en la Argentina, Germán Vergara Donoso, a poco de conocerse los sucesos de agosto en su país envió una carta al diario La Nación de Buenos Aires, con pedido de publicación, aclarando el alcance de las facultades extraordinarias otorgadas al presidente chileno y el error que se cometía al usar el término "dictadura" al hacer referencia a la situación de su país(54). El 23, hizo también una presentación al canciller Hipólito Paz con motivo de las referencias de ciertos diarios argentinos a los incidentes ocurridos en Chile entre obreros y fuerzas del ejército y policiales, y las medidas adoptadas por el gobierno chileno para reprimir los desórdenes. Ese mismo día el embajador entregó al diario La Prensa un extenso comunicado dando una versión oficial de los hechos y refutando los términos "dictadura", "régimen de terror", "caída del régimen constitucional", etc., que habían aparecido en algunos medios de la prensa porteña(55). El 26 de agosto, Vergara Donoso volvió al ministerio de Relaciones Exteriores a ampliar su presentación y documentarla(56).

Entre tanto, el diario La Nación de Santiago hacía referencia a la simpatía que había recibido Chile de varios países amigos durante los acontecimientos, señalando que solo uno de ellos había estado notoriamente ausente en los momentos en que peligraba el orden constitucional. "Los órganos de prensa y las estaciones radiales de una gran nación vecina han contribuido con un cúmulo de informaciones injuriosas, a tonificar el ánimo de los elementos totalitarios que buscaban en Chile el exterminio de nuestras libertades". Por su parte, el diario El Sur, de Concepción, decía, respecto de cierta prensa argentina, que

sus informaciones ligeras, reñidas con la veracidad llegaron falseadas o fueron posteriormente modificadas, aprecian la situación chilena equivocadamente y lo que es peor se la interpreta y juzga torcidamente, casi podríamos decir con la intención de menoscabar el prestigio de las prácticas constitucionales de nuestro país...(57).

Estos comentarios, observados por la embajada argentina, y un artículo publicado por el diario oficial La Nación, el 29 de agosto, hicieron pensar, a su vez, al encargado de negocios argentino que podía estar comenzando una campaña de prensa contraria a la Argentina(58). El artículo se titulaba "la conspiración permanente" y hacía referencia a los complots, rebeliones y golpes que ponían en evidencia "la acción mancomunada contra los regímenes democráticos de estos países iberoamericanos". "Nazismo o comunismo -lo mismo da- trabajan aisladamente, o se dan la mano en esta tarea siniestra". Se mencionaba una acción solapada de viajeros y propagandistas que los gobiernos podían identificar. Se afirmaba también que durante los días de las asonadas callejeras en Chile "la prensa argentina antidemocrática /.../ descargó sus iras contra el régimen legal chileno, estimulando desesperadamente una revolución de veras". Se sostenía que esa prensa profascista había inventado acontecimientos, tergiversado las intenciones de los gobernantes chilenos y sembrado dudas en cuanto a la verdadera magnitud de los sucesos(59). Estos conceptos, en virtud del diario que los publicaba, revelaban la posición del gobierno chileno.

La cancillería argentina tomó sus recaudos "ante los indicios del comienzo de una campaña antiargentina de Chile en el exterior" y envió un telegrama a sus embajadas en Francia, Italia, España e Inglaterra, el 27 de agosto, instruyéndolas sobre lo que debía decirse para contrarrestar la supuesta propaganda tendenciosa. En primer lugar señalaba el argumento de que las publicaciones realizadas por periódicos argentinos habían sido producto de las noticias transmitidas desde Chile. Debía afirmarse que el gobierno argentino no ejercía presión ni dominio sobre la prensa y la radio, dándose como prueba la actitud del "diario más peronista", Democracia, que había publicado información cablegráfica sin abrir juicio. Se mencionaban las características de todos los diarios que aparecían en Buenos Aires para demostrar que algunos habían dado la información objetivamente y otros se habían solidarizado con algún sector de los reprimidos en Chile(60). En cuanto a las radios, debía afirmarse que eran empresas privadas y que recibían la información de noticieros periodísticos o de agencias de noticias chilenas; la radio del Estado no había hecho comentario alguno. Como justificación de las publicaciones que habían provocado el problema, debía expresarse que "los diarios peronistas han correspondido al periodismo chileno cuya insidiosa campaña antiargentina y especialmente antiperonista es ampliamente conocida". Por último se hacía saber que muchos exiliados políticos y periodistas chilenos residentes en Buenos Aires actuaban en el medio periodístico local(61). El telegrama de la cancillería demostraba el carácter retributivo de la campaña periodística antichilena de los diarios peronistas y el intento de descargar parte de la responsabilidad de la misma en los propios chilenos.

Por otro lado, una carta abierta del exiliado chileno Ramón Vergara Montero al embajador de su país, publicada el 25 de agosto por el diario Crítica, a raíz de los acontecimientos ocurridos en Chile, complicó la cuestión. Desaprobaba en ella el telegrama que el embajador chileno Germán Vergara Donoso había enviado al presidente González Videla felicitándolo por el triunfo del gobierno en dominar los sucesos de agosto. "Congratular al presidente de Chile en las actuales circunstancias, es identificarse con las declaraciones últimas de este mandatario que

comportan una grave descortesía para con la nación. "El gobierno está usted acreditado". Además, Vergara Montero hizo una grave acusación a su gobierno al decir que la limitación del ganado argentino era un lucrativo negocio para el ganadero adinerado de Chile. En su opinión, el presidente había agudizado dicha política restrictiva, creando uno de los factores determinantes del estallido popular, para luego culpar a la Argentina de la falta de carne en Chile. El presidente trataba de eludir con mala fe -decía Vergara Montero- la responsabilidad de su fracaso motivado por su ineptitud de gobernante y su complicidad como encubridor de los grandes especuladores y contrabandistas de ganado. Calificaba como poco patriótica la "cálida comunicación al gobernante, en los precisos momentos en que nuestros conciudadanos luchan por el elemental principio de la vida: las subsistencias, como usted mismo reconoce /.../". Por último, acusaba al embajador de su país de haber dañado la representación que investía con su actitud y la de funcionarios de su dependencia, quienes se habían jactado con declaraciones contrarias y habían ejercido actividades adversas al gobierno de la nación ante el cual estaban acreditados. La reacción en Chile no se hizo esperar y los diarios oficialistas informaron que Vergara Montero sería acusado ante la justicia, calificándolo de antipatriota y antichileno. En algunos círculos se lo señaló como al servicio del régimen de la Argentina y como "instrumento de Perón"(62). La defensa de la posición argentina por un chileno resultó sospechosa para sus compatriotas y éstos hicieron averiguaciones en la cancillería argentina con el fin de saber si la campaña periodística había sido ordenada o estaba inspirada por la presidencia de la República o la subsecretaría de Informaciones, y si Vergara Montero había pagado las publicaciones o lo había hecho alguien del gobierno argentino(63).

La cuestión de la campaña de los diarios de Buenos Aires fue abordada en una entrevista que mantuvieron el canciller Riesco y el embajador argentino López Muñiz, al regresar éste de un viaje a su país. Riesco se refirió en primer lugar a las informaciones que calificó de exageradas y tendenciosas de la prensa argentina a raíz de los sucesos ocurridos en Chile y dijo que lo que más había afectado al presidente chileno habían sido los ataques personales. El ministro tenía la impresión de que los diarios habían obrado de acuerdo con una "consigna" y consideraba inamistoso que esos ataques se hubieran producido cuando el gobierno se hallaba en apuros. El embajador refutó esas apreciaciones diciendo que "existía amplia libertad de prensa en Argentina, donde no rigen facultades extraordinarias"; que los diarios de referencia estaban dirigidos por personas muy adictas a Perón, cuyas reacciones cabía esperar, y que los ataques personales eran una réplica a una frase poco feliz del presidente chileno respecto del aumento de la carne por el gobierno argentino. Esa frase había sido interpretada por la prensa, según el embajador, como un deseo de volcar la culpa de los desmanes cometidos por el pueblo de Santiago sobre el gobierno argentino. López Muñiz le recordó que la prensa santiaguina había lanzado violentas acusaciones y atacado personalmente a Perón con motivo del complot descubierto en Chile y que el gobierno que disponía de facultades extraordinarias no las aplicó para contener las demasías en el lenguaje de los diarios. El ministro respondió que el embajador no podía desconocer la influencia que ejercía la subsecretaría de Informaciones y Prensa sobre los diarios de Buenos Aires afectos al gobierno y que los ataques que mencionaba López Muñiz distaban mucho de parecerse a los que él citaba. El

embajador le contestó que, en el caso de Chile, el secretario general de Gobierno, Darío Poblete, ejercía funciones semejantes a través de la oficina de Prensa de la Moneda. Daba como ejemplo al diario oficialista La Nación que había calificado al gobierno de Perón de antidemocrático, fascista y totalitario, lo que constituía un agravio para un gobierno surgido de elecciones libres(64). Tanto el canciller chileno como el embajador argentino intentaban negar que sus respectivos gobiernos utilizaran a los medios de prensa para sus fines políticos. En Chile, el gobierno contaba con un diario oficial y eventualmente con los que respondían a los partidos políticos que integraban la coalición gubernamental. El fenómeno se daba sin embargo con mayor intensidad en la Argentina donde existían muchos diarios que respondían al gobierno y donde la prensa opositora sufría serias restricciones.

El episodio revelaba la existencia de un antagonismo entre Perón y González Videla, originado quizás años atrás, cuando el último había encabezado en Chile la corriente antiperonista que había calificado de fascista al gobierno surgido en 1943 en Buenos Aires. El tratado económico firmado entre ambos gobiernos a fines de 1946 y la visita del presidente chileno a la Argentina en julio de 1947 establecieron un paréntesis de entendimiento. Luego del intento de González Videla de implicar al gobierno argentino en el complot contra su gobierno a fines de octubre de 1948, la relación entre ambos mandatarios quedó deteriorada y a partir de allí se produciría un contrapunto de actos inamistosos. Los acontecimientos de agosto del 1949 en Chile proveyeron a Perón la ocasión de devolver a su colega las acusaciones de autoritarismo que le había prodigado años atrás y de resarcirse por las imputaciones de injerencia en los asuntos internos de Chile, a raíz del complot del año anterior. Así, los diarios peronistas argentinos pusieron el acento en la represión que había realizado el gobierno chileno, en tanto los diarios chilenos respondieron poniendo énfasis en el rol amenazante del fascismo argentino en Sudamérica.

4. Preocupación de Salvador Allende frente a la amenaza argentina

La revista Ercilla publicó el 12 de julio de 1949 una lista de treinta preguntas que el senador Allende presuntamente había formulado al canciller chileno pero que el embajador argentino juzgaba fidedignas dado que ni el gobierno ni el propio interpelante habían hecho ninguna desmentida o rectificación. La principal preocupación del senador giraba alrededor del programa de reorganización y modernización de las fuerzas armadas que realizaba la Argentina. El embajador argentino consideraba que Allende había actuado como vocero del comandante en jefe del Ejército, Ramón Cañas Montalva, que iba a pasar a retiro en poco tiempo pero "que no cesa mientras pueda, de alborotar alrededor de su imaginado «peligro argentino»". El embajador argentino explicaba dicha actitud como

el reflejo del natural recelo con que algunos chilenos de tendencia antiargentina (civiles y militares) ven cómo, en lo que atañe a la defensa nacional, Chile ha quedado rezagado con respecto a nuestro país, porque su situación económico-financiera no le permite ni siquiera aproximadamente afrontar un programa semejante al nuestro. Ese recelo los lleva a

desconfiar del poderío argentino y hay quienes creen -quizás de buena fe- que Argentina representa un peligro real para Chile, máxime si se tiene en cuenta que el estado actual de las fuerzas armadas chilenas, comparado con el nuestro, ofrece un panorama deficiente./.../

Además, para muchos chilenos, que solo ven a través de las anteojerías de la propaganda antiargentina, el gobierno del general Perón es un "gobierno militar" imperialista y militarista e imbuido de ideas hegemónicas, y, por ende, de sometimiento de los países vecinos a su voluntad(65).

Las otras inquietudes del senador Allende estaban relacionadas con los países que podían considerarse dentro de la órbita de Perón, así como la relación de éste con Paz Estenssoro y otros políticos bolivianos, y con el presidente peruano Odría. Le preocupaban también las supuestas medidas tomadas por las autoridades argentinas contra chilenos que trabajaban en el sur del país y las alzas de precios de productos que Chile compraba a la Argentina(66).

La percepción de una Argentina peligrosa desde el punto de vista militar también fue señalada por el socialista Alejandro Magnet, en su libro publicado pocos años después. Este autor advertía que Chile no podía proveer a su seguridad y que ésta dependía del buen funcionamiento del sistema interamericano. La considerada por los chilenos como militarización argentina de la Patagonia (dado la distribución de las fuerzas militares y sus instalaciones, además del trazado de la ruta 40), las repetidas violaciones de fronteras en Magallanes atribuidas a la Argentina y las pretensiones antárticas de este país eran percibidas como el diseño de "una política claramente ordenada a una presión y penetración constantes" y "una amenaza potencial contra la integridad del territorio chileno sustentada por un gobierno que no oculta sus miras hegemónicas y que aspira desde luego a desempeñar un papel importante en el Pacífico sur". Magnet derivaba tales conclusiones de la que consideraba una manera ostentosa de la Argentina de afirmar su soberanía y atribuía a sus ambiciones expansionistas la meta última del fortalecimiento de la posición estratégica mundial de ese país(67).

Por otra parte, la percepción de peligrosidad de la Argentina pudo estar complementada por los rasgos militares que caracterizaban al gobierno peronista. Como señalara Peter Waldmann, el ejército era uno de los apoyos del régimen y muchas disposiciones legales adoptadas, referentes a la seguridad nacional, demostraban la importancia de ese componente militar(68). Asimismo, influía en la mencionada caracterización la concepción de la defensa que tenía Perón, definida como "la nación en armas". La tesis central de esta estrategia establecía que una nación debía movilizar todos sus recursos, todo su potencial humano, económico e ideológico, para poder imponerse en una contienda bélica. Un país que quería evitar ser derrotado, debía estar siempre preparado para la guerra. Debía tener actualizado su armamento y ubicados los recursos de modo tal que estuvieran siempre al servicio de la defensa del país. Dicha concepción, se vio reforzada por la aplicación de categorías militares a situaciones políticas que permitió ir conformando un sistema jerárquico centralista, en el cual el jefe aparecía como un supremo comandante político cuyo pensamiento militar incluso se revelaba en la terminología de ese origen utilizada(69). Estos

rasgos militares del régimen argentino coadyuvaron a la formación de una imagen y un estilo de gobierno que reforzaba la percepción, que tenía el gobierno de Chile y algunos sectores políticos de ese país, de que la Argentina albergaba intenciones militaristas o expansionistas.

Allende planteó en la sesión ordinaria del 30 de agosto de 1949 su ya declarada inquietud por el panorama de América, donde los gobiernos militares desarrollaban una "política de agresividad en contra de los pocos regímenes democráticos que existen todavía en este continente". Recordaba lo denunciado por los venezolanos Rómulo Betancourt y Rómulo Gallegos -con lo que estaba de acuerdo- acerca de la existencia de una "internacional de las espadas" cuya finalidad era imponer la hegemonía de un país sobre el resto de los estados de América. Su temor era que Bolivia siguiera la misma suerte de Venezuela y de Perú porque tenía noticias que, además de Cochabamba y Santa Cruz, estaban en poder de revolucionarios bolivianos Camirí y Yacuiba. Desde Camirí, limítrofe con la Argentina, suponía que iba a originarse la resistencia armada contra el gobierno, es decir que a través de ese punto "cierto sector del gobierno argentino" ayudaría a los facciosos. Basaba su presunción en la actitud del gobierno argentino que, ante los sucesos que habían tenido lugar en Chile y a pesar de mantener aparentes cordiales relaciones con su país, había desatado "a través de su radio y su prensa la más enconada campaña contra Chile". En caso de triunfar la amenaza fascista en Bolivia -sostenía Allende-, Chile quedaría envuelto "por un círculo de hierro formado por la Argentina de Perón, el Perú de Odría y Bolivia de Paz Estenssoro y sus satélites"(70).

Arturo Alessandri Palma respondió a Allende. Dijo poseer documentos para acreditar que su colega estaba equivocado y que "el señor presidente de la República Argentina no pretende perturbar la paz de ningún gobierno". Explicó que como no podía aceptar la conducta de cierta prensa argentina frente a los acontecimientos, se había dirigido en forma privada a Perón, quien le había respondido dando todas las explicaciones del caso. Alessandri señaló que de los diarios sobre los cuales tenía tuición directa el gobierno argentino no había salido ningún ataque a Chile; las informaciones tendenciosas habían venido de otros diarios independientes. Alessandri consideraba que entre los chilenos se estaba formando clima para hacer creer que el gobierno argentino intervenía en la gestación de actos subversivos, imputación grave para hacer a un gobierno y que debía acreditarse con documentos, los cuales no existían. El senador chileno afirmaba que si bien Perón vestía casaca militar, su gobierno había surgido "en la elección más libre de que hay memoria en América"; tenía la Argentina una parlamento constitucional que funcionaba libremente y existían en ese país diarios que fustigaban al gobierno(71).

En cuanto a lo que estaba ocurriendo en Bolivia, Alessandri dijo estar informado que, en el movimiento anterior, la Argentina no había dejado atravesar la frontera a revolucionarios bolivianos deseosos de asilarse en el país y algunos exiliados que habían entrado al país habían sido obligados a abandonar el territorio. Si bien reconocía que podía haber conexiones del movimiento boliviano con territorios limítrofes, no había fundamento para afirmar que la Argentina estuviera fomentando la agitación en Bolivia ni que la estuviera impulsando en Chile. Alessandri

reveló que había visto una carta original de Perón a Odría, presidente de facto de Perú, en respuesta a otra de este último, que decía lo siguiente:

usted ha llegado al poder por medio de un golpe de Estado; es, por lo tanto, jefe de un gobierno de facto, y tales gobiernos no pueden vivir ni mantenerse, si no se someten a la resolución del pueblo; debe pues, apresurarse a obtener la sanción popular para sus actos, mediante una consulta plebiscitaria, o convocar a elecciones libres(72).

El senador concluía pidiendo que no se fomentara ese ambiente de acusaciones al presidente de un país amigo y declaraba haber puesto en manos del presidente y su gobierno documentos que certificaban que Perón tenía profunda amistad por Chile y que quería vivir en paz con este país(73).

Otro senador Martínez Montt quiso completar el testimonio de Alessandri. Dijo no creer que pudiera constituir un peligro para un país o para un conjunto de países "una república gobernada por un hombre que había llegado al poder constitucionalmente y que había demostrado su afecto por los países limítrofes en diferentes oportunidades y en forma efectiva". Así la Argentina había suministrado a Chile, en momentos difíciles, trigo y aceite, cuyo valor Chile todavía debía y acababa de refinanciar; también había obtenido amplia acogida la gestión para obtener el desbloqueo de fondos chilenos en la Argentina. Se le objetó que se había obtenido esto último con un recargo del 20%, a lo que el senador respondió que eran muchos los países que tenían créditos congelados y sin embargo no era común la obtención del desbloqueo con un recargo de solo ese porcentaje(74).

Martínez Montt afirmaba que Perón había dado toda clase de facilidades para obtener artículos de primera necesidad a diversos países de América del Sur, entre ellos Perú y Bolivia, además del caso de Chile, ya mencionado. El senador consideraba que

un gobierno de malas intenciones o deseoso de perturbar el orden público de alguno de estos países, lo primero que haría sería restringir la salida de los artículos de primera necesidad, para provocar levantamientos, por falta de subsistencias, en estos pueblos, que es lo que ha ocurrido en nuestro país por falta de medios adquisitivos. Sin embargo, el señor Perón ha hecho todo lo posible para dar el máximo de facilidades en el expendio de tales mercaderías(75).

Postulaba, en consecuencia, reemplazar el ataque por un efectivo entendimiento con la Argentina u otros países de la región(76).

Allende se defendió diciendo que no atacaba al pueblo argentino ni a la república sino que había emitido su juicio frente a su gobierno e insistía en que existía un peligro para los pueblos democráticos de América. En su opinión, era tremendamente inquietante el afán armamentista y bélico de la Argentina frente a pueblos pacíficos. "Un país que gastó 2.800 millones de nacionales, en 1948, en un presupuesto de guerra, es un país que debe inquietar al resto de los pueblos democráticos", expresó, agregando que tal cifra representaba dos veces el presupuesto nacional chileno(77).

En tanto, el tema de Bolivia fue tratado en la conversación ya mencionada entre el canciller Riesco y el embajador argentino. López Muñiz aprovechó la oportunidad para "hacer resaltar enfáticamente nuestra posición, de total prescindencia en los asuntos internos de Bolivia" y dar una serie de explicaciones acerca de hechos puntuales que le planteara el ministro respecto del asunto. En su informe a la cancillería, sin embargo, expresaba:

tengo la impresión, señor ministro, de que mis argumentaciones solo en parte pueden haber sido convincentes. Aprecio que el gobierno de Chile cree en la sinceridad de mis propósitos y confía igualmente en los de V.E., pero que, influenciado por el gobierno de Bolivia a través del embajador Ostria Gutiérrez y por el recelo permanente que el señor presidente González Videla abriga hacia el general Perón, sigue creyendo a pies juntillas que el gobierno argentino está fomentando el derrocamiento de los gobiernos democráticos de Sud América con finalidades de hegemonía. No sería nada raro que surgiese alguna acusación chilena ante las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos o directamente ante el gobierno de Estados Unidos./.../ El señor González Videla teme por la estabilidad de su sillón presidencial, pero presenta ante el pueblo chileno la amenaza que -según él- significaría para Chile el cerco peruano-boliviano-argentino (bajo la égida del general Perón) si la revolución boliviana triunfase(78).

El temor provocado por el armamentismo de la Argentina, sumado a los rumores de ayuda a facciones revolucionarias en países vecinos volvía a conjugarse para permitir la reaparición de la cuestión internacional con la Argentina que, como se dijo, actuaba recurrentemente como un instrumento funcional para la estabilidad del gobierno chileno, más allá del peligro real que la Argentina pudiera representar.

5. Sondeos de Chile con el fin de acusar a la Argentina como un peligro para la paz de América

Según la información obtenida por la embajada argentina en Chile, el presidente González Videla habría ordenado sondeos para averiguar si era posible conseguir el apoyo de países sudamericanos para acusar a la Argentina ante la asamblea de la Organización de las Naciones Unidas como nación peligrosa para la paz de América. Aparentemente el intento habría fracasado al contar solamente con el respaldo del Uruguay. Al embajador argentino le constaba que Paraguay no lo habría acompañado porque el nuevo presidente y su embajador en Chile eran "decididamente argentinistas" y este último había cooperado "con toda lealtad en esta emergencia"(79). También Perú habría estado en contra de Chile, si se hubiera planteado el caso ante la asamblea de la ONU, según informes que el embajador de ese país en Chile proporcionó al embajador argentino. Esos informes sostenían también que Félix Nieto del Río, embajador de Chile en Washington, había comprometido a los embajadores de Colombia y Ecuador en aquella capital para que lo acompañaran a una visita al Departamento de Estado relacionada con las acusaciones que pensaba formular, pero a último momento aquéllos habían renunciado a hacerlo. El presidente González Videla habría desistido entonces de seguir

adelante con la gestión(80).

La cuestión generó una fuerte preocupación en el embajador argentino López Muñiz quien realizó una serie de gestiones -que él mismo designó como indirectas- para tratar de evitar que el gobierno chileno perseverara en su intento de llevar adelante la acusación. Fueron realizadas ante personas que seguramente transmitirían sus dichos al propio gobierno. Uno de sus interlocutores más importantes fue el presidente del senado Arturo Alessandri Palma, a quien López Muñiz expresó que el gobierno argentino estaba "muy tranquilo" frente a cualquier actitud que quisiese asumir Chile en virtud de que oportunamente se demostraría que

el presidente chileno se había comprometido con el gobierno de La Paz a enviarle aviones, armas y municiones; que el gobierno argentino consideraba ese compromiso incompatible con el principio de no intervención; que llamaba seriamente la atención sobre el peligro que estas acusaciones mutuas implicarían para el mantenimiento de las buenas relaciones chileno-argentinas(81).

El embajador usaba el argumento de la reciprocidad de la acusación, es decir, la Argentina, acusada de intervenir en los asuntos internos de los países vecinos, amenazaba con una imputación similar a Chile. Sin embargo, la diferencia en la posición de los dos países era fundamental: en tanto la Argentina era acusada en el caso de Bolivia de apoyar a grupos revolucionarios que pretendían tomar el poder, el gobierno chileno estaría otorgando respaldo a un gobierno constitucional. El embajador fue más lejos aún, al apelar a la amenaza, cuando agregó que

nosotros podíamos muy bien pasarnos sin cobre ni salitre chilenos, pero que no creía que Chile pudiese decir lo mismo de la carne, aceite y trigo; que en la Patagonia había 20.000 chilenos que tampoco nos eran indispensables. Finalmente que el señor presidente Perón estaba resuelto a terminar con estas actitudes incongruentes del señor presidente González Videla, quien por un lado nos pedía moratorias de pago y por el otro pretendía llevarnos al banquillo de los acusados ante el tribunal de las naciones(82).

El tenor de la amenaza demostraba que la alegada tranquilidad del gobierno argentino no sería tal y que el asunto revestía importancia para el país. El embajador expresó conceptos análogos al periodismo, a los presidentes de las comisiones de Relaciones Exteriores del Senado y de la cámara de Diputados, cercanos al presidente y al canciller, y también a amigos de la Argentina que no tardarían en informar a dichas autoridades. El embajador prefirió esta vía indirecta "para no demostrar temor" ante la gestión que Chile proyectaba(83).

Con todo, López Muñiz reconocía que su gestión por vía indirecta "habría sido inoperante sin la intervención decisiva de don Arturo Alessandri Palma", quien había tomado a su cargo la tarea de actuar en forma personal ante González Videla, influenciado seguramente por el oficio confidencial que Perón le enviara. De la larga entrevista sostenida el día 15 de septiembre entre Alessandri y el presidente chileno surgió el desistimiento

de la acción proyectada. González Videla se habría declarado dispuesto a rectificar el paso en falso que iba a dar y a no escuchar en adelante a quienes se le acercaran con intención de sembrar desconfianza en la relación chileno-argentina. También aseguró que haría cesar toda campaña de prensa tendiente a atacar como antidemocrático al general Perón y su gobierno o a presentarlo como gobierno militar que buscaba derrocar los regímenes democráticos para reemplazarlos por otros contrarios a esa ideología, con finalidades hegemónicas en Sudamérica. El presidente chileno habría reconocido ante Alessandri haber solicitado sin éxito el apoyo de Brasil(84).

Sin embargo, preocupaba a López Muñiz el hecho de que González Videla dijera a Alessandri que Chile iba a apoyar en las Naciones Unidas cualquier declaración tendiente a reforzar la posición de los gobiernos de origen democrático frente a la proliferación de los gobiernos militares o civiles de facto, por ser una posición que siempre había defendido ese país. El temor del embajador no se refería a la declaración en sí (que sospechaba presentaría Bolivia), sino al debate que alrededor de la misma podría originarse. El representante chileno ante las Naciones Unidas y el embajador Ostria Gutiérrez podrían tratar de "mancomunar esfuerzos para lograr que bajo apariencias inocentes el debate tomase el carácter de un pronunciamiento antiargentino de la asamblea"(85).

Alessandri Palma dijo haber recibido la impresión, como consecuencia de su conversación con el presidente González Videla, que éste estaba decidido a cambiar su actitud hacia la Argentina. A pesar de ello, el embajador López Muñiz sostenía que el presidente estaba "demasiado ligado a compromisos frente a los Estados Unidos" y se había comprometido "exageradamente en contra de Argentina a través de sus tres años y medio de gobierno" para intentar modificar el rumbo. "Una rectificación radical de conducta frente a nosotros importaría un nuevo cambio de frente que la inestabilidad política interna en que se debate quien sabe si le permitiría afrontar", afirmaba el embajador argentino. Conspirarían en contra, según este último, la fuerte influencia de los Estados Unidos en la prensa chilena -subvencionada en muchos casos por el agregado de prensa de la embajada norteamericana- y los sectores conservadores (tradicionalistas y socialcristianos) para quienes la mala relación con la Argentina, que siempre producía escasez de alimentos en Chile, era funcional para sus intereses agropecuarios(86).

El embajador argentino se había permitido insistir ante Alessandri Palma en que González Videla debía "dar a corto plazo alguna prueba tangible, de sus, por ahora, solo buenas intenciones". Tales pruebas podían ser el cambio de ministro de Relaciones Exteriores, la salida del secretario general de gobierno Darío Poblete, la del subsecretario de Relaciones Exteriores Manuel Trucco Gaete y el relevo del director general de Investigaciones Luis Brun D'Avoglio, todos reconocidos antiargentinos. A la Argentina, afirmaba el embajador, le quedaba "el recurso de aplicar el cuenta gotas en la provisión de carne, trigo y aceite que es lo que hace Estados Unidos con los créditos que le acuerda"(87).

Un primer indicio de que el gobierno chileno había desistido de realizar la acusación fue una declaración de voceros de la

cancillería chilena a la revista Ercilla en el sentido que la firme posición de la Moneda de impedir que ciertos Estados americanos se inmiscuyeran en la política interna de otros, fomentando revoluciones, golpes militares, etc., era aprovechada por grupos de la oposición ibañista, e incluso, por una corriente liberal que en lo interno era antiibañista, "para divulgar toda clase de rumores, siendo el más grave aquél en que se dijo que Chile denunciaría al gobierno argentino ante las Naciones Unidas"(88). La intención sin embargo parece haber tenido suficiente entidad como para haber provocado la preocupación del embajador argentino y el uso de amenazas por parte de éste con el fin de que no se concretara.

La cancillería chilena hacía saber también que las gestiones del embajador Vergara Donoso habían logrado "entibiar el frío entre la Moneda y la Casa Rosada"; el nuevo canciller Paz era considerado un buen amigo de Chile. La declaración oficial de que quedaban tres problemas pendientes con la Argentina: a) una deuda chilena a la Argentina por la compra que se había hecho en 1947 de aceite y trigo; b) un nuevo tratado comercial para la importación de carne vacuna y c) la vieja cuestión limítrofe por el canal de Beagle(89) parecía demostrar que la acusación internacional quedaba desestimada.

La situación pareció pues llegar a un límite que no quiso ser sobrepasado por ninguno de los dos países. El gobierno argentino tuvo su temor frente a la posibilidad de ser acusado de peligroso para la paz de América, por el desprestigio internacional que ello significaba y lo contraproducente para sus planes de liderazgo, y apeló principalmente a la amenaza económica para lograr que la acción no fuera llevada a cabo. Por su lado, Chile, que tenía motivos para temer quedar rodeada por países con gobiernos autoritarios y poco democráticos, seguramente juzgó que su precaria situación económica interna se vería agravada si la Argentina retaceaba sus productos, lo cual era tan peligroso para su estabilidad institucional como la variable externa; por ello se decidió por el abandono de la idea y un cambio de actitud hacia su vecina. Fue también evidente lo difícil que resultaba a Chile encontrar apoyo en los demás países de la región para la defensa de la democracia, probablemente por la falta de respaldo de los Estados Unidos -que en ese momento no querían divisiones en la zona- y por el consenso en favor de gobiernos autoritarios que se estaba generando y que, al estar probablemente inspirado en la Argentina, funcionaba en defensa de la misma.

6. Vuelco de opinión en favor de un mejoramiento en las relaciones con la Argentina

El embajador argentino comunicaba el 29 de septiembre de 1949 que había sido informado confidencialmente por el abogado y periodista José Dolores Vásquez que el presidente chileno lo enviaría en misión oficial a Buenos Aires para tratar con Perón los problemas pendientes; Vásquez pertenecía al círculo de Alessandri Palma y había pasado a primer plano "por la forma como lo recibió y trató el señor general Perón en Buenos Aires". El embajador anticipaba que era probable que Chile pidiera como compensación a sus propuestas un arreglo en el problema de las islas del canal de Beagle. También aconsejaba a sus superiores insistir en el pedido de destitución de los funcionarios chilenos antiargentinos como él

había sugerido en sus conversaciones con políticos chilenos(90).

El embajador creía ver otra prueba del presunto cambio hacia la Argentina en la actitud ostensiblemente gentil y amistosa con que el presidente lo había recibido en ceremonias oficiales, al igual que el canciller Riesco, "quien había difundido en estos días por Santiago exageradas alabanzas sobre mi gestión en esta capital, en contraposición con lo que ocurre con otros embajadores, entre los que citó al del Perú y al de Bolivia". Esto último llamaba la atención del embajador y lo inducía a pensar que no se trataba de una cortesía hacia su persona, sino de un cierto repudio a la gestión del embajador boliviano Ostria Gutiérrez que había sido probablemente, según López Muñiz, quien casi había arrastrado a González Videla a "dar el paso en falso que proyectó en las Naciones Unidas"(91).

El 15 de octubre el ya mencionado periodista José Vásquez, en retribución de atenciones del gobierno argentino, ofreció una comida al embajador argentino que resultó una estudiada demostración de confraternidad chileno-argentina. Asistieron a ella el ministro de Justicia Rossetti, en representación del presidente de la República; el ministro de Finanzas Alessandri Rodríguez, los presidentes del Senado Alessandri Palma y de la Corte Suprema Schepeler, el ex ministro de Relaciones Exteriores Barros Jarpa y otras autoridades. El embajador agradeció "los conceptos afectuosos para nuestra patria, nuestro excmo. señor presidente de la República y el suscripto", brindando luego por la prosperidad de los estadistas y sus pueblos(92). El ministro de Justicia, por su parte, expresó que el jefe del estado le había encomendado la misión de declarar que el señor González Videla "se consideraba un soldado en la cruzada de unión de Chile y Argentina, cuyos orígenes y destinos eran similares en la historia de América" y afirmó también que el embajador López Muñiz había sido uno de los más brillantes representantes llegados a Chile en misión diplomática. A su vez, Alessandri Palma dijo que a pesar de cometer una infidencia repetiría las palabras de González Videla, quien le había expresado su absoluta y total decisión de luchar por una unión férrea y decidida entre Chile y la Argentina, al encomendarle que comunicara esos sentimientos al presidente Perón(93).

La frase expresada por el ministro de Justicia en nombre de su presidente dio pie para que Perón enviara una carta a su colega de Chile. Decía Perón haberse enterado de los actos de confraternidad realizados en Santiago y del anhelo expresado por González Videla "de ser el primer soldado de la confraternidad chileno-argentina". El presidente argentino destacaba su pertenencia a "un movimiento popular con doctrina propia" que establecía la necesidad de la unión efectiva entre los pueblos vecinos y ratificaba haber cumplido ese designio. Reconocía luego que en esos tiempos todos enfrentaban los problemas derivados de "la lucha interna ocasionada por las ideologías e intereses que agitan al mundo entero" y creía que era menester impedir "que el juego de las intrigas y la acción de los intereses interfieran o deformen la realidad, poniendo en peligro la comprensión, el entendimiento y la cooperación"(94). El 15 de noviembre se conoció la respuesta del presidente González Videla, la cual expresaba la "profunda y sincera satisfacción" que le había producido el paso dado por el presidente argentino y su afirmación en el sentido que estaba dispuesto a luchar por el ideal de fraternidad. Mencionaba

los pasos dados por su gobierno también en ese sentido y agregaba "que no ha habido, ni habrá desviaciones en la firme voluntad de mi gobierno"(95).

El intercambio de las cartas tuvo considerable resonancia en Chile. El embajador López Muñiz mencionó en su informe que la actitud de Perón había recibido elogios mientras que la de su colega chileno había sido vista como "poco sincera" por algunos medios; de todos modos, esperaba que el "cambio de frente que con respecto a nosotros ha determinado realizar el señor González Videla, se haya estimulado por este cambio de cartas". Pero la carta de Perón, comentada "elogiosamente por los órganos de la oposición", según el embajador, había sido motivo para que la política de González Videla respecto de la Argentina recibiera algunas críticas. La revista nacionalista Estanquero había sido censurada -por decreto especial-, por haber puesto de manifiesto las deficiencias en los resortes normales del ministerio de Relaciones Exteriores de Chile y de su embajada en Buenos Aires para llegar a un entendimiento con la Argentina (esta crítica respondía al hecho de que los resultados se debían en gran parte a la labor de intermediación llevada a cabo por Alessandri Palma y Vásquez)(96). La parte censurada del artículo expresaba que no se podía "hacer diferencias en el trato con los países amigos, según sea el concepto que nos merezcan sus gobiernos" y que ya se habían reprobado "los livianos cargos de intervencionismo que se han formulado a la Casa Rosada, destacando la evidencia de que tan equívoca política estaba malogrando nuestro comercio con el país vecino". Se esperaba que ese criterio terminara por imponerse y se veía un indicio de ello en el hecho de que el discurso, en el banquete de homenaje al embajador argentino, no lo pronunciara el canciller sino el ministro de Justicia. Se señalaba que la carta del presidente Perón dejaba abierta la posibilidad de que el presidente chileno anunciara el retorno a la línea tradicional de la diplomacia chilena. También se destacaba que se había llegado a la nueva actitud por obra de elementos ajenos a la función gubernativa como eran los casos de Alessandri y Vásquez y se hacía una fuerte crítica a la gestión del canciller Riesco y del embajador en la Argentina Vergara. El embajador argentino, sin embargo, hacía la salvedad que dicha revista había puesto de manifiesto con el artículo una posición favorable a la Argentina, pero que sus miras políticas tenían fines de política interna de oposición al gobierno y por lo tanto podían variar según las circunstancias(97).

La gestión del embajador López Muñiz llegó a su fin en diciembre de 1949. El gobierno chileno le concedió la Gran Cruz de la Orden al Mérito General Bernardo O'Higgins. El canciller Riesco le ofreció un banquete de despedida y expresó que el embajador abandonaba Chile en un momento de gran cordialidad entre ambos países; dijo también "cuán a prueba de desinteligencia es la amistad entre nuestras dos naciones". Agregó que al embajador y a él había tocado la tarea de evitar que se deteriorara la buena relación entre los dos países; a ese efecto "no podía aportarse /.../ más paciencia, más tino, más rapidez para percibir las ocasiones favorables, más decisión para combatir lo que contrariaba nuestros propósitos que lo que se ha visto en el excmo. señor López Muñiz"(98).

El hecho de que el presidente González Videla rindiera homenaje a la Sociedad Rural Argentina en su discurso de

inauguración de la Sociedad de Agricultura de Chile fue signo de que su intención era no seguir perjudicando el comercio con la Argentina. Su ministro de Agricultura, sin embargo, manifestó que el gobierno tenía el propósito de incrementar al máximo el comercio de la producción agropecuaria a fin de lograr que el país pudiera bastarse a sí mismo, con la excepción de algunas épocas del año en que se hacía necesaria la importación de ganado argentino para suplir el déficit de carne del país(99).

Para la misma época, la noticia de la baja en el precio del salitre en los mercados de los Estados Unidos anunciaba nuevos problemas a la economía chilena. Este hecho traería una nueva disminución de las disponibilidades de moneda extranjera en Chile, repercutiendo simultáneamente en el mercado europeo de nitrato chileno donde se estaban reajustando los precios del salitre a raíz de la devaluación de la libra esterlina(100). El presidente chileno presentó un sombrío cuadro de las perspectivas económicas para su país en la inauguración de la feria agropecuaria de San Fernando. Dijo allí:

El año 1950 será el año más difícil en la historia económico-financiera del país./.../La república no tiene esperanza de mejorar la situación de las clases media y obrera, porque la crisis que afrontarán sus industrias básicas no permitirá hacerlo(101).

La previsión del mencionado problema a corto plazo fue sin duda otra de las causas del acercamiento con la Argentina. El mejoramiento de las relaciones con este país evitaría los atrasos en el envío de productos argentinos que podrían agravar aún más la situación y que, por otro lado, era justamente lo que el embajador argentino había amenazado con llevar a cabo.

7. Algunas cuestiones colaterales

El 9 de octubre, el embajador argentino transmitía la información que "se conspira en Santiago", la cual le había confiado Alessandri Palma. Según el político chileno, conspiraba el general Ibáñez, Jaime Larraín García Moreno, Vial Espantoso, Santiago Labarca y otros políticos, a tal punto que el presidente temía que el prestigio de Ibáñez hubiera hecho mella, o pudiera hacerla, en la disciplina del ejército. Al embajador no le constaba que eso fuera cierto pero admitía que podía existir algún temor en las altas esferas porque el mismo Alessandri le había preguntado hacía poco tiempo "qué sabía /.../ de las actividades del general Ibáñez y si no tenía noticias de que éste anduviera en manejos subterráneos dentro de las instituciones armadas". El embajador había respondido negativamente; suponía además que Alessandri había querido sacarle información y que la pregunta de éste habría respondido al deseo de ir tomando posiciones ante esa eventualidad; por lo pronto, señalaba López Muñiz, se cuidaba de no atacar al general Ibáñez en el Senado(102).

Otra preocupación de la embajada argentina fue que la constitución del nuevo directorio de Acción Chileno-Argentina no había sido comunicado oficialmente a la misma. Las razones parecían ser que la institución había decidido no incluir en la comisión directiva a ningún miembro acusado en el abortado complot del año anterior, así como "sancionar" a miembros del organismo

que "no se jugaron" en la defensa de la entidad y por la causa de la confraternidad chileno-argentina. La tercera razón era que la entidad iba a cambiar su manera de actuar, haciéndolo al margen de la misión en Santiago y con el menor contacto oficial. En la embajada se interpretaba que la intención debía ser realizar una acción con la embajada en algunos casos y paralela en otros(103). La estrategia de Acción Chileno-Argentina, al eliminar de su comisión directiva personajes que podían aparecer como sospechosos de conspiración, parecía estar apuntada a mejorar su imagen ante el gobierno chileno. Al mismo tiempo, la toma de distancia de la embajada argentina trataba de evitar ser considerada un instrumento del régimen peronista en Chile. La decisión demostraba además que entre dicha institución y la embajada argentina habría existido anteriormente un acuerdo para realizar determinadas actividades (que no aparecen explicitadas). La actitud de la institución respecto de la embajada podría haber respondido a la comprometedor actuación de algunos de los diplomáticos que, al provocar problemas con el gobierno, no resultaba funcional a la introducción del justicialismo en Chile, que era el probable objetivo de la institución. Sin duda dicha distancia dotaba de mayor libertad a esta última.

El 10 de noviembre el embajador López Muñiz comunicaba que se anunciaba en Chile el nombramiento de Luis Brun como consejero comercial de la embajada chilena en París y que corrían rumores que renunciaría el secretario general del Gobierno Darío Poblete, "inspirador", según López Muñiz, de la prensa chilena y responsable "de la tónica general del periodismo" en Chile. El embajador infería que, de confirmarse tales noticias, habría tenido éxito su sugerencia al embajador Vergara Donoso acerca de la conveniencia del retiro de algunos funcionarios chilenos antiargentinos. El embajador argentino no estaba seguro si el reemplazo de los citados funcionarios habría de favorecer a la Argentina, pero afirmaba que "si son sinceras las manifestaciones que me ha hecho llegar [el presidente González Videla] sobre sus propósitos de acercamiento con nuestro país, esa elección estará de acuerdo con tales propósitos"(104). Los funcionarios, sin embargo, no fueron reemplazados.

Por último, se hizo explícita, por parte de Chile, una suerte de condición para la normalización de las relaciones con la Argentina. En el mes de octubre, realizó una visita a Chile el secretario asistente de Estado Edward Miller, vinculada, en opinión del embajador argentino, con la difícil situación económico-financiera chilena provocada por la crisis del cobre y la inminente del salitre. En ocasión de dicha visita, personas vinculadas con el gobierno chileno manifestaron al embajador argentino que la República Argentina "debe tratar de mejorar sus relaciones con Washington como algo indispensable para llevar adelante ese acercamiento con nosotros"; el embajador respondió que "la Argentina lo haría con agrado siempre y cuando ello no nos exigiera ceder un ápice de nuestra total soberanía"(105). La sugerencia dejaba a la vista lo incómodo que resultaba para Chile mantener relaciones cordiales con la Argentina mientras ésta tuviera problemas con los Estados Unidos.

Conclusión

Luego de la acusación de implicación en el complot de 1948, de que había sido objeto en Chile el gobierno argentino, la elección de Ibáñez como senador por Santiago, frente a figuras relevantes de la política, produjo una gran satisfacción en los medios diplomáticos argentinos y dejó en claro que las vinculaciones con este país no funcionaban negativamente ante el electorado chileno. Ibáñez representaba ideas semejantes a las del justicialismo y su elección demostraba que el pueblo chileno era receptivo a las mismas. El gobierno argentino debió observar atentamente este hecho.

El gobierno chileno siguió apelando a los peligros de complots cuando debió atravesar situaciones críticas. Las acusaciones recaían siempre en los mismos personajes: Ibáñez, el PAL y algunos chilenos residentes en la Argentina. A juzgar por testimonios recogidos por la embajada argentina, cierta actividad conspirativa parece haber existido en los sectores denunciados. La crisis económica por la que atravesaba el país y la disconformidad de las fuerzas armadas chilenas con su nivel de vida eran campo fértil para el desarrollo de dicha actividad pero la falta de un consenso más generalizado habría hecho fracasar los intentos.

Nuevamente, como en el caso del complot del año anterior, aparecía el contexto del advenimiento de gobiernos militares en Perú y Paraguay, y la insistencia del gobierno boliviano en que lo mismo estaba por suceder en su país para deducir la posición amenazante de la Argentina. El hecho de que los embajadores que dieran su apoyo en Chile al representante argentino, en sus gestiones para evitar la acusación ante la ONU, fueran agentes de dichos gobiernos militares demostraba que era en éstos donde el peronismo encontraba sus aliados y otorgaría cierta legitimidad al intento de acusación del presidente chileno y a las advertencias del senador Allende. La presencia de Paz Estenssoro y de Vergara Montero en Buenos Aires, a quienes se atribuía propósitos revolucionarios hacia los gobiernos de sus países, también daba una sustento a la sospecha de que éstos tenían o buscaban algún apoyo en el gobierno argentino. Y precisamente la tendencia al establecimiento de gobiernos nacionalistas por la vía militar, la influencia ejercida por Perón en la región y la prioridad dada por los Estados Unidos a la unidad interamericana conspiraron contra el proyecto del presidente chileno de construir un frente de gobiernos democráticos en el continente.

Finalmente, al interrogante de si la Argentina constituía una amenaza para la democracia chilena debe responderse que en cierta forma lo era. De por sí, el triunfo ibañista en las elecciones legislativas -demostrando un avance de ideas autoritarias (con algún componente corporativo y estatista) y el afianzamiento de un grupo político asociado a todos los complots tramados en Chile desde la caída de Ibáñez a comienzos de los años 30-, constituía una amenaza al sistema democrático. La vinculación de este grupo con la Argentina era justamente lo que trasladaba el poder intimidatorio a este país. Este hecho, sumado al supuesto papel de instigador de golpes militares que se le atribuía y a la modernización de sus fuerzas armadas, que respondía a la idea de Perón de prepararse para la guerra si se deseaba la paz, conformaron la percepción de una Argentina amenazante. Con todo, el encarrilamiento del sector golpista por la vía electoral

demostraba la solidez de la democracia chilena. Por último, debe señalarse que el régimen argentino, conociendo los problemas que su estilo de gobierno provocaba en Chile, pudo haber intentado un cambio de rumbo pero la posibilidad de colaborar para que el grupo proargentino accediera al poder en aquel país sería acicate suficiente para la intervención y generaría un último y definitivo episodio con el gobierno de González Videla.

Notas

1. Carlos Escudé, *Gran Bretaña...*, p. 41.
2. *Ibid.*, pp. 62 y 106.
3. *Ibid.*, p. 138.
4. *Ibid.*, p. 109.
5. *Ibid.*, p. 147.
6. *Ibid.*, "Crónicas...", p. 16.
7. *Ibid.*, p. 17.
8. *Ibid.*
9. *Ibid.*
10. *Ibid.*, p. 18.
11. *Ibid.*
12. *Ibid.*
13. 825.00/3-849, Bowers al secretario de Estado.
14. 825.00/3-1549, Bowers al secretario de Estado.
15. *Ibid.*
16. 725.00/1-950, embajada en Santiago al Departamento de Estado, "Análisis del voto en las elecciones de 1949".
17. 825.00/3-1549, Bowers al secretario de Estado.
18. López Muñiz al ministro Bramuglia, 10 de marzo de 1949, MREC, 1949, Chile, caja 12, exp. 1, 1a. parte.
19. *Ibid.*
20. 825.00/9-247, Bowers al secretario de Estado.
21. 825.00/9-1748, Trueblood al secretario de Estado.
22. 825.00/10-2048, Bowers al secretario de Estado.
23. 825.00/9-1748, Trueblood al secretario de Estado, 7 de septiembre de 1948.
24. *La Prensa*, 30 y 31 de marzo de 1949.
25. 825.00/3-3049, telegrama de Bowers al secretario de Estado.
26. De Elías Bonnemaïson al ministro Bramuglia, 31 de marzo de 1949, MREC, 1949, Chile, caja 12, exp. 1, 1a. parte.
27. 825.00/4-549, Bowers al secretario de Estado.
28. *Ibid.*
29. *Ibid.*
30. López Muñiz al ministro Bramuglia, 3 de junio de 1949, MREC, 1949, Chile, caja 12, exp. 1, 1a. parte.
31. *Ibid.*
32. 825.00/4-549, aerograma de Bowers al secretario de Estado.
33. 825.50/3-149, memorándum de Peters a McGinnis et al.
34. 825.50/3-1849, memorándum de Peters a McGinnis et al.
35. 825.50/6-2049, memorándum de Connelly a Thorp.
36. *Ibid.*
37. 825.50/7-849, Bowers al secretario de Estado.
38. *Ibid.*
39. *Ibid.*
40. *Ibid.*
41. 825.50/8-2249, embajada en Santiago al secretario de Estado.
42. Telegrama de López Muñiz al ministro, 18 de agosto de 1949, MREC, 1949, caja 12, exp. 1, 2a. parte. En el informe más detallado que el embajador argentino envió a su gobierno explicaba que grupos de manifestantes habían atacado medios de transporte, perpetrado atentados contra las estaciones e intentado incendiar vehículos de pasajeros. Los grupos estaban formados por estudiantes y obreros. Los diarios, según el embajador, daban distintos datos sobre el número de muertos y heridos, oscilando entre los 15 y 20 muertos y más de 300 heridos, la mayoría gente muy joven. Nota de López Muñiz al ministro Paz, 18 de agosto de 1949, MREC, 1949,

- Chile, caja 12, exp. 1, 2a. parte.
43. 825.00/8-1849, Bowers al secretario de Estado.
 44. *Ibid.*
 45. *Ibid.*
 46. *La Prensa*, 19 de agosto de 1949.
 47. *La Prensa*, 20 de agosto de 1949.
 48. *La Prensa*, 21 de agosto de 1949.
 49. *Ibid.*
 50. *La Prensa*, 23 de agosto de 1949.
 51. *La Prensa*, 21 de agosto de 1949.
 52. *La Prensa*, 22 de agosto de 1949.
 53. Guezález a De Elías Bonnemaïson, s/f, MREC, 1949, Chile, caja 12, exp. 1, 2a. parte. Citaba entre ellos al equipo de la Logia 50 La Montaña, movimiento dirigido por masones que canalizaban la voluntad comunista; al sector masón de los socialistas con Salvador Allende que orientaban y dirigían a la izquierda sin los comunistas y a los ex ministros radicales de gobiernos anteriores, ninguno de los cuales era proargentino.
 54. *La Nación*, 20 de agosto de 1949.
 55. *La Prensa*, 24 de agosto de 1949. El comunicado también fue publicado en *La Nación* de ese mismo día. Un ejemplo de la actitud de algunos diarios fue *El Laborista*. Este comenzó publicando información de agencias pero luego bajo el rótulo de "especial" y con títulos a página entera señaló la condición de "dictador" del presidente chileno, su probable renuncia exigida por el pueblo, su mala política gubernativa, la inminencia de una guerra civil, etc. El 25 las noticias sobre Chile volvieron a ocupar un espacio pequeño. *El Laborista*, 18 al 25 de agosto de 1949.
 56. *La Prensa*, 26 de agosto de 1949.
 57. *La Prensa*, 27 de agosto de 1949.
 58. De Elías Bonnemaïson al ministro Paz, 29 de agosto de 1949, MREC, 1949, Chile, caja 13, exp. 8.
 59. *La Nación*, Santiago, 29 de agosto de 1949.
 60. *La Prensa* y *La Nación* eran considerados "diarios opositores asalariados de capital foráneo"; *Crítica*, juzgado de tendencia comunista, se había hecho eco en favor del sector de su simpatía; *Noticias Gráficas* era considerado sensacionalista; *La Razón*, de tendencia peronista se había limitado a la publicación de cables; *Líder*, también peronista, era órgano de la Asociación de Empleados de Comercio y, vinculado con los empleados de comercio chilenos, se había hecho eco de su movimiento; *El Laborista* era considerado diario clasista, perteneciente a los obreros y por espíritu de cuerpo había adoptado una posición de defensa de colegas chilenos; *EL Mundo* se había limitado a dar información cablegráfica y *Epoca*, era propiedad del diputado nacional independiente Colom, condición ésta que impedía controlar el periódico. Telegrama de Torrent a embajadas en Francia, Italia, España e Inglaterra, 27 de agosto de 1949, MREC, 1949, Chile, caja 13, exp. 8.
 61. *Ibid.*
 62. Mujica Garmendía a Zamboni, 5 de octubre de 1949 y recorte adjunto conteniendo copia textual de la Carta Abierta al embajador de Chile en Buenos Aires, don Germán Vergara Donoso.
 63. *Ibid.*
 64. López Muñiz al ministro Paz, 6 de septiembre de 1949, MREC, 1949, Chile, caja 12, exp. 1, 2a. parte.

65. López Muñiz al ministro Bramuglia, 2 de agosto de 1949, MREC, 1949, Chile, caja 12, exp. 1, 1a. parte.
66. *Ibid.*
67. Alejandro Magnet; *op. cit.*, pp. 173-187.
68. Peter Waldmann, *El peronismo, 1943-1955.* Bs.As., Sudamericana, 1981, pp.140-144. Dichas disposiciones se referían al aumento de las penas por espionaje, a la comisión de hechos que dificultaran abastecimientos militares, a daños inferidos a bienes de importancia para la defensa nacional, etc. En 1948 se dictó una ley con "normas para organizar la nación para tiempo de guerra, desde tiempo de paz" y la constitución de 1949 preveía una ampliación de los tribunales militares. *Ibid.*, p. 141.
69. *Ibid.*, pp. 141-144.
70. Chile, Cámara de Diputados, *Boletín de sesiones ordinarias*, sesión 28a. ordinaria en martes 30 de agosto de 1949, pp. 978-981.
71. *Ibid.*, pp. 984-985.
72. *Ibid.*, pp.985.
73. *Ibid.*
74. *Ibid.*, pp. 986-987.
75. *Ibid.*, p. 987.
76. *Ibid.*, p. 988.
77. *Ibid.* Sobre el presupuesto militar argentino en esa época, véase: Alain Rouquié, *Poder militar y sociedad política en la Argentina, T. II: 1943-1973*, Bs. As., Emecé, 1987.
78. López Muñiz al ministro Paz, 6 de septiembre de 1949, MREC, 1949, Chile, caja 12, exp. 1, 2a. parte.
79. López Muñiz al ministro Paz, 16 de septiembre de 1949, MREC, 1949, Chile, caja 13, exp. 8. La cooperación habría consistido en las explicaciones dadas por el embajador paraguayo al canciller Riesco en cuanto a que el cambio de gobierno en su país había obedecido a problemas de política interna -con lo cual intentaba decir que no había existido influencia foránea y, por ende, argentina. No obstante las mencionadas explicaciones, el canciller chileno siguió creyendo que el cambio significaba un triunfo de las tendencias totalitarias sobre las democráticas. La misma opinión tenía el presidente chileno quien, según el embajador argentino, "ve el fantasma del totalitarismo por todas partes y se deleita en jugar el papel de campeón de la democracia auténtica -la chilena, por supuesto-". *Ibid.*
80. López Muñiz al ministro Paz, 16 de septiembre de 1949, MREC, 1949, Chile, caja 13, exp. 8.
81. *Ibid.*
82. *Ibid.*
83. *Ibid.*
84. *Ibid.*
85. *Ibid.*
86. *Ibid.*
87. *Ibid.*
88. *Ercilla*, 11 de octubre de 1949.
89. *Ibid.*
90. López Muñiz al ministro Paz, 29 de septiembre de 1949, MREC, 1949, Chile, caja 13, exp. 8.
91. *Ibid.*
92. López Muñiz al ministro Paz, 18 de octubre de 1949, MREC, 1949, Chile, caja 13, exp. 8.
93. *El Diario Ilustrado*, 16 de octubre de 1949.
94. *La Prensa*, 4 de noviembre de 1949.

95. *La Nación*, 15 de noviembre de 1949.
96. *Ibid.*
97. López Muñiz al ministro Paz, 2 de diciembre de 1949 y copia adjunta del artículo, MREC, 1949, Chile, caja 12, exp. 1, 2a. parte.
98. *La Nación*, 7 de diciembre de 1949.
99. *La Nación*, 9 de octubre de 1949.
100. *La Prensa*, 18 de octubre de 1949.
101. *La Prensa*, 22 de octubre de 1949.
102. López Muñiz al ministro Paz, 9 de octubre de 1949, MREC, 1949, Chile, caja 12, exp. 1, 2a. parte.
103. Guezález a López Muñiz, 20 de octubre de 1949, MREC, 1949, Chile, caja 13, exp.8. La comisión directiva antigua estaba integrada por Conrado Ríos Gallardo, presidente; Ernesto Barros Jarpa, Carlos Keller, Tomás Eduardo Rodríguez, Eugenio Orrego Vicuña, Guillermo Izquierdo Araya, Juan B. Rossetti, general Jorge Berguño Meneses, Jaime Larraín García Moreno, Eduardo Miguel, Jorge Valdés y Andrés Feliú, directores; Carlos Sanchez Hurtado, secretario. La nueva comisión estaba formada por Eduardo Barrios Hudtwalcker, presidente; Carlos Keller y Guillermo Gandarillas, vicepresidentes; Angel Guarello, Bernardino Abarzúa, Luis Barriga Errázuriz, Juan Gómez Millas, Mariano Latorre, Hugo Sievers, Humberto Valenzuela García, Felicitas Klimpel Alvarado, Guillermo Izquierdo Araya y Javier Lira Merino, vocales. La constitución de esta última comisión no había sido comunicada a la embajada argentina. *Ibid.*
104. López Muñiz al ministro Paz, 10 de noviembre de 1949, MREC, 1949, Chile, caja 13, exp. 8.
105. López Muñiz al ministro Paz, 28 de noviembre de 1949, MREC, 1949, Chile, caja 12, exp. 1, 2a. parte.

Capítulo 5

El factor argentino en la elección de Ibáñez

Como hemos visto, las relaciones argentino-chilenas durante los gobiernos de Perón y González Videla estuvieron jalonadas por sucesivos inconvenientes, que a pesar de darse por superados las iban menoscabando. Según Alejandro Magnet, la no ratificación del tratado económico de 1946 por Chile había provocado un grave deterioro de aquéllas, manteniéndose poco amistosas durante el resto de la presidencia de González Videla(1). La situación se había agudizado en noviembre de 1948 luego del descubrimiento del complot para derrocar al presidente chileno en el que fueron implicados diplomáticos argentinos. A ello debía agregarse la percepción, que tenía el gobierno de Chile y algunos de sus sectores políticos, de la Argentina como una amenaza para su democracia. Así otro autor también observó que hacia 1952 dichas relaciones "sufrían un gran quebranto" pues

el mandatario chileno y su colega argentino, don Juan D. Perón apenas mantuvieron las relaciones que dicta el protocolo y /.../ los dos se manifestaban una peligrosa antipatía. El uno abogaba por el sistema democrático y el otro campeaba por la dictadura. Vivieron en guerrilla permanente y esta beligerancia comprometió la buena convivencia(2).

Las palabras citadas y los informes de la embajada argentina que recordaron en varias oportunidades a González Videla como el líder del antiperonismo chileno desde 1943 demostraban la existencia de un antagonismo entre ambos presidentes y cierta competencia por el prestigio de sí mismos y de sus países. El hecho de que los gobernantes hubieran incorporado a las relaciones entre ambos países un elemento poco racional, a lo que del lado argentino había contribuido su embajada, conduciría a la necesidad de obtener un logro definitivo y consecuentemente a no reparar en los medios. La candidatura de Ibáñez proporcionaría a Perón la oportunidad de definir el duelo a la vez que tratar de alcanzar sus objetivos económicos y estratégicos en Chile.

1. Lanzamiento de la candidatura de Ibáñez desde Buenos Aires

El general Ibáñez realizó una visita a la Argentina a partir del 7 de noviembre de 1950 y luego de mantener dos largas entrevistas con Perón, anunciaba desde Buenos Aires su candidatura a la presidencia de su país(3). El 14 ofreció una conferencia de prensa que tuvo amplia repercusión periodística. En ella expresó que "no se sentía extranjero" en "la gran república hermana de la Argentina" y elogió a "su gran y respetado amigo", el presidente de la República general Juan Perón, "de cuyo importante trabajo era y siempre había sido un admirador sincero y estudioso constante". Encomiaba a Perón por haber hecho tanto en tan poco tiempo y haber llevado adelante los principios de la revolución de octubre, "como resultado de lo cual había establecido en la Argentina la base de un nuevo orden social, que constituía una

garantía segura del bienestar de la gente y la tranquilidad y grandeza de la nación". No menores fueron los elogios reservados a Eva Perón,

cuya prominente y eficaz ayuda al presidente se había extendido más allá de los límites de su país. Su trabajo creativo en el campo social y político era causa de orgullo para todos los argentinos, y constituía un ejemplo para las mujeres de América(4).

También se refirió Ibáñez a las relaciones entre la Argentina y Chile, señalando la conveniencia de remover obstáculos aduaneros entre los dos países y poner la mira hacia una completa unión aduanera, como resultado de la cual pudiera decirse que "los Andes no existen más"(5).

Indagado sobre su candidatura, el general afirmó que existía una fuerte corriente de opinión favorable a la misma. Su programa consistiría, en caso de ser electo, en la continuación del trabajo básico de su interrumpida administración y en el mantenimiento de buenas relaciones internacionales, así como también en una política de buena vecindad con las naciones del continente, incluida una unión económica con los países vecinos. No ocultó su preferencia por la *tercera posición*, que "era la voluntad de la gente aunque no siempre de los funcionarios". Acerca del comunismo, el general respondió que "no era destruido por medio de leyes y decretos y que en Chile no constituía un peligro"(6). En definitiva, el lanzamiento de la candidatura de Ibáñez demostraba la decisión de éste de hacer pública su conexión con el gobierno de Perón y su doctrina, supuesta hasta ese momento. Daría pie además para la sospecha de que habría recabado algún tipo de ayuda de su colega argentino.

Los temores del gobierno chileno ante las perspectivas electorales de Ibáñez, sin embargo, parecieron disiparse cuando el 26 de noviembre de 1950 el liberal Arturo Matte Larraín obtuvo la elección para senador por la provincia de Santiago, por una apreciable diferencia de 25.591 votos frente al conservador Carlos Vial Espantoso. Con ello, la derecha liberal aparecía más consolidada y con mayor capacidad para ganar elecciones que la izquierda dividida y el nuevo senador se transformaba en el posible candidato presidencial para ese sector. González Videla consideró que la victoria de Matte perjudicaría la intención del general Ibáñez de representar a la derecha en las elecciones presidenciales de 1952 y que le otorgaba, además, cierta seguridad de poder finalizar su mandato porque la derecha, al ver posibilidades para su candidato en 1952, se mostraría menos predispuesta a apoyar un movimiento para derrocar al gobierno(7). A pesar de las perspectivas, la fuerza electoral del ibañismo evidenciaría un sostenido crecimiento y su jefe se mostraría convencido de que su relación con el gobierno argentino no incidiría negativamente en su futuro político. Así, a mediados de marzo del año siguiente, viajó nuevamente a Buenos Aires y sostuvo una tercera entrevista con Perón. A su regreso a Chile, volvió a declarar su admiración por todo lo realizado por el presidente argentino(8).

2. La opositora convergencia "fascista-comunista"

En enero de 1950, la embajada norteamericana en Chile hacía una interesante predicción: que las condiciones políticas podrían llevar a algún tipo de cooperación, en la campaña presidencial que tendría lugar dos años más tarde, entre el "antiguo grupo nazi" -el partido Agrario Laborista-, el partido Socialista Popular, los dos partidos social-cristianos y los comunistas(9).

Al mes siguiente una huelga de empleados provocó la caída del gabinete y la formación de una nueva coalición gubernamental, integrada por los partidos Radical, Conservador (sector social-cristiano), Falange y Democrático(10). En esas circunstancias, el general Ibáñez había propuesto la inclusión de comunistas en el gobierno como condición para la participación de los agrario-laboristas; sin embargo, el partido se opuso a cualquier trato con los primeros, lo que produjo un cierto distanciamiento de Ibáñez(11). Así, las perspectivas de la convergencia de los dos polos del espectro político, que podría alcanzarse en el caso de que el general obtuviera el apoyo del proscrito comunismo, fueron utilizadas por el gobierno chileno y por distintas fuerzas políticas como estrategia para tratar de desprestigiar a Ibáñez y augurar un futuro negro a Chile(12). Pero a la vez dicha convergencia paradójicamente se vio favorecida por la posición asumida por el propio gobierno.

En marzo de 1951 el presidente González Videla decidió hacer pública la falta de apoyo que su gobierno encontraba en instituciones crediticias norteamericanas. En un discurso pronunciado en Peñuelas, el presidente acusó al Banco Internacional(13) de entender mal, en lo que a Chile concernía, los objetivos que inspiraron su fundación y anunció que el gobierno chileno actuaría en consecuencia dado que se había vulnerado la confianza depositada en la cooperación internacional. La reacción de González Videla respondía al hecho de haber recibido, a través del embajador en Washington, la notificación oficial de que el banco no se inspiraba en ningún principio altruista de ayuda efectiva a los países subdesarrollados en lucha contra el comunismo y la inflación, sino en la certeza de la utilidad comercial. El presidente observaba que

cualquiera sea quien dirija la organización procede mal, después de tres años de infructuosas negociaciones y luego de numerosos gastos realizados por Chile en estudios preliminares sobre proyectos de irrigación, todos favorables, en notificarnos sobre este utilitario y esencialmente comercial punto de vista del mencionado banco, que es impropriamente llamado por el pomposo nombre de «Banco Internacional»(14).

El presidente también expresaba su convicción de que no existía salida para los países subdesarrollados y democráticos:

estos errores que los capitalistas americanos y los banqueros cometen son aquéllos que desaniman a los gobiernos democráticos que, por un lado, deben resistir las campañas antinorteamericanas de los enemigos de la democracia y, por el otro, reciben la incomprensión del capital americano que niega la ayuda elemental con la cual producir más alimento, con la cual detener el incremento del costo de vida y que

lleva a una nación en su desesperación a depositarse a sí misma en los brazos de cualquier pequeño tirano o caer en las garras de la bestia blanca del comunismo internacional(15).

González Videla recordaba, como contrastante con el tratamiento concedido por el capital norteamericano, los sacrificios realizados por Chile durante la Segunda Guerra Mundial, cuando el país deliberadamente había desistido de su derecho a reclamar el valor real de su producción de materiales estratégicos y había aceptado un congelamiento de precios muy por debajo de los niveles normales, sin establecer condiciones a cambio(16). El presidente chileno intentaba denunciar con ello el desinterés de los Estados Unidos en sostener a un país democrático que estaba siendo rodeado de gobiernos autoritarios en países vecinos y que presenciaba en el plano interno el crecimiento político de quien tenía un pasado de dictador. Con todo, debe señalarse que, si bien la falta de apoyo económico exterior podía estar conduciendo a la concurrencia de las fuerzas de ultraderecha y de ultraizquierda, a la vez, González Videla, al tratar de atribuir el fracaso en dar solución a la crisis económica del país al comportamiento de las agencias financieras de un gobierno extranjero -aunque tuvieran parte de la responsabilidad-, estaba provocando él mismo el fenómeno no buscado de la convergencia de nacionalismo y comunismo en una postura opositora y antinorteamericana.

En su discurso, pronunciado en Peñuelas pero dirigido al gobierno de los Estados Unidos, González Videla subrayaba la resistencia y la lucha de su país contra el imperialismo soviético. Según el presidente, tal política había sido iniciada por Chile antes de ser adoptada por otras naciones; este país había alertado sobre el peligro y había proclamado no buscar con ella otra finalidad que salvar y fortalecer la democracia(17). Aunque el presidente pretendía dejar en claro que tal decisión había sido tomada por iniciativa de su gobierno y no había buscado con ella encontrar la buena voluntad de los Estados Unidos, los bancos norteamericanos, como se dijo en otra parte del trabajo, habían hecho saber, a través de los directivos de las empresas norteamericanas en Chile, que para que los pedidos crediticios prosperaran era necesario que el país tomara una clara posición anticomunista; la actitud de Chile habría sido entonces consecuente con su conveniencia económica. Lo que posiblemente pesara al presidente era que la lucha emprendida contra el comunismo en el país, mediante una legislación represiva -y que en ese momento estaba volviéndose en su contra al ser intensamente utilizada como crítica por sus opositores-, al final rindiera tan pocos frutos en el terreno económico. El discurso de Peñuelas revelaba la falta relativa de resultados obtenida por un país latinoamericano a pesar de llevar a cabo una política complaciente con las señales del gobierno norteamericano. O quizás demostraba la creencia errónea de los gobernantes latinoamericanos en que, por el hecho de cumplir con las señales indicadas por Washington, obtendrían una concesión ilimitada de sus peticiones.

Supuestamente, como consecuencia de la actitud del BIRF, el presidente se mostraba decidido a adoptar en el futuro una posición más nacionalista al declarar que su inflexible lucha contra el comunismo internacional le otorgaba la autoridad moral para poder "disponer comercialmente de lo que es nuestro", de lo que es "el fruto de nuestro trabajo". Anunciaba que procedería

con toda libertad en el caso de que fuera necesario usar los productos chilenos como dinero o como instrumentos de pago internacional. González Videla advertía que sus palabras no debían ser interpretadas como insolentes porque simplemente transmitían "el lenguaje de la soberanía nacional" y de un pueblo que luchaba "por su pan, su libertad y su dignidad". Consecuentemente, manifestaba que las prioridades de Chile en ese momento eran formar un frente interno democrático contra las fuerzas totalitarias que querían asaltar al gobierno y un frente externo para la defensa de los intereses de Chile, entre los cuales eran prioritarios la fijación de los precios de las materias primas exportables y de los productos que Chile necesitaba(18). Más allá de que todo el discurso de González Videla fuera una respuesta emocional provocada por la negativa del BIRF a otorgar ayuda monetaria a Chile y obviando el hecho utópico de pensar que Chile pudiera, de ese momento en adelante, fijar unilateralmente el precio de sus materias primas exportables y de sus importaciones, el giro que el presidente pretendía dar a su política era electoralista y revelaba, a la vez, el avance de las ideas nacionalistas y del concepto de una mayor independencia en la política exterior que se estaba produciendo en la conciencia pública chilena; el presidente las hacía suyas porque, propuestas tanto por algunos grupos de la izquierda como por la ultraderecha, habían ganado consenso en la sociedad.

El ya citado Magnet coincidió con la interpretación del presidente González Videla, atribuyendo también la convergencia de los dos polos del espectro político chileno a la política norteamericana para la región en la posguerra. Dicho autor señaló que al no conceder un plan Marshall para América latina, Estados Unidos eliminaban, a la vez, la ayuda económica en gran escala y el patrocinio a un comienzo de asociación latinoamericana que habría tenido lugar para la planificación de la distribución de tal ayuda, como había ocurrido en Europa. Esto era la causa del surgimiento en la región de una "tendencia histórica legítima y positiva" pero "animada por fuerzas negativas" en contra de aquel país. Advertía además que el rápido desmejoramiento de las condiciones económico-sociales en todo el continente latinoamericano resultaría "el mejor caldo de cultivo para la inevitable reacción nacionalista y comunista". En su opinión la actitud de los Estados Unidos había logrado "poner de acuerdo en el continente mejor que en ninguna otra parte del mundo a dos tendencias antitéticas: el comunismo y el nacionalismo más o menos teñido de fascismo". En consecuencia, sin ayuda económica del gobierno norteamericano para mejorar las condiciones de vida de sus pueblos, las democracias latinoamericanas debían enfrentar "la marejada antiyanqui provocada por los comunistas y el neofascismo nacionalista, que son los adversarios mundiales de los Estados Unidos y los enemigos internos de toda democracia"(19). En cierto modo, Perón afirmaba lo mismo cuando señalaba que el Departamento de Estado había creado en muchos países un clima impopular hacia los Estados Unidos, clima que limitaba a muchos gobiernos en su decisión y en sus actos(20).

La denuncia del trabajo subterráneo de comunistas y nazis también apareció en el partido Agrario Laborista cuando Jaime Larraín, en su carta de renuncia a la presidencia del partido, a mediados de marzo de 1951, afirmara que creía que había existido dentro del mismo una conspiración comunista-nazi en su contra. Larraín acusaba a Ibáñez, quien en 1948 se había opuesto a la

absorción de los elementos nazis por el partido, de haberse unido a ellos y a los comunistas para alcanzar el apoyo del PAL para su campaña presidencial de 1952. La renuncia de Larraín era resultado del enfrentamiento entre ibañistas y antiibañistas dentro del partido, acentuado por el respaldo que Ibáñez parecía ir ganando en distintas partes del país en detrimento del obtenido por Larraín solamente en las provincias del sur(21).

La prensa oficial interpretó la renuncia de Larraín como la explosión de presiones intolerables dentro del PAL debidas a las maniobras de comunistas y de ex nazis. Unas semanas antes de la renuncia, el diario La Nación había comentado ampliamente la "invasión comunista" del PAL, bajo la cubierta de ibañismo, como una campaña para llevar al partido a integrar el Bloque Popular junto con los comunistas y otros grupos de izquierda. Asimismo, La Hora, también controlado por radicales, señalaba la infiltración de los partidos políticos por el comunismo que había tenido lugar desde que el partido había sido proscrito(22). El presidente González Videla, en el discurso inaugural de la convención del partido Radical, increpó a los partidos de la derecha por su crítica desleal y les recordó que con sus ataques clandestinos estaban involuntariamente ayudando a la conspiración fascista-comunista que existía en Chile(23).

Ahora bien, la paradoja consistía en que las advertencias mencionadas provenían de un gobierno que había llegado al poder con el apoyo del comunismo. Como ya fue explicado, luego de haberle otorgado tres ministerios en el gabinete, el presidente había roto relaciones con aquél y lo había expulsado de todos los cargos públicos, declarándolo finalmente proscrito por ley. Con la perspectiva de la elección de 1952, la historia volvía a empezar y era esta vez el general Ibáñez el que estaba decidido a capitalizar los votos de los proscritos comunistas. El gobierno señalaba vehementemente el supuesto peligro que encerraba dicha alianza -de ibañismo y comunismo- porque si ésta se concretaba obraría en detrimento de su propio candidato.

Por otro lado, la convergencia de dichas fuerzas se debía ante todo al fracaso del gobierno en solucionar los problemas del país, principalmente los económicos, que la falta de asistencia financiera de los Estados Unidos, en la medida esperada por el gobierno de González Videla, profundizaba. El razonamiento obligado de muchos chilenos debió ser entonces que, si los problemas económicos del país no se habían solucionado con una buena relación con los Estados Unidos, el camino que quedaba era adoptar una posición más independiente en política exterior. Pero esta línea conducía a Ibáñez, que aparecía como uno de sus más genuinos postulantes, con la ventaja que ella le permitía reunir los votos de nacionalistas y comunistas.

El hecho de que el presidente insistiera en el peligro que significaba la convergencia de dichas fuerzas para la democracia chilena apuntaba seguramente a tratar de revertir la posición de las agencias financieras norteamericanas. Sin embargo, la incidencia de la negativa crediticia de dichas agencias también pudo haber sido sobredimensionada por González Videla para justificar el giro hacia una posición más nacionalista, que en definitiva parecía ser lo que la sociedad demandaba en ese momento. Quedaba por verse si la tan mentada connivencia de ibañismo y comunismo se concretaba en alguna alianza electoral y

si provocaba el desprestigio del ex dictador, que el gobierno buscaba. Por de pronto produciría un extraño episodio.

3. Complot de Colliguay

En febrero de 1950, como ya dijimos, una huelga de empleados había producido la caída del gabinete y obtenido del Congreso la satisfacción de algunas de sus demandas(24). Esto había provisto de considerable poder a uno de sus organizadores, Edgardo Maass Jensen, miembro del partido Socialista Popular y presidente de la Confederación de Empleados Particulares de Chile (CEPCH). Este antecedente y nuevas amenazas permitieron que, a mediados de ese año, la embajada norteamericana en Santiago señalara a la huelga general como uno de los factores que podía desestabilizar a la coalición gubernamental, en cuyo caso el presidente se vería forzado a pedir nuevamente sus facultades extraordinarias y posiblemente a nombrar un gabinete de administración o militar(25). En agosto, Edgardo Maass amenazó en transformar una huelga de empleados de la Caja Nacional de Ahorros en huelga general, pero los demás gremios bancarios desistieron de acompañarla(26). El hecho llevó al gobierno a pensar que éste estaba tratando de acercarse a los comunistas, por lo que el presidente declaró que no lo recibiría más(27).

En noviembre de 1950, la oposición de la Falange a la circular Holger-Letelier(28) y a la Ley de Defensa de la Democracia, especialmente en sus disposiciones respecto de los sindicatos, amenazó la permanencia de la combinación gubernamental(29). Reconociendo la oposición a dicha ley dentro del propio gobierno (los conservadores social-cristianos y el ala izquierda del partido Radical también habían demostrado su desacuerdo), el presidente declaró su voluntad de modificar esa parte de la ley e hizo saber extraoficialmente su intención de revisar la circular. Sin embargo, nada se hizo a pesar de las frecuentes afirmaciones a los líderes sindicales de que el gobierno estaba estudiando el asunto. El presidente trató de justificar la demora en su determinación de mantener controlados a los grupos subversivos(30).

Al mes siguiente, las fuerzas armadas en Santiago fueron alertadas, como medida de precaución debido a la expansión de huelgas ilegales de los servicios públicos, la beneficencia y los empleados de la Caja Nacional de Ahorro. Los militares tomaron el control de hospitales públicos y de plantas de energía. Talcahuano y Santiago fueron declarados zonas de emergencia. A pesar de las medidas, los observadores norteamericanos consideraron que la situación parecía más crónica que grave(31).

En enero de 1951, dos tribunales del Trabajo, uno de Concepción y otro de Tocopilla, independientemente, declararon ilegal la descalificación de funcionarios sindicales por un procedimiento administrativo como establecía la circular Holger-Letelier. Dos meses después, ante la insistencia de la Falange y de algunos radicales, el gobierno revocó la circular, lo que le acarreó duras críticas de los partidos de la derecha. Concomitantemente, los comunistas incrementaron su propaganda y agitación, lo que culminó en la predicción del presidente de un "primero de mayo rojo" y la acusación de que el grupo estaba

tratando de crear desorden interno. El presidente reunió a su gabinete y líderes de los partidos que lo integraban para discutir lo que llamó "el presente clima de agitación", cuya causa atribuía al partido Comunista. Mencionó específicamente las huelgas ilegales y la amenaza de huelga general de empleados y trabajadores a nivel nacional para protestar por la inflación. El presidente comunicó en las reuniones de gabinete que estaba decidido a combatir vigorosamente al comunismo y que estaba preparando una nueva circular que reemplazara la derogada. Informes de que los comunistas comenzaban a operar más abiertamente para recuperar su liderazgo en los sindicatos, el aumento de huelgas ilegales y la firme actitud del presidente aparentemente convencieron a los partidos de que debían dar su apoyo a González Videla. La nueva disposición del 8 de junio de 1951 mantenía la prohibición de puestos sindicales para comunistas o miembros de movimientos subversivos (organizaciones revolucionarias o antidemocráticas o aquéllas que recibían instrucciones del exterior) pero la descalificación que realizaran los inspectores laborales debía ser enviada a un tribunal laboral(32).

El 23 de agosto de 1951 un desfile y mitin de obreros y empleados en Santiago para protestar por el alza del costo de la vida fue el origen de un supuesto nuevo complot contra el gobierno. Al día siguiente de la marcha desaparecieron los dos más violentos oradores del mitin: el dirigente bancario Edgardo Maass Jensen y Domiciano Soto Vergara, un suspendido secretario general interino de la CTCh comunista. Comunistas e ibañistas acusaron al gobierno del secuestro de los dos líderes sindicales, dándole un breve plazo para aclarar el asunto, bajo amenaza de huelga general. Pero el hecho tuvo una insólita evolución cuando Maass y Soto fueron encontrados "autosecuestrados" en una mina abandonada en Colliguay(33).

El primer juez que entendió en la causa liberó a los protagonistas del falso secuestro pero unos días más tarde Maass fue puesto nuevamente bajo arresto, no así Soto que para ese entonces se hallaba prófugo. Carlos Fellenberg, descubierto con los anteriores en la mina, permaneció detenido y se buscó a Federico Giemza Steel, en cuyo fundo estaba ubicada la mina y era considerado uno de los principales cabecillas del complot. De acuerdo con las declaraciones de Fellenberg, una asociación de unas 20 personas de tendencia "nazi" había organizado un grupo denominado Acción Depuradora de Chile, cuyo propósito era el establecimiento de un gobierno totalitario con la colaboración de las fuerzas armadas. Fellenberg no había identificado a ninguna de las personas que pertenecían a la supuesta organización pero la prensa incluía a Giemza así como a dos empleados de la Empresa Nacional de Electricidad S.A.(ENDESA) y a una tercera persona que había huido a la Argentina el día del hallazgo de Maass y Soto(34).

No definitivamente implicados pero expresamente mencionados en el caso aparecían el senador Carlos Ibáñez y el presidente Perón de la Argentina. La prensa acusaba al primero indirectamente pero el día 28, el diputado radical Isidoro Muñoz Alegría recordó en la cámara que en 1938 elementos nazi-fascistas que respondían a Ibáñez habían creado un "clima de convulsión permanente", provocando numerosas muertes, lo cual llevaba a pensar que podían estar repitiendo lo mismo. Numerosas

declaraciones de Ibáñez realizadas mientras los sindicalistas no aparecían, acusando al gobierno de los secuestros, fueron profusamente reimpresas. Sin embargo, como los protagonistas no lo implicaron no pudo adjudicársele intervención, pero se creyó que el asunto podía perjudicar su campaña(35). En cuanto a Perón, la prensa evitó conectarlo con el complot excepto cuando se publicó que las declaraciones del diputado Muñoz, acusando al presidente argentino de "ser el dueño" de Ibáñez, habían sido eliminadas del registro en la cámara. De acuerdo con un diputado presente en la sesión, Muñoz había declarado que "Perón tenía sus satélites en todos los países y que Ibáñez era su hombre en Chile"; también lo acusaba de financiar la campaña de éste. La cuestión acerca del origen de los fondos para la extensa campaña de Ibáñez fue planteada asimismo por otros diputados(36).

Los comunistas, que a través del diario Democracia habían llamado a una huelga general en la edición siguiente a la desaparición de Maass y Soto, cambiaron luego de actitud y el día 28 acusaron del secuestro a los peronistas y a los agentes del FBI. El 29 dieron menos impulso a ese tema y comenzaron a acusar a Soto de ser un traidor a la causa de los trabajadores. El 30 de agosto Soto todavía era castigado pero Maass era presentado como la persona que había inducido al secretario de la CTCh a ser parte de la aventura. También intentaron probar que Felleberg era un informante policial. La rapidez con que el diario Democracia lanzó su campaña para un paro general, a menos que Maass y Soto aparecieran, y la consecuente publicación de resoluciones de apoyo de todas las organizaciones comunistas hizo pensar que los editores conocían el plan. El partido Comunista pareció no estar en el complot pero sí preparado para colaborar incitando, a través de la organización Comando contra Alzas, a una huelga general. Además de los sindicatos controlados por comunistas, otras de sus organizaciones como Alianza de Intelectuales y Partidarios de la Paz estuvieron de acuerdo con las protestas en contra del secuestro. Las fuerzas comunistas se movilizaron para crear la sensación de intranquilidad que el gobierno denunciaba como un paso del complot(37).

El gobierno afirmaba que tanto los comunistas como los ibañistas podían estar implicados, en virtud de las declaraciones anticipadas de algunos miembros de esos grupos. Por ejemplo María de la Cruz, líder del partido Feminista que apoyaba a Ibáñez, había declarado meses atrás que vendrían días difíciles, "incluso al punto" que algunos líderes sindicales podían ser secuestrados. También un tal Navarro, comunista, había expresado en Punta Arenas a fines de julio que en un mes tendrían lugar graves hechos y que había que estar atentos a las órdenes de la central comunista. El testimonio más comprometedor era una carta enviada por el secretario general del partido Comunista Galo González a los socialistas populares, el 4 de julio, diciendo que "ambos grupos debían promover «constitucionalmente» la partida del gobierno presente y trabajar por «un gobierno provisional que garantizara las elecciones»". Los socialistas populares se hicieron pasibles de sospecha al no asistir a una reunión de todos los partidos convocada por el presidente luego de la desaparición de los dos hombres, pero a pesar de que Maass era uno de sus miembros (éste renunció al partido hasta que su situación fuera aclarada), dicho partido no pareció estar implicado(38).

Superados los acontecimientos, se vislumbraron varias

conclusiones:

a) El gobierno obtenía un poco más de aliento con cierto apoyo popular que retendría si intentaba resolver los problemas económicos y no se dedicaba sólo a combatir a sus enemigos políticos.

b) Un intento como el de Maass, Soto y otros no se habría llevado a cabo si el gobierno hubiera sido más sólido. La política vacilante desarrollada desde febrero de 1950, cuando Maass y sus trabajadores provocaron la caída del gobierno de concentración nacional, dio a los conspiradores razón para pensar que podían intentar cualquier cosa.

c) El gobierno tuvo la oportunidad de saldar viejas deudas con el comunismo; fueron investigados los líderes que habían hecho declaraciones sediciosas en la marcha del 23.

d) La acción de los bancarios disminuyó considerablemente; sus líderes quedaron profundamente impresionados por la participación de Maass en el affaire.

e) El presidente no solicitó facultades extraordinarias y no se produjo la caída del gabinete.

f) El complot proveía material para ser usado en contra de la campaña de Ibáñez. El supuesto apoyo financiero de Perón a Ibáñez fue mencionado cada vez más frecuentemente por los opositores de éste, previéndose que esto no ayudaría a su candidatura(39).

El 26 de septiembre se conocieron las sentencias de los arrestados por el complot y acusados bajo la ley de Defensa de la Democracia de intentar derrocar al gobierno. Todos recibieron entre 5 y 8 años de prisión. Otros cuatro implicados prófugos, que habían huido a la Argentina, serían sentenciados *in absentia*(40).

Ciertas conexiones con la Argentina fueron reveladas al ser incautada por la justicia chilena la correspondencia del profesor Guillermo Izquierdo Araya. Izquierdo, un miembro conspicuo de la organización Acción Chileno-Argentina, mantenía una extensa correspondencia con prominentes argentinos, así como con una persona en Buenos Aires llamada Carlo Scorza que podía haber sido un hombre de Mussolini. Izquierdo también se escribía con Paz Estenssoro, el líder boliviano residente en Buenos Aires. La correspondencia demostraba que era posible la existencia de una bien montada organización que operara desde Buenos Aires, con Izquierdo como su jefe en Santiago y con líderes y organizaciones similares a Acción Chileno-Argentina en países de centro y sud América(41).

De la mencionada correspondencia surgió la evidencia de la existencia de un grupo secreto denominado Los Cóndores que se había fundado el 12 de febrero de 1945, varios meses después de disuelta la Unión Nacionalista, asociación de carácter público, varios de cuyos miembros habían pasado a integrar como fundadores el grupo secreto. Este quedó dirigido por el profesor Izquierdo que redactó sus estatutos y su declaración de principios o "preámbulo". Se pensaba que la institución podía tener 150 miembros en Santiago y 100 en Valparaíso y Concepción. Al poco tiempo de formada, el profesor Izquierdo obtuvo una beca de la

Comisión Nacional de Cultura del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública de la Argentina y se dirigió a Buenos Aires en marzo de 1947. En su reemplazo fue designado un triunvirato formado por los señores Nilo Rosenberg, Víctor M. Vergara y Octavio O'Kingston. Izquierdo enviaba especialmente a Vergara sus instrucciones desde la capital argentina y le comunicaba sus gestiones para formar un movimiento continental del "condorismo", con los nacionalistas argentinos (en quienes Izquierdo se había inspirado para redactar el "preámbulo"), con los bolivianos, que dirigía Paz Estenssoro, con los uruguayos, a través de un tal Aedo, y con los ecuatorianos exiliados. La cancillería argentina conocía esta organización y se había manifestado dispuesta a financiar un viaje de propaganda de dos señores, Goyeneche y Amadeo; también estaba de acuerdo en auspiciar un congreso del "condorismo" internacional para agosto de 1947, es decir antes de la conferencia de cancilleres de Río, con el fin de que dicho congreso lanzara un manifiesto planteando ante el continente latinoamericano los puntos de vista del nacionalismo hispanoamericano(42). Todo lo mencionado permitía ver

un caso concreto de las relaciones que se anudaban misteriosamente entre la cancillería argentina y ciertos elementos interesados -y muy pronto actuantes- en trastornar la estabilidad institucional de Chile para reemplazar al gobierno legítimo por uno de tinte nacionalista y autoritario, es decir semejante al peronista o inspirado en él(43).

La correspondencia del profesor Izquierdo, hecha pública con motivo de la investigación del complot de 1951, en realidad ponía en evidencia un probable antecedente del anterior complot de 1948; sin embargo, resultaba muy factible que esos mismos grupos hubieran estado todavía activos y hubieran sido instigadores también del último episodio. Una prueba de esto sería la carta de Izquierdo a su amigo Scorza de Buenos Aires(44) para comunicarle los resultados del complot de Colliguay y pedirle que ayudara a algunos de los implicados que habían huido a la capital argentina.

La Suprema Corte de Justicia chilena confirmó el 8 de enero de 1952 las sentencias dictadas a Edgardo Maass Jensen, Federico Gienza Steel y otros, cerrando el caso. Debido a la falta de colaboración de los prisioneros no había sido posible determinar el nombre y la naturaleza de la organización que planera el complot. Sin embargo, uno de los magistrados consideró que existían antecedentes convincentes para determinar que casi todos los participantes eran miembros de una organización secreta "nazi", estructurada de tal manera que los miembros no se conocían entre ellos. En su opinión, la mayoría de los participantes en los actos bajo investigación pertenecían a la sociedad secreta Los Cóndores de Acción Chileno-Argentina y todos tenían idénticas creencias políticas(45).

Al igual que en el caso del anterior complot de 1948 quedaron en el aire un sinnúmero de conjeturas que no pudieron ser confirmadas. Aparecía nuevamente una especie de asociación fantasmal con conexiones en la Argentina pero no se encontraban pruebas ni del trabajo sistemático de sus miembros ni del apoyo exterior que apuntara al derrocamiento del gobierno constitucional. Ibáñez, como en casi todos los intentos anteriores, aparecía nuevamente mencionado. Su participación no

tenía mayor explicación pues su candidatura parecía estar en el buen camino salvo que hubiera tenido razones para pensar que el gobierno cometería fraude en favor del candidato oficialista y, en ese caso, haber considerado la posibilidad de instalar un gobierno provisional que garantizara la libertad de la elección. Como en otras ocasiones el general pudo haber dado su palabra de apoyo pero no participar en forma directa. El gobierno siempre consideró que los detenidos tenían vinculación con Ibáñez e incluso ese criterio lo llevó a decidir posteriormente la liberación de los mismos.

El futuro triunfo de Carlos Ibáñez en la elección presidencial del 4 de septiembre de 1952 llevaría al presidente González Videla a anunciar la firma de un decreto de amnistía general otorgando el perdón a todos los chilenos convictos en virtud de la ley de Defensa de la Democracia. Dicho acto incluiría la libertad de los ibañistas Edgardo Maass Jensen, Enrique Felleberg, Federico Giemza Steel y Guillermo Izquierdo Araya, y también de Domiciano Soto Vergara. Con la excepción de Soto, todos los detenidos eran considerados simpatizantes peronistas y de su tipo de gobierno. La amnistía también beneficiaría a sus cómplices, prófugos en la Argentina desde el descubrimiento del complot, así como al general Ramón Vergara Montero, igualmente exiliado en la Argentina desde 1948, a raíz de su participación en el complot de aquel año. La decisión del presidente de amnistiar a tales personajes respondería a la posibilidad de acreditarse cierta magnanimidad ante la certeza de que si no lo hacía él lo haría su sucesor(46).

4. Los partidos políticos frente a la candidatura de Ibáñez

La designación oficial de Ibáñez como candidato a la presidencia para la elección de 1952 tuvo lugar a mediados de 1951. El partido Agrario Laborista lo designó en una tumultuosa sesión de su directorio nacional, el 2 de mayo, y un día más tarde lo hizo el partido Democrático del Pueblo (PDP)(47).

Durante el mes de enero de 1951 habían tenido lugar las convenciones de los dos partidos socialistas de Chile, el partido Socialista Popular (PSP) y el partido Socialista de Chile (PSCH). Sus planes de acción resultaron coincidentes en muchos aspectos: condena de la coalición en el gobierno desde febrero de 1950, firme determinación de no apoyar a un candidato del partido Radical, búsqueda de un candidato representativo de un movimiento nacional, popular e independiente del gobierno y desarrollo de un sindicalismo fuerte. La presencia en ambas reuniones de legisladores comunistas provocó que se especulara con la posibilidad de unión de partidos de izquierda en el Bloque Popular y el respaldo al general Ibáñez como su candidato para las elecciones de 1952. Sin embargo, algún miembro del PSCH aclaró que el partido no había cambiado su política anticomunista(48).

El PSP, sin declararlo abiertamente, parecía inclinarse por la candidatura de Ibáñez. La razón era que si bien en este caso el sindicalismo perdería algo de libertad, se podía contar con que Ibáñez pondría una mano firme para detener la inflación y el aumento del costo de vida. La tendencia a decidirse por un ex dictador parecía atribuible al estado general de ánimo de los chilenos, que estaban hartos de las políticas inefectivas del

gobierno, y que aceptarían un "hombre fuerte" como presidente si éste ofrecía alguna esperanza de aliviar la caótica situación económica del momento. En tanto, en el PSCH existía más bien oposición a respaldar a Ibáñez debido a que éste había solicitado el apoyo comunista -y aparentemente lo había obtenido por el hecho de haber designado a un diputado del frente comunista como el encargado de su campaña en Santiago(49).

El hecho de que los diarios oficialistas trataran de ligar a Ibáñez con los comunistas podía comprometer el apoyo otorgado por el PAL. La plataforma política de este partido rechazaba pactos con los comunistas e Ibáñez había señalado que estaba de acuerdo con lo expresado en ella, pero el general no declaró explícitamente que rehuiría el respaldo comunista. Así, el supuesto apoyo del comunismo, como el del PDP, además de las repetidas reuniones con el presidente Perón y su divulgada promesa de ayuda financiera para la campaña constituirían los puntos de mayor crítica para el candidato. Por otro lado, los seguidores nazis de Ibáñez aparecían divididos y su antiguo jefe, González von Marées, ahora liberal, se había embarcado en una campaña para socavar su influencia entre sus antiguos seguidores debido a la responsabilidad de Ibáñez en el fracaso del putsch de 1938. Con todo, a pesar de las críticas, el general estaba reuniendo una variedad de seguidores disímiles ideológicamente; el interrogante era si podría mantener la lealtad de todos hasta el final de su campaña(50).

Mientras tanto, los liberales apuntaban a obtener el apoyo de la clase media baja y obrera pero eran conscientes de que si no resultaban convincentes los grupos desencantados con el gobierno otorgarían su voto al general Ibáñez(51). El senador liberal Arturo Matte Larraín fue elegido candidato a la presidencia por su partido. En su discurso de aceptación puso el acento en un gobierno "fuerte", lo cual trató de enmendar al día siguiente en su aceptación formal. El hecho dio lugar a que las fuerzas de la coalición gobernante, en un intento de asemejarlo a Ibáñez, lo atacaran insinuando que planeaba gobernar con mano de hierro (esto podía perjudicar a Matte pero no a Ibáñez que, justamente, recibía apoyo de aquéllos que pensaban que era necesario un gobierno fuerte para sacar al país del caos económico). Matte, con el apoyo de los liberales, conservadores tradicionalistas y fracciones de otros partidos era visto como el candidato con buena chance de ganar la elección(52).

Las aspiraciones presidenciales de Ibáñez recibieron otro impulso el 11 de julio de 1951 cuando el comité central del partido Socialista Popular decidió respaldarlo. La decisión fue finalmente tomada a pesar de que algunos miembros del partido no estaban de acuerdo en apoyar a un ex dictador; por tal motivo se produjeron las abstenciones de los senadores Martínez y Allende. El partido aclaró públicamente que no tenía otro curso de acción, dado que un cuarto candidato -como proponía el partido Comunista- sería derrotado o favorecería al partido Radical. El proyectado respaldo del PSP a "un ex dictador que podría devenir un Perón chileno" provocó que grupos socialistas argentinos y uruguayos realizaran averiguaciones acerca de tales planes y obligó al envío del secretario general del partido, con el fin de darles las explicaciones necesarias, hecho que luego fue desmentido(53).

El descontento dentro del socialismo popular por el respaldo

otorgado a Ibáñez alcanzó su punto máximo el 3 de octubre cuando los periódicos de Santiago publicaron una entrevista concedida por Astolfo Tapia Moore, socialista popular y presidente de la cámara de Diputados. Tapia, que pocas veces hablaba con la prensa, convocó a los periodistas a su regreso de Buenos Aires para acusar al "fascismo argentino" de apoyar activamente la candidatura de Ibáñez(54). El diputado Tapia había viajado a Buenos Aires para asistir al primer Congreso Sociológico Latinoamericano, una reunión de carácter técnico. Apenas de regreso a Chile, el diputado manifestó que traía "documentos que demostraban que la candidatura de Ibáñez era la del fascismo argentino, para el cual los fascistas chilenos que viven allí y los que viajan periódicamente entre los países, trabajan como contactos". "En Buenos Aires", agregó, "existe una verdadera central de campaña para la candidatura del señor Ibáñez, donde se reciben colectas y se imprime propaganda en grandes cantidades"(55).

Tapia afirmaba que el fascismo argentino "soñaba con colocar a Chile dentro de su órbita política y económica", por eso consideraba a Ibáñez el mejor candidato a la presidencia en ese momento. Al diputado chileno le había llamado la atención que los diarios argentinos dedicaran grandes comentarios a Ibáñez cuando lo común era que las noticias chilenas ocuparan muy pequeño espacio normalmente en esos medios. Señalaba también que si bien el comité ejecutivo del partido Socialista argentino había acordado que el socialismo chileno debía actuar con independencia, aquél consideraba un grave error la proclamación de Ibáñez. Algunos de sus miembros habían expresado a Tapia que tal candidatura era una aberración; la misma perplejidad había causado el hecho en los socialistas uruguayos. Tapia instaba al PSP a no continuar apoyando esa candidatura y comunicaba su intención de presentar los documentos al comité central del partido, si era escuchado(56).

La reacción no se hizo esperar y el comité central del PSP, por voto unánime, expulsó a Tapia del partido. La expulsión de Tapia causó la renuncia del senador Allende y algunos de sus seguidores. Este grupo dio como razón de su dimisión el hecho de que la facción ibañista estaba comprometiendo día a día más seriamente al partido en un movimiento que "ponía en peligro la vida misma del partido, en contra de sus principios, aquéllos de la clase trabajadora y de un régimen de libertades democráticas". Luego de la ruptura, las fuerzas de Tapia-Allende adoptaron el nombre de Movimiento de Recuperación Socialista y entraron en negociaciones con los socialistas de Chile (PSCh). El comité central de este partido finalmente aceptó la fusión con el grupo Tapia-Allende y acordó respaldar la candidatura presidencial de este último. Inmediatamente Allende recibió el apoyo del partido Comunista(57).

Sin embargo, un manifiesto(58) del nuevo partido Socialista, resultado de la fusión, hecho público al poco tiempo demostraba que existían coincidencias importantes en las propuestas nacionalistas y estatizantes del socialismo con las del general Ibáñez. La defensa de la independencia económica, el control sobre los recursos naturales y una posición de neutralidad frente a la situación mundial de la época eran objetivos compartidos. Allende representaba un férreo respeto por la tradición democrática que, en cambio, Ibáñez no podía exhibir. No obstante, la ideología nacionalista y su principio de búsqueda de una posición autónoma

para el propio país parecían estar alcanzando cierta hegemonía y tenían además su referente en el justicialismo argentino. En realidad, las propuestas de todos los aspirantes a la presidencia eran bastante semejantes: la necesidad de revertir la crisis económica y una posición tercerista en el campo internacional se habían transformado en lugares comunes.

Los miembros del PSP que permanecieron en él votaron el 20 de octubre en Valparaíso la completa aprobación de las decisiones del comité central, incluidas las expulsiones de los miembros disidentes. Una declaración emitida después de la reunión señalaba las razones por las cuales el partido continuaría apoyando a Ibáñez:

El movimiento popular que respalda la candidatura presidencial del senador Ibáñez es el resultado de la urgente necesidad de establecer en Chile un gobierno capaz de restaurar y perfeccionar nuestro régimen democrático -hoy disminuido por la ignominiosa llamada ley de Defensa de la Democracia- y de organizar la economía nacional de tal manera de eliminar el predominio de las minorías plutocráticas y la preponderancia de las compañías imperialistas.

.....
La candidatura presidencial del senador Ibáñez apoya los imperativos indicados y es la única que, a través de su base popular y su programa, garantiza la realización de una política exterior, basada realmente en los intereses de Chile y su gente y por lo tanto contraria a cualquier injerencia imperialista, así como favorable al establecimiento de relaciones útiles para el país -en un plano de absoluto respeto por la soberanía nacional- con todos los pueblos de la tierra(59).

La declaración también anunciaba que el gobierno de Ibáñez nacionalizaría las industrias básicas, socializaría el crédito, revisaría las leyes de propiedad y trabajo de la tierra, mejoraría efectivamente el funcionamiento de la seguridad social y servicios públicos de salud y ampliaría la cultura de las masas por medio de la revisión del sistema educativo. En cuanto a la política exterior, se apoyaba una declaración de Ibáñez en favor de establecer relaciones con la Rusia soviética y se hacía eco de su manifestación en el sentido de no permitir a Perón injerir en los asuntos de Chile(60). Ciertamente era subyacente al apoyo a Ibáñez el objetivo primordial de evitar la alienación de la clase baja como le había ocurrido al socialismo argentino debido a su oposición a Perón(61).

En definitiva, para julio de 1951, Ibáñez había obtenido el apoyo del socialismo popular, del partido Democrático del Pueblo, del grupo pro-ibañista del PAL, del partido Feminista y de otros grupos pro-ibañistas independientes(62). En cuanto a su relación con el comunismo, finalmente Ibáñez decidió aclarar su posición respecto del eventual apoyo de éste y advirtió:

No lo he pedido, /.../, ni solicitaré esos votos (comunistas); pero tengo derecho a esperar que el lanzamiento popular de mi candidatura, alrededor de la cual están los grupos políticos que representan el espíritu y las necesidades de la clase trabajadora, terminará teniendo a todos los partidos, sin excepción, que están sinceramente

interesados en los ideales de mejoramiento y bienestar del pueblo chileno, bajo mi estandarte. Si esto ocurre, no rechazaré esos votos solo para complacer a mis enemigos y facilitar su triunfo.

En cuanto al resto, es ridículo ver la refinada hipocresía de aquéllos que pretenden criticar mi actitud en un país en el cual, durante todos estos años hemos visto al partido Liberal estrechar lazos con el partido Comunista, y donde una de las principales personas responsables de la ley de Defensa de la Democracia [referencia al senador radical Luis Cuevas] viaja a través del país en este momento proclamando de manera estentórea que la sanción de la ley constituye el mayor error cometido por el partido Radical(63).

Ibáñez dejaba por lo tanto aclarado que no sería el único candidato en aceptar los votos comunistas. Con ello el ex dictador demostraba una extrema habilidad para no enajenarse fuerzas políticas que estaban absolutamente lejos de su pensamiento político. El general no era de izquierda, tenía verdadera vocación por un gobierno fuerte y odiaba los desórdenes comunistas. Su discurso, sin embargo, permitió que algunos grupos de socialistas y comunistas consideraran conveniente y posible ponerse de su lado.

El partido Comunista había estado buscando hasta el mes de octubre algún arreglo conveniente con Ibáñez. La negativa del general a hacer pronunciamientos de "tipo antiimperialista" había frenado la acción de los comunistas cuando repentinamente se produjo la disidencia de Allende dentro del socialismo popular y apareció la posibilidad para el comunismo de apoyar a ese candidato con un programa de izquierda. El realineamiento de fuerzas que se produjo a raíz de ese hecho dio lugar a un fortalecimiento del partido Socialista de Chile, que comenzó a llamarse simplemente Socialista. También influyó en el ámbito laboral donde Ibáñez tenía muchos simpatizantes, partidarios de un gobierno fuerte que terminara con el caos económico-social del momento, y donde ahora algunas organizaciones podrían optar, en cambio, por apoyar la candidatura de Allende(64). Pocos meses más tarde, los comunistas reconocieron públicamente que estaban trabajando con los obreros que apoyaban a Ibáñez para convencerlos de que estaban siguiendo al líder equivocado y hacerles ver que podían alcanzar un destino independiente de "un mesías que no era de su clase y no compartía sus intereses"(65).

Finalmente, el partido Radical también designó su candidato a la presidencia en la persona de Pedro Alfonso Barrios. Era el más pronorteamericano de todos los postulantes y reconocía abiertamente que debía apoyarse a los Estados Unidos en su lucha contra el comunismo. Como consideraba que la mano firme respecto de Moscú prevendría una guerra, proponía conferir la cooperación, pero ésta debía ser la que "un pueblo libre otorgaba a otro pueblo libre". No había razones para pensar que los Estados Unidos intervendrían en los asuntos internos de Chile. Alfonso, al considerar las posibilidades de sus rivales, observó que era imposible imaginar un gobierno socialista-comunista debido a que esa alianza carecía de apoyo popular y también manifestó que Ibáñez no tenía ninguna significación política(66).

Sin embargo, a fines de marzo de 1952, un observador señalaba

que Ibáñez aparecía como el "caballo oscuro" de la campaña presidencial, como el más temido de todos los candidatos y el blanco particular de los otros tres contendientes. Su caso constituía una anomalía en la política chilena pues era un adversario respetado a pesar de no contar con el apoyo de grandes partidos políticos. No obstante, se consideraba que Ibáñez había alcanzado su máximo poder electoral y que retendría el apoyo obtenido hasta ese momento pero que le resultaría difícil como candidato independiente ganar la elección a los partidos políticos tradicionales. Se preveía la posibilidad de que alguno de los candidatos abandonara su carrera y cediera su apoyo a otro. Las fuerzas de Alfonso y Matte tenían la certeza de que la puja terminaría con ambos candidatos en el Congreso(67).

El éxito que Ibáñez parecía comenzar a tener en su campaña se atribuía al descontento general por la situación económica, a cierta mística que rodeaba a su persona y a su imagen de hombre fuerte. Dichos factores tenían suficiente entidad como para desdibujar sus supuestos rasgos negativos: su admitida admiración por Perón, las probables tensiones que, en caso de ser elegido, causarían las exigencias encontradas de sus partidarios de derecha e izquierda; su pasado dictatorial, su edad avanzada y el hecho de no tener apoyo suficiente en el Congreso para obtener la sanción de las leyes que intentara proponer(68). Para sus seguidores, los "inquilinos" de los fundos y la clase humilde de los pueblos y las ciudades, además de empleados y trabajadores de la baja clase media y algunos funcionarios retirados, Ibáñez representaba el recuerdo de tiempos mejores, los de comienzos de los años 30. Para esa gente era más importante la esperanza de un alivio en el alto costo de la vida que la supuesta amenaza a sus libertades que el político podía llevar consigo; en esto coincidían también algunos terratenientes, hombres de negocios y profesionales(69).

En definitiva, Ibáñez no contaría para hacer frente a la elección con un partido unitariamente consolidado. Había obtenido el apoyo de partidos escindidos o sectores de algunas agrupaciones políticas justamente porque no todos sus integrantes estaban de acuerdo con su designación. La escisión del socialismo popular y el consecuente realineamiento de las fuerzas de izquierda alrededor de la candidatura del senador Allende amenazaba quitarle gran parte del apoyo que tenía entre los sectores obreros. Las críticas de este grupo apuntaron a señalar que era un pseudo caudillo con actitudes mesiánicas mientras el comunismo le atribuía una actitud pronorteamericana durante su primer gobierno y le censuraba la falta de una declaración antiimperialista; paradójicamente los norteamericanos tampoco confiaban en él. La ambigüedad mantenida por Ibáñez fue su mejor arma para enfrentar tales críticas. Además, Ibáñez no estaba involucrado en el fenómeno de descrédito que alcanzaba a toda la clase política chilena y que sus principales adversarios, el candidato liberal Matte y el radical Alfonso, deberían contrarrestar.

Hasta aquí hemos señalado los apoyos que el ibañismo obtenía en el ámbito interno, indagaremos ahora la denunciada ayuda externa.

5. La conexión con la Argentina

Ibáñez se había preocupado, en octubre de 1951, a su regreso de una gira por el norte de Chile, de aclarar ante una gran concentración partidaria las denuncias periodísticas de que debía favores a Perón, recibía dinero del otro lado de la cordillera y se proponía incorporar a Chile a la órbita de influencia de la Argentina. El general declaró en esa oportunidad que Argentina y Chile deberían trabajar juntos pero que no permitiría, bajo ninguna circunstancia, a ningún otro país o a sus gobernantes, infringir la soberanía de Chile. "Los hombres de armas son hombres de honor y no compran ni venden países", expresó. También negó cualquier vínculo con el complot Maass-Soto y sus aclaraciones parecieron eliminar definitivamente los cargos en su contra(70).

A mediados de marzo del año siguiente, las fuerzas ibañistas realizaron una nueva desmentida. En este caso negaron tener conocimiento de una organización denominada Acción Social Chilena, que supuestamente operaba en Buenos Aires con el propósito de recolectar fondos para la campaña de Ibáñez. El comité político encargado de dicha campaña denunciaba "las bajas maniobras a que sus enemigos recurrían para desacreditar el espíritu y los objetivos del candidato nacional popular"; "negaba rotundamente cualquier conexión con las actividades de la mencionada organización" y "apelaba al público a mantener la más estricta vigilancia para frustrar los planes y conspiraciones del adversario"(71). El consejero de la embajada norteamericana que informaba del hecho lo interpretaba como un intento del ibañismo de aparentar desaprobación del "vociferante apoyo que Perón le estaba dando", pues los chilenos que visitaban Buenos Aires quedaban "asombrados e irritados por el desenmascarado apoyo que Ibáñez recibía de los diarios oficialistas". El mencionado observador señalaba que los ibañistas trataban de esa forma de alejarse de la sombra peronista, para quitar un arma política a sus adversarios, pero consideraba improbable que las fuerzas de Perón les fueran a retirar su apoyo por ese motivo(72).

A mediados de julio el gobierno chileno declaraba persona no grata al cónsul argentino en Antofagasta y denunciaba la implicación del cónsul argentino en Los Andes debido a la acción de ambos en favor de la diseminación de propaganda antichilena originada en la Argentina. La embajada norteamericana señalaba que probablemente los dos incidentes constituían una señal de la iniciación de una campaña activa de las fuerzas de Alfonso y de Matte en contra de la presunta ayuda de Perón a Ibáñez. Resultaba evidente con ello que ambos grupos estaban lo suficientemente alarmados por el crecimiento de los ibañistas como para arriesgar un posible incidente internacional con la Argentina, con la esperanza de poner algún obstáculo en la campaña de su adversario. Sin embargo, debieron evaluar que "el riesgo no era demasiado grande considerando que parecían existir pruebas concluyentes de la responsabilidad argentina" y porque era altamente improbable que el gobierno de aquel país deseara transformar el asunto en un incidente diplomático(73).

El gobierno de Chile incorporó dicho factor internacional en el proceso electoral cuando el 26 de julio de 1952, faltando poco más de un mes para la elección, el ministro de Relaciones Exteriores Eduardo Yrarrázaval entregaba a la prensa un comunicado

informando haber convocado a conferencia de prensa a los presidentes de los partidos políticos y de los comités de relaciones exteriores de ambas cámaras para comunicarles la cuestión provocada por la injerencia de algunas oficinas del gobierno argentino en la vida pública de Chile. El ministro había explicado las razones del gobierno para retirar el exequátur al cónsul argentino en Antofagasta, quien había incurrido en actividades ajenas a sus funciones, al haber hecho circular entre los sindicatos mineros una gran cantidad de propaganda recibida por correo diplomático. La decisión había sido comunicada previamente al embajador argentino Carlos Lerena(74).

También hacía saber el ministro en su comunicado que la aduana de Los Andes había comprobado que un bulto de material impreso, dirigido al cónsul argentino en esa ciudad por la cancillería de su país, contenía una apreciable cantidad de una publicación denominada "Diario Mural" en donde aparecía un artículo "altamente ofensivo para Chile y su gobierno". Asimismo, el día 24, la aduana de Los Cerrillos había revisado el contenido de nueve bultos de material impreso dirigido a la embajada argentina también por su cancillería, hallando nuevas ediciones del mencionado diario "en el cual nuevamente nuestro gobierno era violentamente atacado, la vida política de Chile era comentada de manera insultante y S.E. el presidente de la República ofendido". Dichos bultos eran retirados de la aduana por Héctor José Gallasi, empleado de la embajada argentina. El 25, día de la convocada conferencia de prensa, habían sido recibidos en la aduana de Santiago 600 kilos de revistas con "artículos ofensivos para Chile, enviados por el ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la Argentina a la embajada en este país"(75).

El canciller chileno señalaba "la gravedad de estos hechos, sin precedente en la historia", no solo porque eran ataques y ofensas lanzadas contra el gobierno sino porque éstos eran llevados a cabo por medio de material impreso enviado por el ministro de Relaciones Exteriores de una nación, con la que se estaba vinculada por un pasado común, y distribuido a través de sus misiones diplomáticas y consulares. El ministro comunicaba que las personas presentes en la convocada conferencia de prensa estaban completamente de acuerdo en la seriedad de los hechos revelados, los que serían materia de debate en el Congreso. El ministro, por su parte, procedería a tomar las medidas necesarias para hacer frente a la situación(76).

Los episodios fueron muy comentados por los diarios que apoyaban a los candidatos Alfonso y Matte. El diario gubernamental La Nación afirmaba que la Argentina había comenzado dicha distribución de propaganda simplemente para "despertar simpatía por su tipo de gobierno", pero gradualmente había transformado sus esfuerzos "en una campaña calculada para socavar al gobierno de Chile y de otros países sudamericanos". No podía dudarse, decía el diario, que la intención era influir la venidera elección presidencial. Afirmaba también que en un país con libertad de prensa y opinión no podían hacerse quejas en contra de literatura destinada a producir simpatía y comprensión de un gobierno extranjero pero cuando esa literatura apuntaba a minar las instituciones constituía intervención y no podía ser tolerada. Implícitamente se daba a entender que la propaganda argentina estaba destinada a favorecer la campaña del senador Ibáñez(77).

El día 27, la misma inferencia aparecía claramente en El Diario Ilustrado, a la vez que El Mercurio reseñaba nuevamente toda la situación y recomendaba a Ibáñez "liberarse de la posición de ser favorecido por el general Perón y de sacar ventaja de la propaganda oficial argentina si deseaba llevar adelante una campaña limpia ante el electorado chileno". El Diario Ilustrado y La Nación publicaban fotograbados mostrando parte de los "600 kilos" de propaganda argentina y las páginas del "Diario Mural" y de "Noticias del Mundo" en las que aparecía el artículo más ofensivo(78).

El artículo en cuestión, titulado "El cobre y González Videla", era una crítica a la derogación oficial del tratado firmado el año anterior en Washington entre el gobierno chileno y las compañías norteamericanas, a pocos meses de concluir el presidente sus funciones. El artículo aludía al problema de Chile de no poder satisfacer el aumento de la demanda mundial de cobre como consecuencia de hallarse su exportación en manos de las compañías extranjeras, señalando, además, que éstas lo vendían a un precio muy bajo. Cuestionaba también las pocas ventas del cupo del 20% que correspondía al estado realizadas, debido a la necesaria intermediación de políticos con influencia en el gobierno y a la competencia de las mismas compañías que ofrecían el cobre a un precio menor. Finalmente, presentaba sospechas por el interés que había demostrado el presidente Truman en arreglar amistosamente la cuestión, supuestamente con el fin de evitar que el gobierno chileno tomara el control de la exportación del metal. El artículo cuestionaba dicha actitud frente a un acuerdo que había sido concluido con las compañías productoras(79). Es decir que se criticaba al gobierno chileno la oportunidad de la derogación del tratado, mostrándola como una medida inspirada por un nacionalismo tardío y de cuño electoralista, a la vez que se señalaba la actitud del presidente norteamericano como intervencionista y contraria al interés de Chile. Implícitamente, el autor justicialista del texto estaba postulando el control de dichas exportaciones por parte del estado.

El artículo hacía una alusión a Ibáñez y a las razones de su fuerza electoral:

La completa venta del gobierno a sus socios norteamericanos era fácilmente explotada por los otros candidatos, especialmente aquél que podía contar con ferviente popularidad, quien, en su programa, sostenía la nacionalización de las riquezas del país. La rápida fuerza ganada por este último y la debilidad electoral en la que el candidato "continuista" se encontraba, forzaron a González Videla y su ministro Picó Cañas, quien no había perdido la esperanza de presentarse a sí mismo como un candidato de compromiso, a asumir el rol de guardianes del patrimonio nacional, el cual anteriormente no dudaron en rendir(80).

Por último se ligaba toda la situación del cobre con el recientemente concluido Pacto de Ayuda Militar entre Estados Unidos y Chile porque éste hacía mención de los materiales estratégicos -y el cobre era uno de los más importantes. El artículo juzgaba astuta la maniobra del presidente porque había resultado útil en la política interna pero consideraba que le había creado un problema en el terreno internacional, al producirse la intervención no ya de las compañías sino del mismo

presidente Truman. La conclusión era que entre ambos presidentes, "que habían dado tan finas demostraciones de amistad", se alcanzaría una solución satisfactoria para ambas partes(81). La intención era pues demostrar que el presidente chileno había asumido tardíamente la defensa de los intereses de Chile, no obstante lo cual seguramente terminaría accediendo a las propuestas del presidente norteamericano. La conclusión implícita parecía ser que el pueblo chileno debía votar a aquel candidato que defendiera un mayor intervencionismo del estado en el manejo de esos temas para poner freno a las pretensiones de los Estados Unidos.

Los norteamericanos consideraron que, a pesar de que la acción del gobierno argentino estaba más allá de toda duda, la razón para entregar la historia a la prensa y su densa utilización por los diarios que sostenían a Alfonso y Matte parecía ser "un último esfuerzo canalizador de dichas fuerzas para desacreditar la campaña de Ibáñez". No obstante dudaban de que la maniobra obtuviera el efecto deseado pues el apoyo a Ibáñez había crecido enormemente en los últimos meses y sus partidarios demostraban "una lealtad semi-fanática hacia una personalidad dominante"(82).

De todas maneras, aunque el gobierno chileno hubiera utilizado el asunto de la injerencia argentina en los asuntos internos con el fin electoralista de intentar desprestigiar al candidato respaldado por el gobierno argentino y eliminar de esa forma un competidor del candidato oficialista, la cuestión era que la intervención había existido. Se trataba de un ejemplo del tipo de "bombardeo propagandístico"(83), implícitamente coercitiva, respaldada por el estado argentino y apuntada a afectar los asuntos internos de Chile, en tanto estaba dirigida a instalar en la presidencia del país vecino a un amigo del presidente Perón. Puede afirmarse también que Perón hubiera provocado una reacción mucho mayor comparativamente -teniendo en cuenta la prensa que respondía al presidente argentino- que la producida en Chile, si la circunstancia hubiera sido a la inversa. Tampoco parece el caso demasiado diferente a la intervención del embajador norteamericano Spruille Braden ante la elección presidencial de la Argentina en 1946, tan vehementemente censurada por el presidente argentino.

Un observador norteamericano percibió, a fines de agosto, que las posibilidades de triunfar de Ibáñez parecían haber sido seriamente dañadas por las revelaciones del apoyo en su favor otorgado por la Argentina(84). Pocos días después, el gobierno de Buenos Aires intentaría una última acción para tratar de desvincularse del rol de gestor de la ayuda al candidato chileno.

Los diarios de Buenos Aires publicaron los días 29 y 30 de agosto un comunicado del ministerio del Interior argentino expresando que, en vista de las denuncias sobre la existencia de ciertas organizaciones implicadas con la campaña electoral que se desarrollaba en Chile, el ministro Angel Borlenghi había dado orden a la policía federal de cerrar los locales de una serie de asociaciones(85). También el ministro había ordenado que los organismos nacionales tomaran las medidas necesarias para evitar en el territorio argentino toda actividad o propaganda proselitista, recolección de dinero, etc., que en alguna forma implicara participación en la venidera elección chilena(86).

El ministro afirmaba, en el preámbulo de su resolución, que era un principio invariable del gobierno del general Perón el hecho de abstenerse estrictamente de intervenir en los asuntos internos de otros países y también de evitar declaraciones que pudieran resultar ofensivas a cualquiera de las fuerzas políticas o personalidades actuantes. El ministro agregaba que, en consecuencia y a fin de mantener el principio básico de la armonía internacional, era necesario tomar medidas adecuadas para asegurar que ninguna actividad extraña a la política nacional tuviera lugar dentro del país con el propósito de causar decisiones afuera, prescindiendo de candidatos, partidos, principios o doctrinas que pudieran inspirar las actividades en cuestión(87).

El 29 de agosto también aparecía publicado en el Boletín Oficial argentino el decreto Nº 4.295, fechado en Buenos Aires el 18 de agosto de 1952, y por el cual se creaba una "comisión investigadora de la denuncia formulada por el gobierno chileno". Los considerandos mencionaban los siguientes factores: la seria denuncia formulada por el gobierno chileno al embajador argentino Lerena, concerniente a cierta propaganda argentina ofensiva para el pueblo chileno y su presidente, que parecía ser de carácter oficial; la necesidad de clarificar completamente los hechos en cuestión, que afectaban las tradicionalmente amistosas relaciones argentino-chilenas; el principio de no intervención en los asuntos internos de otros países al cual el gobierno argentino siempre había ajustado su conducta; la posibilidad de que "elementos infiltrados en la administración pública, prescindiendo de su carácter, pudieran haber cometido actos tales como aquéllos denunciados"; y el hecho de que "la única propaganda oficial permitida por el gobierno argentino es la que tiende a fortalecer el entendimiento mutuo entre el pueblo de la Argentina y los pueblos de otros países". En ellos sustentaba el poder Ejecutivo su intención de esclarecer totalmente los hechos y de aplicar las penalidades pertinentes a los culpables(88). El decreto establecía el nombramiento de una comisión, presidida por el ministro plenipotenciario Lazcano, para investigar los hechos denunciados. La comisión estaba autorizada a requerir la información necesaria de todas los organismos del Estado y del ministerio de Relaciones Exteriores(89).

El decreto mencionado trasuntaba además la existencia de un cierto conflicto burocrático. La responsabilidad por las actividades de propaganda, que el gobierno chileno había denunciado enérgicamente, recaía en una trilogía formada por el canciller, la Confederación General del Trabajo (CGT) y la oficina de Propaganda del comodoro Pons Bedoya, dependiente del despacho presidencial. Ahora bien, como las aparentemente autónomas actividades de estos dos últimos organismos habían dejado frecuentemente en posición incómoda al ministro de Relaciones Exteriores, la medida adoptada también podía atribuirse más que a los escrúpulos del canciller en contra de la injerencia en los asuntos internos de otros estados a la oportunidad que se le presentaba de hacer más rígido el control de las actividades en el exterior de las otras dos agencias. El conflicto de la CGT y la oficina de Pons Bedoya con el ministro demostraba la existencia de una puja entre las fuerzas más conservadoras de Perón y la CGT. El hecho de que la comisión creada al efecto estuviera presidida por el director de Asuntos Jurídicos de la cancillería significaba que la conducción de los intereses argentinos en el exterior había quedado en manos del ministro(90).

Cabe agregar que no existe evidencia suficiente que demuestre el aporte de fondos desde la Argentina para la campaña de Ibáñez salvo los testimonios obtenidos por Bray y mencionados en su artículo sobre el tema. Estos son los siguientes: Javier Lira Merino, responsable de la campaña, aseguró que había sido modestamente financiada pero no aceptó detallar por escrito las contribuciones peronistas. Otra persona, en cambio, afirmó haber conocido gente que traía bolsas llenas de dinero para la campaña de Ibáñez desde la Argentina. Un prominente ibañista aseguró que el dinero para la campaña proveniente de la Argentina había sido pedido prestado a un banco de Bahía Blanca. Por su parte, el diputado radical Manuel Río seco declaró en el Congreso chileno que la prueba documental de que el Movimiento Nacional Ibañista, el Partido Femenido de Chile y el Partido Agrario Laborista (PAL) habían recibido dinero del embajador argentino para financiar algunos aspectos de la campaña no había sido contradicha. Río seco declaró que un cheque firmado por el embajador argentino para el PAL había sido entregado al líder de ese partido Alejandro Hales. Luego de romper con el régimen, Conrado Ríos Gallardo, que había sido embajador chileno en la Argentina, declaró en 1956 que Ibáñez había recibido cinco millones de pesos argentinos de Perón como contribución para la campaña. Carlos Vicuña Fuentes, uno de los más acérrimos enemigos de Ibáñez, sostuvo que Perón había sido la fuente financiera principal de la campaña de Ibáñez. Por último, el historiador Francisco Encina no creía que los fondos peronistas hubieran jugado un papel importante en el financiamiento de la campaña de Ibáñez(91). Sin embargo, tratándose de dinero es muy factible que su transferencia se hubiera hecho sin dejar prueba alguna; como veremos, la embajada norteamericana la consideró un hecho a pesar de no tener testimonios.

La decisión de último momento del gobierno argentino ordenando el cierre de los locales de algunas asociaciones que habrían trabajado por la campaña del general Ibáñez a la presidencia chilena y la aseveración de que habría habido algunos elementos infiltrados en la administración pública colaborando en el mismo fin, además del hecho de que se habrían recolectado fondos o enviado propaganda, no hizo más que confirmar que tales actividades se venían desarrollando en el país. El hecho de que la medida del gobierno hubiera aparecido publicada el 29 y 30 de agosto en Buenos Aires y la elección chilena estuviera fijada para el 4 de septiembre demostraba que la decisión no revertiría los resultados de tales actividades. Los fondos, si hubieran existido, ya habrían sido enviados, al igual que la propaganda. El compromiso del gobierno argentino de investigar las mencionadas actividades era irrelevante pues el objetivo principal de colaborar para que un político de ideas afines al presidente argentino alcanzara el poder en Chile estaba prácticamente alcanzado a esa altura de los acontecimientos.

Finalmente, debe mencionarse una maniobra intentada por el gobierno chileno para contrarrestar justamente el supuesto respaldo económico que estaba recibiendo Ibáñez. El 13 de agosto, el presidente González Videla y su ministro Trucco convocaron al embajador norteamericano Bowers para transmitirle la honda preocupación de los partidos democráticos ante las señales y los métodos de Ibáñez. Apelando obviamente al aspecto que más podía inquietar a los norteamericanos, el presidente intentó relacionar al general con los comunistas, adjudicando las huelgas que se

estaban produciendo en las minas de cobre, nitrato y carbón a instrucciones traídas de los países de detrás de la cortina de hierro por Pablo Neruda y cuyo objetivo era convencer a los comunistas de otorgar sus votos a Ibáñez. El presidente atribuía mucha de la fuerza ibañista al dinero proveniente de la Argentina(92). Al informar inmediatamente a sus superiores, Bowers advertía, aun no habiendo podido comprobar esto último en los bancos chilenos, lo siguiente:

que las instituciones democráticas de Chile estaban gravemente amenazadas con la extinción; que Ibáñez y Perón formarían una sociedad de acuerdo con líneas peronistas; que los partidos democráticos están en gran desventaja financiera con Ibañez financiado abundantemente por la Argentina; que una victoria de Ibáñez amenazaría todas las inversiones extranjeras aquí -y particularmente las nuestras-, puesto que ha anunciado que su objetivo último es la nacionalización de las minas /.../(93).

También transmitía que, en vista de todos esos problemas, González Videla "esperaba que el gobierno de los Estados Unidos permitiera que las compañías americanas aquí ayuden financieramente a Matte o a Alfonso y que esto podía ser hecho sin posibilidad de revelarse". El presidente había pedido al embajador que sometiera el tema al secretario asistente Miller(94). La aparente escasez de recursos de los candidatos que representaban a los partidos tradicionales chilenos evidenciaría lo sospechoso, en cuanto al origen de los fondos, que un candidato independiente como Ibáñez pudiera llevar adelante una campaña onerosa.

Al día siguiente, en otro telegrama, Bowers ampliaba la información y decía haber recibido la impresión de que sus interlocutores tenían un gran temor al triunfo de Ibáñez en los comicios y que, aun resultando segundo, las desinteligencias entre las dos fracciones conservadoras de tradicionalistas y social-cristianos harían que el partido que saliera en tercer lugar diera sus votos a este candidato y no al primero. También temían -y Bowers pensaba que con razón- que los comunistas finalmente desertaran de Allende y votaran a Ibáñez. El embajador insistía en recordar que, en el caso de ser elegido Ibáñez, las compañías norteamericanas estarían sujetas a un duro tratamiento debido al anuncio de dicho candidato que su objetivo último era la nacionalización de las minas. "Su tendencia es llanamente concordante con la línea peronista y sin duda existe la intervención activa de Perón con propaganda y dinero", afirmaba el embajador Bowers(95). En definitiva, la insistencia de Bowers en el apoyo comunista que tendría Ibáñez, en el peligro que encerraba para las compañías norteamericanas su propósito último de nacionalizar los recursos mineros y en la asistencia doctrinaria y material del peronismo a su campaña parecía apuntada a lograr que sus superiores autorizaran la ayuda financiera de las compañías a alguno de los candidatos más confiables como pretendía el presidente González Videla.

Un telegrama del Departamento de Estado a la embajada en Santiago, emitido el día 15, contenía la siguiente respuesta:

Concurrimos en que no es deseable que las empresas de propiedad americana se vean involucradas en los asuntos internos de otros países latinoamericanos haciendo

contribuciones financieras a las campañas de determinados candidatos. Damos por sentado que las compañías americanas y el gobierno chileno están ya al tanto de esto(96).

La actitud del gobierno norteamericano respecto de la prescindencia de sus compañías en las elecciones chilenas se mantenía invariable e igual que en ocasiones anteriores, cuando se habían hecho los mismos pedidos de ayuda financiera. La diferencia radicaba en que anteriormente éstos habían provenido de los candidatos o sus representantes; lo nuevo en este caso era que el propio gobierno chileno hiciera la petición.

6. El programa de Ibáñez y sus coincidencias con el justicialismo

Un mes antes de las elecciones, Ibáñez dio a conocer la plataforma en la que basaría su gobierno. En ella se advertía, como se verá, una similitud con las propuestas justicialistas, lo que no implicaría filiación sino meramente concurrencia. Ya en su primera presidencia Ibáñez había demostrado su aceptación de una legislación social progresista y del intervencionismo estatal. Otros rasgos de su gobierno habían sido semejantes a los que exhibía el peronismo: amordazamiento de la prensa, intolerancia de la oposición, ni siquiera del Congreso; apoyo gubernamental a los sindicatos leales y castigo a los recalcitrantes, construcción de grandes obras públicas(97). El fenómeno peronista tendría pues para Ibáñez el significado de haber actualizado sus ideas albergadas desde años atrás y de allí su inclinación a relacionarse con aquél.

En el aspecto político, Ibáñez, devenido ferviente defensor del estado democrático, a fin de eliminar la debilidad de éste debido a leyes discriminatorias y defectos estructurales, proponía: la derogación de la ley de Defensa de la Democracia y toda otra legislación que restringiera la libre expresión cívica; una reforma de la ley electoral de manera que los partidos tuvieran una representación genuina y se evitara el fraude; el fortalecimiento de los partidos políticos; y la "intervención directa y orgánica" de las fuerzas del trabajo en la orientación de la política general del Estado, especialmente la economía(98). Estas consignas, además de intentar demostrar la convicción democrática del general, constituían concesiones necesarias para mantener el apoyo de sus partidarios socialistas y quizá el de algunos comunistas, cuyo partido permanecía proscrito en virtud de la ley que se proponía derogar. En sus propuestas de orden político, la semejanza con el justicialismo no era relevante salvo en cuanto al protagonismo que postulaba para los sectores obreros.

En el campo económico, la plataforma ibañista reconocía un acentuado desequilibrio causado por la iniciativa de la Corporación de Fomento de construir una gran industria sin tener un progreso equitativo de la agricultura; esa circunstancia, sumada a la dependencia del mercado foráneo, agravaban en Chile los efectos de la inflación, profundizada por la acción de especuladores y usureros. Para evitar la bancarrota, Ibáñez proponía una organización integral de la economía que favoreciera la producción y el consumo popular. La imposición de severas limitaciones a los sectores privilegiados tendría como fin incrementar la capitalización del país y permitir aplicar un plan de recuperación económica sin afectar las precarias condiciones de

vida de los asalariados(99).

Las siguientes medidas económicas propuestas por Ibáñez encerraban marcadas coincidencias con las adoptadas por el presidente argentino, sobre todo en el rol reservado al Estado:

- a) Organizar un Consejo Económico Nacional que pusiera en comunicación las fuerzas del trabajo y la producción con la política económica del Estado.
- b) Desarrollar un plan económico nacional con claros objetivos de capitalización, producción y consumo, que determinara los límites y correlaciones de la economía pública y privada y que eliminara el "injustificado enriquecimiento de individuos".
- c) Modificar la política crediticia de manera que junto con los fondos públicos sirviera los fines económicos del Estado y el desarrollo de la producción de acuerdo con el interés social.
- d) Cambiar la estructura de la dirección del Banco Central transformándolo en un organismo manejado por técnicos apartados de intereses privados y de presiones partidarias.
- e) Crear el Banco del Estado como único dispensador de crédito a largo y mediano plazo, incorporando a éste la Caja Nacional de Ahorros y las instituciones de crédito semifiscal.
- f) Considerar especialmente dentro del plan económico nacional:
 1. La intensificación y ampliación de la producción agrícola por medio de política impositiva y crédito adecuado, estableciendo medios legales respecto del régimen de propiedad y de trabajo de la tierra con el fin de asegurar el máximo de producción.
 2. La participación del Estado en la introducción y en los beneficios de aquellas industrias que requirieran una política de desarrollo y tratamiento preferencial.
 3. La intervención del Estado en la producción, distribución y beneficios de la industria minera, con el objetivo principal de obtener un precio justo para sus productos en el mercado mundial y preparar las bases de la futura nacionalización.
 4. La decisión de que las utilidades de la industria minera quedaran bajo el régimen común de exportaciones chilenas y que su inversión siguiera un plan aprobado por el gobierno.
 5. La industrialización de materias primas nacionales para aumentar la exportación de artículos manufacturados.
- g) Estimular la iniciativa económica privada y coordinarla con aquélla de los organismos públicos.
- h) Incorporar los servicios públicos a la economía estatal y restablecer el espíritu original de la Corporación de Fomento, eliminando las influencias políticas y privadas.
- i) Desarrollar una política de comercio exterior que fuera un instrumento de la acción económica del Estado.

j) Restringir progresivamente en comercio exterior las actividades de los intermediarios que incrementaban el costo de vida y promover la distribución de artículos de consumo por medio de un sistema de cooperativas estatales y municipales que trataran directamente con los productores y consumidores(100).

En síntesis, las semejanzas con el programa económico peronista se observaban en la postulada acentuación de la intervención del estado en la economía en propuestas tales como la colocación del crédito y fondos públicos al servicio del estado, el establecimiento de un banco estatal como único dispensador de crédito, la modificación de la estructura del Banco Central, independizándolo de intereses privados; el control sobre la explotación de los recursos naturales mediante la intervención del estado en las distintas fases de la industria minera y la consideración de su futura nacionalización; la nacionalización de los servicios públicos, la eliminación de la intermediación en el comercio exterior tomando su lugar el estado, etc.

En el campo del trabajo y la seguridad social también podían detectarse similitudes con la política de Perón. Ibáñez pretendía lograr un cambio en las relaciones entre las empresas y los trabajadores. "Las fuerzas del trabajo debían participar directamente en el proceso productivo de la economía" y los sindicatos, además de defender sus intereses, debían ser responsables de los procesos económicos. Postulaba incorporar a la constitución los derechos fundamentales de la organización sindical y de la seguridad social. El perfeccionamiento de la legislación laboral y de la seguridad social implicaba extender los beneficios a todas las categorías de trabajadores, derogar las restricciones a la organización sindical, estimular la participación de los trabajadores en la dirección de firmas públicas y privadas, organizar sistemas de cooperativas a través de los sindicatos, establecer un sistema de salario vital y móvil, etc.(101).

Respecto de los planes para la educación, la plataforma ibañista señalaba que la educación carecía de "un espíritu dinámico y un sentimiento que le diera unidad y coherencia interna". Las personas debían ser preparadas para las tareas que las soluciones a los problemas nacionales demandaran; con ese fin la educación pública debía proponerse entre sus objetivos preparar ciudadanos educados "conscientes de su obligación social" y hacerlos capaces de colaborar en la economía nacional. Para cumplir con el precepto constitucional de prestar atención preferencial a la educación, el estado debía crear un fondo educacional y dictar una ley de Educación Nacional Orgánica y una ley de Educación Física que creara específicamente la subsecretaría de Deportes. Una disposición obligaría a las municipalidades, los grandes industriales, las firmas manufactureras y comerciales y las agencias de bienestar social a transferir anualmente una parte efectiva de sus ganancias para el desarrollo de la educación física y los deportes. A los maestros les sería respetada su libertad ideológica y profesional(102). Ahora bien, como no se definía el "principio dinámico" o el "sentimiento" que debía infundirse en la educación y -si bien a los maestros se les aseguraba que sería respetada su libertad- aquella falta de especificación daba margen para posibles adoctrinamientos. En los temas educativos también era factible

pues encontrar correspondencia con experiencias realizadas en la Argentina.

En cuanto a las relaciones internacionales, la plataforma de Ibáñez señalaba que la situación mundial reclamaba "una política exterior definida" para hacer frente a los conflictos entre las grandes potencias y los problemas propios del continente americano. Reconocía que "el carácter subordinado del país y su condición de poseedor de materias primas estratégicas lo exponían a la presión imperialista en la determinación del curso de la política internacional". Dentro del marco mundial de la época correspondía a los países latinoamericanos "reforzar los lazos de solidaridad espiritual y económica", a fin de favorecer la convergencia de su acción diplomática que debía inspirarse en la proposición esencial de "mantener la paz y cooperación entre los pueblos". Se propiciaba la cooperación económica "con todos los países, especialmente los latinoamericanos", buscando

sostener conferencias económicas y firmar tratados multilaterales a fin de defender las materias primas y preparar las bases del desarrollo de una economía latinoamericana que fuera capaz de resistir las presiones de cualquier imperialismo(103).

La propuesta ibañista tenía en común con la *tercera posición* de Perón la equidistancia de los asuntos mundiales pero también la búsqueda de una posición autónoma y más fuerte para la región, por medio del acuerdo en los objetivos económicos. La necesidad de resistencia a las presiones imperialistas estaba dirigida fundamentalmente a los Estados Unidos -teniendo en cuenta el rol que los intereses de este país desempeñaban en la estructura económica chilena.

Incluso, a los pocos días de resultar electo, se le preguntó a Ibáñez qué decisión tomaría Chile en caso de que fuera necesario intervenir en un conflicto mundial. Aquél respondió que iba a ser el país el que tomara la decisión: el pueblo decidiría si quería ir a la guerra o no. Al señalarle el periodista que tal pensamiento era similar al expresado por Perón ("ningún soldado argentino dejará nuestras fronteras sin el acuerdo del pueblo en un amplio plebiscito"), Ibáñez respondió que "era materia de satisfacción que los gobernantes de Latinoamérica sin consultarse previamente pensarán de la misma forma en tan importantes asuntos"(104).

En síntesis, las similitudes con la política justicialista se daban principalmente en tres aspectos. En el campo económico, al postular un control mucho más estricto de las actividades por parte del estado. En lo social, al proponer la incorporación de los derechos sociales y de la seguridad social a la constitución, así como la jerarquización de la actividad sindical, el establecimiento del salario vital y móvil y la participación de los trabajadores en la dirección de las empresas. Y finalmente en el campo internacional, con la adhesión a una posición tercerista y una inclinación hacia la cooperación económica y el consenso en los objetivos para el desarrollo entre los países latinoamericanos, con el propósito de resistir las "presiones de cualquier imperialismo" pero que, en el caso de la región, se refería especialmente a las presiones norteamericanas. Todo lo cual demostraba una significativa simbiosis doctrinaria con el

peronismo, que justificaría el apoyo propagandístico, y probablemente también material, aportado por el presidente argentino al candidato chileno.

7. Reacción en Buenos Aires ante el triunfo de Ibáñez

A Ibáñez le faltaron poco más de treinta mil votos para alcanzar la mayoría absoluta en la elección. Obtuvo 436.345 votos, seguido de Matte con 257.066, Alfonso con 187.044 y Allende con 52.348, alcanzando un porcentaje del 47,5% de los sufragios. Su elección por el Congreso quedaba asegurada(105). Ibáñez obtuvo grandes mayorías en las provincias populosas como Santiago, Valparaíso y Antofagasta y estuvo muy cerca de alcanzarlas en Concepción, Cautín, Tarapacá y Valdivia. Matte tuvo su mejor actuación en las provincias agrícolas donde igualó con Ibáñez o ganó por estrechos márgenes. Alfonso fue abandonado por su propio partido Radical pues el supuesto caudal de votos de éste era equivalente al total de votos obtenido con el apoyo de otros partidos. La gran cantidad de votos reunida por Ibáñez provino de defecciones radicales, de algunos disidentes de otros partidos de centro-izquierda y de un porcentaje menor de comunistas. Matte reemplazó los votos de los conservadores tradicionalistas, otorgados a Ibáñez, con votos femeninos(106).

La elección del general fue celebrada con júbilo por todos los diarios oficialistas argentinos como un triunfo inequívoco del peronismo y una refutación directa de lo que describían como "influencia imperialista" sobre Chile y otras repúblicas latinoamericanas. Ibáñez era saludado por dicha prensa como "libertador" de su país, y el pueblo chileno era felicitado por su "viril decisión" tomada en "una hora gloriosa de su destino". La elección de Ibáñez en Chile como la de Paz Estenssoro en Bolivia eran vistas como evidencia del advenimiento de una nueva era de repúblicas latinoamericanas nacionalistas "independientes de la influencia de los Estados Unidos" y que había tenido su inspiración en el peronismo. La doctrina de la *tercera posición* de Perón era señalada como un estímulo para las "revoluciones" del momento(107).

Los editoriales aparecidos en Buenos Aires remarcaban respecto del presidente electo chileno los siguientes puntos: a) su declarada intención de derogar el pacto militar de Chile con los Estados Unidos; b) su también explícito propósito de nacionalizar las minas de cobre; c) el estímulo a otros grupos antinorteamericanos en Latinoamérica que su elección suponía; y d) la resultante perturbación producida en los círculos norteamericanos de "Wall Street", ejemplificada con extensas citas del *New York Times* y del *Washington Post*.(108).

El resultado de las elecciones chilenas fue señalado por los diarios peronistas como una nueva era de justicia para los chilenos y un triunfo para el latinoamericanismo. El hecho fue motivo para que la gubernamental Agencia Latina informara extensamente sobre la expansión del antiimperialismo en los otros países latinoamericanos. Si bien se evitaba calificar la elección de Ibáñez como un triunfo de Perón -atribuyéndola al triunfo del latinoamericanismo frente al imperialismo norteamericano-, se aludía implícitamente, sin alardes, a la parte jugada por Perón y por la Argentina y se daba a entender claramente que existía una oportunidad de liberación para aquéllos países con menor

conciencia política como Uruguay, Bolivia y Brasil(109). En forma semejante, La Prensa señalaba el 7 de septiembre que los resultados de la elección "reforzaban el espíritu de la resistencia americana contra el imperialismo" y mostraban que "la conciencia popular en este continente ha ido más allá de toda reserva"(110).

Por el contrario, la oposición a Perón vio el triunfo de Ibáñez como "un ominoso avance de las fuerzas satánicas en el hemisferio y la derrota de la democracia y de los Estados Unidos". Los argentinos no peronistas afirmaron estar desilusionados ante el fracaso norteamericano "en hacer llegar su mensaje e impedir la elección de Ibáñez", y comenzaron a abogar por una "imprecisa y enérgica política en la que no necesariamente debían participar". Disgustados por esta actitud, los norteamericanos juzgaron que el "radical argentino promedio" y el "oligarca" eran la síntesis de la indolencia política. El recurso de reclamar que los Estados Unidos debían "*hacer algo al respecto...*", utilizado por gran parte de la oposición a Perón, fue visto como una forma de eludir sus propias responsabilidades(111).

Los círculos peronistas percibieron pues el triunfo de Ibáñez en Chile como una victoria de su doctrina y de su estrategia. Perón debió haber tenido una gran satisfacción al advertir que su objetivo de expansión de su doctrina justicialista "liberadora" estaba teniendo éxito en el exterior y que ello significaba haber ganado una partida al gobierno norteamericano. Sus planes de integración regional seguramente se vieron actualizados en esos momentos. La actitud asumida por la prensa peronista frente a la elección en cuestión quedó sintetizada en unas palabras de Descartes (seudónimo de Perón) transcriptas en un informe de la embajada norteamericana en Buenos Aires:

El *Washington Post* (órgano oficioso de la Casa Blanca) confiesa que la elección de Ibáñez es una derrota de los Estados Unidos. Nosotros pensábamos que la victoria del pueblo chileno era una derrota de la oligarquía. La cándida e inexcusable confesión del *Washington Post* prueba que los Estados Unidos eran también partícipes en la contienda interna chilena.

El mismo diario dice «la reciente elección del dictatorial Dr. José María Velasco Ibarra en Ecuador fue también una derrota» lo que prueba que los Estados Unidos eran también parte allí.

Admitamos que los Estados Unidos han sido tan desafortunados como inescrupulosos. Su intervención en los asuntos internos de otros países se evidencia ahora por su propia confesión, haciendo la prueba innecesaria.

Argentina, Brasil, Bolivia, Guatemala, Ecuador, y ahora Chile, saben bastante sobre esta clase de intervención que nos gustaría ver desaparecer si realmente se desea alcanzar la buena vecindad basada en sinceridad y lealtad, sin las cuales es inútil tratar de unidad aquello que constantemente nos separa con odios y nos mantiene enajenados y enemistados(112).

Otro informe de la embajada norteamericana en Buenos Aires

ampliaba los ejemplos sobre el insistente uso que había hecho la prensa de Buenos Aires del mencionado argumento de la "derrota". Se señalaba el hecho de que los propagandistas argentinos habían aprovechado al máximo la oportunidad ofrecida por las noticias recibidas, que mencionaban que la prensa norteamericana había "admitido" la elección de Ibáñez como una derrota. "Tal reconocimiento" era presentado como prueba de la intromisión de los Estados Unidos en la elección chilena, pues se argumentaba que de no haber existido intervención no habría tenido sentido hablar de derrota. La elección se presentaba

como una expresión de la voluntad popular, una liberación del imperialismo yanqui. Testigo de la hipocresía de los Estados Unidos: cuando se producía una revolución en Latinoamérica, los Estados Unidos decían que era «antidemocrática»; ahora tiene lugar una reconocida elección popular y los Estados Unidos la consideran una «derrota». ¿Qué quieren los Estados Unidos en América Latina?(113)

Obviamente, al tratar de poner en evidencia una fallida intervención de los Estados Unidos en la elección chilena, Perón y la prensa oficialista pretendían encubrir el apoyo tolerado -si no incentivado- por su gobierno a la misma. Sin embargo, como se dijo, el gobierno norteamericano había ordenado su prescindencia y la de sus hombres de negocios en la elección.

La Agencia Latina también informó de reacciones en Chile y Brasil por los comentarios de la prensa norteamericana, señalando que los artículos contrastaban la "vulnerable posición de los Estados Unidos" con la "pureza de Perón", quien tres días antes de las elecciones "no dejó dudas del respeto argentino por la soberanía de su vecino", declarando su política de no injerencia en los asuntos internos de otros estados y ordenando el cierre de los centros de las organizaciones que trabajaban en favor de la elección. Los norteamericanos reconocieron que dicha línea fue usada con gran habilidad por los diarios argentinos y que por extensión éstos pretendían demostrar que el objetivo manifiesto de "liberar a los trabajadores de Latinoamérica del yugo del imperialismo-capitalista (el de los Estados Unidos)", que se había propuesto la recientemente creada organización sindical latinoamericana peronista, había recibido gran apoyo en la elección chilena(114).

Los informes enviados al Departamento de Estado desde Brasil intentaban minimizar los comentarios properonistas. Afirmaban que la prensa brasileña había guardado un extraño silencio ante las elecciones en Chile y en todo caso había hecho alguna mención del signo perverso que tal resultado guardaba para la democracia. Algún artículo había señalado que el nuevo gobierno no sería favorable a los Estados Unidos, y que los gobernantes de Ecuador, Bolivia y Paraguay eran, como Ibáñez, refugiados políticos de la Argentina de Perón, por quien todos ellos tenían afinidad. También se había recordado "el sueño de la antigua alianza ABC de dominar el continente", aunque se anticipaba que si bien A y C parecían estar acercándose no podrían contar con B(115). Sin embargo, las interpretaciones antinorteamericanas debieron haber tenido algún peso dado que, como veremos luego, provocaron cierta preocupación en la embajada norteamericana en Chile.

8. Actitud expectante de los Estados Unidos

Desde el comienzo de la campaña proselitista de Ibáñez, en esferas norteamericanas resultaba totalmente incomprensible que el general se empeñara en demostrar su vinculación con Perón. El hecho de que viajara a Buenos Aires en la última semana de marzo de 1951 para sostener una tercera conversación sobre su candidatura con el presidente argentino fue considerado por el embajador Bowers como un acto de su "usual increíble estupidez política"(116). El embajador no comprendía la oportunidad de la visita, en el momento en que había estallado el tema del diario La Prensa con la consecuente avalancha de críticas en los Estados Unidos, que habían llegado a colocar incluso en difícil situación al ministro argentino Hipólito Paz en la reunión de cancilleres en Washington. Bowers comentaba irónicamente que el hecho era comparable a "su brillante idea de anunciar su candidatura a presidente de Chile desde Buenos Aires después de dos largas reuniones con Perón", a la entrevista concedida a su regreso "glorificando todo lo que Perón realiza" y a su afirmación en el sentido que "si llegaba a ser presidente no dudaría en tomar medidas dictatoriales si lo considerara correcto"(117).

El embajador norteamericano, descontando que la abrumadora mayoría iba a pronunciarse en contra de Ibáñez, aún consideraba un grave peligro que éste pudiera alcanzar una pequeña pluralidad. Bowers estaba seguro de que el general tendría el apoyo de los elementos nazis más importantes y posiblemente el de los comunistas; anunciaba además que Ibáñez haría "el mismo tipo de campaña desvergonzadamente demagógica" que Perón, "insistiendo en los «descamisados», la falta de vivienda, el imperialismo yanqui, y prometiendo a las masas sumergidas más paga y menos trabajo". El embajador afirmaba que Ibáñez no podía aspirar a obtener la mayoría pero en caso de no conseguirla nadie, y con varios candidatos, la elección iría al Congreso donde aquél no sería elegido pero podría provocar una gran perturbación(118). Con todo, la embajada creía poco probable que Ibáñez pudiera ganarle a Matte, el candidato liberal(119).

Los norteamericanos, que ya habían asociado a Ibáñez con los comunistas en la elección de 1949, comenzaron a rastrear detenidamente sus declaraciones respecto de este tema y de las futuras relaciones de Chile con los Estados Unidos. Consignaron sus palabras pronunciadas en oportunidad de defenderse de la acusación del *Washington Daily News* en el sentido que intentaba revivir su fortuna política con una coalición de peronistas antinorteamericanos, militares y comunistas. Ibáñez había refutado tal cosa diciendo "no soy un comunista ni un simpatizante de esa doctrina internacional a la cual enérgicamente me opuse cuando fui presidente de Chile". También afirmó "no soy antinorteamericano y mi política como presidente de Chile estuvo marcada, por el contrario, por un efectivo incremento en las relaciones políticas y comerciales de mi país con los Estados Unidos"(120). Las desmentidas de Ibáñez no abarcaron pues su relación con el peronismo. Aquéllas tampoco disiparon la gran desconfianza hacia ese candidato que existía en la embajada norteamericana en Chile y que era transmitida a su gobierno(121).

Dos meses antes de la elección, a mediados de julio de 1952, una supuesta campaña antinorteamericana de la prensa que sostenía la candidatura de Ibáñez (tal el caso de los diarios Escoba,

Basta!, Las Noticias Gráficas y Las Noticias de Última Hora) alarmó a la embajada de los Estados Unidos. Ibáñez, al hacer las aclaraciones pertinentes, dijo que no era correcto referirse a ellos como "prensa ibañista" porque en realidad eran diarios independientes que apoyaban su candidatura. Asimismo negó que recibiera fondos enviados por Perón porque en ese caso "habría podido contar con un gran diario de su propiedad"(122). La embajada, sin embargo, no esperaba que Ibáñez tratara de hacer algo para bajar el tono de la campaña mencionada porque ésta le aportaría votos(123).

Ibáñez pareció preocuparse por demostrar que no albergaba ningún sentimiento antinorteamericano, al dar ciertas seguridades sobre sus planes respecto de los Estados Unidos. Insistió en recordar las buenas relaciones con ese país en su anterior gobierno y en señalarlo como una fuente de capital para ayudar al desarrollo chileno; hizo hincapié además en su "mentalidad americana" en comparación con la de otros chilenos "que todavía miraban a Europa". Aseguró que no nacionalizaría la industria del cobre, dado que el país obtenía beneficios del capital extranjero y las compañías eran modelo de beneficios sociales para los obreros (ésta era su convicción -aclaró- aunque no le gustara a muchos de sus partidarios). También afirmó que su oposición en el Senado a la ratificación del acuerdo militar bilateral chileno-norteamericano se había debido a que estaba mal redactado y se presentaba como una imposición de un gobierno que terminaba sus funciones(124). Los norteamericanos, sin embargo, tenían la certeza de que, en caso de ser elegido, Ibáñez se vería obligado a cambiar su actitud frente al acuerdo militar por las fuertes presiones que ejercerían sus amigos de las fuerzas armadas, ansiosos de tener participación en la Junta Interamericana de Defensa(125).

La predicción de Ibáñez de una Tercera Guerra Mundial en el término de un año fue juzgada por los norteamericanos como el "elemento más inquietante" de sus propuestas porque reflejaba su aceptación de la *tercera posición*(126). En opinión de aquél, la guerra fría convenía a la Unión Soviética, mientras que "las llamadas democracias" no podrían soportar la carrera armamentista; si las "llamadas democracias" no atacaban a la Unión Soviética, ésta se las "tragaría". Ibáñez responsabilizaba a Roosevelt y Churchill por permitirle a la Unión Soviética ganar tanto territorio y tanta influencia. El general se negó a adelantar cuál sería su posición en caso de ser presidente de Chile y que la guerra se produjera, expresando que Chile estaba "muy lejos, en el último rincón del mundo"(127). Esta afirmación era precisamente la que sonaba a los norteamericanos "peligrosamente" parecida a la *tercera posición* de Perón(128).

La embajada también tenía conciencia de que de los políticos cercanos a Ibáñez, como era el caso de Tobías Barros, Guillermo del Pedregal y Conrado Ríos Gallardo, no se obtendría una actitud cooperativa como la recibida del gobierno de González Videla o la que concederían los otros candidatos Alfonso o Matte. Se recordaba todavía que Barros había diferido la ruptura de Chile con el Eje y que Ríos Gallardo era un admirador de Perón y por ello supuestamente antinorteamericano. Todo ello llevaba a los diplomáticos norteamericanos a concluir que Ibáñez simpatizaba con Perón, todavía admiraba a Alemania y no tenía fobias antinorteamericanas aunque haría un gobierno nacionalista. Se

declaraban incapaces de predecir en qué medida podría aplicar el sistema de Perón en Chile pero percibían su admiración por dicho sistema y consideraban probable que tratara de imitarlo, aunque advertían que "Chile no era la Argentina y que el proceso democrático estaba aquí (en Chile) firmemente instalado". Por otro lado, vislumbraban un cierto peligro en que pudiera reducir al mínimo los poderes legislativo y judicial bajo el pretexto de restaurar el orden en el país(129).

El otro tema que preocupaba a los norteamericanos en ese momento era la posición que Ibáñez adoptaría respecto de los comunistas chilenos. Ibáñez intentaba obtener sus votos ofreciéndoles garantías absolutas bajo su gobierno "mientras no agitaran" pero, a la vez, confidencialmente daba seguridades a los norteamericanos de que procedería igual que en su primer gobierno cuando, ante los intentos de agitar y arruinar el plan económico, "había sido necesario fondear a algunos de los líderes; otros fueron colocados donde no pudieran hacer daño y terminaron tan lejos como en México"(130). Las garantías ofrecidas por Ibáñez a los comunistas comprendían la derogación de la ley de Defensa de la Democracia, que los habilitaría a participar de las elecciones y obtener bancas en el Congreso. El hecho de que Ibáñez llegara en este punto más lejos que los otros candidatos Matte y Alfonso hacía pensar a los norteamericanos que podía atraerse muchos de los votos comunistas; existían ya indicios de que los comunistas en el norte del país estaban apoyando a Ibáñez en lugar de Allende(131). Con todo, la embajada preveía acertadamente que Ibáñez no dudaría en someter a los comunistas si éstos llegaban a causarle problemas(132).

Apenas conocidos los resultados de la elección, un telegrama secreto del Departamento de Estado a su embajador en Chile, con fecha 6 de septiembre, instruía a éste acerca de la actitud a tomar frente al candidato electo. Se ordenaba no buscar una entrevista pero sí aceptarla si la iniciativa provenía de Ibáñez o de alguno de sus representantes. El embajador debía "cuestionar enérgicamente la conveniencia del restablecimiento de relaciones con la Unión Soviética y de la nacionalización de la minas de propiedad norteamericana". Debía asumir una posición de "tómalo o déjalo" en cuanto al acuerdo militar pendiente pues se consideraba que Chile tenía más que ganar que los Estados Unidos en el asunto, pero debía "enfaticar" que la asistencia de los Estados Unidos a Chile sería distribuida en otra parte si Chile denunciaba el pacto(133).

También se le recordaba al embajador que no había programados embarques de material militar hasta diciembre de 1952 por lo cual el Departamento disponía de tiempo para estudiar la política a seguir a la luz de los nuevos sucesos ocurridos en Chile. El embajador debía instruir a las misiones naval y aérea en Chile para que disminuyeran o suspendieran las discusiones sobre el acuerdo militar, lo cual incluía los planes de establecer una escuela de entrenamiento naval en Chile. El objetivo era tratar de inducir a que la presión sobre Ibáñez para que el mencionado pacto fuera aceptado proviniera de las fuerzas armadas chilenas(134).

Por último, el Departamento comunicaba que encontraba el programa de Ibáñez semejante al de los comunistas y al de Perón. Demandaba información sobre si los 30.000 votos de menos recibidos por Allende habían sido votos comunistas obtenidos por Ibáñez y si

esto amenazaba la colaboración futura. Además se anticipaba al embajador que la prensa norteamericana sería fuertemente antiibañista, especialmente si el programa resultaba tan antinorteamericano como había sido descrito en los informes recibidos(135). En definitiva, el gobierno de los Estados Unidos demostraba preocupación ante la elección de Ibáñez por sus supuestas tendencias comunizantes, antinorteamericanas y peronistas. Congelaba los planes de orden militar que estaban en vías de ejecución, suspendía toda iniciativa de su parte y esperaba el desarrollo de los acontecimientos.

A los pocos días de haber sido elegido, Ibáñez mantuvo una entrevista con un periodista del *New York Times* en la cual negó que su política fuera a ser trazada por las fuerzas extremistas que lo habían apoyado y trató de dar ciertas garantías de que no tenía intenciones antinorteamericanas. Declaró que esperaba mantener relaciones amistosas con la embajada norteamericana y su gobierno y que deseaba inversiones de capitales norteamericanos, aunque no de aquéllos que buscaban beneficios momentáneos y luego se retiraban. Reconoció haberse opuesto al acuerdo militar pero sostuvo que éste había sido aprobado y consecuentemente se había convertido en un acuerdo internacional y no sería denunciado (esto era expresado en forma reservada). Respecto de las minas de cobre, Ibáñez declaraba su propósito de obtener el máximo beneficio de las materias primas chilenas sin causar ningún daño al legítimo interés del capital extranjero invertido. Prometía a éste amplias y absolutas garantías siempre que no viniera con "espíritu de ambición colonial" y estuviera decidido a establecerse bajo las condiciones en que operaba el capital chileno. En cuanto a los otros dos temas que interesaban a los norteamericanos, el de los comunistas y el de las relaciones con la Unión Soviética, Ibáñez afirmaba que los primeros gozarían de las garantías de un régimen democrático, siempre que se mantuvieran dentro de la ley, y con la Unión Soviética se atendería a lo ya dicho respecto de la igualdad de las relaciones con todos los países(136).

El día 15 de septiembre, el embajador Bowers comunicaba en un escueto telegrama que había tenido un encuentro con Ibáñez y que éste le había expresado la certeza de que los Estados Unidos, su embajada y sus hombres de negocios no habían tenido injerencia en la elección; esa declaración era importante porque algunos diarios chilenos, que seguían la línea peronista -según el embajador-, estaban haciendo acusaciones de ese tipo. Bowers estaba preocupado también por la repercusión que la elección había tenido en Brasil y llegaba a la conclusión de que "sin duda existen diarios comunistas, nazis y peronistas allí"(137), palabras que se debían al sentido antinorteamericano y properonista que algunos medios brasileños atribuían al resultado de la elección en Chile.

Los comentarios desfavorables de la prensa norteamericana sobre la elección de Ibáñez provocaron la visita del ministro consejero chileno Mario Rodríguez al Departamento de Estado. El funcionario norteamericano que lo atendió acudió al argumento de la libertad de la prensa en su país y al carácter opositor de gran parte de ésta. Pero inmediatamente contraatacó advirtiendo que las afirmaciones de los diarios norteamericanos no se acercaban ni remotamente al constante flujo de vehementes artículos antinorteamericanos aparecidos por meses en diarios chilenos como Noticias Gráficas, Democracia y en aquéllos que apoyaban a Ibáñez. Como su gobierno -argumentaba el funcionario- no suponía que esos

diarios reflejaran la opinión del gobierno chileno y además creía en la libertad de la prensa chilena tanto como en la propia, no había presentado protesta alguna. Sugería, en consecuencia, que se hiciera saber tal cosa al público chileno para lograr el mutuo entendimiento y respeto que los dos gobiernos deseaban(138).

El mismo día de la entrevista anterior, el secretario asistente Miller había mantenido una conversación con el embajador chileno Félix Nieto, a pedido de éste en la embajada. Nieto confesó su preferencia por Matte en la elección pero expresó su intención de dar seguridades en cuanto a Ibáñez. Consideraba "absurdo pensar que Ibáñez se subordinaría a Perón" y también aseguraba que "Ibáñez sería amistoso con los Estados Unidos y no se embarcaría en ninguna política de nacionalización del cobre". El embajador opinaba que Ibáñez llamaría a prestar servicio en el gobierno a los mejores "sin la menor consideración a su afiliación política". Miller, por su parte, aseguró que su gobierno era totalmente imparcial respecto de la situación en Chile y le recordó al embajador todo lo que los Estados Unidos habían hecho por su país en los últimos años lo cual éste agradeció(139).

Mientras tanto, el embajador Bowers se había reunido, el 26 de septiembre, con gente del círculo de Ibáñez, entre ellos Torreblanca, responsable de los contactos de Ibáñez con el gobierno, y Tobías Barros, al que recordaba como "embajador nazi" en Berlín y cuya figura política estaba creciendo. Bowers recibió seguridades de que no habría nacionalización de minas ni reanudación de relaciones con la Unión Soviética. El embajador informó que se había hecho saber a los chilenos, "sin presionar", el significado que el comercio de materias primas estratégicas con los países de detrás de la cortina de hierro tendría de acuerdo con la legislación norteamericana y, a la vez, se les había detallado la ayuda presente y futura que podrían recibir. En cuanto a los planes de embarque para el 15 de diciembre, Bowers recomendaba a sus superiores continuar con ellos porque parecía mejor "correr el riesgo que dilatar los compromisos"(140). Evidentemente los tres temas -la posible nacionalización de los recursos mineros, las relaciones con la URSS y el comercio de materiales estratégicos con los países comunistas- resultaban suficientemente relevantes para que los Estados Unidos especificaran la ayuda que Chile podría obtener en caso de que se resolvieran favorablemente. Chile estaba entonces frente a una nueva disyuntiva: si vendía el cobre a los países "no vetados por los Estados Unidos", recibiría un precio muy bajo por la "aparentemente tan importante materia prima estratégica" pero si conseguía mercados que pagaran mejor precio, y éstos estaban en los países comunistas, seguramente perdería la ayuda financiera que podría provenir del norte. En definitiva, era un dilema semejante al que había tenido que enfrentar González Videla y que éste había resuelto acatando los requerimientos de los Estados Unidos.

El embajador norteamericano comenzó a insistir a fines de septiembre, con un telegrama especialmente dirigido al secretario asistente Miller, en que debían enviarse personalidades importantes a la asunción de Ibáñez, señalando que éstas podían ser Eleanor Roosevelt o el general Bradley. "No podemos enviar figuras políticas subalternas a causa de la elección", afirmaba. Mencionaba como prueba de que el tema era importante el hecho de que del Pedregal había realizado gestiones para que el presidente

brasileño Getulio Vargas asistiera(141). Como a los pocos días Bowers recibiera la propuesta de dos nombres que le resultaban totalmente insatisfactorios, el embajador norteamericano envió un telegrama al propio Acheson advirtiéndole que la delegación que se enviara debía impresionar a todo el pueblo y no a un pequeño sector del ejército o la armada. Bowers afirmaba que "desde el momento que el Departamento está seriamente preocupado respecto de la situación aquí parece increíble que ni la señora Roosevelt ni Bradley puedan estar ausentes menos de una semana". En el caso de que se considerara necesario enviar militares -y Bradley no pudiera ser incluido-, el embajador aseveraba que sería motivo de contrariedad cualquier representante de menor estatura que el general Smith, el general Vandenberg o cuatro o cinco generales o funcionarios retirados muy conocidos. El embajador reiteraba que la delegación propuesta era completamente insignificante y advertía que no debía descartarse la urgente recomendación de la embajada(142). Si bien la preocupación del embajador norteamericano por el nivel que debía revestir la delegación norteamericana a la asunción del nuevo presidente tendría solo un valor simbólico también demostraba la relativa importancia de los intereses norteamericanos en Chile, que por lo visto bien valían -a juicio del embajador- el envío de personas relevantes.

El 2 de octubre un telegrama de Acheson al embajador en Santiago comunicaba que el Eximbank estaba examinando solicitudes de préstamo chilenas, que incluían los pedidos de las empresas de nitrato Tarapacá y Lautaro y tres solicitudes pendientes de créditos para exportación para los ferrocarriles del Estado. En vista de las noticias favorables enviadas en esos días por la embajada se le preguntaba al embajador si tenía alguna objeción en que el Eximbank procediera con los préstamos, en caso que éste decidiera otorgarlos(143). El mencionado telegrama dejaba en evidencia la relativa vinculación de las cuestiones -los asuntos que interesaban a los Estados Unidos en el caso chileno y los créditos pendientes- y el costo que implicaría para Chile si Ibáñez optaba por una política desfavorable hacia aquéllos.

Osvaldo De Castro, gerente general de la corporación de nitrato de Antofagasta y Tarapacá, también se vio obligado a visitar el Departamento de Estado y tratar las perspectivas del gobierno de Ibáñez, debido a dificultades detectadas en la concesión de un préstamo pendiente para su empresa en el Eximbank. Su propósito era dar seguridades al Departamento de que Ibáñez iba a seguir una política de cooperación económica con los Estados Unidos. Mencionaba para ello el interés manifestado por aquél en la industria del nitrato y su consecuente intención de aumentar la producción al nivel alcanzado en su anterior gobierno, habiendo prometido para ello dar las garantías necesarias para obtener préstamos y estimular la inversión de capital privado adicional. Al inquirir luego De Castro sobre la manera en que Ibáñez podía asegurar sus intenciones amistosas hacia los Estados Unidos, la respuesta fue que, si bien la elección de Ibáñez era reconocida como democrática y honesta, la actitud expectante se mantendría hasta ver qué era lo que realmente aquél decidía hacer al acceder al gobierno. El funcionario norteamericano sugirió además que el mejor modo de hacer conocer su política era que Ibáñez convocara al embajador Bowers y lo informara sobre la misma(144).

A los pocos días de la asunción de Ibáñez -hecho que tuvo lugar el 4 de noviembre- todavía existía incertidumbre en la

embajada norteamericana sobre los lineamientos que seguiría el nuevo presidente. La intranquilidad provenía de un homenaje a Bolivia, por su política de nacionalización de las minas de estaño, realizado por los grupos de izquierda que habían apoyado a Ibáñez. La duda radicaba en si éste apoyaba o no esa política, que llevaba como banderas la nacionalización de toda la industria chilena en poder extranjero, la derogación de la ley de Defensa de la Democracia y del pacto militar con Estados Unidos, además de una reforma agraria y del apoyo a un movimiento sindical unificado e independiente. Todo ese "extremo programa de la fanática ala izquierda seguidora de Ibáñez" había sido reformulado en el mencionado homenaje a Bolivia. Resultaba evidente a los norteamericanos que los elementos radicalizados del socialismo popular y del agrario-laborismo estaban lejos de haber sido silenciados por Ibáñez, aunque se observaba una divergencia cada vez mayor entre esos partidos y el nuevo presidente(145)

Los norteamericanos habían notado inmediatamente que el gabinete de Ibáñez explícita o implícitamente se había opuesto a casi todos los objetivos de la mencionada ala izquierda. Les parecía evidente entonces que Ibáñez no tenía intención de nacionalizar el cobre u otras industrias; y también les parecían auspiciosas sus declaraciones en cuanto a que Chile respetaría todos sus tratados internacionales así como el cese de todo discurso contra el acuerdo militar. Advertían, además, que el presidente no parecía estar en favor de reforma agraria que incluyera confiscación de propiedades y que el movimiento sindical sería centralizado bajo el control del gobierno y no conformaría un movimiento laboral independiente que pudiera imponerse al mismo(146).

Sin embargo, el 29 de diciembre de 1952 un pronunciamiento del ministro de Relaciones Exteriores Arturo Olavarría fijando la orientación de la política exterior cayó mal a los norteamericanos. En él se repetían quejas que éstos ya habían oído en los últimos años. Entre ellas se mencionaba el trato riguroso recibido por Chile, que finalizada la guerra había debido pagar altos precios por la importación de productos manufacturados luego de haber vendido sus materias primas a bajos precios durante la misma. También figuraban la falta de consulta a Chile y otros países latinoamericanos en la creación de nuevas organizaciones europeas de posguerra, y la protesta por el fomento en Africa de una producción competitiva con la latinoamericana. Se lamentaba la gran consideración financiera y económica que los Estados Unidos habían otorgado a Europa después de la guerra comparada con la concedida a América latina. Todo ello llevaba a insinuar la conclusión de que los países de distintas partes del mundo -y en la misma posición que Chile- debían unirse para asegurarse relaciones de precios más favorables entre materias primas y productos manufacturados(147).

La embajada norteamericana prestó gran atención al pronunciamiento del canciller y en su detallada crítica lo consideró, en ciertos aspectos, completamente irreal e impracticable. Ante la insistencia del ministro en la necesidad de Chile de desarrollar relaciones comerciales con áreas tales como Medio Oriente (países de la Liga Arabe), el Pacífico Sur y el Norte de Africa, se hacía notar que las importaciones chilenas de esas áreas en 1951 llegaban a apenas un poco más de un 1% del valor total de importaciones. Las exportaciones a dichos países

en 1951 alcanzaban un 3,3% del total de las mismas, debidas sobre todo a los embarques de nitrato al tradicionalmente importante mercado de Egipto. Se observaba que el comercio de Chile con esos países no se había desarrollado porque no existía base para hacerlo y tampoco el ministro había especificado qué productos vendería Chile a esos países; se deducía que tampoco esperaba comprar mucho en vista de su afirmación que Chile extendería el servicio de su marina mercante a esas áreas aun si los barcos tuvieran que volver sin carga(148). Los norteamericanos tomaron nota de la irrealidad del razonamiento del ministro y observaron que la poco convincente señal que intentaba dar -el hecho de que Chile tuviera vías alternativas para su comercio, donde podría obtener mejores precios para sus productos- cumplía únicamente con el propósito de insistir en el injusto deterioro de los términos del intercambio que sufrían algunos países y en la parte de responsabilidad que le correspondía a los Estados Unidos.

La alegada necesidad de desarrollar relaciones económicas con los mencionados países constituía -para los norteamericanos- un intento de Chile de quebrar su dependencia del comercio con los Estados Unidos. Frente a la queja del ministro por la discriminación de América latina en el programa norteamericano de ayuda de posguerra, y su afirmación que Chile no sería colocado "en el rol de mendigante", el observador norteamericano señalaba irónicamente que con ello probablemente se pretendía que los Estados Unidos tomaran "la iniciativa de pedir a Chile y otros países, como un favor especial, que aceptaran un incremento de la ayuda". La actitud del ministro era juzgada como "una verdaderamente notable demostración de ingenuidad" por el consejero de la embajada, redactor del informe(149).

Los norteamericanos también juzgaban como una demostración adicional del fracaso del ministro en el reconocimiento de los hechos de la vida internacional su considerable atención a los otros países latinoamericanos y al iberoamericanismo en general. No encontraban notable que hiciera esto pero sí que llegara al punto de excluir "los principales elementos determinantes de la posición económica de Chile"(150). Lo que en realidad les molestaba era que el ministro hubiera dedicado muy poca atención a las relaciones con su país, hecho evidenciado por el comentario del observador norteamericano que señalaba que "cuando el ministro finalmente puso su atención en los Estados Unidos, casi al final de su declaración", al darse cuenta del efecto que sus observaciones podrían haber producido, consideró necesario presentar una "explicación medio apologética, casi de conciencia-culpable" en el sentido que "si alguno pensaba que sus advertencias eran inamistosas hacia los Estados Unidos, tal cosa estaba por supuesto lejos de la línea". Los norteamericanos llegaban a la conclusión de que el ministro "no había hecho ciertamente ningún intento de ganar la amistad de los Estados Unidos para la nueva administración". Alguna satisfacción encontraban en el hecho de que se hubiera declarado en contra de la Unión Soviética y sus políticas pero consideraban que ese pronunciamiento había sido neutralizado porque al mismo tiempo se había descripto a Chile y al resto de los países subdesarrollados en posiciones equidistantes de los Estados Unidos y de la Unión Soviética; esta manifestación les extrañaba porque Chile había permanecido casi siempre del lado de las democracias en las Naciones Unidas(151).

Por otra parte, la embajada norteamericana había recibido versiones que el tono del pronunciamiento del canciller había sido considerablemente modificado por el propio presidente, de lo cual se deducía que la versión original debía haber apuntado simplemente a alienar a los Estados Unidos. También se tenían indicios de que el pueblo chileno no estaba de acuerdo con las ideas del ministro de buscar una completa identificación económica con la Argentina. Como además la embajada consideraba impracticable la reorientación del comercio exterior de Chile hacia países subdesarrollados, se inclinaba a pensar que la declaración tal vez hubiera sido realizada con propósitos de política local y como un documento de campaña para las elecciones legislativas de marzo siguiente. A pesar de esto, la embajada recomendaba a sus superiores, como corolario del pronunciamiento del canciller, que la política de los Estados Unidos hacia Chile, durante el tiempo que mediaba hasta las elecciones de marzo, continuara siendo de "alguna reserva", en espera de señales más precisas(152).

La documentada reacción de la embajada norteamericana ante el pronunciamiento del canciller chileno demostraba el poco margen de acción que tenía Chile para llevar adelante una política independiente. Una política neutralista en el terreno internacional prácticamente era interpretada por los Estados Unidos como disfuncional para la relación bilateral y esto acarrearía un mecanismo de prevención. El solo hecho de no mencionar las bases para las relaciones con su país era percibido por la embajada norteamericana como una falta de consideración y de realismo. Si bien no se especificaba qué medidas debía incluir una política de "alguna reserva", posiblemente, como ya se dijo, ésta habría conducido a una suspensión momentánea de cualquier préstamo pendiente en las agencias financieras del gobierno y de algún embarque de materiales. Dicha política era sugerida aun a pesar de percibir que las palabras del ministro pudieran tener un alcance puramente retórico y que posiblemente estuvieran dirigidas a lograr un objetivo de política electoral interna.

La embajada supo, al poco tiempo, a través del ministro de Economía Torreblanca, de la existencia de influencias ideológicas opuestas en el gabinete de Ibáñez debidas a que "algunos de sus miembros representaban al nazi-fascismo y al comunismo". Según el ministro, el presidente Ibáñez, opuesto a ambos sistemas, no confiaba demasiado en algunos de sus ministros, entre los cuales estaban el ministro del Interior Guillermo del Pedregal, el de Relaciones Exteriores Arturo Olavarría, el de Obras Públicas Humberto Martones y el de Trabajo Clodomiro Almeyda. En vista de que los mencionados a veces no seguían la línea establecida por el presidente, Torreblanca advertía que podía esperarse que Ibáñez pasara por encima de éstos y trabajara a sus espaldas, a través de otros ministerios, amigos personales o funcionarios. Esto se refería particularmente al ministerio de Relaciones Exteriores en el que no confiaba(153). El hecho de que el ministro de Economía hiciera comentario semejante a la embajada norteamericana podía implicar que el propio presidente no estaba de acuerdo con la política exterior diseñada y que podrían abrirse otros canales de comunicación para los temas que surgieran con los Estados Unidos; sin embargo, más bien parecía una excusa para contener el previsto disgusto con que la embajada norteamericana seguramente había recibido el pronunciamiento del canciller. El procedimiento utilizado por el gobierno chileno -si realmente el presidente

tenía conocimiento de ello- era absurdo y complicaba aun más las cosas con los Estados Unidos que seguramente no aceptarían ninguna doble vía en las relaciones mutuas.

La propia embajada norteamericana reconocería en un informe posterior que el ministro Oscar Fenner, reemplazante del primer canciller Olavarría,

había debido reconstruir las relaciones de Chile con Perú, Brasil e, incidentalmente, hasta cierto punto, también con los Estados Unidos, dado que éste era percibido como habiendo considerado con preocupación, si no con alarma, esta política de formación de bloque de Olavarría(154).

El advenimiento de Ibáñez a la presidencia de Chile significó pues un cambio bastante drástico en la dirección de las relaciones exteriores con los Estados Unidos. Su política de acercamiento a la Argentina -bajo cuyos auspicios puede decirse que había llegado al poder-, y también a Bolivia, provocó ciertos resquemores en Perú y en Brasil pero, principalmente, la coincidencia con el régimen peronista de trabajar por la construcción de un bloque austral prácticamente alarmó a los Estados Unidos quienes decidieron mantenerse a la expectativa. Tampoco hay dudas de que ésa era la dirección que Ibáñez quería imprimir a la política exterior de su gobierno porque ocho meses después solicitaría la renuncia de su segundo canciller Fenner por no haber respondido resueltamente a acusaciones en contra de la Argentina vertidas en el Senado chileno y causantes, además, de una represalia económica por parte de este país(155).

Conclusión

La elección del general Ibáñez como presidente de Chile evidenció ciertos factores atípicos en los procesos electorales de aquel país. Representó el triunfo de un candidato independiente sin el apoyo de los partidos tradicionales, con un pasado de dictador y asociado a todos los intentos de golpe de estado desde que dejara su primer gobierno. Con el lanzamiento de su candidatura desde la ciudad de Buenos Aires, y con sus declaraciones de admiración por el general Perón y su obra de gobierno, Ibáñez demostró claramente su intención de jugar su destino político a la asociación con el justicialismo. El hecho se vería confirmado por su plataforma de gobierno que contenía similitudes en cuanto a objetivos económicos y sociales y a la posición en política exterior. En retribución, el régimen argentino incurrió en la intervención en los asuntos internos de otro país para otorgarle apoyo político, y probablemente también material. El hecho implicó una dura crítica a la gestión de González Videla mostrándolo como pobre defensor de los intereses de Chile frente a las presiones norteamericanas.

Perón tuvo razones para asumir un disimulado triunfalismo. Podía atribuirse haber colaborado para establecer en el país vecino a un gobernante amigo decidido a llevar adelante un programa de gobierno similar al suyo, lo cual, abría nuevamente las puertas para sus objetivos estratégicos y de integración económica. También había salido ganador en su competencia con el presidente González Videla pues había colaborado para que resultara electo su peor adversario, repetidamente acusado de

intentar derrocarlo y de representar un peligro para la democracia chilena. Por último, había triunfado simbólicamente frente a los Estados Unidos por cuanto el candidato electo constituía el aspirante a la presidencia que más había amenazado los intereses de aquel país en Chile. Quedaba por comprobarse si la intención de Perón de concretar acuerdos con los gobernantes vecinos de ideas afines, con el propósito de formar un bloque regional para poner en práctica objetivos comunes y emancipar a sus países de la influencia norteamericana, tendría alguna viabilidad. La presión de los Estados Unidos para que esto no se produjera y cierto temor por las características autoritarias del régimen peronista conspirarían contra el logro de tales objetivos.

Notas

1. Alejandro Magnet, *op. cit.*, p. 158.
2. Ernest Wurth Rojas, *op. cit.*, p. 295.
3. 725.00/4-651, carta de Bowers a Miller, 27 de marzo de 1951.
4. 725.00/11-1650, embajada en Buenos Aires al Departamento de Estado; Crítica, 14 de noviembre de 1950.
5. *Ibid.*
6. *Ibid.*
7. 725.00/12-1450, embajada en Santiago al Departamento de Estado. La opinión presidencial respecto de la participación de los partidos de la derecha en un golpe no parecía convincente al observador norteamericano.
8. 725.00/4-651, carta de Bowers a Miller, 27 de marzo de 1951.
9. 725.00/1-950, C. Allan Stewart al Departamento de Estado.
10. 725.00/8-1150, Hall al Departamento de Estado.
11. 725.00/5-450, embajada en Santiago al Departamento de Estado.
12. 725.00/4-1651, embajada en Santiago al Departamento de Estado.
13. Se refería al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) surgido de los acuerdos de Bretton Woods, luego llamado Banco Mundial.
14. 725.00/3-551, embajada en Santiago al Departamento de Estado. El capital público limitado que Washington canalizó a través del BIRF y del Eximbank consistía en préstamos "duros" vinculados a proyectos específicos y con condiciones estrictas. Con el abogado de Nueva York John J. McCloy como su presidente y el financista Eugene R. Black como su director en Estados Unidos, el BIRF sólo ofrecía préstamos a países que tenían un crédito sólido. Para los banqueros estadounidenses, la "validez del crédito" de un solicitante dependía de su estabilidad y su receptividad a la modernización capitalista. A fines de los cuarenta se negó a otorgar empréstitos a los países que no recibieran con agrado las inversiones y el comercio privados. El Departamento de Estado y el Consejo Nacional de Asesores -que controlaban las políticas estadounidenses en el Banco- postulaban que, antes de otorgar préstamos al extranjero, Estados Unidos estudiara la deuda externa de cada país, la forma en que éste trataba a las propiedades estadounidenses y su política hacia las empresas estatales. Robert A. Pollard, *op. cit.*, pp. 197-198.
15. 725.00/3-551, embajada en Santiago al Departamento de Estado.
16. *Ibid.*
17. *Ibid.*
18. *Ibid.*
19. Alejandro Magnet, *op. cit.*, pp. 153-156.
20. Artículo de Descartes (seudónimo de Perón) "Política y estrategia", *Democracia*, 12 de febrero de 1951, en: Juan D. Perón, *Política y estrategia*, Buenos Aires, Pleamar, 1983, p. 3-6.
21. 725.00/4-351, embajada en Santiago al Departamento de Estado, 22 de marzo de 1951.
22. *Ibid.*
23. 725.00/4-1651, embajada en Santiago al Departamento de Estado.
24. 725.00/4-2550, Hall al Departamento de Estado, 9 de marzo de 1950.
25. 725.00/8-1150, Hall al Departamento de Estado.
26. *Ibid.*

27. 725.00/8-1150, Hall al Departamento de Estado.
28. Esta resolución había sido establecida en junio de 1949 por los ministros de Trabajo y del Interior disponiendo la descalificación de funcionarios sindicales, a través de un proceso administrativo, en virtud de ser o haber sido comunistas o miembros de organizaciones subversivas. 725.00/5-2951, Hall al Departamento de Estado.
29. *Ibid.*
30. *Ibid.*
31. 725.00/12-1950, telegrama de Bowers al secretario de Estado; 725.00/12-2050, telegrama de Bowers al secretario de Estado.
32. 725.00/5-2951, Hall al Departamento de Estado.
33. Alejandro Magnet, *op. cit.*, p. 161.
34. Estos tres serían Juan Dávila Basterrica y Adolfo Moreno Vergara, de ENDESA, y Enrique Paut Barrón, quien había permanecido un tiempo oculto después de haber sido acusado de desaparecer con fondos cuando trabajaba como empleado del ministerio del Interior. 725.00/8-2951, Hall al Departamento de Estado.
35. *Ibid.* Debe recordarse que la supuesta participación de Ibáñez en el putsch del 5 de septiembre de 1938 lo había obligado a renunciar desde la prisión a la candidatura a la presidencia. De haberse complicado en el complot de Colliguay, habría repetido el mismo error. Ver los sucesos de 1938 en: Ernest Wurth Rojas, *op. cit.*, pp. 205-209. Este autor dice que, siendo miembro del gobierno, Ibáñez había conspirado contra los propios mandatarios y luego, transformado en líder de la oposición, había urdido conspiraciones, "que tejía infatigablemente de noche y de día". *Ibid.*, pp. 210-211.
36. 725.00/8-2951, Hall al Departamento de Estado.
37. *Ibid.*
38. *Ibid.*
39. *Ibid.*
40. 725.00/9-2851, embajada en Santiago al Departamento de Estado, 29 de septiembre de 1951.
41. *Ibid.*
42. Alejandro Magnet, *op. cit.*, pp. 162-163.
43. *Ibid.*, p. 163.
44. *Ibid.*, p. 167.
45. 725.00/1-1452, embajada en Santiago al Departamento de Estado.
46. 725.00/9-952, embajada en Santiago al Departamento de Estado.
47. 725.00/5-1151, Hall al Departamento de Estado.
48. 725.00/2-651, Hall al Departamento de Estado.
49. *Ibid.*
50. 725.00/5-1151, Hall al Departamento de Estado.
51. 725.00/6-451, Hall al Departamento de Estado.
52. 725.00/7-1751, Hall al Departamento de Estado.
53. *Ibid.*
54. *Ibid.*
55. 725.00/11-651, embajada en Santiago al Departamento de Estado, documento adjunto.
56. *Ibid.*
57. 725.00/11-651, embajada en Santiago al Departamento de Estado.
58. 725.00/12-2951, embajada en Santiago al Departamento de Estado, documento adjunto.
59. *Ibid.*

60. *Ibid.*
61. Paul Winter Drake, *Socialism and Populism in Chile, 1932-1952*, Urbana, Univ. of Illinois Press, 1978, p. 303.
62. 725.00/7-2751, embajada en Santiago al Departamento de Estado.
63. *Ibid.*
64. 725.00/11-2951, embajada en Santiago al Departamento de Estado.
65. 725.00/3-2452, embajada en Santiago al Departamento de Estado.
66. 725.00/2-2052, embajada en Santiago al Departamento de Estado.
67. 725.00/4-2452, embajada en Santiago al Departamento de Estado.
68. *Ibid.*
69. *Ibid.*
70. 725.00/4-2452, embajada en Santiago al Departamento de Estado.
71. 725.00/3-2652, embajada en Santiago al Departamento de Estado.
72. *Ibid.*
73. 725.00/7-2852, embajada en Santiago al Departamento de Estado.
74. *Ibid.*
75. *Ibid.*
76. *Ibid.*
77. *La Nación*, Santiago, 26 de julio de 1952.
78. *El Diario Ilustrado* y *El Mercurio*, 27 de julio de 1952.
79. 725.00/7-3152, embajada en Santiago al Departamento de Estado.
80. *Ibid.*
81. *Ibid.*
82. 725.00/7-2852, embajada en Santiago al Departamento de Estado.
83. En esto seguimos a Stanley Hoffmann, *Jano y Minerva*, Bs.As., GEL, 1991, pp. 177-190.
84. 725.00/8-2652, despacho de la embajada en Santiago al Departamento de Estado.
85. 725.00/9-252, embajada en Buenos Aires al Departamento de Estado. Se mencionaban las siguientes asociaciones: Asociación Acción Social Chilena pro Movimiento Ibañista, Montes de Oca 776, Capital Federal; Asociación Arauco, Avenida de Mayo 1334, 3er.piso, Capital Federal; Asociación Mutual y Cultural Arauco, rama de la Asociación Arauco de la Capital Federal establecida en Mendoza; Movimiento Nacional Ibañista, Mitre 1459, San Juan; y Movimiento Nacional Ibañista, Itapirí, Morón.
86. *Ibid.*
87. *Ibid.*
88. *Ibid.*, traducción del decreto publicado en el *Boletín Oficial*.
89. *Ibid.*
90. *Ibid.*
91. Donald W. Bray, *op. cit.*, p. 39.
92. 725.00/8-1352, telegrama de Bowers al secretario de Estado, en particular para Miller.
93. *Ibid.*
94. *Ibid.*
95. 725.00/8-1452, telegrama de Bowers al Departamento de Estado.
96. 725.00/8-1552, telegrama del Departamento de Estado a

embajada en Santiago.

97. Arthur P. Whitaker, *op. cit.*, 1976, pp. 145-148; Ricardo Donoso, *Breve Historia de Chile*, Bs.As., Eudeba, 1963, pp. 98-99 y 103-105.
98. 725.00/8-752, documento adjunto N°1.
99. *Ibid.*
100. *Ibid.*
101. *Ibid.*
102. *Ibid.*
103. *Ibid.*
104. 725.00/9-1052, telegrama de embajada en Santiago al Departamento de Estado.
105. 725.00/9-952, embajada en Santiago al Departamento de Estado.
106. *Ibid.*
107. 725.00/9-1052, embajada en Buenos Aires al Departamento de Estado.
108. *Ibid.*
109. 725.00/9-1152, embajada en Buenos Aires al Departamento de Estado.
110. *La Prensa*, 7 de septiembre de 1952.
111. 725.00/9-1152, embajada en Buenos Aires al Departamento de Estado.
112. 725.00/9-1252, embajada en Buenos Aires al Departamento de Estado.
113. 725.00/9-1552, despacho de la embajada en Buenos Aires al Departamento de Estado.
114. *Ibid.*
115. 725.00/9-1752, embajada en Santiago al secretario de Estado.
116. 725.00/4-651, carta de Bowers a Miller, 27 de marzo de 1951.
117. *Ibid.*
118. *Ibid.*
119. 725.00/3-1451, embajada en Santiago al Departamento de Estado.
120. 725.00/7-1751, embajada en Santiago al Departamento de Estado.
121. *Ibid.*
122. 725.00/7-1652, memorándum de Vebber a Hall, 15 de julio de 1952.
123. 725.00/7-1652, embajada en Santiago al Departamento de Estado.
124. 725.00/7-1652, memorándum de Vebber a Hall, 15 de julio de 1952.
125. 725.00/7-1652, embajada en Santiago al Departamento de Estado.
126. *Ibid.*
127. 725.00/7-1652, memorándum de Vebber a Hall, 15 de julio de 1952.
128. 725.00/7-1652, embajada en Santiago al Departamento de Estado.
129. 725.00/7-1652, embajada en Santiago al Departamento de Estado.
130. 725.00/7-1652, memorándum de Vebber a Hall, 15 de julio de 1952.
131. 725.00/7-1652, embajada en Santiago al Departamento de Estado.
132. 725.00/7-1652, memorándum de Vebber a Hall, 15 de julio de 1952.
133. 725.00/9-652, telegrama del Departamento de Estado a embajada en Chile.
134. *Ibid.*

135. *Ibid.*
136. 725.00/9-952, telegrama de embajada en Santiago al Departamento de Estado.
137. 725.00/9-1552, telegrama de Bowers al Departamento de Estado.
138. 725.00/9-1552, memorándum de conversación entre Barall y Rodríguez.
139. 725.00/9-1552, memorándum de la oficina de Asuntos Americanos.
140. 725.00/9-2652, telegrama de Bowers al secretario de Estado.
141. 725.00/9-3052, telegrama de Bowers al secretario de Estado (especial para Miller).
142. 725.00/10-252, telegrama de Bowers al secretario de Estado, (para Acheson).
143. 725.00/10-252, telegrama del Departamento de Estado a la embajada en Santiago.
144. 750.00/10-1752, Departamento de Estado, memorándum de conversación entre De Castro y Barall.
145. 725.00/11-1252, despacho de la embajada en Santiago al Departamento de Estado.
146. *Ibid.*
147. 725.00/13-3152, despacho de la embajada en Santiago al Departamento de Estado.
148. *Ibid.*
149. *Ibid.*
150. *Ibid.*
151. *Ibid.*
152. *Ibid.*
153. 725.00/1-2453, despacho de la embajada en Santiago al Departamento de Estado.
154. 725.00/12-1153, despacho de la embajada en Santiago al secretario de Estado.
155. Las razones de la renuncia del canciller Fenner se encuentran también en *ibid.*

Conclusiones

La repercusión de la política peronista en Chile comenzó, como dijimos, antes de que Juan Domingo Perón fuera elegido presidente de la Argentina. Desde su actuación como agregado militar a la embajada argentina y luego durante su primera presidencia, Perón aplicó en Chile una política que se caracterizó por provocar incidentes y reacciones en dicho país y por producir hechos reñidos con las relaciones cooperativas entre países. Puede afirmarse que existió una contradicción permanente entre los propósitos americanistas, integracionistas, de solidaridad continental y de no intervención en los asuntos internos de otros países, tantas veces enunciados por Perón, y lo llevado a la práctica por su gobierno en Chile entre 1946 y 1952.

Desde su aparición en la escena política de la Argentina con el gobierno revolucionario de 1943, Perón comenzó a ser una figura discutida también en Chile y calificada por algunos sectores políticos más permeables a la influencia de la política norteamericana como nazi-fascista. El apoyo popular que Perón recibió en octubre de 1945 y el triunfo en las elecciones de febrero de 1946 dejaron en posición difícil a los sectores políticos chilenos que habían criticado al líder argentino y los obligó a replantear sus posiciones. El gobierno del presidente Ríos apoyó la política norteamericana en la región retirando su embajador de la Argentina, luego repuesto, y presionó a este país a buscar una salida democrática pero no asumió actitudes que pudieran provocar deterioro de las relaciones con su vecino, teniendo en cuenta que éste era proveedor de alimentos, necesarios para Chile en esa época.

La maniobra inicial más importante de la política peronista hacia Chile fue el ofrecimiento de ayuda financiera a ese país para desarrollar sus industrias y así obtener medios de pago para los alimentos que adquiriría en la Argentina, concebida por el gobierno argentino enmarcada en una política de solidaridad latinoamericana. Sin embargo, aparte de otras razones internas, la asociación que se establecía fue vista por los chilenos como apuntada a contribuir al crecimiento económico de la Argentina, lo cual profundizaría la asimetría existente entre ambos países, a la vez que crearía una dependencia no deseada.

El otorgamiento de asistencia financiera a los países vecinos apuntaba a expandir la influencia y fortalecer el liderazgo de la Argentina en la región, y quizás le hubiera permitido a Perón realizar otros hipotéticos planes, pero para que dicha política hubiera sido realmente eficiente la solidez de la economía argentina debió haber estado afianzada. Su proyecto demostró ser utópico -en tanto no se hicieron los cálculos de costos necesarios o se erró en los mismos- pues, a poco más de dos años del mencionado ofrecimiento a Chile, la Argentina entraba en una crisis económica que habría imposibilitado el cumplimiento de lo pactado. Los norteamericanos, que no veían con buenos ojos el tratado, se dieron cuenta de esto inmediatamente.

La intención de Perón de formar una unión económica con Chile encerraba una posición antinorteamericana, dado que los Estados

Unidos en esa época tenían como objetivo la unidad hemisférica y en consecuencia se oponían enérgicamente a la formación de bloques. La pretensión argentina de crear un camino autónomo para la región colocaba a los países que aceptaran la integración en el riesgo de enemistarse con los Estados Unidos, país que había salido de la guerra como principal potencia mundial -y obviamente regional- y del cual dependían para la obtención de bienes y capitales.

La injerencia argentina en la preparación de un golpe militar para derrocar al gobierno chileno en 1948 se mantuvo siempre en el terreno de las presunciones y esto finalmente favoreció a la Argentina pues su compromiso en la cuestión no pudo ser probado. No obstante, la vinculación doctrinaria con el peronismo de las personas detenidas, al igual que la incitación al complot por parte de diplomáticos argentinos quedaron expuestas en el posterior proceso judicial. La publicación de los informes presentados al juez militar, respaldada por el gobierno chileno, intentó demostrar el rol de incitación a golpes militares en la región que supuestamente estaba jugando el régimen justicialista argentino en los países que lo rodeaban.

La calificación del movimiento como nacionalista chileno, proargentino y opuesto a la infiltración prepotente del capitalismo norteamericano, realizada por el embajador argentino, era una exacta definición del mismo. La prescindencia de la embajada argentina en la preparación del complot sostenida por su máximo representante resultó contradicha cuando aparecieron involucrados en el proceso el secretario de la misma y otros miembros del cuerpo diplomático. Posiblemente el embajador argentino no tenía conocimiento de las incitaciones de algunos cónsules en sus conversaciones privadas, pero es posible afirmar que el hecho de que éstos hicieran apología de su gobierno e instaran a los chilenos a trabajar por la instalación de uno semejante en su país, siguiendo la vía utilizada en la Argentina -que había incluido un movimiento revolucionario-, no era considerado inconveniente. Por esta razón tomó por sorpresa al embajador la noticia de la implicación de funcionarios diplomáticos argentinos, conocida a través de la prensa.

Dada la ola de imputaciones contra el general Perón, acusándolo de fascista, imperialista y promotor de todas las revoluciones de América, originada en el complot, el embajador argentino suponía la existencia de un plan continental antiargentino y antiperonista, al que estaría asociado González Videla y que tendría conexiones con la masonería internacional. Tanto la necesidad de organizar una contrapropaganda en Chile para contrarrestarlo, como la de tomar duras represalias por haberse atrevido Chile a "jugar con el gobierno del general Perón", recomendadas por el embajador argentino, demostraban la inhabilidad de los diplomáticos argentinos para descubrir las verdaderas causas de los problemas -generados algunos por ellos mismos-, atribuyéndolos, en cambio, a imaginarias confabulaciones y pretendiendo combatirlos con medidas de fuerza.

Debemos señalar que un documento preparado por el Departamento de Estado para su embajada en la Argentina(1) afirmaba en marzo de 1950 que, a pesar de las numerosas denuncias, no había evidencia de que la Argentina hubiese puesto en práctica políticas expansionistas apuntadas a derrocar gobiernos vecinos.

La pregunta que se hace necesaria es entonces por qué motivos aparecía siempre mencionada la Argentina en relación con esos intentos. Una explicación aceptable es la afirmación de Magnet en el sentido que "el peronismo obraba provocando un *contagio por simpatía*" entre los militares que creían tener una misión de gobernantes y se exasperaban con la ineficiencia de las democracias. El mismo concepto expresaba el subsecretario político La Rosa a la embajada argentina en los Estados Unidos, en sus instrucciones de negar la intromisión argentina en otros países del continente, cuando decía "que allí se hable de las doctrinas que aquí se aplican, no significa que haya intervencionismo, sino en todo caso que los pueblos admiran el ejemplo que la Argentina les brinda". Lo repitió el mismo Perón ante el pueblo paraguayo en 1953, tratando de contestar a las acusaciones que se hacían a su gobierno(2). Este habría sido el caso, si la Argentina no hubiera desarrollado una diplomacia activa. Pero, en vista de los hechos, puede afirmarse que la propaganda peronista en Chile encerraba una cierta intención subversiva, dado que aunque no pudiera probarse la incitación de diplomáticos argentinos a militares chilenos al golpe militar, el hecho de invitarlos a seguir un camino semejante al recorrido por la Argentina a partir de 1943, lo incluía.

El descubrimiento del complot de 1948 demostró la inviabilidad del golpe militar, por la falta de consenso dentro de las fuerzas armadas y entre los partidos políticos y la opinión pública, para alcanzar el poder. Pero la elección de Ibáñez como senador por Santiago apenas unos meses después de su implicación en el complot demostró que los antecedentes golpistas del candidato no influían negativamente en el electorado como tampoco lo hacían sus vinculaciones con la Argentina. Su elección revelaba el crecimiento de un pensamiento nacionalista chileno, semejante en sus principios al justicialismo argentino, que se estaba arraigando en sectores populares. La existencia de un campo favorable a la recepción de su doctrina debió ser advertida por el gobierno argentino y ello lo habría decidido a incentivar una labor propagandística que favoreciera los futuros planes políticos de Ibáñez.

La tesis del peligro que significaban para la democracia chilena las tendencias autoritarias que iban consolidándose en los países vecinos, inspiradas en el gobierno argentino, fue defendida por el presidente González Videla y el senador Salvador Allende. El éxito de aquéllas en el Perú de Odría, en Paraguay, y las revueltas mineras en Bolivia, al parecer incentivadas por Paz Estenssoro desde Buenos Aires, aumentaban en Chile el temor de verse cercado por vecinos con regímenes militares. Sus apelaciones constantes de ayuda a los Estados Unidos para una democracia amenazada no tuvieron éxito porque, como se dijo, este país no quería fracturas en el sistema interamericano. El gobierno chileno tampoco obtuvo frutos en sus intentos de consolidar alguna estrategia común con otros gobiernos democráticos latinoamericanos.

El mencionado temor de Chile se sumó al que provocaba el supuesto armamentismo de la Argentina. Los chilenos veían en el presupuesto militar argentino y en la hipotética militarización de la Patagonia una amenaza a la seguridad de su país. Se trataba pues de una cuestión de percepción: el gobierno de Perón era para muchos chilenos un gobierno militar, imperialista y militarista, e

A la vez, el hecho de que la prensa norteamericana afirmara que dicha elección era una derrota para su país demostraba el carácter antinorteamericano que se atribuía a la misma.

En vista de todo lo anterior, puede afirmarse que Perón ejerció ciertas formas de intervención en los asuntos internos chilenos para expandir la influencia de su país. Esta política intervencionista, que hemos constatado en Chile y -que habría que investigar en otros países de la región- obedecía a la concepción universalista y liberadora que Perón atribuía a la doctrina justicialista. Pero la puesta en práctica de esta política era una decisión unilateral del gobierno argentino y contraria al gobierno de Chile de esos momentos. Demostraba no estar de acuerdo con la que según expresara Perón había sido la tradicional política exterior del país -que siempre había tenido objetivos dignos, no habiendo nunca pretendido ejercer una hegemonía política, económica o espiritual en el continente(4). También posiblemente respondiera a la idea de Perón que en los tiempos modernos una política internacional apropiada debía incidir en los pueblos(5), lo que lo habría llevado a ejercer tal influencia en el pueblo chileno, para que éste tomara el camino que el presidente argentino juzgaba acertado. Habría sido la suya una actitud paternalista, al concebir a Chile moldeado según el modelo argentino; en cierta forma pretendía que ese país siguiera un rumbo trazado por la Argentina.

Perón contradujo en Chile muchos de los principios que había defendido como inherentes a una correcta política exterior. Es posible que su intención en el campo económico haya sido ayudar al desarrollo de Chile y ligarlo a los intereses de la Argentina, pues consideraba esto como la acción legítima que debía llevar adelante el capitalismo; era además a su juicio lo deseable y lo que Estados Unidos no habían hecho con Latinoamérica(6). Pero en definitiva, de haberse ratificado el tratado de 1946, Perón habría expandido en gran medida la influencia económica de su país en Chile, lo cual no era demasiado diferente a la acción que en su opinión estaba llevando a cabo el capitalismo internacional y que había sido objeto de su incesante crítica. Tampoco el haber apelado a la presión económica en los momentos difíciles, para frenar las campañas antiargentinas del gobierno chileno, estaba de acuerdo con su pregonada idea que la producción económica era un arma de paz y que la Argentina no usaba el potencial económico para presionar en el orden internacional(7).

Perón hacía una distinción entre la "diplomacia de buena y de mala fe", señalando que la Argentina no se había dejado llevar por el deshonesto ejemplo que había sufrido. Un ejemplo de diplomacia de mala fe era para el presidente argentino la de un embajador que había convertido a su embajada en un foco de espionaje y cuyo agregado militar, mezclado en un proceso de ese tipo, había recibido un plazo para abandonar el país. Perón reprochaba que dicha embajada se hubiera transformado en "algo así como un comité político" desde donde el embajador dirigía "toda una campaña presidencial", financiada con fondos extraídos mediante el chantaje de las «listas negras». Concluía irónicamente que era "natural que este embajador obrara con conocimiento oficial de su gobierno, firmatario de solemnes compromisos de «no intervención en los asuntos internos de otros Estados»"(8). A Perón le asistía toda la razón en sus críticas a la acción del embajador norteamericano Spruille Braden, desarrollada en la Argentina en

1945, sin embargo, el mismo Perón había provocado problemas por espionaje siendo agregado militar en Chile y la diplomacia argentina producido en ese país hechos muy semejantes a los criticados, durante el gobierno de González Videla. La acusación a diplomáticos argentinos como incitadores de un complot para derrocar al gobierno constitucional, por lo que el gobierno chileno exigió su retiro del país; la utilización de la embajada y los consulados para distribuir propaganda contraria al gobierno de aquel país y como apoyo a un candidato presidencial, lo que provocara que algunos cónsules fueron declarados personas no gratas; el probable apoyo material enviado a dicho candidato desde asociaciones instaladas al efecto en la Argentina; la campaña de los diarios argentinos para desprestigiar al gobierno chileno por la represión de disturbios, etc., no parecen haber sido tampoco métodos muy distintos a los utilizados por los norteamericanos respecto de la Argentina. Perón parece no haber respetado su propio principio en el sentido que "la diplomacia es una actividad noble y elevada. Sus designios claros y honrados. Actúa en representación de estados, y por lo tanto es inexcusable cuando lo hace en los bajos menesteres de la intriga y la traición"(9).

Perón señalaba que la diplomacia occidental venía acumulando enemigos desde 1945, recriminando especialmente la forma cómo había sido tratado su país. Repetidamente recordaba la injuria cometida por Braden, el bloqueo económico -a su juicio, convertido luego en boicot y más tarde en sabotaje-, el perjuicio para la economía argentina provocado por el plan Marshall, la acción de Griffith en Montevideo -proveyendo de dinero a todo lo que fuera antiargentino-; las campañas de las agencias de noticias norteamericanas y los panfletos para desprestigiar a la Argentina que habían inundado el continente, así como los congresos -en donde se criticaba a la Argentina-, y los pasajes y gastos pagados por los funcionarios de las embajadas. Perón sostenía que su denuncia de todas esas perversas acciones guardaba la finalidad de que la política y la diplomacia occidentales corrigieran tales errores(10). Nuevamente los señalados por Perón eran hechos objetivos que habían tenido lugar en contra de su gobierno, pero éste, para esa época, había usado -y continuaría haciéndolo-, tácticas muy similares en el caso de Chile. El gobierno de González Videla, como se vio, sufrió por parte del gobierno argentino la presión económica, el apoyo a sus opositores, las campañas antichilenas de los diarios oficialistas y la propaganda desembozada como apoyo a uno de los candidatos presidenciales en la campaña electoral.

En junio de 1951, Perón advertía que, con la proximidad de la guerra, había comenzado la intervención de la política internacional en los asuntos internos de los Estados como una extralimitación perjudicial de su acción(11). Consideraba que terminada la Segunda Guerra Mundial había comenzado la preparación para la Tercera y con ella se había suplantado el método persuasivo por el coactivo. Así, en su opinión, se había presionado económicamente por la ocupación y se había ejercido una ingeniosa presión en las conferencias internacionales; luego, la coerción había sido practicada por medio de la publicidad y la propaganda para finalmente apelar a la intervención directa en las luchas de la política interna. Perón pensaba que varios países habían sufrido las consecuencias de tal política: Guatemala, Venezuela, Colombia, Panamá, Puerto Rico, Nicaragua, Cuba, República Dominicana y Perú, como también habían sido teatro de

luchas Paraguay y Bolivia. Consideraba que ligas y juntas como la Liga del Caribe y la Junta de Defensa de la Democracia estaban destinadas a provocar, financiar y producir revoluciones en Centro y Sudamérica. La Argentina había sufrido esa misma acción con Braden en 1945 y durante los cinco años de gobierno peronista, desde Montevideo u otro lugar del continente. En opinión de Perón, Vargas y Paz Estenssoro habían triunfado en sus países "a pesar de esa intromisión inaceptable", y confiaba que lo mismo ocurriría con Ibáñez en Chile(12). Perón señalaba que la mejor postura en la política interna de los países comenzaba a ser la oposición a esa intervención de la política internacional y confiaba en que el recrudecimiento de tal política en la Argentina con motivo de las elecciones sería contrarrestado por la reacción popular(13). La pregunta que cabe hacer, dadas las supuestas convicciones del presidente argentino, es por qué motivos entonces aplicó los mismos métodos, que él mismo calificaba como intervencionistas, en Chile. Consideramos que probablemente lo hiciera convencido de que con ello contribuía a evitar dicha inaceptable intromisión de la política internacional, a la vez que intentaba contrarrestar la, en su opinión, acción ilegítima del capitalismo internacional y la sumisión del gobierno chileno a sus dictados, creyendo colaborar así en la liberación del pueblo chileno.

Perón otorgaba al justicialismo un carácter constructivo y salvador de alcance universal: "nuestro justicialismo -decía- ha demostrado ser una solución, superando al capitalismo y al comunismo"(14). Pensaba que el justicialismo había vencido ideológicamente y superado en el campo social a la quinta columna comunista en la Argentina y que lo mismo podía haber sido realizado en todo el Occidente. Lamentaba que la incompreensión llevara al capitalismo a combatir al justicialismo, muchas veces en unión con el comunismo(15). El presidente argentino consideraba al justicialismo una nueva doctrina sin impulso imperialista, combatida inexplicablemente por los imperialismos del momento. "Es indudable -decía Perón- que siendo una solución moleste a los imperialismos, que no luchan por soluciones sino por predominio y dominación"(16). Dicho carácter superador respecto de las ideologías del momento y su capacidad de eliminar el comunismo por la fuerza de su justicia social donde fuera aplicada, atribuidos por Perón a la doctrina peronista, sumados al hecho de que había sido aceptada por la mayoría del pueblo argentino sin haber recurrido a la violencia, llevaba a su inspirador a considerarla una panacea para los pueblos y digna de propagarse. Perón siempre sostuvo que el justicialismo era copiado de motu proprio por otros pueblos, por sus bondades intrínsecas. Pero queda demostrado que, en el caso de Chile, el régimen peronista apoyó su expansión por todos los medios a su alcance, algunos de ellos poco legítimos para un gobierno que había hecho una causa de la no intervención.

El antagonismo de Perón y González Videla se basaba en que el presidente chileno veía en su colega argentino a un antidemócrata y Perón probablemente viera en su colega a un gobernante demasiado sumiso a los intereses foráneos. En sus artículos de 1951, Perón adjudicaba la responsabilidad por la expansión de los imperialismos a

los gobernantes dóciles y cobardes, como los políticos entregadores, que, incapaces de enfrentar por sí los hechos, buscan la protección del apoyo extranjero para encaramarse y

mantenerse en el poder. Estos traidores a los pueblos y a la libertad tienen más grave culpa que los conquistadores que se sirven de ellos(17).

Perón afirmaba que el error de muchos hombres de gobierno en las "democracias inorgánicas" del Nuevo Mundo estaba en "no interpretar y respetar las aspiraciones populares". "Vivimos una época en que los gobiernos miran demasiado hacia afuera de sus fronteras y lo esperan todo de la ayuda que ha de venirles de los poderosos", expresaba en otro de sus artículos(18). Creemos que Gonzalez Videla debió estar, para Perón, dentro de esa categoría de gobernantes y ello lo transformaba en el blanco de la misión liberadora de los pueblos que el presidente argentino se había impuesto a sí mismo.

Otro tema del que Perón se ocupó repetidamente era el uso con fines variables que se hacía de la publicidad. En su opinión, los imperialismos no se conformaban con publicar avisos sino que los imponían a toda costa. Censuraba que los Estados Unidos hubieran creado un servicio publicitario a modo de una organización que abarcaba al que inventaba la noticia, la depuraba, la distribuía y la reproducía. Tal organización, según Perón, obraba de acuerdo con un objetivo impartido desde un lugar central. Así era posible hacer chantaje a toda una nación y desacreditar a un gobierno. La libertad de información abría el camino a la actuación de agentes y espías, asegurándoles un cierto grado de impunidad. La libertad de prensa permitía o era utilizada para realizar una verdadera agitación internacional dirigida a influir en la opinión por los medios publicitarios al servicio de las empresas y países que la costeaban(19). Perón estaba convencido de que el error occidental había sido pretender "imponer y no persuadir con su enloquecida publicidad", aumentando con ello sus enemigos(20). "Lo prudente, lo natural y lo científico -afirmaba Perón- es educar y moralizar consciente y meditadamente al pueblo, llevándolo a la persuasión de la justicia de su causa, si acaso la causa es justa"(21) También respecto de este tema, creemos que con la intención de persuadir al pueblo chileno a aceptar ideas afines al justicialismo, Perón, que tanto criticaba la manipulación de la publicidad y la información con fines políticos por las agencias norteamericanas, echaría mano de los mismos procedimientos en Chile.

Todas las tácticas políticas ensayadas por Perón en Chile configuraban lo que él mismo había descripto como una forma de agresión. Perón había expresado que la agresión armada no era la única forma de agredir que experimentaba el mundo de la época, afirmando que

se agrede económica y políticamente, por medio de la propaganda y la diplomacia. Una verdadera agresión es un «boicot» o bloqueo económico; un plan de ayuda dirigido a perjudicar a un país; la intervención grosera de un embajador y su embajada para provocar conflictos internos o revoluciones en una nación; como asimismo la acción coordinada y oficial de las embajadas de un estado para, por medio de la propaganda falaz y malintencionada, denigrar a otro en el mundo entero(22).

Probablemente, el presidente argentino haya considerado que su acción era en realidad una retorsión, es decir, la respuesta a

situaciones antiargentinas surgidas injustamente en Chile; sin embargo, debe decirse que muchas de ellas fueron provocadas por las actitudes de la misma diplomacia argentina, todo lo cual fue conformando un perverso proceso de realimentación.

Perón tenía una concepción integral de la política y consideraba que tanto la diplomacia como la guerra formaban parte de ella. Sostenía la existencia de una gran interdependencia entre los factores de la política interna y los de la política internacional. Por ello, en su concepto, todo (la acción política) debía ser "coordinado en forma de interdependencia y compenetración racional"(23). Perón creía que para llevar adelante la misión común que tenían los argentinos era necesario "una subordinación ajustada y absoluta del Estado al gobierno" y que "las instituciones estatales, orgánicamente dependientes del gobierno, están naturalmente tuteladas en su acción por el mismo". Sostenía también que "si para un mejor gobierno de lo interno la organización es indispensable, para enfrentar lo internacional esa organización es un imperativo ineludible de nuestra época". En su opinión, podían tolerarse "disonancias" en los asuntos entre argentinos pero no podía el país presentarse con "dualidades" frente al exterior(24). Esta vocación de Perón por la organización y la centralización del gobierno lleva a pensar que las políticas aplicadas en Chile no pudieron ser errores de los funcionarios allí destinados. La embajada argentina y los consulados debieron actuar bajo directivas de su gobierno y creyendo que las interpretaban fielmente. Lo mismo debe decirse de la instrumentación de la propaganda, de las campañas periodísticas de los diarios argentinos y del respaldo otorgado a Ibáñez.

Todo lo dicho anteriormente demuestra que Perón partió de bases erróneas para construir su liderazgo regional y conformar un bloque autárquico de países. La firma de tratados económicos sospechosos de buscar la expansión de la influencia económica argentina, la incitación a producir golpes militares para reemplazar un gobierno constitucional por otro ideológicamente más afín, las campañas periodísticas utilizando la prensa adicta al gobierno para desprestigiar al gobierno de un país vecino, la exportación masiva de una propaganda a favor de un candidato presidencial, etc., si bien proporcionaron a Perón algunos éxitos parciales, no resultaron funcionales para su propósito a largo plazo. El hecho de hacerse sospechoso de respaldar golpes militares en la región, de tener sus mejores aliados en gobiernos revolucionarios, además de la falta de respeto a las libertades cívicas en el orden interno, conspiraron contra su objetivo. La integración latinoamericana parecería tener viabilidad únicamente si se pactara entre gobiernos respetuosos de los derechos cívicos en lo interno, que no demuestren intenciones de intervención hacia los demás, respetuosos de las reglas de la legalidad internacional, que hayan desechado el armamentismo y que no pretendan instrumentarla como un desafío a los Estados Unidos.

Notas

1. 611.35/3-2150, Departamento de Estado, Declaración de Política. Argentina.
2. República Argentina. Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, *Expresiones de una política continental: discursos de los presidentes Chaves y Perón*, Buenos Aires, 1953.
3. Véase sobre las ideas militares y políticas de Perón: Alberto Ciria, *Política y cultura popular: la Argentina peronista, 1946-1955*, Bs. As., Ed. de la Flor, 1983, pp. 13-24.
4. Argentina. Universidad Nacional de La Plata. Curso de cultura superior universitaria. Cátedra de Defensa Nacional. La Plata, 1945. Clase de apertura, "Significado de la defensa nacional desde el punto de vista militar", pronunciada el 10 de junio de 1944, por el ministro de Guerra, coronel Juan D. Perón.
5. Artículo de Descartes "Política y estrategia", *Democracia*, 10 de febrero de 1951, en: Juan D. Perón, *Política y estrategia*, Bs. As., Pleamar, 1983, pp. 3-6
6. Artículo de Descartes "Cooperación económica", *Democracia*, 19 de abril de 1951, en: *ibid.*, pp. 43-44.
7. Juan D. Perón, *La tercera posición en la prédica y el ejemplo de Perón*, Bs. As., Presidencia de la Nación, Subsecretaría de Informaciones, 1951, p. 44.
8. Artículo de Descartes "La política, la guerra y la diplomacia", *Democracia*, 12 de julio de 1951, en: Juan D. Perón, *op. cit.*, p. 88-89.
9. *Ibid.*, p. 90.
10. Artículo de Descartes "La diplomacia y la guerra", *Democracia*, 7 de junio de 1951, en *ibid.*, pp. 65-69.
11. Artículo de Descartes "Política internacional y política interna", *Democracia*, 28 de junio de 1951, en *ibid.*, p. 79.
12. *Ibid.*, p. 80.
13. *Ibid.*, pp. 80-81.
14. Artículos de Descartes: "Estrategia", *Democracia*, 8 de febrero de 1951, en: *ibid.*, p. 12; "Anticipo para la historia", *Democracia*, 22 de febrero de 1951, en: *ibid.*, p. 18.; "Las ideologías y la guerra", *Democracia*, 26 de julio de 1951, en: *ibid.* p. 96.
15. Artículo de Descartes "Política y estrategia", *op. cit.*, p. 21.
16. Artículo de Descartes "El imperialismo y la guerra", *Democracia*, 31 de mayo de 1951, en *ibid.*, pp. 63-64. El carácter del justicialismo como superador de capitalismo y comunismo aparece en: "Las ideologías y la guerra", *Democracia*, 26 de julio de 1951, en: *ibid.*, p. 96; "Conducción política y de guerra", *Democracia*, 2 de agosto de 1951, en: *ibid.*, p. 99; "El comunismo, Rusia y el imperialismo", *Democracia*, 7 de febrero de 1952, en: *ibid.*, p. 207.
17. Artículo de Descartes "El pueblo, la libertad y la guerra", *Democracia*, 3 de mayo de 1951, en: *ibid.*, p. 49.
18. Artículo de Descartes "«La dignidad de la igualdad y la vergüenza del sometimiento»", *Democracia*, 10 de mayo de 1951, en: *ibid.*, p. 51.
19. Artículo de Descartes "La publicidad", *Democracia*, 15 de marzo de 1951, en: *ibid.*, pp. 27-29.
20. Artículo de Descartes "La diplomacia y la guerra", *op. cit.*, p. 66.
21. Artículo de Descartes "Política internacional y política interna", *Democracia*, 28 de junio de 1951, en: *ibid.*, p. 79.

22. Artículo de Descartes "La agresión", *Democracia*, 12 de abril de 1951, en: *ibid.*, p. 39.
23. Artículo de Descartes "La política, la guerra y la diplomacia", *op. cit.*, p. 87.
24. Artículo de Descartes "Una comunidad organizada", *Democracia*, 29 de noviembre de 1951, en *ibid.*, pp. 166-167.

Bibliografía

Libros, artículos y tesis

- G. Pope Atkins, *América latina en el sistema político internacional*, Buenos Aires, Gel, 1991.
- Arnold J. Bauer, "Industry and the Missing Bourgeoisie: Consumption and Development in Chile, 1850-1950", en: *Hispanic American Historical Review*, v. 70, No 2, mayo de 1990.
- Donald W. Bray, "Peronismo in Chile", en: *Hispanic American Historical Review*, v. 47, No 1, febrero de 1967.
- Cristián Buchrucker, *Nacionalismo y peronismo*, Buenos Aires, Sudamericana, 1987.
- Alberto Ciria, *Política y cultura popular: la Argentina peronista, 1946-1955*, Bs. As., Ed. de la Flor, 1983.
- Alberto Conil Paz y Gustavo Ferrari, *Política exterior argentina, 1930-1962*, Buenos Aires, Círculo Militar, 1971.
- Gordon Connell-Smith, *Los Estados Unidos y la América latina*, México, FCE, 1977.
- Chile. Cámara de Diputados. *Boletín de sesiones ordinarias*, sesión 28a. ordinaria en martes 30 de agosto de 1949,
- John Terrill Deiner, *ATLAS: A Labor Instrument of Argentine Expansionism Under Perón*, Rutgers, The State Univ., Ph.D., 1969.
- Ricardo Donoso, *Breve historia de Chile*, Buenos Aires, Eudeba, 1963.
- Paul Winter Drake, *Socialism and Populism in Chile, 1932-1952*, Urbana, Univ. of Illinois Press, 1978.
- Carlos Escudé, *Gran Bretaña, Estados Unidos y la declinación argentina*, Buenos Aires, Ed. de Belgrano, 1988.
- "Crónicas de la Tercera Posición: la ratificación argentina del TIAR en junio de 1950", en: *Todo es Historia*, Año XXII, No 257, noviembre de 1988.
- "La traición a los derechos humanos: relaciones argentino-norteamericanas (1950-1955)", en: *Todo es Historia*, Año XXII, No 261, marzo de 1989.
- Michael J. Francis, *The Limits of Hegemony: United States Relations with Argentina and Chile During World War II*, London, Univ. of Notre Dame Press, 1977.
- Gary Frank, *Struggle for Hegemony in South America: Argentina, Brazil and the United States During the Second World War*. Univ. of Miami, 1979.
- Rita A. Giacalone, *From Bad Neighbors to Reluctant Partners: Argentina and the United States, 1946-1950*, Indiana Univ., Ph.D., 1977.
- Gabriel González Videla, *Memorias*, Santiago de Chile, G. Mistral, 1975.
- Tulio Halperin Dongui, *Historia contemporánea de América latina*, Madrid, Alianza, 1969.
- Hubert Herring, *Evolución histórica de América latina*, T. II, Buenos Aires, Eudeba, 1972.
- Stanley E. Hilton, "The Argentine Factor in Twentieth-Century Brazilian Foreign Policy Strategy", en: *Political Science Quarterly*, v. 100, No 1, primavera de 1985.
- Stanley Hoffmann, *Jano y Minerva: ensayos sobre la guerra y la paz*, Buenos Aires, Gel, 1991.
- Juan. A. Lanús, *De Chapultepec al Beagle: política exterior argentina, 1945-1980*, Buenos Aires, Hyspamerica, 1986.

- Félix Luna, *Argentina, de Perón a Lanusse, 1943-1973*, Buenos Aires, 1985.
- Perón y su tiempo*, T. I y II, Buenos Aires, Sudamericana, 1984 y 1985.
- Gina Maggi, *Patria y traición*, 3 ed., Buenos Aires, Gure, 1957.
- Alejandro Magnet, *Nuestro vecinos justicialistas*, 7 ed., Santiago de Chile, ed. del Pacífico, 1954.
- Heraldo Muñoz y Carlos Portales, *Una amistad esquivada*, Santiago de Chile, Peñuén, 1987.
- James A. Nathan y James K. Oliver, *Efectos de la política exterior norteamericana en el orden mundial*, Buenos Aires, Gel, 1991.
- Marysa Navarro Gerassi, *Los nacionalistas*, Buenos Aires, Jorge Alvarez, 1968.
- Ronald C. Newton, "The United States, the German-Argentines and the Myth of the fourth Reich, 1943-1947", en: *Hispanic American Historical Review*, v. 64, Nº 1, 1984.
- Joseph A. Page, *Perón: una biografía*, Buenos Aires, Javier Vergara, 1984
- Juan D. Perón, *Hacia donde va la Argentina*, Buenos Aires, Ed. Argentinas Brunetti, s/f.
- El general Perón habla ante los miembros de la Confederación de Intelectuales*, Buenos Aires, Subsecretaría de Informaciones de la Presidencia de la Nación, 1950.
- La tercera posición en la prédica y el ejemplo de Perón*, Buenos Aires, Presidencia de la Nación, Subsecretaría de Informaciones, 1951.
- Perón habla a los obreros latinoamericanos*, Buenos Aires, Subsecretaría de Informaciones de la Presidencia de la Nación, 1951
- Política y estrategia*, Buenos Aires, Pleamar, 1983.
- Por la paz del mundo*, mensaje pronunciado el 6 de julio de 1947, Buenos Aires, Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultos, s/f.
- "¿Por qué el gobierno argentino no es fascista?" Respuesta dada por el coronel Perón a periodistas de Chile, Buenos Aires, 26 de diciembre de 1944.
- Harold Peterson, *La Argentina y los Estados Unidos. 1810-1960*, Buenos Aires, Eudeba, 1970 (1 ed. 1964).
- Robert A. Pollard, *La seguridad económica y los orígenes de la guerra fría (1945-1950)*, Buenos Aires, Gel, 1990.
- Robert A. Potash, *Perón y el G.O.U.: los documentos de una logia secreta*, Buenos Aires, Sudamericana, 1984.
- Michael Potashnik, *National Socialism in Chile, 1932-1938*, Los Angeles, Univ. of California, Ph.D., 1974.
- Mario Rapoport, *Gran Bretaña, Estados Unidos y las clases dirigentes argentinas*, Buenos Aires, ed. de Belgrano, 1983.
- República Argentina. Ejército. Dirección General de Difusión. *Manual de doctrina nacional*. 2 ed. Buenos Aires, Pleamar, 1974.
- República Argentina. Universidad Nacional de La Plata. Curso de cultura superior universitaria. Cátedra de Defensa Nacional. La Plata, 1945. Clase de apertura, "Significado de la defensa nacional desde el punto de vista militar", pronunciada el 10 de junio de 1944, por el ministro de Guerra, coronel Juan D. Perón.
- República Argentina. Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. *Expresiones de una política continental: discursos de los presidentes Chaves y Perón*, Buenos Aires, 1953.
- República Argentina. Secretaría de Informaciones de la Presidencia

- de la Nación, *Dos pueblos señalan el rumbo de América latina*, Buenos Aires, 1953.
- Alain Rouquié, *Poder militar y sociedad política en la Argentina, T. II: 1943-1973*, Bs. As., Emecé, 1987.
- Roberto Russell, *Enfoques teóricos y metodológicos para el estudio de la política exterior*, Buenos Aires, Gel, 1992.
- Walter Sánchez G. y Teresa Pereira L.(comp.), *Cincuenta años de política exterior chilena*, Santiago de Chile, Univ. de Chile, 1977.
- Silvano Santander, *Técnica de una traición*, Buenos Aires, Antyguá, 1955.
- Joseph A. Tulchin, *La Argentina y los Estados Unidos: historia de una desconfianza*, Buenos Aires, Planeta, 1990.
- Peter Waldmann, *El peronismo, 1943-1955*. Bs.As., Sudamericana, 1981.
- Arthur P. Whitaker, *La Argentina y los Estados Unidos*, Buenos Aires, Proceso, 1956.
- The United States and the Southern Cone*, Cambridge, Harvard Univ. Press, 1976.
- Ernest Wurth Rojas, *Ibáñez caudillo enigmático*, Santiago, ed. del Pacífico, 1958,
- Enrique Zuleta Alvarez, *El nacionalismo argentino*, Buenos Aires, La Bastilla, 1975.

Diarios y revistas

De Chile:

El Mercurio
El Diario Ilustrado
La Nación
El Imparcial
La Opinión
Las Noticias Gráficas
La Hora
El Siglo
Revista Ercilla
Revista Vea
Revista Estanquero
Revista Topaze

De la Argentina:

La Nación
La Prensa
Noticias Gráficas
La Razón
Clarín
Crítica
El Mundo
El Líder
La Epoca
El Laborista
Democracia

Archivos

Estados Unidos:

Archivo del Departamento de Estado, RG 59, Archivos Nacionales, Washington, D.C.

República Argentina:

Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Chile, 1946-1952.

Indice general

Introducción.....	1
<i>Capítulo 1: Antecedentes.....</i>	<i>7</i>
1. Gestiones de la Argentina para obtener la designación de un embajador chileno en Buenos Aires.....	7
2. Ataque al gobierno argentino en el Senado chileno.....	10
3. Protestas obreras contra el gobierno argentino.....	14
4. Posición del presidente Ríos respecto de la Argentina.....	16
5. Preocupación de la embajada norteamericana.....	18
6. Propaganda peronista en radios chilenas.....	19
Conclusión.....	20
Notas.....	22
<i>Capítulo 2: El tratado argentino-chileno de 1946.....</i>	<i>24</i>
1. El convenio.....	26
2. Vicisitudes del tratado en Chile.....	29
3. Desacuerdo regional frente al tratado.....	35
4. Las intenciones de Perón.....	37
5. Rol de los Estados Unidos.....	40
Conclusión.....	47
Notas.....	49
<i>Capítulo 3: La injerencia argentina en el complot de octubre de 1948.....</i>	<i>53</i>
1. Dificultades para el presidente González Videla.....	53
2. Problemas en las fuerzas armadas.....	59
3. El complot.....	60
3.1. Los hechos.....	62
3.2. La injerencia argentina.....	66
3.3. El dictamen del fiscal militar.....	72
3.4. El informe del director general de Investigaciones...	76
3.5. Reacciones por el informe Brun.....	80
3.6. La sentencia del juez militar.....	82
3.7. El fallo definitivo de la suprema corte militar.....	83
3.8. Los Estados Unidos ante la situación chilena.....	85
Conclusión.....	90
Notas.....	93
<i>Capítulo 4: La Argentina, ¿una amenaza para la democracia chilena?.....</i>	<i>101</i>
1. La elección de Ibáñez como senador por Santiago.....	103
2. La denuncia de complot se repite.....	104
3. Disturbios de agosto.....	106
3.1. Causas.....	106
3.2. Los hechos.....	108
3.3. Repercusión de los sucesos de agosto en la prensa argentina.....	110

4. Preocupación de Salvador Allende frente a la amenaza argentina.....	113
5. Sondeos de Chile con el fin de acusar a la Argentina como un peligro para la paz de América.....	117
6. Vuelco de opinión en favor de un mejoramiento de las relaciones con la Argentina.....	120
7. Algunas cuestiones colaterales.....	123
Conclusión.....	125
Notas.....	127
<i>Capítulo 5: El factor argentino en la elección de Ibáñez.....</i>	<i>131</i>
1. Lanzamiento de la candidatura de Ibáñez desde Buenos Aires.....	131
2. La opositora convergencia fascista-comunista.....	133
3. Complot de Colliguay.....	137
4. Los partidos políticos frente a la candidatura de Ibáñez.....	142
5. La conexión con la Argentina.....	148
6. El programa de Ibáñez y sus coincidencias con el justicialismo.....	155
7. Reacción en Buenos Aires ante el triunfo de Ibáñez.....	159
8. Actitud expectante de los Estados Unidos.....	162
Conclusión.....	171
Notas.....	173
Conclusiones.....	178
Bibliografía.....	187



UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

Lunes 6 de Marzo 10³⁰₋

Tesis Fil. y Letras.